

Autor: Marcelo Borrelli

*Hacia el “final inevitable”. El diario
Clarín y la “caída” del gobierno de Isabel
Perón (1975-1976)*

Volumen: 1

Tesis para optar al título de Magíster en
Comunicación y Cultura

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

Director: Jorge Saborido

Buenos Aires
2008

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo el estudio de las posiciones editoriales del diario *Clarín* en torno a las vicisitudes de la política y la economía nacional en los últimos meses del gobierno peronista de María Estela (Isabel) Martínez de Perón. Específicamente, el análisis se despliega desde el paquete de medidas económicas denominado popularmente como el “Rodrigazo” (junio de 1975) hasta el golpe de Estado de marzo de 1976. El análisis se realiza a través de herramientas provenientes del análisis del discurso, para dar cuenta de los puntos de vista del matutino durante los meses en que se fue gestando la coalición de fuerzas castrenses y civiles que terminarían derrocando al gobierno peronista. A partir de concebir al diario como *actor político*, cuyo ámbito de actuación distintivo es el ejercicio de la influencia, esta tesis analiza pormenorizadamente los puntos de vista de *Clarín*, uno de los matutinos de mayor circulación en la época, en relación a los principales conflictos políticos, sociales y económicos que conformaron el periodo.

Summary

This research studies the editorial position of *Clarín* national newspaper regarding the politics and the national economy during the last months of the Peronist government of María Estela (Isabel) Martínez de Perón. The analysis extends from the economic measures popularly known as the "Rodrigazo" (June 1975) until the coup of March 1976. Through different tools of discourse analysis, this research intends to reflect the views of the newspaper during these previous months in which the coalition of military forces and civilians was brewing into what afterwards resulted in the overthrowing of the Peronist government. Considering a national newspaper as a key *political actor*, whose distinctive field of action is the exercise of influence, this dissertation reviews in detail the perspective of *Clarín* -one of the main newspapers of that time- in relation to major political, social and economic conflicts that shaped the period.

Índice

Agradecimientos

<i>Introducción</i>	6
1. <i>Fundamentos de la investigación</i>	10
1.1. Planteo del problema y justificación	10
1.2. Objetivos de la investigación	16
1.3. Antecedentes de la investigación	17
1.4. Aspectos metodológicos	20
1.5. Aspectos teóricos	24
1.5.1 <i>El periódico como actor político</i>	24
1.5.2 <i>El editorial</i>	26
1.5.3 <i>El análisis del discurso</i>	29
2. <i>Relato de un desencanto. Del peronismo al golpe de Estado (1973-1976)</i> ..33	
2.1. El escenario de un golpe	33
2.2. Apogeo y derrumbe del peronismo en el poder (1973-1976)	38
2.3. Hacia el golpe de Estado de 1976	44
3. <i>En asedio permanente: la prensa y el gobierno de Isabel Perón (1974-1976)</i>	46
4. <i>El diario Clarín. Un acercamiento preliminar</i>	51
4.1. El nacimiento de <i>Clarín</i>	51
4.2. <i>Clarín</i> hacia 1976	52
4.3. Una alianza clave: <i>Clarín</i> y el desarrollismo	58
4.4. El ideario desarrollista	61
5. <i>Hacia el “final inevitable”. La voz editorial del diario Clarín, del “Rodrigazo” al golpe de Estado de 1976</i>	68

5.1. “Rodrigazo” y victoria pírrica del sindicalismo (junio-julio de 1975): “ <i>Cuanto más dura es la prueba, más necesaria es la unidad</i> ”	68
5.2. En el camino de la agonía (julio-agosto de 1975): “ <i>La primera urgencia: gobernar</i> ” ...	79
5.3 El fallido intento de Lúder (septiembre-octubre de 1975): “ <i>¿adónde se está llevando al país?</i> ”	93
5.4. El retorno de la dama (octubre-noviembre de 1975): “ <i>Ya no queda ningún margen para el error</i> ”	109
5.5. Escribiendo el epitafio (diciembre de 1975-febrero de 1976): “ <i>El país está urgido de soluciones de fondo</i> ”	115
5.6. El fracaso del plan Mondelli y el inicio de la “cuenta regresiva” (febrero y marzo de 1976): “ <i>Es hora pues de detener la caída</i> ”	135
5.7. Golpe y consenso expectante: “ <i>Un final inevitable</i> ” que augura “ <i>un buen punto de partida</i> ” (marzo de 1976)	144
6. Conclusiones	157
Referencias Bibliográficas	164

Agradecimientos

A Jorge Saborido, quien ha dirigido esta investigación, y me ha orientado en las elecciones más importantes de este trabajo. Un agradecimiento especial por el apoyo que me ha brindado desde que dirige mis investigaciones académicas.

A Pablo Alabarces, quien con paciencia y buena predisposición dio respuestas a las variadas inquietudes que fueron surgiendo a lo largo de esta Maestría. A él, un agradecimiento especial por su asesoramiento para que tomara decisiones vinculadas a la carrera académica.

A Leandro S. Araoz Ortiz, por su infinita paciencia para contestar en diferentes ocasiones las mismas inquietudes.

A Mirta Varela, quien me ofreció su orientación para abordar con mayor precisión aspectos de la investigación.

A Florencia Levín, con quien tuve la suerte de encontrarme por nuestro interés profesional y compartir investigaciones relacionadas con la prensa durante la década del '70.

Por último, a los colegas de la Maestría de Comunicación y Cultura (cohorte 2004-2005), en su mayoría amigos con los que hemos compartido este trayecto de maduración intelectual en un marco de afectuosa cordialidad y mutua colaboración, además de haber fortalecido lazos de amistad y compañerismo.

“La palabra es el fenómeno ideológico por excelencia”

Valentín Voloshinov, “*El signo ideológico y la filosofía del lenguaje*”. Buenos Aires, Nueva Vision, 1976: 37

Introducción¹

El 24 de marzo de 2006, al cumplirse 30 años del golpe de Estado de 1976, el diario *Clarín* publicó un suplemento especial titulado “A 30 años de la noche más larga” con el fin de recordar el aniversario (AA.VV, 2006). A través de notas de diversos periodistas especializados, el suplemento presentó el análisis de diferentes campos relacionados con la última dictadura militar que iban desde la política nacional, la economía, la política internacional y la violación a los derechos humanos durante el periodo, hasta otras cuestiones de menor circulación masiva como el rol de la justicia, las leyes dictadas por la dictadura, la actividad gremial durante la época, la situación de la educación, la cultura, el espectáculo y la utilización de la publicidad oficial como herramienta para construir consenso. Sin embargo, pese a esta amplia revisión que demostraba un avance en la indagación del periodo, ninguna de las crónicas abordaba la labor de la prensa durante los casi ocho años del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, ni su rol en los meses previos al golpe de Estado. Ya Eduardo Blaustein (1999: 21), en el trabajo pionero junto a Martín Zubieta que analiza el rol de la prensa durante la dictadura, señalaba la ausencia de una revisión sobre el propio rol de las empresas periodísticas durante el periodo. ¿Por qué el silencio por parte del diario *Clarín*? Un recordatorio como el de los 30 años hubiera sido una interesante ocasión para que el matutino ofreciera a sus lectores una reflexión sobre su propio desempeño durante un periodo

¹ Esta tesis de Maestría se enmarca dentro de un proyecto más amplio por el cual este tesista se encuentra becado por el CONICET con una beca de postgrado tipo I (2006-2009) para realizar el Doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo central de ese proyecto es, en principio, analizar las posiciones editoriales del diario *Clarín* durante la última dictadura militar (1976-1983) en relación a la economía, la política nacional y la cuestión de la violación de los derechos humanos. La tesis de Maestría presentada en esta ocasión, y la futura tesis doctoral, se conciben como una continuación, ampliación y profundización de las tareas que este tesista ha realizado en el marco de dos proyectos UBACyT de la Facultad de Ciencias Sociales, que han tenido como objeto estudiar el rol de diferentes medios de prensa durante la última dictadura militar. Las investigaciones han sido dirigidas por Jorge Saborido (UBACyT CS 60 -2001/2003- *Por la Nación contra el caos: la revista Cabildo (1976-1991)* y UBACyT 070 -2004/2007- *Voces y silencios: la prensa católica durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)*). También son una ampliación de la tesina de grado presentada en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la misma facultad (Borrelli, 2003), que este año ha sido revisada y publicada en formato libro (Borrelli, 2008a). Algunos aspectos parciales del trabajo realizado como parte de la formación de posgrado se han presentado en jornadas académicas y en revistas especializadas (Borrelli, 2007; 2008b, 2008c).

que fue un punto de inflexión en la historia argentina moderna. Tal vez su posición abreve de cierto rol que los diarios se adjudican, y con el cual intentan presentarse frente a sus lectores: el de comentaristas “objetivos” de una realidad que pasa allende su propio campo de acción. Sin embargo, otra interpretación observará que el silencio del diario, y su pretendida autoexclusión como actor influyente en la historia del país, responde a la dificultad que aún demuestran las empresas periodísticas para asumir públicamente su responsabilidad durante los convulsionados años 70, siendo en este caso además el diario de mayor circulación nacional durante ese periodo.

La escasa reflexión de la prensa sobre su propio rol durante la dictadura puede ser extendida a su labor durante el periodo inmediatamente anterior a marzo de 1976, cuando se fue preparando el escenario político para el derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Perón. Durante esos vertiginosos meses finales de 1975 la prensa diaria protagonizó una escalada de desestabilización contra un gobierno que se hundía en el descrédito por sus propios errores (Díaz, 2002), y por la acción solapada o abierta de otros sectores influyentes con objetivos no siempre confesables. Tal actitud por parte de los órganos de prensa tendió a legitimar la demanda de “soluciones drásticas” a la crisis que se extendía en diversos campos del quehacer nacional, y que era una reclamación cada vez más ostensible de otros sectores de la sociedad civil, el campo político opositor y las Fuerzas Armadas. En términos generales puede plantearse que, en el marco del derrumbamiento del poder peronista -y con ello de un Estado de derecho que languidecía en una existencia formal-, la prensa en general legitimó la idea que el marco constitucional no ofrecía soluciones políticas duraderas para la crisis nacional. Como se analizará en este trabajo, la ausencia de “fe democrática” que estaba anclada en la sociedad civil y en los actores políticos más destacados del periodo debe incluirse como un elemento de análisis primordial para comprender el consenso polisectorial que tuvo el golpe militar de 1976. Este es un aspecto que destacamos debido a que el legado de la sociedad posdictatorial tendió a ocultar el entramado de valores en los que se asentaba la sociedad argentina de la década del 70, que distaba de estar enraizada en sentidos “democráticos” o “republicanos”. Solapamiento vinculado con la “teoría de los dos demonios” y su intención exculpatoria de la sociedad civil argentina, que necesitaba refundar la democracia argentina de los años 80 en oposición al trágico pasado dictatorial.

En este marco, este trabajo se orienta a analizar las posiciones editoriales del diario *Clarín* en torno a las vicisitudes de la política y la economía nacional, desde la serie de medidas económicas denominadas popularmente como el “Rodrigazo” (junio de 1975), hasta el golpe de Estado de marzo de 1976. En este periodo se fueron alineando las fuerzas

castrenses y civiles que actuarían en el derrocamiento del gobierno constitucional, además de consolidarse en la opinión pública el desprestigio de los mecanismos republicanos para ofrecer soluciones duraderas a la crisis política que atravesó la época. Teniendo estos aspectos en cuenta, esta investigación indaga sobre el ideario del matutino, las tramas argumentativas expuestas frente a los principales acontecimientos del escenario político-social del periodo, y las continuidades y contradicciones que puedan observarse en sus posicionamientos.

Por último, nuestra línea de trabajo se fundamenta en la posibilidad que el análisis de las publicaciones periódicas y sus posicionamientos ideológicos ofrece para indagar el entrecruzamiento entre la historia política y la historia de las ideas. En esta perspectiva, entendemos que las publicaciones no son meros soportes de ideologías que estarían por “detrás” de ellas, sino vehículos activos destinados a la conformación de espacios sociales, la construcción de públicos, la legitimación de corrientes de opinión, la influencia concreta en las decisiones políticas y otras decisiones de interés público y amplia incidencia social. Por lo tanto, entendemos que los posicionamientos editoriales de la prensa deben ser analizados teniendo en cuenta su capacidad de influir en la toma de decisiones colectivas.

Brevemente, describiremos los contenidos de esta tesis:

En el capítulo 1 se da cuenta de los fundamentos de la investigación, tanto en lo atinente a sus objetivos, a los aspectos metodológicos y teóricos, como a sus antecedentes. Allí se realiza una justificación sobre la pertinencia del objeto de estudio elegido y sobre el periodo estudiado, se profundiza sobre los métodos del análisis del discurso empleados en el trabajo empírico y se propone la interpretación, nodal para nuestro estudio, que sitúa al periódico como un *actor político* cuyo característica distintiva es la de ejercer *influencia* sobre las decisiones políticas.

Dentro del capítulo 2 se realiza una breve descripción del contexto histórico, que revisa los principales acontecimientos del periodo 1973-1976, indispensables para comprender históricamente tanto los puntos de vista del diario *Clarín*, como para instalar nuestro estudio en un marco interpretativo lo más amplio posible. Además de una referencia fáctica, se esboza un análisis de las tendencias a largo plazo que tuvieron incidencia en el golpe de Estado de 1976.

En el capítulo 3 se introducen las principales claves que se tendieron en la farragosa relación de la prensa con el gobierno de Isabel Perón en el periodo 1974-1976, aspecto contextual de importancia para comprender algunos posicionamientos del diario *Clarín*, y observar cuál era el clima político en el cual las empresas periodísticas plasmaban sus líneas editoriales y los trabajadores de prensa realizaban sus tareas diarias.

El capítulo 4 se encarga de analizar la historia del diario *Clarín* y su situación como empresa periodística hacia 1976. Para ello se ha apelado a bibliografía pertinente y a testimonios de periodistas que trabajaron en el diario en la década del '70. Uno de los objetivos del capítulo es dar cuenta de la relación clave entre el matutino y el ideario desarrollista, aspecto central para el trabajo empírico presentado, por lo cual se ha dispuesto un apartado especial que revisa las bases y propuestas de este pensamiento político.

El capítulo 5 conforma el núcleo empírico de la tesis. Allí se presenta el análisis de los editoriales del diario *Clarín*, desde junio de 1975 hasta fines de marzo de 1976. Un aspecto esencial del desarrollo del capítulo es la permanente relación entre los textos analizados y su vinculación con el contexto socio-político y económico del periodo. Asimismo, además de describir los puntos de vista del diario, se esbozan interpretaciones propias referidas a la relación del ideario del matutino con la cultura política de la época, y otras cuestiones que se desprenden del estudio empírico.

Finalmente, el capítulo 6, presenta las conclusiones de la tesis, donde se exponen de manera sistemática los principales hallazgos de la investigación.

Capítulo 1

Fundamentos de la investigación

1.1. Planteo del problema y justificación

El análisis de la gran prensa argentina en los prolegómenos del golpe de Estado de 1976 y durante la última dictadura militar es un campo aún necesitado de estudios sistemáticos, como tal vez los hay más desarrollados en el terreno económico, político, y en algunos aspectos también en el terreno cultural. Las posibilidades de estudio de la prensa en este periodo van desde la evaluación política hasta el análisis del discurso, permitiendo el desmontaje de los mecanismos de censura, autocensura, ocultamiento y deformación en los que participaron los medios de prensa en relación a los eventos políticos que caracterizaron el fin del gobierno peronista y, posteriormente, la dictadura militar. En particular, y con el fin de realizar un aporte en ese sentido, en este trabajo planteamos el estudio de las concepciones ideológicas del matutino *Clarín* a través de sus evaluaciones editoriales desde el “Rodrigazo”, de junio de 1975, hasta el golpe de Estado de marzo de 1976.

La decisión de tomar como periodo de análisis los meses previos al golpe de Estado de 1976 se funda en la necesidad de comprender el tipo particular de consenso que se forjó durante la crisis del gobierno de María Estela (Isabel) Martínez de Perón para legitimar una nueva intervención militar golpista. Es evidente que durante el año 1975, y los primeros meses de 1976, tanto en la esfera civil como en los sectores dirigentes de la sociedad argentina se terminó de perfilar la aprobación para una salida “drástica” a la evidente crisis por la que se fue deslizando el país, principalmente luego de la muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974. Ese consenso polisectorial fue estratégicamente buscado por las Fuerzas Armadas que desde mediados de 1975, mientras se preparaban para tomar el poder estatal, dejaron que el gobierno se hundiera en sus contradicciones y la crisis general del país apareciera como irremediable. Desde nuestro punto de vista, la legitimidad que las Fuerzas Armadas consiguieron en este periodo para tomar el poder, forjada bajo una omnipresente sensación de “desintegración” y “caos” que fue espoléada desde los sectores dominantes y redimensionada por la prensa, tuvo una gran incidencia para el consenso posterior que gozaron las Fuerzas Armadas en el gobierno, al menos hasta mediados de 1978. Por lo tanto,

analizar cómo se fue desplegando este proceso multifacético de agonía de un gobierno, crisis general y ascenso de la voluntad política militar desde un caso particular de análisis como es el diario *Clarín* nos permitirá indagar, adicionalmente al valor intrínseco del trabajo con el matutino, las condiciones sociales que posibilitaron a las Fuerzas Armadas contar con esa aquiescencia, origen de su posterior margen de acción política para el intento de implementar cambios “refundacionales” durante los primeros años del “Proceso”. Por este motivo, y para rastrear la compleja trama de intereses que se anudaron en torno al derrumbamiento del gobierno constitucional y la perspectiva de un nuevo golpe de Estado militar, durante el análisis se pondrá especial énfasis en describir los posicionamientos de diferentes actores con presencia en la vida pública y la política nacional.

En el caso particular de nuestro campo de estudio, la investigación se asienta sobre la presunción de que los medios de prensa tuvieron un papel clave en la conformación de corrientes de opinión que legitimaron el golpe de Estado, presentando la intervención militar como la “única” solución posible a la crisis nacional planteada en marzo de 1976. Además, debe valorarse que la oferta informativa de radio y televisión en la época estaba en gran medida manejada directamente por el Estado, lo cual sobredimensionaba aún más el rol de la prensa “independiente” como medio informativo y formador de opinión. Como será analizado en el capítulo 3, en los meses que ocupa nuestro trabajo la prensa periódica de difusión nacional exhibió un rol activo en el proceso de desestabilización del gobierno de Isabel Perón. En efecto, al calor de una situación política, económica y social marcada por la inestabilidad y la licuación del poder estatal, los medios de prensa de mayor difusión nacional, con diferentes responsabilidades y de diversas maneras, agudizaron la sensación de “desintegración” y “caos”.

En este marco, el análisis editorial del diario *Clarín* cobra interés por diversos motivos. Desde la década del 60’ el matutino se hallaba posicionado en el mercado periodístico como un referente clave de la clase media de los principales centros urbanos de la Argentina, en particular de Buenos Aires. Un sector dinámico y con anhelos de ascenso social que forjó la consolidación de estos espacios periodísticos, que funcionaban tanto como canal de expresión de sus intereses sociales, como representantes de esa movilidad social. A su vez, el crecimiento de *Clarín* se relacionó con su consolidación como empresa comercial e industrial y su independencia financiera del poder político, característica que le permitió formar parte de los “grandes diarios” de alcance nacional. Hacia mediados de la década del ’70 *Clarín* ya era el matutino de inserción nacional con mayor tirada en la Capital Federal y tenía una amplia influencia en la opinión pública nacional (para un análisis preciso, véase el

capítulo 4). Sin embargo, pese a la relevancia nacional de *Clarín*, no existe para la época en cuestión un estudio sistemático sobre su línea editorial. Es decir, un trabajo que haga un relevamiento pormenorizado de sus editoriales en los meses previos al golpe de Estado, que analice los fundamentos ideológicos de sus posiciones, su inserción e influencia en el contexto político y las luchas políticas de la época, su importancia como canal de expresión de ciertos intereses sectoriales y la relación entre sus reivindicaciones ideológicas y su historia como empresa periodística, entre otras cuestiones.

Una explicación posible es que el crecimiento comercial del diario no fue acompañado del prestigio social que, por ejemplo, gozaban otros matutinos centenarios como *La Nación* y *La Prensa*, ambos asociados a una doctrina ideológica determinada, legitimados como representantes de sectores sociales “prestigiosos”, y cuya historia como medios estaba indisolublemente vinculada a la creación del Estado moderno argentino y a las luchas políticas de la segunda mitad del siglo XIX. Este “prestigio”, y el hecho de que a través de sus páginas se expresara parte del “pensamiento nacional”, los transformaron en objetos de estudio esenciales para dar cuenta de la historia del país (por ejemplo, véase el estudio de Sidicaro -1993- sobre las ideas del diario *La Nación*). En el caso de *Clarín*, esta suerte de “carencia” de cierto prestigio social, y de una supuesta menor influencia en los debates ideológicos y políticos, puede haberlo sustraído del interés inmediato de las Ciencias Sociales, que en todo caso tendió a analizar al diario como fuente para obtener datos sobre otros eventos históricos o, en relación a su historia propia, a concentrarse en torno a su crecimiento comercial y, en función de ello, en sus posicionamientos editoriales. Nuestra investigación toma en cuenta ambos aspectos, pero enfatiza en la relevancia que el análisis del ideario de *Clarín* puede suministrar en pos de una comprensión más integral de la época.

En efecto, en la década del '70 el pensamiento de *Clarín* ostentaba una pretensión doctrinaria, estaba inmerso en las luchas políticas de la época y hacía de ese rol un aspecto esencial de su política editorial. Ello se debió principalmente a su íntima cercanía con el ideario desarrollista y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Como analizaremos en el capítulo 4, el desarrollismo nutrió a *Clarín* de un perfil ideológico definido, sistematizado y coherente que le permitió al diario ocupar un lugar destacado en los debates políticos durante el proceso político iniciado en 1973. Este aspecto, entonces, le otorga un carácter de interés adicional al análisis del diario, en tanto no solo se trata de estudiar un medio de prensa de gran difusión nacional por su importancia intrínseca, sino también en virtud de su relación con un ideario y un partido político en particular, protagonista del escenario político de mediados de la década del '70.

Por último, al partir de la hipótesis que la gran prensa nacional cumplió una función desestabilizadora del gobierno constitucional, el interés de este trabajo también se orienta a observar en qué medida ello es verificable en el caso del diario *Clarín*, y si fuera así, de qué manera se produjo ese distanciamiento del proceso político encabezado por el peronismo y qué estrategias discursivas legitimaron la nueva intervención golpista.

La elección del periodo histórico a analizar se justifica por diversos motivos. La crisis política que desencadenó el plan de ajuste del ministro de economía Celestino Rodrigo determinó el fin de una etapa del gobierno peronista de Isabel Perón. A partir de la resolución del conflicto a favor del sindicalismo se abrió un nuevo periodo político signado por la impotencia política del oficialismo, la crisis absoluta de la autoridad del Estado y la exacerbación de una situación de crisis general a nivel nacional, potenciado por el agravamiento de la violencia política. Visto en forma retrospectiva, el “Rodrigazo” inició la agonía del gobierno peronista (De Riz, 1986: 184; Di Tella, 1985: 212-13). A partir de ese momento, y hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se intensificó la sensación que la sociedad estaba desgobernada (Cavarozzi, 2006: 54). El poder de presión que había demostrado el sector sindical para impedir la concreción del plan Rodrigo, fue para las Fuerzas Armadas y un sector de la civilidad la prueba contundente de la debilidad del gobierno y del peligroso poder que ostentaban los representantes del movimiento obrero. Durante los meses posteriores la gestación del futuro golpe de Estado tomó un camino cada vez más definido que se irá fortaleciendo con la activa -pero solapada- acción de las Fuerzas Armadas, la convergencia de los intereses cívico-militares que concretarán el golpe de Estado y el consenso de diversos actores civiles para la solución “drástica” a la crisis nacional, mientras el gobierno se desacreditaba hundido en peleas facciosas, los partidos tradicionales no ofrecían respuestas a la crisis, se distanciaban del gobierno y dejaban que las Fuerzas Armadas ocuparan el centro del escenario político². En este contexto, durante la segunda parte del año 1975 se ira conformando un verdadero consenso civil sobre la “inevitabilidad” del golpe de Estado como única “solución” a los problemas nacionales. Por ello durante estos meses se condensan una serie de acontecimientos políticos y económicos que permiten analizarlo como un bloque en sí mismo. Nuestro objetivo, entonces, será analizar críticamente

² A propósito, Di Tella (1985: 212-13), en relación a la disputa gobierno-sindicatos posterior al “Rodrigazo” afirma: “*La autoridad del gobierno se vio claramente lesionada y la posibilidad de un final abrupto se tornó obvia, obstaculizando la ya delicada situación económica*”. En el mismo sentido, Cavarozzi (2006: 53-4) menciona que el “Rodrigazo”, junto a la posterior defenestración de López Rega y el deterioro de la figura de Isabel, constituyeron un “hito” en la historia del gobierno peronista ya que señalaron el momento en que las Fuerzas Armadas y los sectores de la gran burguesía nacional recuperaron la iniciativa política, pasando a la ofensiva luego de la estrategia defensiva adoptada a partir de 1973.

cómo el diario *Clarín* se posicionó y fue evaluando esta situación, y de ser posible plantear ciertas hipótesis sobre en qué grado sus posicionamientos incidieron en la desestabilización del orden constitucional.

También el estudio del periodo es relevante si se tiene en cuenta que durante los primeros años de la dictadura militar una de las fuentes del consenso obtenido por los militares provino del recuerdo negativo que los “males” del “populismo” peronista le había legado al país. Justamente, los últimos meses vertiginosos de 1975 y el inicio de 1976 quedaron particularmente marcados en la memoria colectiva de una sociedad civil demandante de “orden” y distanciada de la movilización política de antaño. La estigmatización que sufrió el periodo final del gobierno peronista fue utilizado políticamente por el gobierno militar, sus voceros y apoyaturas civiles -como también los partidos políticos más colaboracionistas- como una prueba irrefutable de las bondades ordenancistas del golpe de Estado. De allí que, orientar nuestra investigación a analizar los últimos meses del gobierno de Isabel puede resultar propicio para comprender el grado de consenso -pasivo o activo según el sector civil que se tratara- que obtuvo la dictadura en el inicio de su cruzada reorganizadora. Y, en ese marco, estudiar cuál fue el lugar que ocupó la prensa y de qué manera sus posicionamientos incidieron en la legitimación de las actitudes de consenso hacia una salida política “reorganizadora”.

Por otra parte, la importancia del periodo de estudio elegido se desprende al tomar en cuenta el giro conservador de los últimos años del peronismo y el avance de políticas y actitudes autoritarias en diversos actores sociales, incluido principalmente el Estado, que pudieron haber funcionado como antecedentes que, en diferentes grados y con los necesarios matices, preanuncian el posterior autoritarismo refundacional y la deriva represiva de la dictadura militar. En este sentido, partimos de la certeza que no debe homologarse la fecha de un acontecimiento político de vital importancia para la historia del país, como lo fue el golpe de Estado de 1976, como si a partir de ese momento se hubieran desencadenado un tipo de práctica política desconectada de los acontecimientos históricos previos. Aunque es evidente que el 24 de marzo de 1976 inaugura una nueva política del Estado manejado por los militares, tanto en el aspecto represivo, como en el socioeconómico, cultural y otros, es indudable también que el giro conservador y autoritario del gobierno peronista -iniciado en vida por Perón- es un precedente innegable para comprender la cruzada reorganizadora del “Proceso”. Al menos, esto es posible de comprender en los términos que lo plantea Vezzetti, (2002: 68): *“la ofensiva restauradora del gobierno de Isabel Perón instalaba ya un tiempo de revancha, un clima exaltado de recomposición violenta que arrastraba a sectores*

significativos de la sociedad, en particular sus organizaciones dirigentes.”. Desde nuestro punto de vista, en la etapa del gobierno peronista encabezado por Isabel pueden observarse ciertos antecedentes que, al menos fragmentariamente, preanuncian características de la nueva etapa autoritaria que se abrirá en marzo de 1976. En el aspecto represivo, se observa el aval del Estado a las incursiones criminales de la triple A en su “cacería” de militantes opositores que funcionó como un antecedente y antesala del terrorismo de Estado, y el visto bueno hacia el rol activo de las Fuerzas Armadas en la lucha “antisubversiva” junto a la despreocupación por los métodos ilegales que ya se estaban implementando en Tucumán, desde febrero de 1975 con el “Operativo Independencia”, y luego en todo el país a partir de los decretos de octubre de 1975³. Situación que ponía de relieve la frágil autoridad del gobierno y la pauperización del Estado de derecho en tanto la administración estatal renunciaba al ejercicio del monopolio legítimo de la violencia. En torno a las prácticas políticas, se observa la exacerbación de un verticalismo autoritario que legitimaba el rechazo de formas democráticas o concertadas de construcción política y la despoltización creciente que se produce hacia el final del gobierno de Isabel, al reducirse el debate de ideas y la violencia política abarcar el escenario político casi en su totalidad (Yannuzzi, 1996: 26). Despoltización que será uno de los objetivos de la dictadura militar, en tanto se intentó manipular el juego político en torno a una estrategia de “cúpulas” y extirpar así la política de masas⁴. Por último, a través del “Rodrigazo” el intento de poner en marcha un plan económico de ajuste liberal y antipopular, antecedente del tipo de medidas que buscará implementar Martínez de Hoz.

Por lo tanto, en términos generales durante el periodo previo al golpe existió una suerte de sistematización del discurso autoritario y la extensión de prácticas políticas represivas y autoritarias que fue retomado, profundizado y llevado a niveles extremos en su radicalidad por el gobierno militar.

³ Aunque es claro que las acciones de la Triple A no pueden ser homologables a la sistematización del terrorismo de Estado existió, como señalan Novaro y Palermo (2003: 82), una “marcada continuidad” entre las acciones de la Triple A y el plan represivo de la Junta, tanto en términos ideológicos como estratégicos. Esa “marcada continuidad” no supone una asimilación entre el accionar de la Triple A y el terrorismo de Estado, ya que en este último se puso en práctica un plan sistemático de exterminio de opositores políticos pergeñado desde las cúpulas del Estado, incluyendo en su totalidad a las Fuerzas Armadas y a otras Fuerzas de Seguridad en sus diferentes estamentos. Vale destacar que en la actualidad dos investigaciones encabezadas por jueces federales han reabierto causas donde se investigan los crímenes de la Triple A, y han evaluado en primera instancia que esos crímenes son “imprescriptibles” debido a que en su opinión fueron amparados por la estructura estatal, y por ende pueden considerarse de lesa humanidad.

⁴ En los primeros años del gobierno militar, la política se verá reducida a un intercambio en sordina entre las viejas cúpulas partidarias -en muchas ocasiones vilipendiadas en público por los militares- y diferentes militares del “Proceso” que tenían proyectos políticos personales o buscaban apoyos para determinadas acciones de gobierno. Estas transacciones políticas que el Estado realizaba al margen de la sociedad civil, ofreciendo prebendas a ciertos sectores en una corrosiva privatización de la política, habían sido una característica del periodo Isabelino que continuaron y fueron incentivadas durante el periodo dictatorial (Yannuzzi, 1996: 48).

1.2. Objetivos de la investigación

El objetivo principal de esta tesis es analizar las posiciones y argumentaciones editoriales del diario *Clarín* desde la serie de medidas económicas implementadas por el ministro de economía Celestino Rodrigo en junio de 1975 -popularmente conocidas como el “Rodrigazo”- hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que instaló en el gobierno nacional al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El análisis se acotó a los editoriales cuyas temáticas estuvieran vinculadas con la política nacional, la economía y la violencia política en sus diversas expresiones⁵. Los objetivos específicos con los que iniciamos este estudio pueden ser resumidos de la siguiente manera:

1) identificar, analizar y comprender núcleos argumentativos desarrollados en el espacio editorial del diario *Clarín*, focalizando en las implicancias de sus proposiciones y los intereses sectoriales que representaban;

2) establecer una periodización que diera cuenta de las continuidades y/o transformaciones editoriales del diario según el desarrollo de la crisis política durante el periodo estudiado;

3) rastrear comparativamente vínculos argumentativos y posibles contradicciones entre los posicionamientos editoriales expresados en diferentes momentos del periodo estudiado;

4) determinar campos semánticos a partir de la variación de los significados de ciertos conceptos clave que puedan considerarse a manera de variables y cuya aparición constante en la publicación sea pasible de construcción, continuidad y/o reformulación;

5) analizar la valoración editorial sobre los diversos actores políticos del periodo -observando cuáles eran valorados como positivos o negativos, y sobre qué fundamentos-, en particular el gobierno peronista, el peronismo, los partidos políticos, el parlamento, las organizaciones político-armadas, los sindicatos, el movimiento obrero, los empresarios, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. También se tendrá en cuenta la valoración general sobre el rol del Estado -en sus diversos componentes- y el rol que el diario se autoadjudicó frente a los acontecimientos políticos nacionales;

⁵ La definición del uso de la violencia en la política es múltiple y ha sido abordada por diversos autores, cuestión que excede con amplitud los objetivos de esta tesis. Las diversas interpretaciones han sido estudiadas exhaustivamente por González Calleja (2002). Apelamos a este estudio para definir en términos generales qué entendemos por violencia política; según el autor: “Podríamos definirla como el empleo consciente (aunque no siempre premeditado), o la amenaza del uso, de la fuerza física por parte de individuos, entidades, grupos o partidos que buscan el control de los espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de gobierno, y, en última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado.” (González Calleja, 2002: 270-1).

6) en función de los objetivos mencionados, se tendrán en cuenta aspectos retóricos o estilísticos de los editoriales que complementen o adicionen información pasible de ser analizada en función de una comprensión más integral;

7) se describirán las condiciones de producción discursiva del diario, tanto los aspectos sociopolíticos y económicos del contexto como la situación relativa a la práctica profesional del periodismo durante la época y las características particulares del diario *Clarín* en ese sentido;

8) a través del análisis editorial se intentará rastrear e indagar, al menos parcial y fragmentariamente, el clima de ideas de la época o al menos algunas de las principales corrientes de opinión. En particular, nuestro interés radica en observar qué aspectos de la cultura política se presentan y representa el ideario del diario *Clarín*⁶. Para ello se tenderán las vinculaciones pertinentes con ciertos valores e ideas contenidas en la cultura política de la época que nos permitan abarcar lo más integralmente posible el objeto de estudio.

1.3. Antecedentes de la investigación

En cuanto a las investigaciones que estudian el rol de la prensa en el contexto previo al golpe de Estado de 1976 y durante la dictadura militar, en primera medida debe mencionarse al trabajo pionero de Blaustein y Zubieta (1999), quienes realizan una vasta recopilación de tapas y notas publicadas por la prensa durante la dictadura militar, así como los relatos de periodistas y hombres de la cultura en base a su historia personal y profesional durante el periodo. En esta misma línea, Ulanovsky (2005), dentro una investigación más amplia en formato de “manual” sobre la historia de la prensa en la Argentina, dedica una parte de su trabajo para dar cuenta de diferentes publicaciones escritas del periodo, incluyendo detalles sobre la conformación de los emprendimientos de prensa, datos de tiradas, información sobre los periodistas que participaron de las publicaciones, narraciones de periodistas y hombres vinculados a la prensa, entre otros aspectos indispensables a la hora de recrear el campo del trabajo periodístico. Por su parte, Muraro (1987) investiga el marco general de la comunicación masiva y el sistema de radiodifusión tanto en el gobierno peronista iniciado en 1973 como durante la dictadura militar. También un objetivo similar se plantea Mestman (1992), aunque su trabajo se extiende desde 1966 hasta 1976. Varela (2001) describe el

⁶ Seguimos a Giacomo Sani (1987: 470) para definir cultura política como “*el conjunto de actitudes, normas y creencias, compartidas más o menos ampliamente por los miembros de una determinada unidad social y que tienen como objeto fenómenos políticos.*”

panorama de los medios de comunicación durante la última dictadura militar, y Postolski y Marino (2005) plantean un análisis similar focalizado en las relaciones entre medios de comunicación y dictadura.

Algunos episodios referidos a la censura y la represión cultural de la época pueden consultarse en Avellaneda (1986) y en Ferreira (2000), quienes compilan informaciones de la prensa, testimonios, documentos y otras fuentes dando cuenta de la problemática. En este aspecto, las conferencias compiladas por Sosnowsky (1988) en formato libro ha sido pionero al revelar la represión cultural durante el “Proceso”, como así más recientemente la investigación de Invernizzi y Gociol (2002), quienes a partir de nueva documentación y fuentes de primer orden analizan el plan de represión cultural de las Fuerzas Armadas.

Sobre las condiciones de la práctica profesional del periodismo durante la época se destaca la investigación de Carnevale (1999), que indaga en los intereses económicos y políticos de varios periódicos y recrea el clima de época para la práctica profesional. En esa línea el trabajo periodístico de Mochkofsky (2004), sobre el editor y periodista Jacobo Timerman, revela la oscura y compleja trama de intereses tejida entre periodistas y poder político en la Argentina de los años '70. De reciente edición, Halperín (2007) plantea un muy interesante acercamiento a las relaciones entre poder político y periodismo en diferentes momentos históricos a partir de entrevistas con periodistas y hombres vinculados a los medios de comunicación. Para nuestra investigación, ha sido de gran interés la entrevista a Marcos Cytrynblum, secretario de redacción de *Clarín* durante el periodo de estudio. Un acercamiento a través de la vivencia personal de periodistas puede consultarse en Cox (2002), ya que el autor es hijo de quien fuera director del diario *The Buenos Aires Herald* durante nuestra época de estudio, Robert Cox, y compila las cartas del director que grafican las difíciles circunstancias en las que tuvo que realizar su trabajo. También Graham-Yooll (1984, 1985 y 1999), periodista del *The Buenos Aires Herald*, describe las situaciones extremas padecidas por consecuencia de su trabajo periodístico en la década del '70. Ambos tuvieron que exiliarse del país por las circunstancias políticas nacionales. Por otra parte, contamos con el interesante aporte del periodista Luis Gregorich (1987), quien da cuenta de la aquiescencia de las empresas periodísticas para con el golpe de Estado de 1976. Carazo y Audi (1984), dos periodistas que pertenecían a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), narran la experiencia de lucha de la Federación y de los periodistas agremiados en el marco represivo de la última dictadura militar. Sin duda, esta variable aún no ha sido lo suficientemente explorada, y es una veta de investigación de indudable interés.

Estos trabajos son un aporte para reconstruir las características propias de la práctica profesional del periodismo, durante un periodo histórico donde la actividad periodística quedó en una situación de exposición frente a la radicalización de los conflictos políticos, además que una gran cantidad de periodistas profesionales se involucraron directamente en la lucha política de la época, y posteriormente serán perseguidos, asesinados o desaparecidos por la dictadura militar (Asociación de Periodistas de Buenos Aires, 1986; Conadep, 1997).

En cuanto a investigaciones más específicas, puede encontrarse un acercamiento descriptivo a los contenidos de la prensa durante el periodo dictatorial en Malharro y López Gisjberts (2003). Allí puede consultarse un interesante registro descriptivo de los titulares de la prensa periódica inmediatamente previos al golpe de Estado de marzo de 1976. Por su parte, en su tesis doctoral, Schindel (2003) plantea un valioso acercamiento a la forma de presentar las noticias vinculadas a la violencia política en el periodo 1975-1978 en los diarios *La Nación* y *La Opinión*, dando cuenta de la estigmatización que sufrió la violencia política de los “extremismos” durante el periodo y la “naturalización” con que se informaba sobre asesinatos, secuestros, desapariciones y atentados vinculados a conflictos políticos. Un trabajo importante para nuestro acercamiento es el de Díaz (2002), que realiza un análisis histórico y discursivo de la posición editorial de los grandes diarios, entre ellos *Clarín*, durante el mes de marzo de 1976, en la coyuntura previa al golpe de Estado. Díaz nos ofrece una aproximación detallada sobre el tema de nuestro trabajo, en tanto da cuenta de la relevancia que tuvo la construcción periodística del golpe de Estado para su concreción final y de la legitimidad que se brindó desde la prensa al golpe de Estado al interpretarlo como un final “inevitable”. Tanto *La Nación*, *La Prensa* y *La Razón* realizaron verdaderas campañas editoriales cuya finalidad fue socavar aún más la ya frágil legitimidad del gobierno peronista, observando como única salida posible el golpe de Estado. Según esta investigación, el diario *Clarín*, también construyó discursivamente al golpe como un desenlace lógico, aunque no realizó una campaña editorial sistemática para socavar la gobernabilidad de la administración peronista. Conclusión que retomaremos y revisaremos en nuestro trabajo empírico (véase capítulo 5). Como se ha mencionado, un trabajo destacable es el de Sidicaro (1993), quien estudia la sección editorial del diario *La Nación* desde 1909 a 1989. Tanto el trabajo de Díaz como el de Sidicaro, los únicos que se plantean un análisis editorial en profundidad de los diarios de la época a partir de un fundamentado marco teórico, nos permitieron avizorar la posibilidad analítica de estudiar el editorial en la gran prensa nacional durante el periodo.

Sobre el diario *Clarín*, contamos con un acercamiento periodístico en Llonto (2003), quien a partir de un trabajo de investigación sobre su directora, Ernestina Herrera de Noble,

recorre la historia de *Clarín* a partir de sus relaciones con el poder político y económico argentino durante la segunda mitad del siglo XX. Por su parte, Ramos (1993) desarrolla una perspectiva similar para analizar cómo *Clarín* fue creciendo comercialmente hasta convertirse en el diario nacional de mayor circulación en todo el país y constituirse, en la década del '90, en un grupo económico multimediático. En ambos trabajos predomina la intención de denunciar los privilegios que *Clarín* recibió del Estado, como así también las formas espurias de vinculación con el poder político y las formas autoritarias que caracterizaron la política interna del diario hacia los periodistas que integraban su redacción. En este último sentido, pero desde la literatura, la novela de Jorge Asís (2000) -periodista de *Clarín* hasta inicios de la década del '80- aborda con un profundo sarcasmo las internas del diario, mostrando las ambigüedades y actitudes poco éticas de algunos de sus integrantes. Por último, y en clave biográfica, López (2008) analiza la vida de Héctor Magnetto, principal artífice empresarial del grupo *Clarín*, desde la década del 70 hasta la actualidad, ofreciendo una lectura del crecimiento empresarial del diario desde la perspectiva de uno de sus principales protagonistas.

En el plano del análisis de discurso, la tesina de licenciatura de Cristhian y Pedemonte se plantea un análisis comparativo de los editoriales de *Clarín* y *La Nación* desde el “Rodrigazo” hasta el golpe de Estado, pero enfatizan los aspectos retóricos sin profundizar en una lectura que analice los fundamentos ideológicos de sus posicionamientos, ni la articulación con la cultura política y el sistema político de la época. También en formato de tesina, y en un trabajo correctamente fundamentado y de interesantes conclusiones, los licenciados en comunicación Barbieri y Ferreiro (2002) analizan las estrategias discursivas del diario *La Nación* y *Clarín* durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 1979.

1.4. Aspectos metodológicos

Al inicio de la investigación se realizó un relevamiento del diario *Clarín* en su sección editorial, las tapas, la sección política y económica desde junio de 1975 a septiembre de 1979, y además se relevaron diversos editoriales considerados significativos durante el año 1973, 1974 y en los primeros seis meses de 1975. Luego de una selección, se analizaron 90 editoriales desde el 1 de junio de 1975 hasta el 31 de marzo de 1976, de los cuales 45 estaban referidos a cuestiones económicas, 35 a cuestiones políticas nacionales y 6 a aspectos

generales que se vinculaban con nuestro interés de investigación. El análisis de la fuente primaria se realizó a partir de la lectura de una extensa bibliografía sobre el periodo estudiado, que permitió reconstruir el contexto sociopolítico y económico. La fuente primaria fue relevada en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca de la Biblioteca del Congreso Nacional. En el primer caso se tuvo acceso al corpus a través de encuadernaciones que contenían la publicación original. Para su análisis se procedió a la toma de fotografías digitales que fueron impresas posteriormente (la Biblioteca prohíbe el fotocopiado de ese material). Debido a que la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional no contaba con todas las ediciones necesarias para completar el corpus del periodo estudiado, se complementó con el material de la Hemeroteca del Congreso Nacional, que se encuentra microfilmado y el cual fue impreso para su análisis.

Para el desarrollo del trabajo se prestó principal atención en aquellos editoriales que trataron los temas de política nacional, economía y sobre aspectos relacionados con la violencia política. Se han considerado estos tres ejes temáticos siguiendo la definición de van Dijk en tanto un tema “*es aquello de lo que el discurso trata, hablando en términos generales*” (van Dijk, 1990: 54). Según van Dijk, los temas son una propiedad del contenido de un texto y por lo tanto necesitan de un análisis teórico en términos de una teoría semántica. Solo puede hablarse de “tema” cuando se consideran extensiones textuales más largas que la palabra u oración individual. Por ello los temas pertenecen al macronivel global de la descripción del discurso y la definición que elige van Dijk para describir los temas es el de macroestructuras semánticas (van Dijk, 1990: 54). Los editoriales relevados que quedaron fuera de estos tres ejes se incluyeron dentro de los ejes temáticos política internacional e interés general (utilizando este último de manera amplia para temas educativos, de salud, cuestiones de urbanización, y aspectos de interés público generales). Estos dos ejes no fueron analizados de manera particular, al no ser considerados como objetivos de estudio para la investigación.

En particular se le otorgó mayor relevancia analítica a los editoriales que hicieron referencias evaluativas, críticas o sugerencias sobre aspectos generales dentro de los ejes temáticos elegidos. Sobre el tema económico se privilegiaron las opiniones vinculadas con los lineamientos generales de la política económica desde el intento de ajuste ortodoxo de Celestino Rodrigo; se focalizó en las opiniones sobre los efectos de esas políticas en las coyunturas particulares, en las sugerencias sobre el rumbo económico que realizó el diario y en las polémicas con integrantes del elenco ministerial del gobierno, entre otros aspectos. Durante el periodo estudiado la temática económica fue la de mayor presencia cuantitativa en

los editoriales de *Clarín*, hecho vinculado a la concepción economicista del ideario desarrollista (véase capítulo 4). En el caso de la política nacional se hizo hincapié en aquellos editoriales que evaluaran, criticaran u ofrecieran sugerencias en aspectos relacionados con la política general del gobierno peronista, la evaluación de otros actores políticos tradicionales y los principales conflictos políticos y sociales del periodo. Entre otros objetivos, se intentó identificar cuáles fueron para el diario los actores “positivos” y “negativos”. Desde ya, en todos los casos se prestó significativa atención a los “silencios estratégicos” a través de los cuales el diario evitó pronunciarse sobre hechos públicos relevantes y de su imposible desconocimiento.

El análisis respetó un criterio cronológico, con la intención de ir evaluando cambios y continuidades de la política editorial en virtud del, por momentos, vertiginoso caudal de acontecimientos políticos que antecedieron al golpe de Estado. Cuando se consideró pertinente, se agruparon editoriales por su afinidad temática, suspendiendo provisoriamente el criterio cronológico. El relevamiento cronológico nos permitió indagar las representaciones del diario en función de rumores, percepciones, versiones y otros discursos que circularon en cada coyuntura específica del periodo, cuya valoración es imprescindible para interpretar cabalmente ciertas opiniones del matutino. De esta manera, intentamos alejarnos de un análisis que planteara solamente una lectura crítica distanciada de los acontecimientos históricos, y que le realizara preguntas u objeciones a su objeto de estudio que éste no estuviera en condiciones de contestar; perspectiva que tendería a reproducir ciertos anacronismos al interpretar las posiciones de los actores sociales solamente con criterios de interpretación y valores que tienen sentido para el presente del analista. En cambio, se ha intentado comprender el sentido de las actitudes y la fundamentación de las posiciones ideológicas de los actores en el pasado, según el rol que se adjudicaron dentro de su campo de actuación.

La metodología de análisis empleada contó de dos aspectos principales: exponer y comprender críticamente los editoriales del diario. Esto supuso ordenar las problemáticas más relevantes, desanudar las tramas argumentativas expuestas, tender los lazos necesarios con las circunstancias históricas coyunturales y observar, si fuera necesario, con qué otros discursos discutía implícita o explícitamente *Clarín*. Tomaremos como base argumentativa para sostener esta metodología de trabajo algunos de los aspectos que Kornblit (2002) señala como básicos en los enfoques actuales de la metodología cualitativa en relación a la obtención y

análisis de datos⁷. Al realizar análisis social nos posicionamos dentro de un paradigma de la *comprensión* y no de la *explicación*, esto supone que el conocimiento de lo estudiado surge de la posibilidad de recrear los que los grupos sociales piensan, creen y sienten. Sobre esta base, y el conocimiento detallado del contexto, se puede “interpretar”. En segundo lugar, se toma como base el lenguaje como expresión de lo social (no como mero medio de comunicación) donde se busca las significaciones (para una mayor ampliación, véase más adelante el apartado teórico 1.5). En tercer lugar, se parte de las expresiones de los actores sociales para reconstruir las posibles significaciones, por ello es el texto en sus diferentes formas lo que se convierte en objeto de análisis. Nos basamos en que describir supone desentrañar estructuras conceptuales complejas que no son explícitas (por eso deben ser desentrañadas) y en las cuales se basan las ideas y prácticas de ciertos grupos que pueden ser representados por el discurso. El análisis se aboca a aspectos locales o particulares en tanto no es posible abarcar complejidades extensas, ya que al establecer ciertos significados sobre contenidos o prácticas para determinados actores puede mostrarse algún aspecto sobre la sociedad a la que ellos pertenecen. Por otro lado, con el análisis lo que se intenta es comprender las significaciones otorgadas por los actores sociales a partir de sus propias explicaciones, reconstruyendo la lógica que anima sus puntos de vista.

Con respecto al análisis de datos, Kornblit (2002: 11) se basa en Demazière y Dubar (1997) para señalar tres formas básicas de uso de los datos: el *modo ilustrativo*, que utiliza las citas como ejemplos de una descripción o conclusión del investigador, incorporando datos textuales a modo de evidencia de lo que afirma, el *modo restitutivo*, donde lo relevante es la fidelidad de las palabras de los sujetos o actores por lo cual se reproducen sus dichos *in extenso*, sin mediar interpretación por parte del investigador y, por último, el *modo analítico*, que se propone analizar las construcciones que los sujetos o actores realizan de los temas a partir de la identificación de las principales categorías y los opuestos que organizan su relato. Si bien nuestro método de análisis puede tomar, según fuera necesario, los tres modos presentados, son los modos *ilustrativo* y *analítico* los que caracterizaran el abordaje realizado.

Para analizar el corpus seleccionado en función de los objetivos planteados con anterioridad, se utilizaron herramientas conceptuales provenientes del análisis del discurso y del análisis enunciativo que pasaremos a detallar.

⁷ Si bien estos aspectos están orientados al análisis con sujetos particulares, pueden ser extendidos al trabajo con discursos de enunciadores institucionales, como un diario.

1.5. Aspectos teóricos

1.5.1 *El periódico como actor político*

Sabemos que los medios de comunicación en las sociedades de masas, consolidan, legitiman y difunden los imaginarios sociales. Es decir, las representaciones globales de la vida social, de sus agentes, de sus instancias y autoridades; los mitos políticos, los modelos formadores de mentalidades y de comportamientos, los símbolos, entre otros aspectos (Baczko, 1999: 32). Si bien los medios funcionan como “mediadores generalizados” (Gomis, 1991: 176), también cumplen otros roles. Fundamentalmente, la prensa cumple el rol de ser instrumento del diálogo social, ya que toda sociedad debe tener un umbral de informaciones comunes para debatir las acciones colectivas (Martínez Albertos, 1981; cit. por Díaz, 2002: 28). Pero en el caso de la prensa, también cumple roles que, allende sus objetivos “puramente” periodísticos, se vinculan con su acción dentro de un sistema político.

Debemos a las reflexiones teóricas de Borrat (1989) la definición del periódico como un *actor político* con influencia propia en la comunidad. Entendiendo a todo *actor político* como “*todo actor colectivo o individual capaz de afectar al proceso de toma de decisiones en el sistema político*”, sostiene que:

(...) el periódico independiente de información general es un verdadero actor político de naturaleza colectiva, cuyo ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la conquista del poder institucional o la permanencia en él. El periódico influye así sobre el Gobierno, pero también sobre los partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su audiencia. Y al mismo tiempo que ejerce su influencia, es objeto de la influencia de otros, que alcanza una carga de coerción decisiva cuando esos otros son los titulares del poder político (Borrat, 1989: 10)⁸.

Comprender al periódico como actor del sistema político implica: a) que el análisis del periódico como actor es inseparable del análisis del sistema político del que forma parte; b) que el periódico es un actor social puesto en relaciones de conflicto con otros actores -como cualquier actor del sistema político-, aunque especializado en la confección de relatos acerca de los conflictos entre los actores del propio sistema y otros sistemas políticos⁹; c) que

⁸ Si bien Borrat reflexiona sobre la función del periódico en democracia, puede hacerse extensiva su función en tanto *actor político* a periodos dictatoriales (desde ya, habrá que analizar cada contexto político particular para definir qué tipo de margen tendrá el periódico para ejercer esa *influencia*).

⁹ Borrat (1989: 17) toma conceptos de la sociología para analizar el conflicto. Menciona los aportes de Dahrendorf (1971) para describir al conflicto como cualquier relación de elementos que pueda caracterizarse por una oposición de tipo objetivo -conflicto latente- o de tipo subjetivo -conflicto manifiesto. Un conflicto es social cuando procede de la estructura de las unidades sociales. El origen estructural de los conflictos sociales son las

ser actor de conflictos no desconoce que el periódico también es actor de consensos, pero para Borrat el consenso es una categoría subordinada al conflicto; d) en función de su rol en relación a los conflictos el periódico puede situarse como *narrador*, *comentarista* o *participante* del conflicto político. Borrat distingue tres niveles referidos a cómo se involucra en los conflictos políticos el periódico independiente de información general: en el nivel *extra* el periódico es observador externo como narrador o comentarista de conflictos entre otros actores sin involucrarse, en el nivel *inter* es parte principal o asume el rol de intermediario neutral en relaciones de conflicto que lo ligan con otros actores, en el nivel *intra* es actor colectivo involucrado por conflictos internos que le oponen con algunos de sus componentes, o entre sus componentes. En el nivel *inter* e *intra* es actor de conflictos, en el nivel *extra* se ocupa de conflictos ajenos. Las actuaciones del periódico en los tres niveles se expresan en parte en actuaciones públicas (el discurso que narra y comenta la actualidad política en la superficie redaccional del diario) y en actuaciones no-públicas (el proceso de producción de la actualidad periodística). Las actuaciones públicas se conocen por la lectura de los temarios publicados, las otras se infieren a partir de las actuaciones públicas, de manera tentativa.

Borrat toma conceptos de la sociología para analizar el conflicto. Retomando términos de Dahrendorf (1971, 1972; cit. por Borrat, 1989: 15), agrupa dos grandes conjuntos de teorías en relación al conflicto: la teoría del consenso y la teoría coactiva. La primera observa en el conflicto un problema o una enfermedad que hay que erradicar para el bienestar del sistema social. El conflicto no es fuente de fuerza creadora, sino de peligros. La coactiva se basa en la suposición de que toda sociedad se mantiene bajo la coacción de unos miembros sobre otros, que el conflicto es la condición misma de la vitalidad social -en tanto fuente creadora- y es un factor necesario en todos los procesos de cambio histórico-social. Según Borrat, cuando el periódico quiere conservar las relaciones de fuerza existentes suele utilizar en su espacio editorial los supuestos básicos de la teoría del consenso. En cambio, cuando quiere transformarlas utiliza los de la teoría coactiva. Esto reside en que

(...) al periódico le interesa, más que la congruencia interna de su discurso, articular las voces en las líneas que le convengan según sus intereses en cada caso. [Por ello] (...) opta por destacar el consenso cuando informa y comenta sobre aquellos colectivos más cercanos a sus propios intereses, mientras pone el acento en el conflicto para referirse a sus antagonistas actuales o potenciales.” (Borrat, 1989: 16).

relaciones de dominio parte de ciertas unidades de la organización social.

En nuestro análisis observaremos cómo se despliega esta relación entre consenso-conflicto en la superficie editorial del diario *Clarín*.

Por otra parte, concebir al diario como *actor político* implica que su configuración institucional se realiza en torno al poder político y económico (de cuyas estructuras puede plantearse que es parte). El hecho que los periódicos estén constituidos como empresas privadas supone intrínsecamente la defensa de intereses o de grupos específicos dentro de la dinámica de los debates públicos (Shor, 1998: 18-19; cit. por Díaz, 2002). En este sentido, Donsbach (1995; cit. por Borrat, 2006: 168) señala que los periódicos cuentan con metas institucionales de las cuales Borrat (2006: 169) distingue dos tipos: las metas permanentes (lucrar e influir) y las metas transitorias (generar actuaciones estratégicas concretas contra determinados actores y a favor de otros). Entre los factores que influyen en la definición de las metas institucionales, Donsbach destaca: a) los objetivos políticos y económicos, b) la concepción del mundo que defiende el periódico y c) el reflejo de la visión de los propietarios sobre los contenidos. Variables que serán tenidas en cuenta a la hora de analizar la línea editorial del diario *Clarín*.

1.5.2 El editorial

En relación a la sección editorial objeto de nuestra indagación, la definimos como la forma de periodismo de opinión e interpretación a través de la cual se expresa el punto de vista personal de quien dirige un diario, o de la empresa a través de un equipo de editorialistas especializados en los distintos campos de la realidad (Castelli 1991: 193). Es allí donde se resume la posición institucional de un medio de prensa. La sección editorial sistematiza explícitamente la línea política e ideológica del medio (Borrat, 1989: 33; Sidicaro, 1993: 9), aunque cabe señalar que de manera implícita la línea política recorre y modela toda la publicación (en tanto la estrategia del periódico decide inclusiones, exclusiones y jerarquizaciones). Por su particularidad, el editorial está destinado a ejercer una influencia decisiva sobre ciertos sectores del público. En principio, sobre aquellos sectores que Price (1994) denomina *público atento* y, principalmente, sobre el *público activo* y la *elite política*.¹⁰

¹⁰ El *público atento* es aquel que tiene una atención continua sobre los asuntos políticos, se implica en los asuntos públicos e intercambia con otros sujetos sobre tales cuestiones. El *público activo* -sobre el cual el editorial puede ejercer aún una mayor influencia- conforma una porción menor dentro del mismo público atento, pero su compromiso con los asuntos políticos incluye los medios formales de participación política (como contribuciones económicas, pertenencia organizativa, asistencia a reuniones políticas) o una participación más informal pero activa, como la que puede darse en discusiones públicas y debates con otros sujetos. La *elite política* incluye en sentido amplio a los líderes políticos, funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos, formadores de opinión y en términos generales aquellos sujetos que participan públicamente en roles políticos (Price, 1994: 58-60).

Su relevancia reside en la posibilidad que a través suyo tiene un medio de prensa de influir e intervenir en la vida social y, potencialmente, de transformarla (Díaz, 2002: 33)¹¹.

La influencia de un medio de prensa puede canalizarse de diversas maneras en su superficie redaccional. El editorial es un espacio preferencial y legitimado como tal, tanto por el propio enunciador como por otros actores sociales. Tradicionalmente el editorial expone o explica una problemática determinada, juzga hechos relacionados con esa problemática y solicita, sugiere o reclama medidas al respecto. A través de la argumentación busca un asentimiento de parte del lector, quien puede estar de acuerdo o no con el contenido editorial. En este sentido, nos parece pertinente trasladar las reflexiones que van Dijk (1990: 123) realiza sobre el discurso noticioso para comprender los efectos posibles del discurso editorial. Al igual que el discurso noticioso, planteamos que el editorial tiene un componente altamente persuasivo en tanto y en cuanto espera que el lector construya una representación textual o modelo situacional según la intención del editor. Intenta que el lector crea y acepte en lo que se dice y, aún más, que se lleven a cabo las demandas o acciones que se solicitan en su trama argumentativa. En términos lingüísticos podemos mencionar entonces que el editorial tiene una función, además de *ilocutiva*, particularmente *perlocutiva* entendiéndolo como un proceso de persuasión cuya formulación se da “*de una manera tal que no solo se entiendan, sino que también se acepten como la verdad o al menos como una posible verdad*” (van Dijk, 1990: 124)¹².

Dentro de los géneros periodísticos, el editorial es parte de los géneros de opinión¹³. A nivel de su estructura el editorial en la prensa diaria se publica en ciertas páginas precisas, se ubica debajo de la marca y datos editoriales del diario (por lo general enmarcado), el cuerpo de letras y títulos suele ser diferente a los tradicionales del resto del texto impreso para permitir su rápida identificación y no suelen llevar firma en tanto representan la opinión del medio (salvo excepciones que lo ameriten, donde firma el director de la publicación). Por lo general, consiste en un encabezado o título, un “pie” o información de base, opiniones

¹¹ Por supuesto, más allá de la función de la sección editorial, todo medio de prensa intrínsecamente interviene en la sociedad y la opinión pública por el solo hecho de su circulación y recepción.

¹² Según Austin, el acto *ilocutivo* o *ilocucionario* implica llevar a cabo un acto al decir algo e incluye todas las emisiones verbales que poseen “fuerza ilocutoria” (que se manifiesta a través de los verbos performativos). El acto *ilocutorio* en tanto acto de la enunciación considera la relación entre el hablante y el oyente en el marco de convenciones definidas. Por su parte, el acto *perlocutivo* remite al efecto producido por la *ilocución*, por el efecto generado por “decir algo” (Austin, 1982).

¹³ Bajtin (1982) señala que los géneros discursivos se componen de una estructura o composición, temas y estilos. Poseen formas típicas que son marcos para la expresión, se expresan a través de enunciados concretos dentro de una comunicación discursiva que se realiza con y hacia otros (imaginarios o reales), son organizadores estables del discurso, pero flexibles y heterogéneos (hay géneros más flexibles o más rígidos) y tienen una forma expresiva propia que les confiere matiz particular a los elementos que lo componen. Los géneros construyen horizontes de previsibilidad y expectativas dentro de entornos culturales, sociales e históricos particulares.

generadas por ese “pie” y la explicación de las razones que apoyan esas opiniones. Estas tres unidades pueden ser resumidas como *informativa*, *reactiva* y *deliberativa* (Castelli, 1991: 194). Los estilos del editorial son varios y pueden combinarse en un mismo editorial: *expositivo*, *explicativo*, *ideológico*, *combativo*, *crítico*, *admonitorio*, *apologético*¹⁴. Las temáticas que trata son amplias, desde cuestiones de gran relevancia pública sobre la política nacional e internacional y la economía, hasta otras de interés más general.

Por último, si bien en los periódicos conviven varias posiciones enunciativas, los diarios construyen la figura del “enunciador global” sin ser necesariamente una persona física (Zullo, 2002: 55)¹⁵. Las características de esa configuración y su identidad suelen ser resumidas en el nombre del diario que condensa o define una línea estilística determinada, una selección de información a partir de ciertas fuentes, un tipo de público al que está dirigido y una orientación ideológica (características que se estabilizan y transforman dentro de los cambios socio-históricos y del propio medio). En nuestra investigación la construcción enunciativa del editorial será comprendida dentro de la lógica de esta enunciación global que le sirve de contexto de aparición (Raiter, 2002: 27-8).

¹⁴ A partir de la definición de Rivadaneira Prada, Castelli (1991: 195-6) enuncia una clasificación de los estilos editoriales según el tema que traten y las circunstancias políticas y sociales: *expositivo*, presentan un panorama de hechos conectados sin aparentar una posición explícita; *explicativo*, presentan causas y relacionan hechos para asumir una posición cuasi pedagógica con el fin de enseñar, mediante argumentos, la relevancia de un acontecimiento; *ideológico*, se expresan posiciones doctrinarias determinadas -sean o no publicaciones partidarias-; *combativo*, se expresan posiciones doctrinarias dentro de una lucha ideológica por la consecución de adeptos o finalidades sectarias (caracteriza a la prensa partidaria); *crítico*, se posiciona como juez de la “opinión pública” desde un rol comprometido y “neutral”, suele caracterizar a los periódicos autodenominados “independientes”; *apologético*, busca difundir los beneficios de determinado sistema de gobierno y suele tener un tono propagandístico; *admonitorio*, exhorta al cumplimiento de reglas, advierte peligros, llama al orden y a la concordia buscando un equilibrio permanente en el sistema frente a las contradicciones que alcanzan niveles de grave enfrentamiento; *predictivo*, diagnostica resultados de tipo social y político utilizando el método de interpretación causal determinista. Un editorial puede combinar varios de los estilos o encontrarse variantes de cada uno de ellos.

¹⁵ Desde el punto de vista enunciativo, van Dijk (1990) señala que el discurso periodístico es impersonal porque no lo produce un individuo particular, sino organizaciones institucionalizadas. Pero Fairclough (1992; cit. por Zullo, 2002: 55) destaca la relevancia de las diferentes posiciones que existen en la producción de un texto periodístico, existiendo textos que se construyen a través de rutinas productivas colectivas y textos de autoría individual. En esta línea, debe tenerse en cuenta que los diarios incluyen tanto notas firmadas como artículos sin autor.

1.5.3 El análisis del discurso

Este trabajo se inscribe teóricamente dentro de la tradición de análisis crítico del discurso, entendida en amplio sentido como una sociosemiótica que se orienta a analizar las prácticas sociales de producción y reconocimiento de significados en una comunidad determinada, y “*las estrategias de manipulación, legitimación, creación de consenso y otros mecanismos discursivos que influyen en el pensamiento de las personas, a través de los medios*” (Kornblit, 2004: 118). En este caso, nos situaremos en el análisis discursivo de un medio de prensa particular, teniendo en cuenta sus condiciones de producción. Según plantea van Dijk (1990) -pionero en esta tradición analítica desde los años 80- en su trabajo dedicado a estudiar la noticia como discurso:

El análisis del discurso es una disciplina interdisciplinaria. Se interesa asimismo por el análisis de los diferentes contextos del discurso, es decir, por los procesos cognitivos de la producción y la recepción, y por las dimensiones socioculturales del uso del lenguaje y la comunicación. (van Dijk, 1990: 14).

La tarea del analista reside en estudiar las relaciones complejas entre el texto, en su caso el noticioso en el nuestro el editorial, y el contexto. El objetivo del análisis discursivo es producir descripciones explícitas y sistemáticas del discurso, que cuentan con las dos dimensiones mencionadas: textual y contextual. En sus palabras:

Las dimensiones textuales dan cuenta de las estructuras del discurso en diferentes niveles de descripción. Las dimensiones contextuales relacionan estas descripciones estructurales con diferentes propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o factores socioculturales. (van Dijk, 1990: 45).

La descripción de los contextos cognitivo y social se realiza detallando las relaciones sistemáticas entre texto y contexto para saber cuál es la influencia de los procesos cognitivos, en producción y reconocimiento, de las estructuras del discurso y como éstas influyen y son influidas por la situación social. La relación texto-contexto no se concibe como una oposición entre un texto “interno” opuesto a un contexto “externo”, suponiendo una suerte de pre-existencia de un texto en formato “puro”, por mencionarlo gráficamente. Al momento de las enunciaciones textuales se conjugan diversos textos (intertextualidad) que se entrelazan en un discurso particular. Por lo tanto, el análisis del discurso no toma al discurso como una unidad autónoma que puede ser analizada de forma inmanente. El discurso está siempre sobredeterminado, condicionado y regulado por ciertas condiciones sociales de producción formadas por otros discursos y otras estructuras institucionales, económicas o políticas (Pérez,

2004: 176)¹⁶. Nuestra investigación, entonces, se focalizará en las relaciones entre las condiciones de producción entendidas como “*un determinado contexto político, económico y social*” (Pêcheux: 1978: 38) y el proceso de producción discursiva.

En relación al termino discurso, Maingueneau (1980: 15) menciona que debido a su carácter teórico inestable el concepto permite una amplia polisemia. Por ello daremos una definición posible que no desconoce otras acepciones del concepto. Definimos al discurso como una construcción social y cultural portadora de sentido que se produce en el marco de un sistema social de producción, circulación y recepción de sentido (Verón, 1987). Los discursos poseen un soporte material a través del cual se manifiestan, un sentido completo -pero no finito, ya que siempre está abierto a las disputas-, tienen una finalidad social, están vinculados con otros discursos y son fruto de las relaciones de poder y las luchas ideológicas en contextos históricos particulares¹⁷. En los términos de Zecchetto (2006: 248):

Mientras los sistemas de lenguajes son creaciones abstractas que no sirven para dar cuenta de determinadas construcciones concretas de sentido, la noción de discurso alude al contexto en que nacen y se mueven dichos sentidos, apunta a las subjetividades e instituciones que se entrelazan para crear y dar a conocer sus representaciones.

Para Zecchetto los discursos toman forma, son creados e interpretados dentro de un proceso dinámico de comunicación discursiva que contiene situaciones pragmáticas, articulaciones, conflictos de poder, intereses e ideologías.

El concepto de discurso entendido de esta manera señala que el sujeto hablante (o textual) no es un productor discursivo libre y origen último de significado. Está enmarcado en el funcionamiento de enunciados cuyas condiciones de posibilidad se articulan sobre formaciones ideológicas (Maingueneau, 1980: 10). De esta manera, el funcionamiento del discurso se relaciona con mecanismos de ubicación de los protagonistas y del objeto del discurso, ya que destinador y destinatario “(...) designan ubicaciones determinadas en la estructura de una formación social, posiciones con un conjunto de rasgos característicos que pueden ser descriptos por la sociología.” (Pêcheux, 1969; cit. por Maingueneau, 1980: 161).

Para analizar el discurso editorial del diario *Clarín* y vincularlo con sus condiciones productivas estableceremos las condiciones históricas y sociales en las que su enunciación fue producida. Ello nos conduce a retomar los planteos teóricos de Bajtin (1982) y Voloshinov

¹⁶ Para una crítica del análisis inmanente del discurso, véase Pêcheux (1978: 44); Verón (1987: 127).

¹⁷ Sobre esta orientación teórica puede profundizarse en De Ipola (1982); Pêcheux (1978); Verón (1987). Para una descripción sobre las principales definiciones y problemáticas del término, véase De Ipola (2002); Maingueneau (1980); Zecchetto (2006). En Foucault (1970) puede encontrarse una reflexión sobre el concepto de discurso en tanto *formación discursiva*. Las relaciones entre hegemonía y discurso pueden consultarse en Laclau (1985; 1990).

(1976). Bajtin comprende a la enunciación como una respuesta al discurso de otros en tanto instancia dialógica inserta en un proceso de comunicación discursiva. De esta manera, nos permite pensar al sentido como un producto social, ya que en sí mismo implica a *otro*: todo enunciado es una respuesta inscripta en un proceso semiótico que lo precede. Por un lado, se encuentra la palabra del otro en cada discurso como interlocutor real o virtual con el cual se interactúa y, por otra parte, la palabra que deriva de otros discursos socialmente instituidos cuyos ecos están presentes en el discurso para ser conservado o transformado (Pérez, 2004: 175). La comunicación discursiva donde se conforma este “diálogo” se caracteriza por ser social, conformar una red discursiva infinita, tener efectos materiales y estar regulada. Ubicamos a los medios de prensa, y a nuestro objeto de estudio, dentro de una red discursiva donde su producción enunciativa se relaciona con otros discursos (pertenecientes al sistema político, económico, jurídico y al propio subsistema de los medios de comunicación).

Para Voloshinov (1976) la vida del signo debe ser analizada dentro del entorno social en el cual circula¹⁸. El signo es el espacio donde se expresan las bases materiales de una ideología y donde tiene lugar la lucha ideológica. De allí que la realidad material puede ser transformada a partir de la transformación signica. No hay una realidad por fuera o detrás del discurso que éste permitiría revelar; es el signo o el discurso la misma arena de lucha y por lo que se lucha (también Foucault -1970- se inclina hacia este planteo). El signo es un ámbito polifónico y conflictivo de disputa por el sentido: es la arena de la lucha de clases, donde cada grupo o sector querrá imponer su sentido, su visión del mundo. Para Voloshinov, el lenguaje se estudia dentro de una sociedad concreta, con la vitalidad propia que le da la utilización de los hablantes reales situados en un contexto particular, sujeto al cambio histórico y determinado por un modo de producción dominante en la comunidad lingüística que se trate. De allí que los signos tendrán el valor que le otorga una comunidad específica y su ideología dominante. Y para estudiarlos será necesario analizar las circunstancias históricas y sociales donde fueron producidas tales enunciaciones, lo cual permitirá avanzar en el estudio de la conciencia colectiva de la época que se trate (Raiter, 1999). Es en esta línea que pensamos que este trabajo de investigación puede ser un aporte para dar cuenta de ciertos rasgos de la cultura política de la época (a lo que nos hemos referido previamente).

Retomando los planteos de Bajtin (1982), Foucault (1970) y Verón (1987), esta investigación concibe que la unidad de análisis de los discursos es el *enunciado*. Entendemos

¹⁸ Voloshinov critica el objetivismo abstracto de Ferdinand de Saussure por su carácter ahistórico y abstracto, entendiendo que el lenguaje no es un sistema de signos abstracto como lo entendía Saussure, sino que debe entenderse al signo dentro del entorno social en el que circula. De allí que critique la noción de valor de Saussure que hace referencia a la relación que por negatividad tienen los signos dentro del sistema de la lengua (Voloshinov, 1976).

al *enunciado* como el producto material de una *enunciación* particular que será objeto de circulación entre diversos grupos sociales y a la *enunciación* como el acontecimiento histórico que constituye la aparición del enunciado. El nivel del *enunciado* es del orden del contenido, el de la *enunciación* es el de las modalidades del decir (Sigal y Verón, 1985; Verón, 1985). En los discursos aparecen rasgos y marcas que dan cuenta de los componentes enunciativos, las cuales deben ser abordadas por el analista. En particular, al analizar las construcciones enunciativas en el espacio editorial, se prestará atención a la imagen o “lugar” del que habla (*enunciador*)¹⁹, a la imagen y la “posición” que el enunciador construye sobre a quien se habla (*destinatario*) y al nexo entre esos lugares (Veron, 1985: 182). También a los diferentes tipos de *alocutarios* y *destinatarios* expresados por el enunciador²⁰. A partir de los tres campos u ejes temáticos propuestos, intentaremos describir y comprender con qué voces realizó estas acciones la construcción enunciativa del espacio editorial del diario *Clarín*.

¹⁹ Entendemos al enunciador como una construcción textual que es “una operación simbólica a partir de la cual un agente social aparece estableciendo una relación determinada respecto de un destinatario y, simultáneamente, poniendo en escena un conjunto de actantes, es decir, de voces y miradas diversas con las que se identifica, se distancia, polemiza, se compromete, etc.” (Pérez, 2004: 185).

²⁰ Los *alocutarios* son las personas a las que el locutor declara dirigirse (Benveniste, 1986). Se trata de la función que el locutor le confiere a una persona por la fuerza de su mismo discurso. Determinarlo forma parte de la comprensión del discurso (Ducrot, 1994: 137).

Capítulo 2

Relato de un desencanto. Del peronismo al golpe de Estado (1973-1976)

Este capítulo tiene como objetivo realizar una breve contextualización histórica sobre los principales aspectos que ocuparon la realidad sociopolítica nacional hacia mediados de la década del '70. Su finalidad es que el análisis de nuestro objeto de estudio sea realizado sobre un abanico histórico lo más amplio posible, para comprender e interpretar cabalmente su pensamiento editorial. Más allá de las cuestiones que se trabajan en este apartado, durante el análisis también realizaremos las vinculaciones pertinentes con la realidad político-social de 1975-1976.

2.1. El escenario de un golpe

No cabe duda que el golpe militar del 24 de marzo de 1976 marcó un punto de ruptura en la historia argentina. Si bien desde hacía varias décadas, la oscilación entre gobiernos civiles y militares se había convertido en una recurrente “normalidad” para el devenir político del país, este nuevo golpe de Estado estableció un salto exponencial en el intervencionismo castrense con efectos devastadores para la sociedad en su conjunto. Los militares que tomaron el poder en 1976 se plantearon como objetivo una “refundación” de la República, que si bien constituía un segundo intento tras la fallida experiencia de la “Revolución Argentina” de 1966, sería cualitativamente diferente a los intentos anteriores, condenando el camino seguido por el país prácticamente desde 1930 y particularmente desde mediados de la década del '40.

A partir de 1930, la alternancia de gobiernos civiles y militares fue enhebrando una cultura política autoritaria que transformó la intervención castrense en la vida política del país como un acontecimiento legítimo. De hecho, los militares componían una *fuera política* mucho tiempo antes que se inicie el ciclo de golpes militares, y a partir de 1930 fue evidente su competencia por el poder en la vida pública (Quiroga, 2004: 39-40). Así, el sistema político argentino incorporó a los militares como árbitros de los conflictos políticos, con quienes los civiles tejían apoyos y alianzas. Se trataba de un proceso que Rouquié (1983: 65) ha denominado como de “*militarización de la vida política y politización de las Fuerzas Armadas*”. Pero las Fuerzas Armadas no era un *primus inter pares*, sino que se concebían -y se proyectaban hacia el exterior- como un actor superior y autónomo del resto de la sociedad

civil y dentro del propio Estado. Esa capacidad de situarse “por fuera” de la sociedad civil le permitía arrogarse la “inmunidad” a sus debilidades, y la potestad de una nueva intervención que en 1976 segaría, definitivamente, la “enfermedad” de la sociedad argentina. Sin embargo, las Fuerzas Armadas eran parte activa de la crisis política y contenían en su seno el mismo faccionalismo que erosionaba la vida colectiva de la sociedad argentina (lo cual quedaría palmariamente evidenciado durante el “Proceso”).

Hacia mediados de la década del '70, las Fuerzas Armadas elaboraron un diagnóstico que decretaba la existencia de una realidad social, que obligaba a poner en práctica una “revolución desde arriba” con instrumentos políticos antes no utilizados para la tarea “refundacional”²¹. Ese objetivo de refundación, apoyado en 1976 por una influyente coalición civil, estaría dirigida a todos los campos de la vida social argentina -la política, la economía, la cultura, la educación, las organizaciones civiles, el sistema institucional, entre otros- considerados presos de males endémicos y de los cuales no podía esperarse que surgiera respuesta alguna a la crisis “disolvente” que amenazaba al país²². Ante esta realidad, la transformación sólo podía ser conducida por unas Fuerzas Armadas donde, según su autorepresentación y la percepción de otros actores sociales, residía el último reducto de la identidad nacional y la posibilidad de restituir el orden público.

El diagnóstico de la coalición cívico-militar que finalmente tomó el poder en 1976 (Sidicaro, 2004), apuntó contra el modelo de integración nacional-popular consolidado a partir del Estado “populista” del primer peronismo (1946-1955). Este se había caracterizado por el impulso de la industrialización por sustitución de importaciones, la expansión del mercado interno, el reconocimiento del Estado como agente y productor de cohesión social a través del gasto público, una tendencia hacia la homogeneidad social (observable en la inclusión de la clase trabajadora como parte del desarrollo nacional) y la expansión de las clases medias asalariadas (Svampa, 2005). El diagnóstico estaba influido por las tesis liberales en boga, que planteaban que se había establecido una perversa relación entre el

²¹ Cavarozzi, 2006; De Riz, 1984, 2000; Novaro, 2006; Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 1985, 1989, 2004; Saborido y de Privitellio, 2006; Sidicaro, 1996, 2004; Vázquez, 1985.

²² Si bien la responsabilidad directa del golpe de Estado recaló en las Fuerzas Armadas, fue una coalición cívico-militar la que lo sustentó (Sidicaro, 2004; Vezzetti, 2002). La parte cívica de la coalición se nutrió de sectores económicos como la alta burguesía vinculada a las finanzas, la industria y la propiedad de la tierra; el capital extranjero y los empresarios nucleados en torno a la liberal Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) -que realizaron el *lock out* del 16 de febrero de 1976 contra el gobierno peronista-. A diferencia de otras experiencias golpistas, el sector militar que encabezó el golpe anudará una alianza programática con los sectores librecambistas del empresariado argentino (Seoane y Muleiro, 2001; Túrolo, 1996). Otro sector fundamental de la coalición fue la jerarquía de la Iglesia Católica, que otorgó apoyo espiritual y material a la “cruzada” (Di Stefano y Zanatta, 2000; Mignone, 1986; Novaro y Palermo, 2003; Obregón, 2005). Por su parte, los partidos políticos prestaron su consenso -por acción u omisión- al encumbramiento de las Fuerzas Armadas como único actor capaz de asegurar el orden público en 1976 (Yannuzzi, 1996).

Estado “populista”, débil e ineficiente, y una sociedad civil indómita, excesivamente movilizadora y politizada²³. Desde esta perspectiva, las demandas permanentes de las franjas movilizadas de la sociedad civil, atravesadas por un discurso “peligrosamente” anticapitalista, obturaban la gestión estatal, desafiaban su autoridad, atizaban la puja distributiva y trababan el despliegue de las fuerzas productivas. Por su parte, el Estado “populista” habría facilitado la indisciplina al dar pábulo al crecimiento de las presiones sectoriales y la puja distributiva. De allí que se hubiera acrecentado la acción “subversiva” hasta el punto de “amenazar” el orden social fundado en valores de la civilidad “occidental y cristiana”. Tal perspectiva se fue consolidando desde inicios de la década del ’70 en las clases dominantes, en sectores militares y ámbitos políticos, a medida que el Estado se mostraba más ineficaz para morigerar las crecientes expectativas de transformación social que habían convergido en un amplio movimiento social. Como ninguno de esos problemas estructurales mencionados había sido “corregido” por los distintos gobiernos civiles y militares previos -empantanados en su fragilidad u obstaculizados por la fuerza de los actores sociales ligados al “populismo”- el “orden” y la “normalidad” perdida, el rumbo moral, la restitución de las relaciones de autoridad y las jerarquías se reconstituirían al eliminar el “populismo” y la “subversión”. La conclusión, de tintes mesiánicos, era contundente: *tanto el Estado como la sociedad debían ser refundados*.

A partir del derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, la Argentina se había caracterizado por su inestabilidad política. Hasta 1966 predominaron gobiernos débiles, tanto civiles como militares, que intentaron fundar un régimen semi-democrático, imponiendo o aceptando la proscripción del peronismo (Cavarozzi, 2006). Durante esta primera etapa se instituyó una forma de funcionamiento de la sociedad que tuvo relativa autonomía en relación a las iniciativas de transformación “desde arriba”. Esa autonomía, que se cifró en muchos casos como formas de resistencia y negociación, en gran medida logró bloquear los intentos desde el Estado para transformar a la sociedad (Cavarozzi, 2006). El golpe militar de 1966, autodenominado “Revolución Argentina”, fue un primer intento autoritario para implementar una transformación radical de la sociedad civil en el marco del avance del “Estado burocrático autoritario” en el Cono Sur (O’ Donnell, 1982). El golpe “modernizador” encabezado por el general Onganía puso el énfasis en los “enfoques quirúrgicos” sobre el diagnóstico del “problema argentino”. En esta tesis, la solución tendría que ser implementada a fondo sobre

²³ Los preceptos del liberalismo habían prevalecido con cierta intermitencia en la historia argentina reciente, pero nunca se habían podido consolidar a largo plazo. La confluencia entre el liberalismo y un sector importante de las Fuerzas Armadas que se consolidó hacia 1975-1976 fue fundamental para el posterior programa refundacional aplicado durante la dictadura militar (para un análisis crítico del “diagnóstico liberal” de las Fuerzas Armadas, véase Novaro, 2006: 63).

una sociedad a la que se consideraba globalmente “enferma” (Calveiro, 2005; Cavarozzi, 2006; De Riz, 2000; Romero, 1998, 2004).

Una de las características excepcionales de la época, que otorgaba verosimilitud a tal diagnóstico, fue la radicalización política de sectores de la sociedad civil movilizados y políticamente activos -radicalización que también caracterizó a los que condujeron el Estado-. En el marco de una sociedad movilizadora para el cambio (Svampa, 2007: 384), a partir de 1966 la promesa de cambio social revolucionario aunó a sectores juveniles, bases sindicales combativas, obreros, sectores barriales y populares, que confluyeron en organizaciones políticas revolucionarias peronistas o marxistas, desafiando a las clases dirigentes tradicionales y a las clases dominantes vernáculas²⁴. En particular la juventud, en una amplia mayoría volcada hacia el peronismo, constituyó un componente dinámico y distintivo dentro este abanico de fuerzas. Las organizaciones que se formaron al calor de la lucha antidictatorial en la segunda mitad de la década del '60 reivindicaron la lucha armada como forma legítima de resistencia. Al autoritarismo militar proscriptivo, que había caracterizado las intervenciones castrenses luego del derrocamiento de Perón, se le enfrentó una violencia política autopercibida como justa reivindicación de los sectores populares. Diferentes acontecimientos les permitían pronosticar, hacia mediados de los años 70, la pronta crisis terminal del sistema capitalista: la presencia socialista en el mundo, la crisis del sistema fordista, el ideario rebelde y antiburgués de las revueltas del mayo francés de 1968, el aparente declive del poderío mundial de Estados Unidos y, más en particular, la persistencia de las luchas populares en América Latina -luego de la influencia decisiva de la Revolución Cubana a partir de 1959- (Hobsbawm, 1998). En este contexto, el enfrentamiento bipolar de la Guerra Fría propiciaba una concepción de la política que admitía la confrontación y la lucha armada por un cambio social revolucionario, confrontación que en el caso argentino tomó un matiz propio dentro de las particularidades que distinguían a la cultura política autóctona, donde prevalecía la lógica binaria de amigo-enemigo, explotado-explotador, justicia-injusticia. Como sostiene Svampa (2007: 384), tras estas concepciones se difundió en la sociedad argentina una *lógica de la exclusión*, que adquirirá ribetes “demenciales” durante la

²⁴ Durante 1960 el fenómeno insurreccional asomó a la vida política argentina. Pero fue hacia finales de esa década e inicios de la década del '70 que se constituyeron las principales organizaciones político-armadas. Hacia mediados de la década del '70 las organizaciones más importantes eran Montoneros -surgida en 1969, de inspiración católica y nacionalista que rápidamente se incluyó dentro del peronismo representando a la “izquierda” del movimiento- y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), surgida en 1970 del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Si bien la bibliografía sobre el tema es amplia, algunas lecturas insoslayables son: Anguita y Caparrós, 2006; Calveiro, 2005; Bonasso, 1997; Gasparini, 2005; Gillespie, 1987; Giussani, 1984; Hilb y Lutzky, 1984; Lanusse, 2005; Ollier, 1998, 2005; Seoane, 1993, entre otras. Pueden consultarse también las ediciones de la revista *Lucha armada en la Argentina*, que en forma trimestral comenzó a editarse en la ciudad de Buenos Aires a partir de diciembre de 2004.

última dictadura militar. La imposibilidad de conciliar los antagonismos expresó, tanto la dificultad de institucionalizar el conflicto social por parte del Estado y los partidos políticos tradicionales, como un sustrato de profunda intolerancia y autoritarismo dentro de un clima de época que amparaba el uso de la violencia como instrumento válido para la resolución de los conflictos (Calveiro, 2005; Ollier, 2005).

Entrada la década del '70, las organizaciones revolucionarias se decidirán definitivamente por la vía armada como instrumento indispensable para acelerar los cambios históricos. Y hasta 1973 contarán con cierta aprobación de sectores civiles no involucrados directamente en la lucha política, desesperanzados por el fracaso de la “Revolución Argentina” que inició un persistente proceso de deslegitimación desde la explosión popular conocida como el *Cordobazo*, en mayo de 1969.

Por su parte, las Fuerzas Armadas, bajo los preceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), catalogaron esa movilización y radicalización política como “subversiva”²⁵. Un término difuso y amplio que incluía a todo aquel que se apartara de supuestos valores esenciales del “ser nacional”, cuyos máximos representantes eran las Fuerzas Armadas. La *Doctrina* había sido reinterpretada de acuerdo a la situación nacional y hacia 1976 el diagnóstico era terminante: el país debía embarcarse definitivamente, y bajo cualquier costo, en la “guerra contrarrevolucionaria” que, para el sector más intransigente de las Fuerzas Armadas, era parte de una “Tercera Guerra Mundial”²⁶. El anticomunismo feroz y el fundamentalismo católico, vigorizaban la conciencia mesiánica del emprendimiento refundacional. La lucha contra la “subversión” era presentada como la supervivencia de la sociedad misma, el rechazo que los “anticuerpos” legítimos de la sociedad levantaban frente a un “tumor” disolvente (sobre las metáforas organicistas empleadas por los militares véase, Corradi, 1996; Delich, 1983). Los “subversivos” estaban por fuera del colectivo de identificación “argentinos” y no merecían miramientos legales. Su ideología “extraña”, “disolvente” y “apátrida” los situaba en una dimensión cuasi inhumana. En algunos casos,

²⁵ Esta *Doctrina*, nacida en Estados Unidos durante la década del '60, advertía sobre la amenaza de una conspiración internacional para exportar la revolución comunista a Occidente, que haría peligrar la pervivencia de los valores “occidentales y cristianos”. Según esta perspectiva, los países del tercer mundo eran puntos lábiles para la intromisión de elementos guerrilleros revolucionarios que intentarían trastocar la idiosincrasia de esas naciones. Se trataba de un enemigo militar pero, fundamentalmente, de un enemigo ideológico. Para la *Doctrina* las Fuerzas Armadas podían traspasar la legalidad por el grado excepcional del tipo de conflicto y la agresión a la que era sometida la sociedad; desde esta perspectiva lo que estaba en juego era el estilo de vida “occidental y cristiano” de la Nación (para más información sobre la DSN, véase García, 1995: 39).

²⁶ Sobre la hipótesis de la Tercera Guerra Mundial, véase la tesis de algunos de sus principales exponentes durante la dictadura militar (Díaz Bessone, 1987; Círculo Militar, 1998; 1999). Para una interpretación, véase Verbitsky (a2006)

eran “irrecuperables”. Y así serían tratados: la forma para terminar con ese “flagelo” era utilizar la fuerza represiva sin ningún control legal.

2.2. Apogeo y derrumbe del peronismo en el poder (1973-1976)

El fin de la “Revolución Argentina” (1966-1973) estuvo marcado por la movilización popular, el reverdecer de las demandas sociales, la lucha armada contra el autoritarismo militar, la exasperación de la puja distributiva, las reivindicaciones clasistas de un sector del sindicalismo más combativo, las pujas intersectoriales, la disputa interna en el peronismo y el fracaso del Estado militar para conciliar los conflictos sociales. En este marco, en 1973 Perón parecía ser el único actor con capacidad para armonizar el conflicto social, morigerar las reivindicaciones extremas de las organizaciones político-armadas -a las que había alentado- y poner orden en la disputa interna del movimiento peronista, librada entre su sector revolucionario y la derecha. Aunque no pudo participar de las elecciones del 11 de marzo por un obstáculo legal pergeñado por Lanusse, eligió a su delegado Héctor Cámpora como su representante. El “tío” contaba con el apoyo de la Tendencia Revolucionaria y su casi seguro triunfo parecía que daría lugar a un nuevo escenario donde se concretarían las demandas de la sociedad civil movilizada²⁷. Sin embargo, el slogan de campaña “Cámpora al gobierno, Perón al poder” advertía quién detentaría el poder real en la Argentina del retorno peronista. El peronismo se presentó en la elección encabezando el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), un frente de partidos que se completaba con el desarrollismo y pequeños sectores desprendidos del socialismo, el radicalismo y los conservadores populares. La fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima triunfó en forma contundente: 49,5 % sobre 21% de la fórmula Ricardo Balbín-Eduardo Gamond, de la Unión Cívica Radical, obligando al radicalismo a desistir de competir en la segunda vuelta para la fórmula presidencial prevista por la ley electoral (ya que no se había llegado al 50%).

Cámpora asumió la presidencia el 25 de mayo, y por la presión de las bases militantes esa misma noche el nuevo presidente firmó el indulto masivo a los militantes políticos que permanecían encarcelados, lo que dio curso a una posterior ley de amnistía sancionada por el Parlamento el día 26 de mayo. Cumplía así una de las promesas principales de la campaña electoral, aunque la decisión perentoria dio cuenta, rápidamente, de la autonomización de la

²⁷ La Tendencia conformaba un “frente de masas” que incluía a la Juventud Peronista, el Movimiento de Villeros Peronistas (MVP), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Agrupación Evita de la Rama Femenina (AE) y el Movimiento de Inquilinos Peronistas (MIP).

militancia sobre las intenciones del nuevo gobierno²⁸. En su corta estancia en el poder, C mpora se ver a asediado por las fuerzas contrapuestas presentes dentro del peronismo, que se expresaron en el flamante gabinete ministerial, cuya composici n intent  dar cabida a las diversas corrientes internas del movimiento²⁹. Menos de dos meses despu s de su asunci n, el flamante presidente renunciar a ante la quita del apoyo por parte del propio Per n, quien intentaba frenar el “desborde” del peronismo revolucionario que pretend a tomar las riendas de la “primavera camporista” para construir, en t rminos de la  poca, la “patria socialista”³⁰. En ese lapso, Montoneros hab a llamado a una tregua sobre la lucha armada pero hab a atizado la ocupaci n o “toma” de diversos edificios p blicos, f bricas, hospitales, universidades, medios de comunicaci n, comunas del interior, entre otros, generando una sensaci n de vac o de autoridad e “ilusi n revolucionaria” (Saborido y de Privitellio, 2006: 368). Las “tomas” -que se extendieron entre el 4 y el 15 de junio- significaron un primer desaf o para C mpora que terminaría por perjudicar al propio gobierno -quien toler  la situaci n- y se al  el desfasaje entre las demandas extremas de una parte de la sociedad movilizada y el objetivo de institucionalizaci n del peronismo en el poder. D as despu s, las contradicciones internas del movimiento peronista se hicieron tr gicamente visibles para la opini n p blica el 20 de junio, fecha del regreso definitivo del l der al pa s, cuando la derecha del peronismo caus  una verdadera masacre en Ezeiza con el fin de atacar a los simpatizantes de la Tendencia y Montoneros que esperaban el arribo del l der (Verbitsky, 1998). Ezeiza mostr  la fractura irreconciliable que divid a al movimiento. El discurso de Per n, el d a despu s de esa jornada aciaga, fue una contundente muestra de los tiempos dif ciles que se avecinaban para el peronismo revolucionario. Al tomar partido por la derecha del movimiento ech  por la borda la “teor a del cerco” que hab an elaborado los sectores revolucionarios, que

²⁸ Esta decisi n tendr  una influencia decisiva en los acontecimientos posteriores vinculados a la represi n ilegal durante la dictadura militar. Para las Fuerzas Armadas la amnist a result  ser la confirmaci n pol tica de que el andamiaje represivo deb a ser clandestino y que tendr an que apelar al exterminio para ser definitivo (Novaro y Palermo, 2003: 109). Duhalde (1999: 65) es contundente al respecto: “*Podr a decirse que la fundaci n del Estado terrorista argentino tiene fecha: el 25 de mayo de 1973 (...) Es all  que en la conciencia militar se enso orea la muerte como representaci n del otro y como respuesta pol tica a aquel acontecimiento: si el Estado democr tico los reintegraba al seno de la sociedad, el Estado terrorista se har  cargo de su exclusi n definitiva.*”.

²⁹ Se compuso de dos representantes de la juventud peronista, Esteban Righi (Interior) y Juan Carlos Puig (Relaciones Exteriores); tres peronistas “hist ricos”, Jos  Bel Gelbard (Econom a), Jorge Taiana (Educaci n) y Adolfo Ben tez (Justicia); un sindicalista (Ricardo Otero) y Jos  L pez Rega, secretario privado de Per n al frente de Bienestar Social. Rodolfo Puiggr s, vinculado anteriormente al comunismo, fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires.

³⁰ Un primer gesto de Per n en este sentido hab a sido la destituci n del m ximo dirigente de la Juventud Peronista, Rodolfo Galimberti, luego que llamara a la creaci n de “milicias populares” en un encendido acto a solo un mes del triunfo electoral. Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Movimiento Nacional Justicialista cercano a la Tendencia y que hab a acompa ado a Galimberti en el acto, tambi n recib  un fulminante rev s pol tico por parte del l der.

presentaba a Perón como un líder engañado por su círculo áulico lo cual le impedía tener un “verdadero” contacto con su pueblo (Verbitsky, 1998: 278-283). A contramano de este diagnóstico, la palabra de Perón se orientaba a poner freno a las demandas radicalizadas de Montoneros y la Tendencia, apoyándose en los sindicatos y el lopezreguismo. A partir de ese momento el peronismo revolucionario se iría distanciando del gobierno y del caudillo, mientras que Perón profundizaría un giro conservador que alentaría a la burocracia sindical y a López Rega³¹.

El viraje fue profundizado en los meses posteriores al desplazamiento de Cámpora y durante la tercera presidencia de Perón, iniciada en octubre de 1973 tras haber triunfado en las elecciones de septiembre de ese año (con su esposa, María Estela -Isabel- Martínez de Perón, como candidata a vicepresidente). La última presidencia de Perón abrió el camino para la generalización de una serie de medidas autoritarias, que fueron el prelude de la ofensiva conservadora que posteriormente encabezaría la derecha peronista contra los sectores revolucionarios de izquierda (peronista y no peronista), y contra el abanico de fuerzas populares que habían forjado el regreso del líder (Svampa, 2007: 417). Al momento de su fallecimiento, el 1º de julio de 1974, y en un contexto político particularmente inestable, Perón no había podido completar los objetivos que se había propuesto de “pacificación nacional”, concertación económica a través del Pacto Social e institucionalización del conflicto social y de las internas del peronismo (Svampa, 2007). Más aún, su decisión de apoyar a los sectores más retrógrados del peronismo, fue fundamental para el recrudecimiento de los eventos violentos posteriores. Lo cierto es que la muerte del líder dejó un vacío político que sumió al país en una profunda zozobra. Vacío que fue el prolegómeno de un abismo en el que cayó la propia endeble democracia.

Una de las propuestas económicas clave de Perón para reencauzar institucionalmente la conflictividad social había sido la política concertada auspiciada por el Pacto Social. El Pacto era parte de la estrategia de Perón para morigerar los niveles de confrontación en la sociedad argentina y la radicalización política. Fue acompañado por una política de revalorización del parlamento como órgano de discusión entre los partidos políticos, contradiciendo la tradicional animadversión peronista hacia los opositores, y la revalorización de los partidos opositores como canales de diálogo (Cavarozzi, 2006: 50). Pero también, como se ha visto, este intento conciliador fue acompañado por decisiones contradictorias con

³¹ Para un testimonio de este proceso político desde dentro de las filas peronistas que apoyaban a Cámpora, véase Bonasso, 1997. Para una descripción basada en diversos testimonios y autores, véase Anzorena, 1998.

este fin, como el apoyo al lopezreguismo, que sería un actor fundamental en la espiral de violencia del periodo 1973-1975.

El Pacto reeditaba los acuerdos entre asociaciones gremiales de trabajadores y empresarios que se había estructurado durante los últimos años del primer peronismo en la década del '50. Para ello el ministro de Economía, José Ber Gelbard, convocó a las entidades gremiales confederales -la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y la Confederación General Económica (CGE), de la que Gelbard había sido su máximo dirigente-, y se acordaron los niveles generales de aumentos salariales con el compromiso de respetarlos durante su vigencia, aceptando el rol del Estado como árbitro final en caso de desacuerdos (véase el Acta de Compromiso Nacional, base del Pacto Social, suscripta el 8 de junio de 1973, en Aroskind, 2007: 107). El programa ponía el eje en la estabilidad y el crecimiento económico a través de la ampliación de los mercados externos y el aumento del consumo interno mediante una mejor distribución del ingreso para los asalariados. El Estado ejercería un rol activo al controlar los precios para contener la inflación y en el control de la fuga de divisas. En términos ideales, la administración estatal aseguraría la transferencia de la renta del campo al sector industrial y al asalariado, y los salarios altos y el gasto público motorizarían la inversión. También, el Estado intervendría en las distintas áreas sociales propiciando mejoras para el bienestar público.

Hacia principios de 1974, la política del Pacto Social había logrado índices económicos y sociales favorables, típicos de la finalización de una etapa de ascenso en el ciclo económico; hubo una importante expansión de la actividad económica, se redujeron al mínimo las cifras de desocupación y se alcanzaron números históricos en el nivel de producción industrial (Aroskind, 2007: 107). Entre otras razones, el Pacto había funcionado favorablemente gracias a un buen ciclo de precios agropecuarios exportables y a que la inflación, bajo presión, estuvo controlada (Perón había anunciado públicamente una política de “inflación cero”; frase que los críticos del Pacto, entre ellos el MID y *Clarín*, recordarán con sarcasmo durante el inflacionario 1975). A partir de 1974, y particularmente luego de la muerte de Perón, el Pacto mostró sus limitaciones. Y a medida que se demostró ineficaz para albergar las expectativas de los actores económicos, la puja distributiva se exacerbó con consecuencias sociales lacerantes, en medio de la profundización de reclamos sociales y luchas políticas (Aroskind, 2007; Basualdo, 2006; Restivo y Dellatorre, 2005; Rougier y Fiszbein, 2006)³².

³² Las empresas, pese a que un principio reconocían que la producción se había expandido y se contenía la inflación, comenzaron a mostrar su desacuerdo al achicarse su margen de ganancia -en muchos casos hasta llegar al quebranto- por el inflexible congelamiento de precios (que permanecía mientras aumentaba el costo de los

Luego del el giro conservador de Perón, la movilización social se fue retrayendo paulatinamente y las organizaciones revolucionarias se fueron escindiendo de los intereses de sus bases al intensificar las acciones guerrilleras. A partir de 1974, Montoneros y el ERP profundizaron una lógica de guerra y enfrentamiento contra los que consideraban “enemigos del pueblo” (los militares y otras fuerzas de seguridad, la burocracia sindical, los empresarios y civiles influyentes señalados como enemigos, las figuras del lopezreguismo, entre otros). En el caso de Montoneros, hubo un enfrentamiento directo con el grupo presidencial, cuyo inicio concreto en la nueva etapa -y en vida de Perón- fue el asesinato del jefe de la CGT, el metalúrgico José Ignacio Rucci, en septiembre de 1973. Un golpe directo contra un aliado de Perón que abroqueló a la burocracia sindical y el lopezreguismo, y forzó aún más el viraje del líder sobre la derecha. Un año después, la organización entró en la clandestinidad, decretando una nueva etapa de resistencia donde la violencia política pasó a estar en el día a día de la escena política. Esa deriva violenta, que también protagonizó el ERP, autojustificada por los avances alcanzados en años previos, por la “educación” política que significaba para las masas y el golpe que se le asestaba a los “enemigos” en el camino indubitable de la victoria final, sería uno de los factores que propiciaría las condiciones para que vastos sectores sociales, fundamentalmente las clases medias, se inclinaran a aceptar una salida represiva y autoritaria que pusiera fin a su “indisciplinamiento”.

Por su parte, el gobierno de Isabel Perón iniciado luego de la muerte del caudillo, disolvió definitivamente las expectativas de establecer un gobierno popular, democrático y propulsor de la ampliación de derechos económicos y sociales. A la radicalización política, el bienes importados). El congelamiento llevaba al acaparamiento de productos y a la especulación. Para el punto de vista empresarial, eran víctimas de una política económica que les reducía el margen de ganancia y los obligaba a especular. Luego de la muerte de Perón, el sindicalismo comenzó a acusar a los empresarios de querer sacar provecho propio del Pacto en desmedro de los trabajadores, y presionaron por un alza mayor de los salarios. También los problemas de la economía mundial afectaron al país. El aumento del precio del petróleo provocado en 1973-1974 por los países de la OPEP perjudicó a la economía nacional -crisis que fue síntoma del cambio de patrón de acumulación que se estaba engendrando en el sistema capitalista mundial-. El Mercado Común Europeo, dependiente del crudo, tomó medidas proteccionistas y cerró el mercado para las exportaciones de carnes argentinas. El alza del crudo y el aumento de otros insumos importados generaría la *inflación importada* sobre los bienes intermedios que necesitaba la industria local, y en el contexto del Pacto Social, donde no podían aumentarse los precios, las inversiones se paralizaron (Perón había prometido en los primeros meses de 1974 que no se trasladaría la *inflación importada* a los precios). Por su parte, los empresarios se negaron a absorber los aumentos de la *inflación importada*; además, en el contexto de una demanda creciente, la producción fabril no lograba producir a la par de la demanda, lo cual también incidió en la suba de precios. Cada vez más peligrosamente, los actores económicos comenzaron a desconfiar de la eficacia del Pacto y dejaron de respetar sus regulaciones. El desabastecimiento y el crecimiento del mercado negro serían dos consecuencias vinculadas a esta incredulidad. Mientras, el Estado acarrea con los problemas del comercio exterior que obligaban a consumir gran parte de las reservas monetarias. Por su parte, los críticos del Pacto Social señalaban que la inflación había sido reprimida artificialmente, que aunque los precios estuvieran controlados muchos productos se entregaban con fallos de terminación de los fabricantes, que el Banco Central había tenido una emisión récord y que había falta de inversión general en empresas estatales, lo que derivaba en el problema del desabastecimiento. También que el déficit fiscal crecía de forma exponencial -aunque venía creciendo desde la “Revolución Argentina”- (para mayor detalle, véase Restivo y Dellatorre, 2005).

gobierno respondió con una represión política y cultural amplia. Amparándose en la derecha peronista, consolidó la faceta represiva del Estado, al decretar el estado de sitio en noviembre de 1974, y al incluir al Ejército en la “lucha antissubversiva” en Tucumán, en febrero de 1975, para combatir a los comandos del ERP (un ensayo de la represión ilegal que luego se sistematizaría con el terrorismo de Estado) (García, 1995: 140; Novaro y Palermo, 2003: 82)³³. La prescindencia del poder político sobre la acción represiva -que no controló- y la evidencia de un gobierno débil que recurría a la represión ilegal para recomponer su propia legitimidad erosionada (Yannuzzi, 1996: 16), afianzaron la autonomización de la Fuerzas Armadas y su entronización frente a la opinión pública como único actor estatal capaz de combatir a la “subversión” e imponer el orden público (véase la tesis sobre la autonomía militar en García, 1995).

Paralelamente, el gobierno amparó las acciones criminales de la Triple A, la banda paramilitar de derecha que, desde noviembre de 1973, era conducida en las sombras por el secretario privado y ministro de Bienestar Social de Isabel, el “brujo” López Rega. La organización paramilitar se caracterizó por asesinar impunemente a militantes políticos y sociales de izquierda y amenazar a intelectuales, políticos y personalidades de la cultura, que se oponían a la derechización del gobierno. En este marco, la ofensiva restauradora del gobierno de Isabel, instaló un verdadero “tiempo de revancha” (Vezzetti, 2002: 68), que exaltó la violencia y arrastró a sectores importantes de la sociedad en esa deriva. Así, desde 1974, el escenario político fue paulatinamente colmado por las acciones violentas de las bandas paramilitares de derecha, el accionar represivo del Estado y las acciones guerrilleras de las organizaciones revolucionarias que intensificaron su militarización.

El giro conservador de Isabel en materia política, tuvo su correlato en materia económica. Fue el intento de ajuste liberal estructural, que en junio de 1975 anunció el flamante ministro de Economía, el lopezreguista Celestino Rodrigo, que llegaba para liquidar lo que quedaba del Pacto Social. El “Rodrigazo” fue un punto de inflexión en la historia económica argentina, antecedente directo de la política económica que más tarde implementaría Martínez de Hoz (Restivo y Delatorre, 2005). La férrea oposición del

³³ El 5 de febrero de 1975 el decreto secreto 261, firmado por Isabel Perón, dio inicio al “Operativo Independencia” que tenía por objetivo aniquilar a los guerrilleros del ERP asentados en los montes tucumanos. El gobierno avaló la incursión militar bajo un acuerdo tácito con las Fuerzas Armadas por el cual cedía mayor espacio político a los militares en la “lucha contra la subversión”, a cambio de que no interfirieran en el funcionamiento institucional y en la interna del partido gobernante (Itzcovitz, 1985: 82). Luego, a inicios de octubre de 1975, el presidente interino Ítalo Argentino Lúder dictó el trágico decreto 2772, que extendió la represión militar a todo el país, ordenando el “aniquilamiento” del “accionar de los elementos subversivos”. Para esa época, las fuerzas de seguridad estatal ya aplicaban torturas, realizaban fusilamientos clandestinos y hacían desaparecer militantes políticos, aunque sin la sistematización y ampliación que le daría el plan dictatorial posterior (véase el capítulo 5).

sindicalismo peronista, truncaría el intento de ajuste, que fue el final de la experiencia siniestra de López Rega en el poder y el inicio de la “agonía” del gobierno peronista (De Riz, 1986: 184), en un proceso que analizaremos en profundidad en el capítulo 5.

2.3 Hacia el golpe de Estado de 1976

Si bien durante el análisis del diario *Clarín* describiremos destalladamente los acontecimientos previos al golpe de Estado, es preciso resaltar que luego del “Rodrigazo”, y hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se intensificó la sensación de que la sociedad estaba desgobernada (Cavarozzi, 2006). Desde ese momento, el gobierno de Isabel Perón protagonizó un vertiginoso proceso de licuación de poder, flanqueado por la agudización de la violencia política, los problemas económicos, los desaciertos en sus medidas, la erosión de la deslucida imagen presidencial, los planes militares para desembarcar en el poder con la anuencia de influyentes sectores civiles, la militarización de la política y las disputas hacia dentro del peronismo, entre las principales variables desestabilizadoras. En ese lapso se fue desarticulando la alianza de fuerzas políticas que componía el frente gobernante (FREJULI -Frente Justicialista de Liberación-) y el compromiso de los partidos opositores, como la Unión Cívica Radical y la Alianza Popular Revolucionaria, de ejercer una oposición leal y respetar el republicanismo democrático que consagraba la Constitución Nacional (Quiroga; 2004; Yannuzzi, 1996). La retracción de la dirigencia política y el deterioro de los canales institucionales de negociación de los conflictos dejaron lugar a una violencia cotidiana que acentuó la sensación de “caos” y “desgobierno”. Y en un contexto de descomposición institucional, los comportamientos económicos de los sindicalistas y los empresarios clausuraron los mecanismos de negociación y acuerdo, para privilegiar actitudes de ganancias a corto plazo, que obstaculizaron la posibilidad de plasmar soluciones perdurables (Cavarozzi, 2006). Variables que deben insertarse dentro de una cultura política caracterizada por la ausencia de “fe democrática” (Ollier, 2005; Romero, 2004) que, en última instancia, legitimaba que se incumplieran las normas jurídicas o formales de la institucionalidad republicana, si éstas no aseguraban el “bienestar popular”, el orden público o ciertos objetivos políticos presentados como una mejora del bien común.

En conclusión, luego del “Rodrigazo” la gestación del futuro golpe de Estado tomó un camino cada vez más definido a través de la activa -pero solapada- acción de las Fuerzas Armadas, la aquiescencia de los sectores civiles que convergieron con la voluntad militar y

el consenso de la sociedad civil para la implementación de una solución “drástica” a la crisis nacional. En efecto, hacia marzo de 1976 nuevamente sectores amplios de la ciudadanía promovieron o estuvieron dispuestos a aceptar la intervención directa de los militares en la arena política, a través de un golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas se presentaron como las restauradoras del “orden” social perdido y su intervención, como algo “inevitable” frente al vacío de poder, representación que se vio legitimada por diversos actores sociales y redimensionada por la prensa nacional.

Capítulo 3

En asedio permanente: la prensa y el gobierno de Isabel Perón (1974-1976).

Este pequeño apartado tiene como finalidad presentar algunos lineamientos generales sobre la situación de la prensa nacional hacia 1976. Si bien realizaremos referencias a la prensa en general, nos abocaremos principalmente a los diarios nacionales. La intención es describir el campo mediático dentro del cual *Clarín* realizó su producción periodística.

En la década del '70 el diario era el medio de comunicación masiva más popular. No competía con los otros medios, sino que se complementaban sus funciones. A la mañana sus noticias eran retomadas y ampliadas por la radio, mientras que a la noche la televisión lo hacía con los vespertinos y la radio. La alta politización de la época posicionaba al diario como un instrumento fundamental para los debates políticos. Estar informado, conocer las definiciones ideológicas de los diarios y comparar sus posiciones era una obligación para los militantes políticos. Los diarios no eran solo medios de información: su lectura determinaba una línea ideológica, una forma de comprender el mundo y la política. Los lectores más avezados leían dos periódicos, y también más en casos particulares. Además existía una pluralidad de publicaciones partidarias. La clase media exhibía hábitos de lectura consolidados; en sus hogares se leía al menos un diario y una o dos revistas. La oferta informativa era amplia. Argentina era el país de América -luego de Estados Unidos y Canadá- que más había desarrollado sus medios masivos de comunicación (Ford y Rivera, 1987). En 1976 los diarios más importantes de alcance nacional se editaban en Capital Federal: *La Nación*, *Clarín*, *La Prensa*, *Crónica* y *La Razón*. *La Opinión*, siendo un diario de menor tirada y también editado en Capital, había cobrado relevancia por dirigirse a una franja de la clase media progresista y politizada, y por su influencia sobre el poder político. *Crónica* era el diario de mayor tirada sumando sus dos ediciones (sobrepasaba los 600 mil ejemplares), mientras que *Clarín* lideraba la tirada matutina (alrededor de 350 mil ejemplares). La oferta de revistas era amplia; una veintena superaba la tirada de 50 mil ejemplares. Los magazines de espectáculos y actualidad llevaban la delantera³⁴. Las revistas políticas tenían sus fieles lectores, destacándose *Panorama*, *Somos*, *Confirmado* y *Primera Plana* (Mendelevich, 1986).

³⁴ *Gente*, que llegó a vender 300 mil ejemplares, *Así*, *Siete Días*, *La Semana*, *Semana Gráfica*, *Radiolandia*, *Antena*, *TV Guía*, *Vosotras* (de 50 mil ejemplares), *Labores*, *Para Ti* (150 mil ejemplares).

El incremento de la violencia política luego de la muerte de Perón en julio de 1974 había transformado el ejercicio del periodismo en una profesión en asedio permanente. Los periodistas y los medios de prensa se encontraban bajo la presión directa de las organizaciones político-armadas de izquierda y las bandas parapoliciales de derecha. También, de la propia administración peronista. En ese tiempo fueron asesinados conocidos periodistas y otros recibieron intimidaciones u atentados. Muchos decidieron marchar al exilio (para un testimonio, véase Graham-Yoll, 1985). Por su parte, las empresas editoras de periódicos sufrieron reiteradas “advertencias”, amenazas y atentados³⁵.

Fortaleciendo su raigambre autoritaria, el gobierno de Isabel Perón puso en práctica políticas que reprimieron el ejercicio de la libertad de prensa³⁶. Ya el breve gobierno de Perón había generalizado una serie de procedimientos autoritarios en el campo cultural que envalentonaron a los sectores parapoliciales de derecha ligados al oscuro López Rega (Svampa, 2007: 417). Las medidas represivas de Isabel Perón aprovecharon cierto consenso sobre que la libertad de prensa podía quedar subordinada a las urgencias de una situación política cada vez más crítica. Así, un gobierno que se sabía endeble y asediado, desviaba la atención sobre su propia incapacidad situando a la prensa como un “enemigo del pueblo”. En este contexto, el gobierno determinó la clausura de diarios, impulsó medidas de asfixia económica a través de la quita de la publicidad oficial o la política sobre importación del papel, entre otras regulaciones palmariamente restrictivas para la prensa. Puntualmente, por motivos ligados a la disputa interna del peronismo, se clausuraron los diarios del peronismo de izquierda *Noticias*, *El descamisado*, su continuación *La Causa Peronista*, *El Peronista*, *Militancia* y *El Nuevo Hombre*. También se clausuraron *El Mundo*, ligado al ERP, y otros de circulación menor, como el matutino *La Calle* de izquierda moderada, la revista *Satiricón* de humor negro (en octubre de 1974, bajo acusaciones de “inmoralidad”), *Chaupinela*, otro intento humorístico de periodistas de *Satiricón* que Isabel clausuró en 1975 con un juicio por desacato. El mismo destino vio la revista *Cabildo*, expresión del nacionalismo católico. En el ámbito de la prensa de difusión masiva el gobierno clausuró *Crónica*, durante un año desde el 21 de diciembre de 1974, con la excusa que el vespertino violaba el artículo 22 de la Constitución Nacional al haber atizado la recuperación de las Islas Malvinas por la fuerza

³⁵ Por ejemplo, el secuestro y posterior asesinato de David Kraiselburd, director del diario platense *El Día* y la agencia *Noticias Argentinas*, a manos de Montoneros en julio de 1974; los asesinatos de los periodistas de *La Opinión* Pedro Leopoldo Barraza, el 13 de octubre de 1974, y Jorge Money, en mayo de 1975, nunca aclarados pero con alta probabilidad de que hayan sido responsabilidad de la Triple A (sobre las repercusiones del asesinato de Money en el periodismo porteño, véase Sáenz Quesada, 2003: 288).

³⁶ Según quien fue su secretario privado por esos días, Julio González, Isabel le había dicho que hubiera clausurado a todos los diarios por un mes. Según Isabel la gente se lo hubiera “agradecido” porque “habría aprendido a pensar por sí misma” (cit. por González, 2007: 111).

popular³⁷. En mayo de 1975 el gobierno lanzó una campaña por la Cadena Oficial de Televisión contra los diarios *La Opinión* y *El Cronista Comercial* aludiendo que existían publicaciones que atizaban “las prácticas disolventes de la comunidad bajo la apariencia de apoyo a algunas gestiones de gobierno” (cit. por Carnevale, 1999: 169). El diario *La Opinión* fue cerrado el 13 de febrero de 1976 por 10 días, como colofón de su enfrentamiento directo con el gobierno peronista (Mochkofsky, 2004: 224-225). Otros periódicos recibieron atentados y/o amenazas: *La Voz del Interior*, *El Día*, *The Buenos Aires Herald*, *La Prensa* y *La Opinión*³⁸.

Una de las medidas restrictivas más relevantes fue la sanción de la ley 20.840, conocida como de “Seguridad Nacional” o “antisubversiva”, que rigió desde octubre de 1974 e incorporaba en su articulado la imposición de prisión de dos a seis años a quien difundiera mensajes que propendieran a “alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”; frase lo suficientemente amplia y vaga como para sancionar a cualquier publicación discolá. En este terreno se inscribieron el decreto 1273, del 14 de mayo de 1975, que creaba una oficina denominada “Registro de Agencias Noticiosas” y prohibía a los medios de comunicación nacionales o extranjeros difundir noticias del país provenientes de agencias extranjeras (Díaz, 2002: 60-1), y el que estableció el estado de sitio en noviembre de 1974, que contenía partes que restringían la actividad periodística³⁹. De parte del gobierno hubo agresiones verbales, desde la presidenta hasta otros funcionarios, que catalogaron a la acción de la prensa como “terrorismo periodístico” y “guerrilla periodística”⁴⁰.

El cúmulo de acciones restrictivas por parte del poder político generó protestas, críticas y enfrentamientos públicos entre las empresas periodísticas y el gobierno. Particularmente en los últimos meses del gobierno peronista se estableció un verdadero

³⁷ *Crónica* había lanzado una campaña de reclutamiento de voluntarios para la recuperación de Malvinas que tuvo bastante éxito y fastidió al gobierno nacional. Según el propietario y director de *Crónica*, Héctor Ricardo García, la clausura respondió a otras razones: su oposición al proceso de estatización de los canales capitalinos luego de la muerte de Perón (él era propietario de Canal 11 al momento de la expropiación; Rússovich y Lacroix, 1986: 17; Ulanovsky, 2005: 65).

³⁸ Para más detalle sobre la situación del periodismo en los años inmediatamente anteriores al golpe de Estado de 1976, véase Carnevale, 1999; Díaz, 2002; Mochkofsky, 2004; Ulanovsky, 2005.

³⁹ El andamiaje legal censor fue mantenido por la dictadura militar. Por ejemplo, el gobierno militar utilizó la ley 20.840 como justificativo para procesar y encarcelar por unas horas al director de *The Buenos Aires Herald*, Robert Cox, a mediados de abril de 1977 como escarmiento porque el 21 de abril de ese año el diario de la comunidad inglesa había publicado una información sobre una conferencia de prensa de Montoneros en Roma.

⁴⁰ Hacia fines de octubre de 1975 *Clarín* repudió como una “advertencia inquietante” un informe del gobierno que le advertía a los medios de difusión que su acción estaba siendo “favorable” a la “acción psicológica” de la “subversión” (*Clarín*, 31/10/1975). El informe emitido por el ministerio del Interior, que encabezaba Angel Robledo, llamaba a la “reflexión” y “responsabilidad” a los medios de comunicación “por el cúmulo de trascendidos, versiones, conjeturas, informaciones falsas, y otras formas de deterioro de las instituciones y de desconcierto de la opinión pública, que lamentablemente afloran a diario en algunos órganos periodísticos y otros medios masivos de comunicación (...)” (*Clarín*, 29/10/1975, p.8).

círculo vicioso entre ambos sectores. Frente a las demandas de las empresas periodísticas, el gobierno respondía directamente con una acción coercitiva (Díaz, 2002: 64). Como parte del enfrentamiento, los órganos de prensa protagonizaron una campaña para desprestigiar al gobierno. Desde los editoriales y las crónicas políticas se redimensionaron las versiones sobre el golpe de Estado, se amplificaron los errores del gobierno y se desacreditaron las políticas implementadas, entre otros recursos desestabilizadores. En muchos casos en forma inversamente proporcional a la ponderación positiva de las Fuerzas Armadas, cuya intervención era sugerida cada vez menos elípticamente. Durante el año 1975 las redacciones y las publicaciones de los principales diarios fueron caja de resonancia de los rumores sobre el posible golpe de Estado, con el consiguiente desmedro para la estabilidad institucional (Díaz, 2002: 60). Y la palabra “caos” fue una y otra vez utilizada para calificar la situación crítica del país (Blaustein, 1999: 25). Dirigentes opositores como Balbín y Tróccoli señalarían públicamente el rol desestabilizador que estaba ocupando la prensa en la coyuntura⁴¹. Efectivamente, hacia fines de 1975 la campaña de desprestigio contra el gobierno tomó mayor vehemencia a través de diferentes estrategias, según el medio que se tratara. Se legitimaba así la “inevitabilidad” del golpe de Estado -“la noticia que no fue primicia”, según Díaz (2002: 86)-, como la única solución política efectiva frente a los errores del gobierno y una realidad que se juzgaba caótica. En particular, los grandes diarios no repudiaron el quiebre institucional y algunos fueron voceros abiertos del golpe, como el caso de *La Razón* (Díaz, 2002) ⁴². Además de las propias convicciones ideológicas y los intereses de las empresas periodísticas, también debe mensurarse cuánto pesó en esta campaña la relación negativa entre el gobierno peronista y la prensa.

Por último, a la censura explícita se agregó la autocensura de las empresas periodísticas y de los periodistas. En las crónicas sobre acontecimientos vinculados a la violencia política los eufemismos se hicieron recurrentes. Para el caso específico de las organizaciones armadas, si bien en un primer momento podían mencionarse en minúsculas, a medida que el clima de violencia se fue agudizando el gobierno prohibió mencionarlas sin autorización y los diarios pasaron a denominar a Montoneros como “la organización declarada ilegal en segundo término” o “la organización autoproscripita” –luego de su paso a la clandestinidad en septiembre de 1974-, mientras que el ERP era “la organización declarada

⁴¹ El 20 de octubre de 1975 Balbín declaró que existía “una prensa dirigida a crear climas de confusión” y abogó por una información “cierta y veraz” (*Clarín*, 21/10/1975, p. 9).

⁴² *La Razón* amplificó el clima golpista desde sus titulares en cuerpo catástrofe durante marzo de 1976. Es recordado su titular “Es inminente el final. Todo está dicho”, el mismo 23 de marzo de 1976.

ilegal en primer término”. Asimismo, durante 1975 los objetivos y causas políticas que reivindicaban las organizaciones para justificar sus acciones guerrilleras fueron excluidas de los grandes diarios, así como en gran proporción la autoría de sus acciones (Gillespie, 1987: 235). Por lo general, cuando los acontecimientos referían a acciones de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, los diarios reproducían los documentos oficiales, que en la mayoría de los casos ocultaban y deformaban información (esto se sistematizaría luego del golpe de Estado en relación a la información sobre “enfrentamientos” que eran fraguados).

Capítulo 4

El diario Clarín. Un acercamiento preliminar

4.1. El nacimiento de Clarín

Clarín lanzó su primer número al público el 28 de agosto de 1945. El diario se presentó en formato tabloide, con una diagramación ágil y noticias concisas que pretendían cubrir el espacio periodístico que en forma paulatina iría dejando el diario *El Mundo*. Su fundador fue el político y periodista Roberto J. Noble, quien dirigió el diario hasta el día de su fallecimiento, el 12 de enero de 1969. Desde joven, Noble demostró su inclinación por influir en las discusiones públicas y en la toma de decisiones políticas, aunque no ocupó la primera plana de la dirigencia política de su época. Su participación en los medios de comunicación y la fundación de *Clarín* puede enmarcarse dentro de su voluntad por influenciar en la toma de decisiones sobre temáticas públicas de interés general. Noble había militado tempranamente en agrupaciones estudiantiles y se acercó al ideario socialista, pero luego giró hacia posiciones políticas más conservadoras profesando un nacionalismo de cuño autoritario. Se recibió como abogado a inicios de la década del '30 y antes del golpe del 6 de septiembre de 1930 fue elegido diputado nacional por la Capital Federal por el Partido Socialista Independiente (una escisión del Partido Socialista fundado por Antonio De Tomaso y Federico Pinedo). En noviembre de 1931 fue nuevamente elegido diputado de la Capital Federal por la "Concordancia" del general Agustín P. Justo, luego ejerció la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, hasta que en 1936 fue designado ministro de gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, organizador del sistema del "fraude patriótico" que respondía al caudillo conservador bonaerense Alberto Barceló.

Antes de fundar *Clarín*, Noble había participado de otras iniciativas de prensa gráfica, en su mayoría vinculadas a su militancia política. Durante la década del '20 trabajó en la sección deportiva del diario *La Nación*, luego participó de la fundación del semanario *Crítica Social*, vinculado al Partido Socialista; trabajó en el diario *Libertad*, vinculado al Partido Socialista Independiente, y en el diario *Concordancia*, que representaba al bloque de diputados del socialismo independiente que Noble integraba y a su vez formaba parte de la "Concordancia" que apoyaba al gobierno del general Justo (1932-1938) (junto al conservador Partido Demócrata Nacional y al radicalismo antiyrigoyenista) (Ramos, 1993: 12-3). Antes de renunciar en 1939 al cargo de ministro de gobierno provincial, presionado por el presidente

Roberto Ortiz, fundó “LS 11 Radio Provincia” de Buenos Aires. Durante la década del '40 Noble vio obstruido su futuro político, debido a que su prestigio había quedado lesionado por su complicidad con el “fraude patriótico” del gobierno de Fresco, por la sospechas de un enriquecimiento por vías poco claras, y por su acercamiento a las ideas germanófilas que, influenciadas por su nacionalismo, lo habían llevado a defender a ultranza la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial. En la interpretación de Ramos (1993: 18), la fundación de *Clarín* en 1945 fue justamente una derivación de su carrera política trunca y su persistente anhelo de influencia social.

Por otra parte, también Noble es recordado por haber sido promotor de la ley 11.723 que protege los derechos de autor. Luego de su fallecimiento en 1969 su esposa, Ernestina Herrera de Noble, se hizo cargo de la dirección del diario, la cual ha ejercido hasta la actualidad.

4.2. Clarín hacia 1976

Clarín tuvo una carrera ascendente desde su primer número. Durante el primer peronismo aumentó sus ventas y su popularidad, forjando una posición autónoma del poder político peronista⁴³. Hacia finales de la década del '40 el diario *La Prensa* era el que tenía mayor circulación nacional e influencia en la opinión pública, y captaba la mayoría de los avisos clasificados. Pero la expropiación de *La Prensa* por parte del gobierno peronista en el año 1951 benefició directamente a *Clarín*. El diario de Noble captó el flujo de lectores y de avisos clasificados que habían pertenecido al diario conservador, transformándose posteriormente en el diario de referencia de una clase media dinámica y en crecimiento. Hacia fines de los años '60 ya se había constituido en uno de los primeros diarios en el ranking de ventas nacionales con una tirada promedio de 340.000 ejemplares diarios (*La Razón* y *Crónica* llegaban a 500.000 sumando todas sus ediciones), y en 1968 recibió un beneficio adicional por el cierre del diario *El Mundo*, que estaba en paulatino declive desde 1945. Durante los años 70 *Clarín* fue el único diario que creció al ritmo del incremento demográfico, mientras que sus competidores perdieron lectores en forma sostenida (Muraro,

⁴³ Noble y su diario mantuvieron una relación ambigua con el peronismo durante las primeras dos presidencias de Perón. En la primera etapa, *Clarín* adhirió fervientemente a la Unión Democrática -a la que apoyó en la campaña electoral de 1946-, pero luego se acercó al peronismo atraído por su veta nacionalista (aunque Noble despreciaba la figura de Evita) (Ramos, 1993).

1987: 27)⁴⁴. Paralelamente, fue consolidando una organización independiente y una infraestructura industrial propia que le permitía acceder a información de último momento.

A inicios de la década del '70 una pequeña porción de los lectores de *Clarín* fueron hacia el nuevo diario *La Opinión*, aparecido el 4 de mayo de 1971 (Rússovich y Lacroix, 1986: 18; Ulanovsky, 2005: 23). Cuando apareció *La Opinión*, *Clarín* vendía un promedio de 400 mil ejemplares diarios cada mañana, y al siguiente semestre su venta descendió a 358 mil ejemplares (Ulanovsky, 2005: 23). El flamante diario prontamente se ganó un lugar preferencial en las clases medias y altas de los centros urbanos y en los ámbitos intelectuales porteños. Pese a que su tirada era pequeña en comparación con *Clarín* -entre 40 y 50 mil ejemplares-, se estableció un “diálogo” implícito entre ambos competidores. Nuevamente, la acción de un gobierno beneficiará al diario fundado por Noble. *La Opinión* fue intervenida por la Junta Militar en abril de 1977 por los contactos de su director Jacobo Timerman con “el banquero de Montoneros”, David Graiver, en el marco del “escándalo Graiver” (Gasparini, 2007; Mochkofsky, 2004; Rotenberg, 2000; Ruiz, 2002).

En los años previos al golpe de Estado de 1976 *Clarín* quedó en medio de las disputas políticas de la época y sufrió un atentado en sus propias instalaciones. El 10 de septiembre de 1973 una banda de 30 matones sindicales que presumiblemente respondía a los dirigentes Lorenzo Miguel y Rogelio Coria -de la Unión Obrera Metalúrgica y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, respectivamente- entraron al hall del edificio de la calle Piedras a punta de metralla y con bombas incendiarias al grito de “diario de zurdos”. Se llevaron dinero, causaron destrozos e hirieron a personal del diario. El atentado tenía como fin “castigar” a *Clarín* porque había publicado tres solicitadas del ERP “22 de agosto”, un grupo disidente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que había secuestrado al apoderado legal de *Clarín*, Bernardo Sofovich, el 9 de septiembre y a cambio de su liberación exigió la publicación de las solicitadas (lo que *Clarín* cumplió en la edición del martes 11; en la tapa, y en las páginas 17 y 24)⁴⁵. Aunque también parece haber sido una represalia por las posturas

⁴⁴ El avance puede captarse en las cifras comparativas de su tirada: el promedio de venta de 1957 fue de 274 mil ejemplares; en 1965 fue de 342 mil ejemplares; en 1973 de 380 mil ejemplares y en noviembre de 1981 de 536 mil ejemplares (Llonto, 2003: 125; Rússovich y Lacroix, 1986: 18). Según un estudio de la UPTBA, citado por Getino (1995: 91), en 1970 *Clarín* vendía 425.900 ejemplares, mientras que en 1980 la venta ascendió a 539.800. Ostentó un aumento de la venta neta y del porcentaje sobre el total del consumo, pasando del 22% en 1970, al 31% en 1980. Según el mismo estudio, *La Razón* vendía 480.600 en 1970, mientras que en 1980 su venta se redujo a 304.800. *La Nación* vendía 235.700 en 1970 y aumentó levemente a 248.300 en 1980. *La Prensa* se redujo ostensiblemente de sus 213.000 ejemplares en 1970 a los 80.000 de 1980.

⁴⁵ El ERP “22 de Agosto” quería dar a conocer su apoyo al proceso abierto por el gobierno peronista, en disidencia con la posición del ERP encabezado por Mario Roberto Santucho. En las solicitadas también exigían una investigación por el fusilamiento de los guerrilleros en Trelew el 22 de agosto de 1972 -de allí su denominación-, y fustigaban duramente al presidente provisional y yerno de López Rega, Raúl Lastiri, y a su mujer, Norma López Rega (Llonto, 2003: 122).

del matutino ligadas con la oposición del desarrollismo al ministro de Economía Gelbard y a la política del Pacto Social⁴⁶. La negociación con los secuestradores y la publicación de las solicitadas -que transgredía el artículo 212 del Código Penal donde se penalizaba la difusión de comunicados de organizaciones guerrilleras- fue rechazado por el gobierno, el propio Perón y los sectores de la burocracia sindical que tenían vinculaciones con la Triple A. De hecho, Perón justificó el atentado: “Quien procede mal suele sucumbir en su propio mal procedimiento. *Clarín* actuó mal y alguien, que se sintió herido, le respondió con otro mal procedimiento. *Clarín* fue cómplice de los secuestradores, ya que tendría que haber dado parte a la policía” (cit. por Ulanovsky, 2005: 42; para un detalle de los acontecimientos, véase López, 2008: 55-63).

A partir de ese momento, *Clarín* privilegió temáticas que no galvanizaran a los sectores políticos más violentos. Sin embargo, mantuvo una línea de férrea oposición a la política económica de Gelbard, atizado por el enfrentamiento que Frigerio tenía con el ministro de Economía y su política de Pacto Social. El MID, pese a haber participado del FRECILINA en 1972, pertenecer al FREJULI y haber acompañado la plataforma electoral del 11 de marzo, no había suscripto los acuerdos programáticos inscriptos en el Pacto Social en junio de 1973 y consideraba que la política económica que había iniciado Gelbard perjudicaba los intereses empresariales y la capacidad productiva nacional⁴⁷. Frigerio y Gelbard habían

⁴⁶ Para Daniel Muchnik, periodista de *Clarín* que se integraría meses después del atentado a la redacción, la acción de intimidación fue en combinación de los sectores del sindicalismo burocrático con la CGE por el enfrentamiento de *Clarín* con Gelbard. En sus palabras: “Gelbard ‘movió el avispero’ y fue cómplice de esta situación” (entrevista realizada por el autor a Daniel Muchnik, septiembre de 2007; sus dichos posteriores remiten a esta única fuente).

⁴⁷ El acercamiento del desarrollismo con el peronismo en esta nueva etapa política se había iniciado en 1972 a partir de la conformación del Frente Cívico de Liberación Nacional (FCLN o FRECILINA), herramienta frentista con la que Perón retomó la iniciativa en el escenario político nacional, y que fuera la prefiguración del FREJULI que en 1973 ganaría las elecciones nacionales. El FRECILINA lo componían el MID, el Partido Intransigente de Oscar Alende, los demócratas cristianos de José Allende, el Partido Conservador Popular, personalidades de partidos menores y la CGT y la CGE. La convocatoria de Perón hacia el MID tuvo como finalidad refrendar su acercamiento a las reivindicaciones históricas del desarrollismo -industrialismo, inversiones energéticas, alianza de clases, entre otros-, confirmar el sesgo “pacificador”, “modernizador” y “reformista” que tendría Perón en la nueva etapa que se avecinaba; atenuar el temor de las Fuerzas Armadas y sectores dominantes por la prédica de los sectores radicalizados del peronismo y aprovechar los contactos del desarrollismo con los círculos empresariales, intelectuales, los equipos tecnoburocráticos y principalmente con los sectores de las Fuerzas Armadas “nacionalistas” e “industrialistas” que se oponían al sesgo liberal del lanussimo. En este sentido, la incorporación del desarrollismo matizaba el tono “antimilitarista” que tenía la campaña del Frente y hacía hincapié en la necesaria incorporación de las Fuerzas Armadas en el futuro gobierno frentista (en efecto, Frondizi se inclinaba por denominar a la alianza “Frente Nacional” y no “Cívico”, para evitar las interpretaciones “antimilitaristas”). El acercamiento con el desarrollismo también buscaba seducir a los capitales extranjeros, en particular los europeos, al dotar de “respetabilidad” al Frente por la influencia que el desarrollismo tenía en esos círculos. En ese sentido, las tendencias “antiimperialistas” que compartían el peronismo y el desarrollismo, y la importancia que las inversiones extranjeras tenían para el desarrollismo, presentaban a los capitales europeos como lo más indicados para el proyecto de independencia económica reivindicado por el Frente, que se destacaría así por su jerga “europeísta” (para un análisis en detalle del FRECILINA, véase Bozza, 1999).

estado vinculados durante la etapa de la revista desarrollista *Qué* y ahora se enfrentaban por las críticas del desarrollismo contra la política económica⁴⁸. Su enfrentamiento tenía ribetes políticos y personales; además, Gelbard sospechaba de una secreta aspiración ministerial de Frigerio, lo que tensó aún más la relación (Seoane, 2003). El enfrentamiento tuvo costos para *Clarín*. En los últimos días de su gobierno, Perón sancionó al diario con la reducción de la publicidad oficial por la presión del propio Gelbard. La asfixia económica se convirtió en un verdadero problema para el matutino, que tuvo que reducir las páginas de sus ediciones. El enfrentamiento con el gobierno derivó en manifestaciones públicas de oposición hacia el diario por parte de la CGT y la CGE, en junio de 1974⁴⁹. Como condición para disminuir las sanciones económicas Gelbard impuso un hombre de su riñón como jefe de redacción del diario, el periodista Oscar García Rey, que intentaría controlar la línea editorial. Pero esta imposición duró poco tiempo. Sin aval político tras la muerte de Perón, Gelbard renunció en octubre de 1974 por las presiones de la derecha peronista -moriría en el exilio en octubre de 1977; para más detalles véase Seoane, 2003-⁵⁰. Luego, durante la dictadura militar, *Clarín* se cobrará con creces este mal momento manifestando en más de una oportunidad su desprecio hacia Gelbard, hacia el titular de la CGE, Julio Broner, y hacia la “política concertada” que habían representado durante el último peronismo, mientras ambos exiliados eran acusados por la dictadura por negocios espurios y hostigados por representar al denostado “populismo” (véase los editoriales de *Clarín* de 7/11/1976, 26/4/1977, 27/5/1977 y 29/5/1977). También saludó con efusiva e indisimulada satisfacción desde su sección “Economía”, y a doble

⁴⁸ Véase, por ejemplo, el editorial de *Clarín* del 16/8/1973 sobre la polémica suscitada con Gelbard por la sugerencia de *Clarín* sobre la necesidad de renegociar la deuda externa (véase el comentario de la polémica, en *Clarín* 14/3/1976).

⁴⁹ El 12 de junio de 1974 la CGT declaró a *Clarín* “enemigo de la clase trabajadora”, comunicó a los sindicatos que se abstuvieran de publicar en el diario y le solicitó la misma actitud en “solidaridad” a la CGE. *Clarín* contestó en su editorial del 14 de junio que no era enemigo de los trabajadores, que no “abandonaría la línea trazada por su fundador” y que no habría “presiones ni amenazas que lo hagan renunciar a lo que es irrenunciable” (*Clarín*, 14/6/1974). Por su parte, el 15 de junio la CGE respondió a la solicitud de la CGT recomendando a sus miembros que se abstuvieran de “financiar por vía publicitaria, la campaña de socavamiento al proceso de reconstrucción y liberación nacional” de *Clarín* (véase el comentario posterior de *Clarín* sobre el conflicto; 7/5/1977, p. 8; para mayor información véase, López, 2008: 65-73; Seoane, 2003: 356-7). Como se ha mencionado, la CGE era la asociación empresaria que había firmado el Pacto Social con el gobierno peronista en 1973, había sido creada en 1950 por José Ber Gelbard con el auspicio del entonces presidente Perón, tenía una tendencia desarrollista y estaba compuesta en su mayoría por el pequeño y mediano empresariado. En 1973 estaba presidida por Julio Broner. La entidad aliada a Perón le disputaba la representación empresarial a la Unión Industrial Argentina (UIA), representante de los empresarios más grandes, y se oponía a la visión liberal de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el Consejo Empresario Argentino (CEA) de Martínez de Hoz.

⁵⁰ Según Muchnik, que ingresó a inicios de 1974 a la redacción del diario, el enfrentamiento con el gobierno y la amenaza latente de los grupos más violentos configuraban una situación “muy abrumadora, muy angustiante y muy colapsante” para todos los que trabajaban en *Clarín*. También, los conflictos gremiales que surcaban el diario hacían dificultosa la tarea profesional cotidiana. A mediados de 1974, Muchnik recibió una propuesta para hacerse cargo de la secretaría de redacción de la sección economía del diario *La Opinión* que aceptó. “Era como pasar de vivir en Bombay a vivir en Nueva York”, sintetizó.

página, el proyecto de disolución de la CGE decretada por la Junta Militar, que se concretó en julio de 1977 (*Clarín*, 7/5/1977, pp. 8-9).

Durante 1975 y 1976 el diario, como otros medios de prensa, padeció las consecuencias de la violencia política que se acrecentaba en el escenario político argentino. Algunos empleados de *Clarín* sufrieron amenazas y atentados, tanto por cuestiones político-ideológicas como por asuntos gremiales internos. La conflictividad social se encarnaba cotidianamente en la vida interna gremial del diario con sus correspondientes negociaciones y desafíos a la patronal, “conquistas”, asambleas, paros, deliberaciones políticas internas, etc. (una ácida recreación novelada del clima de redacción puede consultarse en Asís, 2000). La conflictividad interna fue un motivo de permanente preocupación para la gerencia del matutino, que a inicios de febrero de 1976 aprovechó el clima político desfavorable para los sectores combativos y echó masivamente a los delegados díscolos⁵¹. Entendemos que la conflictividad interna del diario debe ser una variable a tener en cuenta para comprender la complacencia de *Clarín* con el discurso disciplinador de las Fuerzas Armadas en marzo de 1976, que planteaba la restauración de la “normalidad” en las relaciones entre capital y trabajo

En el periodo que nos ocupa el diario osciló entre las 36 a 48 páginas en su extensión. Desde el mes que se inicia nuestro análisis, en junio de 1975, y hasta agosto de 1975 las secciones fijas del diario fueron (en este orden): “Internacionales”, “Economía”, “Gremiales”, “Información General”, “Policía”, “Política” y “Deportes”. “Política” ocupaba el cuerpo central del diario, pero la sección que funcionaba como eje era la de “Economía”, el sector más sensible para los intereses desarrollistas. A partir de septiembre de 1975 la sección “Política” se ubicó luego de “Internacionales”. Otras secciones que se publicaban semanalmente eran “Gremiales”, “Interior”, “Educación”, “Policía”, “Carreras”, “Espectáculos” y “Mercados”. Hasta el 23 de marzo de 1976 la sección “Internacionales” fue la que “abrió” el diario al lector. Pero el mismo día del golpe de Estado la sección “Política” se ubicó en primer lugar. Y en abril de 1976 la sección se trasladó definitivamente a la “apertura” del diario. El golpe militar pareció ser la oportunidad de incluir un cambio que el nuevo secretario general de redacción, Marcos Cytrynblum, venía pergeñando desde que

⁵¹ La comisión interna del diario, que contaba con el apoyo del sector administrativo y la redacción, tenía un perfil combativo y “antipatronal” que representaba un verdadero desafío para la conducción gerencial de *Clarín*. En cambio, en el sector de los talleres los obreros estaban representados por sindicalistas vinculados a la burocracia sindical, opuestos a los sectores antipatronales, a la guerrilla y a los sectores políticos de izquierda (Llonto, 2003: 123-9). Los delegados despedidos pudieron organizar piquetes y bloquear la salida del diario por unos días (*Clarín* no se publicó el 4 y 5 de febrero). Pero los tiempos políticos estaban cambiando. Los despedidos no pudieron contar con el apoyo de otros periodistas del diario, en medio de la confusión de una situación política inestable y con un golpe en ciernes.

había asumido ese rol en noviembre de 1975⁵². Su llegada a la secretaría marcaría una renovación en la superficie redaccional del diario, que incluyó una columna política dominical desde enero de 1976 manejada por el periodista político Joaquín Morales Solá, anteriormente corresponsal de *Clarín* en Tucumán. En efecto, durante 1975 el único espacio explícitamente de opinión sobre temas políticos en la superficie redaccional del diario había sido el editorial. En la sección “Política” no se publicaban notas de opinión firmadas, sino crónicas sin firmas.

A partir de 1976 el renovado *Clarín* dedicará más espacio para los deportes, los policiales y los espectáculos, con abundancia de fotografías. Las tapas privilegiarán un título principal, y se hará recurrente la utilización de grandes tipografías al estilo de la prensa “sensacionalista”. El diario incluirá temáticas de la vida cotidiana y la farándula, y notas “color” para un público masivo. También Cytrynblum impulsará la generación de noticias propias desde el diario. Bajo su impronta *Clarín* auspiciará festivales de cine, partidas de ajedrez con maestros internacionales, maratones, y otros eventos de resonancia pública (Ulanovsky, 2005: 55). Uno de los objetivos de este cambio fue producir un mensaje periodístico que llegara a amplias capas de la sociedad (Rússovich y Lacroix, 1986: 19), y así consolidar su perfil como el diario de mayor circulación en el ámbito nacional.

Durante el periodo estudiado los editoriales del diario *Clarín* se publicaron siempre en páginas pares (en la página izquierda del lector), por lo general compartiendo la superficie redaccional con noticias de la sección “Política” y ocasionalmente de la sección “Economía”. El editorial estaba ubicado en un espacio diferenciado del resto de la superficie redaccional, encuadrado por líneas punteadas que permitían su rápida visualización. En la parte superior del editorial se publicaba el logo del diario, su nombre, los datos de la edición, la fecha de la fundación del diario, el nombre del fundador y su lema de presentación “*Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos*”, vigente hasta la actualidad⁵³. Su presentación era a dos columnas, que habitualmente abarcaban hasta la mitad

⁵² Según Cytrynblum “Al comienzo de mi gestión, el diario abría y seguía por muchas páginas, entre diez y quince, con información internacional (...) Y la verdad es que a la gente le importaba muy poco si los norteamericanos habían tomado o perdido una colina en un lejano país. Pero, claro, en ese momento la fuerza de la costumbre, de esta actitud del editor de pensar que lo importante estaba afuera, que no estaba fronteras adentro. Entonces, lo que hice fue darle la mayor atención a lo que ocurría en el país, por aquella vieja ley de ‘cuanto más lejos está la noticia, menos importante es’. (...) [Además] Era una imbecilidad hablar de Vietnam, cuando ya teníamos un Vietnam adentro. Con argentinos que eran asesinados, Silvio Frondizi, Ortega Peña, etc. Entonces, desde mi visión del periodismo, el cielo clamaba el cambio y que política pasara a la apertura del diario” (cit. por Halperín, 2007: 150-1). El cambio obligó a un mayor despliegue de la sección “Política”. Desde finales de 1975 y durante 1976 se incorporarán el corresponsal en Tucumán, Joaquín Morales Solá, y luego los periodistas Ricardo Kirschbaum, Roberto Guareschi, Eduardo van der Kooy y Alfredo Leuco, entre otros.

⁵³ Ramos (1993: 17-8) afirma que el lema tiene un doble origen. Era una derivación de un manifiesto germanófilo que Noble había escrito por la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial antes de la fundación de *Clarín* y se tituló “Afirmación argentina en el destino argentino”. Y también había sido el título de un capítulo del libro de Manuel Fresco “*Conversando con el pueblo*”, editado en 1943 para contestar las críticas

de la página. Cuando el tema del día lo ameritaba se extendía hacia el extremo final de la página -y en ocasiones absolutamente excepcionales abarcaba toda la página del diario-. No había publicidad en la página que contenía el editorial. Los editoriales eran escritos por periodistas especializados en cada área temática, supervisados por quien en ese momento respondía al núcleo del desarrollismo; o directamente por editorialistas que pertenecían al desarrollismo.

4.3. Una alianza clave: *Clarín* y el desarrollismo

Hacia finales de la década del '50', y hasta inicios de la década del '80, *Clarín* abrazó el ideario político del desarrollismo vernáculo encabezado por Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi. Esta vinculación se concretará en una alianza ideológica, política y financiera con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el partido político que aglutinaba al pensamiento desarrollista nacional (Llonto, 2003: 155; Ulanovsky, 1996: 294)⁵⁴. La misma directora Ernestina de Noble, al inaugurar una nueva línea de rotativas el 28 de agosto de 1970, explicitó hasta qué punto llegaba la identificación de *Clarín* con el desarrollismo:

La identificación que el hombre de la calle hace entre *Clarín* y la doctrina del desarrollo constituye nuestro más grande orgullo. Algo así como una marca de fábrica que distingue cada día el producto que ponemos a disposición del gran público. En efecto, *Clarín* es el diario al servicio del desarrollo nacional. (cit. por Llonto, 2003: 103)⁵⁵.

El vínculo se expresó en su pensamiento editorial y, tras la muerte de Noble en 1969, en hombres del desarrollismo que trabajaron en la redacción de *Clarín* ejerciendo un

por su paso por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El capítulo se denominaba “*Soluciones argentinas a los problemas argentinos en el gobierno de Bs. Aires. Lucha agobiadora*”.

⁵⁴ Según Llonto (2003: 155), durante la primera etapa de la alianza se corrían rumores sobre que la ligazón tan íntima no solo era por la amistad de Frondizi con Noble, sino también porque durante el gobierno de Frondizi (1958-1962) el Banco Nación le había otorgado un crédito a *Clarín* para que comprara sus primeras rotativas (también se rumoreaba que Frondizi y Frigerio tenían acciones en *Clarín*). Según esta misma investigación, a fines de 1971 *Clarín* logró zanjar su primera crisis financiera gracias al crédito obtenido por los contactos del desarrollismo con la dictadura militar de la “Revolución Argentina”. A partir de allí, y hasta fines de 1981, el partido habría obtenido apoyo económico de *Clarín*.

⁵⁵ Pueden citarse algunos ejemplos extraídos de la superficie redaccional del diario que demuestran su apoyo explícito al ideario desarrollista. El suplemento *Clarín Rural* de julio de 1976 se presentaba con la frase: “La Batalla del Desarrollo debe darse en todos los frentes-Roberto Noble” (*Clarín*, 17/7/1976); en ese mismo mes el suplemento especial “Ingenieros Argentinos” señalaba en la bajada de su tapa: “Impulsar el desarrollo tecnológico nacional, un imperativo que no admite más postergaciones es preocupación de los sectores más representativos del quehacer argentino y que *Clarín* recoge como elemento de su prédica diaria” (*Clarín*, 24/7/1976); el 2 de septiembre de 1976, en el Día de la Industria, *Clarín* editó un suplemento especial por el aniversario, allí titulaba: “El esfuerzo de quienes crean la riqueza”, (*Clarín*, 2/9/1976); el 13 de diciembre de 1976, al cumplirse 69 años de la primera extracción de petróleo en el país, *Clarín* publicó un suplemento especial titulado “Día del petróleo argentino”, entre otros ejemplos posibles.

verdadero “control ideológico” de la línea editorial del diario y las notas sensibles en relación a la economía y la política⁵⁶. Uno de los primeros desarrollistas en ejercer el secretariado de Redacción fue Oscar Camilión, y a partir de 1969 se integraron otros conspicuos representantes del desarrollismo como Octavio Frigerio -hijo de Rogelio-, Carlos Zaffore, Gonzalo D’Hers, Osvaldo Trocca, entre otros. Los cambios tuvieron su eco en la redacción: renunciaron Ovaldo Bayer, Vicente Andrich y Jorge Cayo; a la par que se le adjudicaron nuevas responsabilidades a Oscar García Rey, Eduardo Durruty y Marcos Cytrynblum (Ulanovsky, 2005: 30-1). En el área administrativa se incorporaron tres jóvenes militantes del desarrollismo que tendrán una gran responsabilidad en el crecimiento futuro de la empresa: Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro. Luego Octavio Frigerio ejerció la doble función de secretario general del diario a la par del control de su línea editorial según los intereses desarrollistas, pero hacia 1976 la dirección periodística recaerá en manos de Marcos Cytrynblum -quien no era un orgánico del desarrollismo-, mientras Octavio Frigerio mantuvo su rol como hombre fuerte del desarrollismo dentro del diario.

Sin embargo, pese a esta estrecha relación con el desarrollismo, es preciso afirmar que al analizar la posición editorial del diario deben articularse su adopción de la doctrina desarrollista con los propios intereses del diario como empresa periodística. El desarrollismo nutrió a *Clarín* de un perfil ideológico definido y de una estructuración político-ideológica coherente durante los años que duró el maridaje -hasta los últimos meses de 1981, cuando la directora Ernestina de Noble decidiera el alejamiento de los hombres del desarrollismo y el fin de la relación (Llonto, 2003: 154; Ulanovsky, 1996: 294)-. En un clima de época que favorecía e impulsaba la politización de diversas esferas de la vida social, exhibir un ideario político coherente en sí mismo, consolidado, prestigiado y cercano a figuras políticas valoradas le otorgó a *Clarín* un rédito simbólico para posicionarse dentro del campo periodístico y político. Era un diario que representaba una forma de pensar los problemas de

⁵⁶ Daniel Muchnik, que luego de su paso por la sección Economía durante el primer semestre de 1974 retornó al diario en octubre de 1976 para ejercer la secretaría de redacción de la sección, manifestó que en “Economía” trabajaba gente del desarrollismo que realizaba una “vigilancia perfecta” y reportaba a su “jefatura política”. Según palabras textuales de Muchnik: “Yo tenía un comisario político dentro de la sección”. Y en relación a los editoriales del diario afirmó “la línea editorial se escribía en el diario, se llevaba a Ayacucho, se tildaba y volvía al diario” (en relación al nombre de la calle donde funcionaba la sede del MID en la ciudad de Buenos Aires). Alejandro Horowicz, quien durante 1977 escribió notas económicas -sin firmar- para *Clarín* a través de una agencia periodística manejada por el desarrollista Osvaldo Trocca, afirmó que sus notas eran leídas por Rogelio Frigerio antes de ser publicadas; según Horowicz, Frigerio habitualmente escribía “O.K.” cuando las notas eran aprobadas para su publicación (entrevista realizada por el autor a Alejandro Horowicz, noviembre de 2007). El caso de Muchnik es particularmente interesante, debido a que se desempeñó como secretario de redacción en el área de mayor interés para el desarrollismo, lo cual lo expuso a constantes presiones. Según su relato, durante la dictadura tuvo problemas con el núcleo desarrollista por su visión económica que no se adecuaba punto a punto al dogma desarrollista, y porque debido a su labor periodística mantenía buenas relaciones con el equipo económico de Martínez de Hoz y con el propio ministro.

la Argentina y que tenía soluciones concretas para esos problemas. Sus enunciaciones se basaban en una experiencia histórica como había sido el gobierno de Frondizi, en planteos con basamento intelectual y “científico” que se presentaban como ideológicamente sólidos. Pero la perspectiva de ir consolidándose como una importante empresa periodística durante la dictadura militar -eje de un futuro grupo económico- puso en tensión los intereses comerciales de la empresa periodística, que eran representados por su gerencia administrativa, con los políticos e ideológicos del desarrollismo. Asimismo, el ocaso paulatino del desarrollismo en la política nacional y su enclaustramiento en un ideario dogmático y cerrado sobre sí mismo, puso a *Clarín* frente al peligro de reducir sus posibilidades empresarias al quedar asimilado a un ideario que le estaba generando más problemas que réditos. El particular encono con el que el desarrollismo trataba a sus adversarios políticos iba en desmedro del tipo de alianzas, vinculaciones y negociaciones con el poder que un gran diario debía realizar para ampliar su capacidad de negocios. Por lo tanto, una hipótesis de trabajo que continuaremos investigando en la futura tesis doctoral -pero sobre la que existen sólidos argumentos para su planteo- es que la “caída” del desarrollismo a inicios de la década del 80 se vinculó con la inconveniencia de mantener la relación para la futura consolidación de la empresa editora. *Clarín*, antes que un partido político y que una tribuna doctrinaria, era una empresa (periodística)⁵⁷.

⁵⁷ El grupo empresario que manejaba al diario *Clarín* pasó de controlar una sola empresa en 1976 a tener doce empresas vinculadas al grupo en 1983. Sus sectores de actividad se diversificaron: editorial, inversora, inmobiliaria, agropecuaria, agencia de noticias y fabricación de papel (Acevedo, Basualdo, Khavisse, 1990: 26), configurando un palmario ejemplo de lo que Castellani (2004) denomina como el funcionamiento de “ámbitos privilegiados de acumulación” durante la última dictadura militar que facilitaron el crecimiento de grandes empresas monopólicas al amparo de la prebenda estatal. En efecto, uno de los hitos fundacionales para comprender la posterior conformación del multimediático conglomerado *Clarín* en la década del '90, fue sin duda la participación accionaria de *Clarín* en la empresa productora de papel Papel Prensa S. A. Su participación, junto a los diarios *La Nación* y *La Razón*, fue facilitada por la dictadura militar y se concretó en enero de 1977. Desde ese momento, los tres diarios pasaron a ser socios directos del Estado en el emprendimiento, ya que mantuvo un 25 por ciento de las acciones de Papel Prensa S.A. La cesión finiquitaba un proyecto nacido en 1969 en el gobierno de Onganía plagado de irregularidades y que en 1977 alcanzó ribetes escandalosos. En particular, porque en abril de 1977 la cesión accionaria quedó envuelta dentro de lo que se conoció como el “escándalo Graiver”, ya que las acciones que adquirieron los tres diarios habían pertenecido al banquero David Graiver recientemente fallecido en un sospechoso accidente de avión (se acusaba a Graiver por sus vinculaciones con Montoneros, con personalidades del poder peronista derrocado, y por sus negociados empresarios; Graiver había comprado las acciones de Papel Prensa con el dinero que Montoneros había depositado en sus bancos y provenían del secuestro de los hermanos Born). Según se constató posteriormente, la dictadura presionó a la familia del banquero para que firmase la cesión. Luego los tres diarios contaron con amplias facilidades por parte del Estado para la construcción de la planta de papel en San Pedro y su posterior producción. Las irregularidades del proceso devendrían más tarde en una causa judicial. A partir de Papel Prensa, *Clarín* y *La Nación* -los socios “mayores”- conseguirían una posición monopólica en relación a la producción de papel prensa al amparo de las regulaciones del Estado (sobre la historia de Papel Prensa y la cuestionable conformación accionaria durante la dictadura militar, puede consultarse Gasparini, 2007 y Llonto, 2003; para la causa judicial, véase el informe del fiscal Molinas en Molinas y Molinas, 1993; para consultar las diversas irregularidades del emprendimiento, véase Ramos, 1993; Ruiz Nuñez, 1987; Ulanovsky, 2005. Sobre la posición editorial de *Clarín* frente a la participación del diario en Papel Prensa, véase Borrelli, 2008b).

4.4. El ideario desarrollista

La importancia que asumió la relación entre *Clarín* y el desarrollismo en este periodo nos obliga a estudiar brevemente la composición de su ideario y sus propuestas -que englobaremos dentro del término las “soluciones desarrollistas”-, así como las características de su composición nacional partidaria.

En América del Sur el desarrollismo tuvo su centro de expansión desde Brasil en torno al Instituto Superior de Estudios Brasileiros, siendo el presidente brasileño Juscelino Kubitschek (1956-1960) el principal ejecutor de medidas desarrollistas durante la década del '50. Según Rouquié (1990) en América Latina el desarrollismo se expresó como “nacionaldesarrollismo”, una forma de nacionalismo capaz de canalizar las tensiones sociales de la época con la necesaria dependencia de los capitales extranjeros como medios para el progreso nacional. Esta concepción operó, explícita o implícitamente, en las presidencias de Kubitschek y Frondizi (1958-1962), en el México de los años '60, en el gobierno de Onganía (1966-1970) -sin ninguna referencia popular- y en la dictadura brasileña de 1969-1984. Para Rouquié se trató de una estrategia defensiva y conservadora de desarrollo que desplegaron las elites tradicionales para mantener su sistema de dominación.

En la Argentina los principales exponentes del desarrollismo fueron Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi⁵⁸. Luego de la experiencia presidencial que quedó trunca, el desarrollismo nacional se nucleó alrededor del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido creado en 1963 como una escisión de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y encabezado por Frondizi y Frigerio. Si bien el pensamiento del desarrollismo nacional tuvo diversas evoluciones, hacia el periodo de nuestro estudio podemos reseñar brevemente cuáles eran sus características y planteos centrales⁵⁹.

⁵⁸ La revista *Qué sucedió en Siete Días (Qué)* fue el órgano difusor de las ideas desarrollistas a partir de la segunda mitad de la década del '50. Su director fue Rogelio Frigerio, un empresario de convicciones políticas que se conoció con Frondizi en 1956, formando un reconocido tándem político. Frondizi pertenecía a la Unión Cívica Radical y había estado enrolado en la juventud que desde la década del '40 demandaba una renovación a la dirigencia tradicional del radicalismo (dividida entre los unionistas y los sabatinistas, que de alguna manera continuaban la antigua división entre alvearistas o antipersonalistas e yrigoyenistas). Durante el primer peronismo su figura creció junto a la de Ricardo Balbín por su trabajo opositor en el bloque de diputados nacionales que lideraron desde 1946 a 1950. En 1956 la UCR se dividiría entre la UCR del Pueblo, vinculada a Balbín y que reunió a unionistas, sabatinistas y balbinistas, y la UCR Intransigente, encabezada por Frondizi. Frigerio había liderado el grupo marxista revolucionario *Insurrexit*; pero luego se convirtió en un empresario exitoso y reconocido defensor de los intereses de la burguesía nacional. Frigerio conoció a Frondizi en enero de 1956 y con el consentimiento de este último el frigerismo se convirtió en un grupo opositor interno al “Programa de Avellaneda” dentro de la UCRI.

⁵⁹ Pueden consultarse algunas de las obras de Frondizi y Frigerio que le otorgaron un mayor grado de sistematicidad y coherencia interna a las propuestas desarrollistas (Frondizi, 1964; 1983; Frigerio, 1969; 1981). Para un análisis de la historia del desarrollismo nacional, su diagnóstico y sus propuestas, véase Acuña, 1984; Babini, 2006; Nosiglia, 1984; Merchensky, 1979.

Para el desarrollismo el contexto de la Guerra Fría planteaba condiciones históricas inéditas para las economías subdesarrolladas. La renuncia al enfrentamiento directo del mundo capitalista y el socialista -el acceso a la tecnología nuclear de las superpotencias hacía imposible una guerra total al estilo de la Segunda Guerra Mundial- obligaba a ambos polos a explorar mecanismos de intercambio científico, técnico y financiero del desarrollo en sus respectivas áreas subdesarrolladas. En la medida en que la competencia pacífica destinara menos fondos para el armamentismo, esos recursos irían hacia las áreas marginales dependientes de los dos polos. La paz era además facilitada por una conciencia universal favorable al Tercer Mundo, que tenía sus baluartes en expresiones del propio Vaticano, movimientos populares nacionalistas o las luchas juveniles que creaban una fuerza antiimperialista y anticolonialista a lo largo del mundo periférico. Por otra parte, la explosión tecnológica del mundo desarrollado pos Segunda Guerra Mundial había derivado en una superproducción de bienes y costos decrecientes que requerían la búsqueda de nuevos mercados en las áreas subdesarrolladas. En este escenario, los países industrializados colaborarían en el desarrollo de países marginales creando un gran mercado universal.

El nuevo horizonte significaba un cambio cualitativo para países como la Argentina, que basaban su economía en el sector agroexportador y estaban constreñidos por los vaivenes del sector externo. En el diagnóstico desarrollista, el rol de las economías primarias estaba en flanco declive dentro de la economía mundial. El intercambio comercial se concentraba en el mundo desarrollado que, a diferencia de tiempos pasados donde prevalecía la tradicional división del trabajo mundial, tenía su producción primaria propia que reducía la demanda sobre las economías agroexportadoras (además, el crecimiento poblacional y la consecuente demanda alimentaria dentro de las economías dependientes reducía su capacidad exportadora). En la Argentina, la vieja estructura agroexportadora y la “oligarquía” que se beneficiaba de esa estructura anquilosada era impotente para ofrecer un crecimiento económico con justicia social para toda la comunidad. De no producirse cambios radicales en la estructura productiva, la concentración del comercio en el centro y el atraso técnico de las economías subdesarrolladas aseguraban el dominio mundial del mercado por parte de los centros desarrollados. Se consolidaría así una estructura de transferencia de recursos y de dependencia de los países subdesarrollados hacia los desarrollados. Por lo tanto, la ruptura de los lazos de dependencia era condición indispensable para el progreso y la “liberación nacional”.

Para los desarrollistas, el subdesarrollo era una condición estructural vinculada con la incapacidad de las economías primarias de consolidar un desarrollo sostenido. Como tal, era

una situación inaceptable que debía combatirse. En cambio, el desarrollo era la capacidad de transformar esa estructura económica primaria y atrasada, creando las bases industriales que a su vez se integrarían con el campo al dotarlo de los insumos y las tecnologías indispensables para su modernización. La política económica de los países subdesarrollados debía superar su dependencia orientando sus economías hacia la producción de una amplia cantidad de bienes industriales y agropecuarios, base para la conformación de un vigoroso mercado interno. La clave para su consecución era la integración de la explotación de los recursos naturales que abundaban en el contexto nacional (energéticos, combustibles, hierro, minerales siderúrgicos y no ferrosos, productos químicos, petroquímica, celulosa, etc.) y la erección de la industria pesada del acero, la química y las máquinas-herramientas. Por lo tanto, la “solución desarrollista” proponía afianzar la sustitución de importaciones industriales, avanzar en la tecnificación del campo para incrementar su productividad, integrar productivamente las regiones de la Nación, modernizar la producción energética, consolidar el capital interno y estimular la llegada del capital externo.

El proyecto desarrollista no se concebía utópico. Se basaba en razones históricas objetivas que ponían de relieve la evolución científico-técnica e industrial como proceso universal que había comenzado con la primera revolución industrial y continuaba con la segunda revolución industrial iniciada hacia fines del siglo XIX. En las condiciones históricas excepcionales que marcaba la Guerra Fría, el paso del subdesarrollo al desarrollo era objetivamente inevitable. Pero esto no implicaba que se diera en forma mecánica y ajena a la fuerza mancomunada de todos los sectores sociales de la Nación. Por ende, para llevar adelante en forma eficaz semejante transformación productiva se requería la acción concertada y solidaria de todos los sectores sociales. Era el pueblo y la comunidad nacional los que tenían que luchar por el proceso de liberación del mundo subdesarrollado. Cuantos más sectores se unieran en esta lucha, más eficaz y rápidamente sería el paso al desarrollo. Esta comunión debía integrar a empresarios y trabajadores, clases medias, intelectuales, técnicos y estudiantes, Fuerzas Armadas e Iglesia que tenían que converger en un amplio Movimiento Nacional policlasista. En particular, la Iglesia y las Fuerzas Armadas argentinas eran sobrevaloradas por ser los representantes por antonomasia de la identidad nacional⁶⁰. En

⁶⁰ Frondizi, en un libro publicado hacia finales de 1975, elogiaba la condición representativa de las Fuerzas Armadas para la nacionalidad por su rol central en el resguardo de la soberanía territorial, cultural y económica. Además, indicaba que su asiento en todo el territorio nacional le permitía adquirir una conciencia cabal sobre el grado de subdesarrollo nacional. Subdesarrollo que afectaba a su actividad específica debido a que tenía que defender una soberanía “precaria”, estar supeditado a la provisión externa de materiales para la defensa, haciendo de los gastos militares un peso cada vez mayor para el Estado. De allí que en esas condiciones “(...) las Fuerzas Armadas configuran un poderoso factor de cambio porque, en forma creciente, adquieren claridad respecto a las restricciones insalvables que impone el subdesarrollo a su función específica, y porque asumen

este sentido, el desarrollismo supo cultivar acendrados vínculos con los sectores “nacionalistas” e “industrialistas” de las Fuerzas Armadas. La unidad de los sectores nacionales trascendía los partidos políticos, cuyos enfrentamientos no debían poner en peligro el interés de la comunidad. La unidad nacional era la fuerza que se opondría a los intentos neocoloniales y que podría canalizar los aportes de la cooperación internacional para el desarrollo. De allí que todo conflicto social entre sectores nacionales fuera concebido como negativo para el desarrollismo. Por allí se filtrarían las agresiones externas que tenían que ser rechazadas. Los conflictos sociales -y principalmente las disputas entre capital y trabajo- debían quedar subordinadas a una modernización de las estructuras industriales que devendría en beneficios para todos los sectores. Cualquier intento sectorial por arrogarse la representación de la Nación iba en desmedro del interés común y hasta de ese mismo sector. En consecuencia, el desarrollismo se autoproclamaba superador de las antinomias ideológicas entre izquierda y derecha características de la Guerra Fría, en nombre de la unidad nacional y de la modernidad. No desconocía la lucha de clases y el enfrentamiento entre capital y trabajo, sino que partía de la premisa de que había un margen de negociación en ese enfrentamiento, donde prevalecería el interés común y no el sectorial. Al desarrollarse las fuerzas productivas, se beneficiarán todos los sectores de la Nación⁶¹.

La concepción nacionalista del desarrollismo se desprendía de la evaluación de las condiciones políticas mundiales, donde los imperialismos no podían imponer sus tesis ideológicas y la Nación a floraba como la forma más eficaz de estructuración del poder. Su propuesta era un nacionalismo de fines, no de medios (Merchensky, 1979: 222). Por ejemplo, las nacionalizaciones de la etapa del tercer gobierno peronista fueron criticadas por inconducentes. Lo que importaba era ser Nación a través de la estrategia del desarrollo. De allí también que rechazara la integración latinoamericana como precondition para el desarrollo. Desde su punto de vista, primero debía integrarse económicamente la Nación y luego en todo caso podía pensarse en una integración regional (para el desarrollismo, en una integración regional apresurada la Argentina quedaría nuevamente en el rol de exportadora de materias primas hacia Brasil, Chile y México, mientras recibiría de estos países sus bienes

políticamente su responsabilidad revolucionaria dentro del Movimiento Nacional” (Frondizi, 1983: 179)

⁶¹ Las críticas desde la izquierda destacaban que el desarrollismo era un palmario exponente de la defensa de los intereses de la burguesía nacional, porque la constitución del Movimiento Nacional se afincaba en la permanencia de las relaciones sociales y el modo de producción capitalista. Toda opción de cambio social radical opuesto al capitalismo quedaba excluido. Por otra parte, el desarrollismo asumía que las clases sociales solo se orientaban por un interés puramente pecuniario, subordinando otros ámbitos de la vida social y pública (Acuña, 1984: 114).

industriales). Según su perspectiva, la amplitud territorial de la Argentina y la desconexión productiva de sus regiones daban legitimidad a este diagnóstico (Vercesi, 1999).

A diferencia de otras concepciones nacionalistas, el desarrollismo no ponía reparos en el origen vernáculo o foráneo de los capitales, siempre y cuando éstos contribuyeran al “progreso” y la consecución de una etapa superior de desarrollo industrial de la Nación (claros ejemplos fueron la apertura al capital extranjero durante las presidencias de Kubitschek y Frondizi). La insuficiencia del ahorro y los capitales internos en los países subdesarrollados hacía inevitable apelar al inversor extranjero. Este no era pernicioso por sí mismo. Lo relevante era la voluntad nacional que canalizara ese capital hacia las áreas prioritarias de la economía, no su origen. El Estado era la herramienta indispensable para ejercer el contralor y la orientación del proceso industrializador como expresión de la voluntad nacional. Con es fin, tenía que ser fuerte y eficiente para contrarrestar los intentos del capital monopólico de trastocar las relaciones de los países a favor de los centros de poder.

Si bien la economía era un campo determinante en el pensamiento desarrollista, sus postulados no se planteaban con un mero fin económico. El buen funcionamiento económico era el instrumento para lograr un objetivo trascendente: el progreso social y espiritual de la Nación.

Por otra parte, el desarrollismo vernáculo pretendía alejarse tanto del “populismo” como del liberalismo. El primero, porque propiciaba una distribución del ingreso a favor de los sectores populares sin ocuparse por ampliar la capacidad productiva, lo cual determinaba su fracaso. El segundo, porque con sus planes de ajuste intentaba restringir el consumo para reactivar la economía sin ocuparse tampoco de la cuestión de fondo que era la estructura productiva.

Desde una perspectiva crítica, la “solución desarrollista” que propugnaba el MID se sustentaba en una base profundamente racionalista, economicista, antipoliticista y eficientista tecnocrática. En esta concepción los alcances de la política se medían por los logros de la eficiencia económica⁶². La política quedaba subordinada a la labor y opinión de los expertos y los tecnócratas, quienes exponían “la verdad” de los problemas y las soluciones político-económicas correctas. Así, se daba forma a una posición elitista, en tanto era la conducción “ilustrada” y poseedora del “saber” la única capacitada para manejar el proceso de transformaciones sociales sin la necesidad de tender lazos con las masas. En ese aspecto, el

⁶² Acuña (1984: 105) describe al discurso desarrollista como “el discurso de la eficiencia”. Recuerda que ya en el programa desarrollista de la UCRI (en el periodo 1958-1962) había una tendencia a racionalizar los problemas políticos en términos económicos. Un reduccionismo que elaboraba planes en “condiciones de laboratorio” para un sociedad cargada de fuerzas disímiles y en tensión.

MID conformó una estructura organizativa endógena en torno a las personalidades de Frondizi y Frigerio, ya que su visión tecnocrática de las salidas económicas lo distanciaba de las preocupaciones del hombre común (Yannuzzi, 1996: 54).

A su vez, para el desarrollismo hacer política era un medio para acceder al Estado, el que por su parte era medio para aplicar una transformación social que se iniciaría desde el “cambio de estructuras” en el campo económico. Lo importante era que quien ejerciera el poder, sea vía democrática o dictatorial, aplicara las transformaciones económicas necesarias. Para Yannuzzi (1996) esta posición tenía efectos paradójicos para el propio MID. Su profunda posición antipoliticista contradecía su propia existencia como partido y lo inclinaba a tomar posiciones autoritarias o ser proclive a apoyar soluciones drásticas en la resolución de los conflictos políticos. Al arrogarse la posesión de una “Verdad” de tipo dogmática sobre las transformaciones económicas y sociales que debían aplicarse en el contexto nacional, diluía toda discusión interna sobre las variantes posibles y tendía a aceptar una metodología de tipo autoritaria que erradicara los conflictos sociales para imponer eficazmente la “solución desarrollista”. En este esquema, la democracia se volvía secundaria y hasta accesorio si era un obstáculo para la implementación de los cambios propuestos. Su economicismo de cuño eficientista y el dogmatismo de sus propuestas lo conducía a negar el rol mediador de los partidos políticos entre Estado y sociedad⁶³.

Acuña (1984: 128-9) señala que esta concepción abrevaba del ideario positivista subyacente al desarrollismo, para quien el progreso era un fin en sí mismo que se cumpliría inevitablemente una vez que se tomara el curso de las acciones correctas (según su definición, era un “positivismo de laboratorio” por la naturaleza “elitista y racionalista” de las ideas desarrollistas). Ese determinismo, y la fe que profesaba en el progreso y el despliegue inexorable de las fuerzas productivas, lo acercaba al marco teórico marxista (que se encuentra en los inicios del pensamiento político y económico de Frondizi y Frigerio). El ideario positivista del desarrollismo subordinaba al individuo a las metas del progreso y al desarrollo, y funcionaba de manera similar que el ideario roquista del progreso comteano (Acuña, 1984: 128-9). En efecto, *Clarín* reivindicará en más de una oportunidad al periodo roquista y el de la Generación del '80 como la gran etapa organizacional de la República, que luego se vio extraviada por diversos motivos. Tal vez por ello Asís, en su novela *Diario de la Argentina*,

⁶³ En este mismo sentido se expresa Ollier (2005: 209-10) al analizar el apoyo de Frondizi a la “Revolución Argentina” y su rechazo a una salida electoral, al menos hasta 1971. Sus opiniones en ese contexto, junto a la de otros representantes de partidos políticos, señalan que para el desarrollismo el eje de la vida política era la “revolución”, y no la “democracia”. La revolución podía conseguirse a través de un golpe de Estado o de la instauración democrática, por lo tanto esta última era meramente instrumental. Ollier concluye que el aval de Frondizi a la “Revolución Argentina” exponía la incapacidad de la clase política para gobernar el país.

utiliza el eufemismo “*los evolucionistas*” para referirse socarronamente a los desarrollistas (Asís, 2000).

Capítulo 5

Hacia el “final inevitable”. La voz editorial del diario Clarín, del “Rodrigazo” al golpe de Estado de 1976

5.1. “Rodrigazo” y victoria pírrica del sindicalismo (junio-julio de 1975): “Cuanto más dura es la prueba, más necesaria es la unidad”

El miércoles 4 de junio por la noche el flamante y tercer ministro de Economía del gobierno peronista, Celestino Rodrigo, anunció las medidas de un plan de ajuste estructural que incluía una megadevaluación del 100% para el dólar financiero y del 160% para el dólar comercial, aumentos de tarifas y combustibles (la nafta común aumentó 181% y la especial 172%) y una política restrictiva del gasto público. Más tarde aumentarían distintos servicios, además de las tasas de interés. En cambio, la oferta de suba salarial en las paritarias que se encontraban en curso rondaba el 38%. Lo que se proponía el “Rodrigazo” -como fue denominado popularmente ese paquete económico- era liquidar definitivamente el ya esmirriado programa económico de 1973, basado en el Pacto Social y la concertación (Di Tella, 1985; Restivo y Dellatorre, 2005; Rougier y Fiszbein, 2006). Rodrigo había llegado al gobierno de la mano de López Rega, y su plan era parte del giro autoritario, antipopular y conservador que desde la muerte de Perón había profundizado el gobierno de María Estela Martínez de Perón influida por el “entorno lopezreguista”. El plan también pretendía dirimir la disputa interna del peronismo a favor del lopezreguismo. Ya desplazados del gobierno los sectores peronistas revolucionarios, y reprimidos ilegalmente por las bandas de ultraderecha, el plan de ajuste ortodoxo tenía como finalidad afectar la influencia del otro rival del lopezreguismo dentro del movimiento peronista: la burocracia sindical.

La crisis económica era realmente preocupante por la multiplicidad de frentes comprometidos: déficit público, inminencia de cesación de pagos, pérdida de reservas del Banco Central, recrudecimiento inflacionario, problemas en la balanza de pagos, falta de inversión productiva, desabastecimiento, crecimiento del mercado negro y especulación. La gestión previa de Alfredo Gómez Morales -sucesor de Gelbard desde octubre de 1974- había iniciado los primeros pasos para un ajuste con la aprobación de López Rega. Su política de “ajuste gradual” no dio resultado satisfactorio en una difícil coyuntura política y bajo la persistencia de los problemas económicos. Su plan destruyó más de lo que

aportó: pulverizó las herramientas de concertación del Pacto Social, consumó el quiebre de la alianza con el empresariado nacional y facilitó la destrucción del consenso construido con la oposición política sobre un programa de justicia social, crecimiento y distribución (Restivo y Dellatorre, 2005: 46). A diferencia del “gradualismo”, el ajuste de Rodrigo consistía en una *terapia de shock*⁶⁴ que “oficialmente” pretendía morigerar el déficit fiscal y el proceso inflacionario, así como achicar la brecha en la balanza de pagos⁶⁵. Vía devaluación estimularía las exportaciones para saldar los problemas en la balanza comercial, y vía reducción del salario ampliaría los márgenes de ganancia del sector empresario. En un contexto de pleno empleo, la reducción salarial aplacaría el consumo y habría más oferta exportable (Restivo y Delatorre, 2005: 23). Los objetivos finales eran aplicar una política de redistribución del ingreso que perjudicara al sector asalariado -los obreros y la clase media- en favor de los capitales más concentrados. La demanda de ajuste desde los sectores liberales había crecido durante la primera parte del año 1975, y las fuerzas políticas opositoras entendían que “el trabajo sucio” debía realizarse antes de las elecciones previstas para fines de 1976. En un principio, el plan fue apoyado por sectores liberales como la Bolsa de Comercio, las entidades ruralistas y el Consejo Empresario Argentino (CEA) presidido por Martínez de Hoz, quienes comulgaban con las medidas pero desconfiaban del gobierno por su signo político. Y el gobierno contó con el apoyo de diversas fuerzas políticas, entre otras el MID, que consideraba inevitable una política de este tipo luego de dos años de una política económica “que se orientó deliberadamente a paralizar totalmente el esfuerzo de inversión” (cit. por Rougier y Fiszbein, 2006: 113). Pero pese a los apoyos consistentes, las medidas de corte liberal ortodoxo no pasarían la férrea oposición del sindicalismo peronista.

En su discurso de asunción del 2 de junio Rodrigo había advertido sobre la severidad de las medidas que se tomarían. Allí acusaba a los “especuladores” y a la “violencia” y el “terrorismo” como los “enemigos” que eran causales de la “distorsión de

⁶⁴ Como señalan Kandel y Monteverde (1976: 88), las comparaciones de la economía con la ciencia médica eran recurrentes por aquellos días. En su primer discurso del 2 de junio, Rodrigo había declarado: “Algunas medidas pueden parecer, a primera vista, un tanto impopulares, pero tenemos ante nuestra vista un ser querido que está enfermo y es preciso operarlo para salvar su vida” (cit. por Rougier y Fiszbein, 2006: 95). Las metáforas médicas no solo alcanzaban a la economía, sino que eran recurrentes en el discurso de diversos actores para definir los “problemas” de una sociedad que se concebía “enferma”. Los militares realizarán un especial énfasis en este tipo de metáforas (para un análisis detallado sobre la utilización de estas metáforas en la época, véase Corradi, 1996; Delich, 1983; para un análisis semiótico sobre los efectos simbólicos y materiales de la utilización de las metáforas, véase Lakoff y Johnson, 1998).

⁶⁵ Según Restivo y Dellatorre (2005: 24) un colaborador de Ricardo Zinn -el ultraliberal autor intelectual del plan- confesó que el “Rodrigazo” buscaba como fin último una estampida inflacionaria que licuara la deuda de las empresas, quebrara definitivamente el control de precios -que impedía una mayor ganancia para el sector empresario- y beneficiara ampliamente a los exportadores. “La explosión era adrede”, insistió el colaborador de Zinn.

la situación económica”. Decretaba que era una “farsa” la política de redistribución del ingreso mediante aumentos salariales [en un contexto de alza del costo de vida y de precios], y afirmaba que el sistema de control de precios no había logrado contener la inflación pero había originado un mercado negro y la correspondiente especulación. Por último, advertía que se implementarían medidas “necesariamente severas” que “durante un corto tiempo provocarían desconcierto en algunos y reacciones en otros”. Pero concluía: “el mal tiene remedio” (*Clarín*, 3/6/1975). El anuncio de las futuras medidas había generado expectativa e incertidumbre, en un marco de absoluto hermetismo⁶⁶.

Clarín hizo una referencia editorial auspiciosa sobre el discurso de asunción de Rodrigo, al que calificó como un “análisis realista”, “sincero” y “claro” por su exacta descripción de las “anomalías” que caracterizaban a la economía nacional (*Clarín*, 4/6/1975). Coincidió en la apreciación del ministro sobre que la economía había producido una “indeseable” transferencia de ingresos desde el sector de la producción al “parasitario mundo” de la especulación. Junto a esos “agiotistas y especuladores” que “lucraban con la producción”, *Clarín* incluía al “burocratizado servicio administrativo cuya improductividad contribuye al general aumento de costos y precios”. También se mostraba de acuerdo con la interpretación de Rodrigo sobre que el régimen de control de precios no había contenido la inflación y que era la fuente básica del mercado negro y la especulación. “Producir más y ahorrar sobre el gasto superfluo”, había sentenciado el ministro. Para el matutino esa premisa era la “llave maestra” contra la inflación, los problemas de pagos externos y para lograr el bienestar popular. Y la referencia del discurso ministerial a la inversión extranjera era destacada como “oportuna”, ya que para el diario hasta ese momento había sido desalentada. Finalmente, el matutino explicitaba su anuencia con el paquete de *shock* que ese mismo día anunciaría Rodrigo. Al comentar la advertencia del ministro sobre la “severidad” de las medidas que tomaría, afirmaba “(...) su prevención acerca de la adopción de medidas severas (...) comulgan con el grado de gravedad que se asigna a la situación que se enfrenta. El ministro ha querido con ello significar que está dispuesto a tomar el toro por las astas” (*Clarín*, 4/6/1975). No será la primera vez que el ideario desarrollista de *Clarín* comulgue con medidas de evidente corte liberal.

Una vez anunciado el plan el 4 de junio, se abrió un periodo de dramática disputa entre los sindicatos y el gobierno por la definición de los aumentos salariales. Mientras

⁶⁶ Según Restivo y Dellatorre (2005: 20), un periodista de *Clarín* acreditado en el Ministerio de Economía había tenido acceso al plan antes de su anuncio el 4 de junio a través de un funcionario de segunda línea de ese Ministerio, lo cual no frustró su lanzamiento ni impidió que tuviera un altísimo impacto.

duró el conflicto -hasta el 11 de julio- ninguno de los editoriales de *Clarín* se refirió a la situación política nacional, que en este marco de tensión distaba de ser armónico. La utilización del *silencio estratégico* le permitió descomprimir su responsabilidad de opinar diariamente sobre tales acontecimientos políticos⁶⁷. Luego de conocerse el nuevo paquete de medidas, no se publicó un editorial específico analizándolo. Tampoco se ofreció una evaluación integral de la filosofía económica del plan, ni de los efectos concretos que acarrearía su aplicación. Solo se refirió a un aspecto puntual del plan Rodrigo -la devaluación-⁶⁸. En síntesis, *Clarín* privilegió cierta precaución para no emitir una opinión taxativa sobre el “Rodrigazo” -no hubo una objeción directa, ni tampoco un apoyo en estilo apologetico-, evidentemente a partir de la incertidumbre que la resistencia sindical generó sobre la viabilidad final del plan.

En cambio, durante el periodo de disputa abierto por el “Rodrigazo”, los editoriales estuvieron enfocados primordialmente a enjuiciar lo que se consideraba los efectos perniciosos que la política del Pacto Social tenían sobre la economía nacional, en línea con las objeciones que el MID le había entablado al FREJULI desde 1973 (para un resumen de esas objeciones, véase Frondizi, 1983). Como se ha comentado, el partido desarrollista se había opuesto a la política económica de Gelbard, y el 11 de marzo de 1975, al cumplirse dos años del triunfo electoral del FREJULI, había hecho público un documento donde afirmaba que se había abierto un “abismo” entre el mandato popular y el gobierno (estas críticas también se relacionaban con el reducido espacio que el peronismo le había otorgado al MID dentro del Frente gobernante). Durante junio de 1975 *Clarín* se encargó de señalar que la problemática económica era la principal causa de los problemas sociales y políticos nacionales. Y la aplicación de las recetas económicas desarrollistas su posible resolución. Los argumentos recurrían a un vocabulario economicista y tecnocrático, característica propia del ideario desarrollista. Una de las críticas destacables era su rechazo a la política de control de precios y al “dirigismo económico” que esto implicaba. Ante las versiones sobre que el gabinete de Rodrigo limitaría el control de precios a un reducido grupo de productos de consumo popular, manifestaba su objeción por la

⁶⁷ Sobre el *silencio estratégico*, Borrat señala: “Sería muy comprometedor para el diario si cada día tuviera que concretarse en una opinión sobre los hechos políticos del propio país: como todo actor del sistema político, el periódico necesita combinar sus silencios estratégicos con sus mensajes de apoyo, demanda o denuncia.” (Borrat, 1989: 139).

⁶⁸ Si bien declaraba que la devaluación era “comprensible” debido al magro desempeño que había tenido el comercio exterior en el primer trimestre de 1975 –se mencionaban estadísticas privadas que marcaban un déficit de 217 millones de dólares entre importaciones y exportaciones-, y que en el corto plazo sería un aliciente para la exportación de productos manufactureros, dejaba una estela de duda sobre su eficacia ya que era de suponer que el encarecimiento y posterior reducción de importaciones afectaría al sector industrial que era su principal demandante, y ello se traduciría en una declinación de la actividad económica (*Clarín*, 15/6/1975).

incapacidad operativa del Estado para implementarlo (*Clarín*, 12/6/1975). Tal era así, que la administración económica anterior se había tenido que resignar a mantener la “rígida congelación” absteniéndose de introducir los “múltiples reajustes” que hubieran necesitado los precios para el “normal desenvolvimiento del proceso productivo”. Lo que tendría que haber sido una medida de “emergencia” y “transitoria”, finalizó siendo un esquema “básico y final” de una política de “penosas consecuencias para el país”. *Clarín* recordaba la interpretación de Rodrigo sobre que el control de precios no había obstaculizado la inflación y había estimulado la creación de un “enorme” mercado negro y la promoción del “agio y la especulación”. El problema había que encararlo con “realismo” y no asignarle al Estado una responsabilidad que no estaba en condiciones de afrontar. Pero este juicio negativo no incluía un rechazo integral al rol activo del Estado. El “dirigismo económico” tenía validez en aquellos países donde el Estado tenía la “efectiva aptitud” para desempeñarlo. En Argentina no había fracasado el “intervencionismo en sí mismo”, sino el intento de encararlo sin una reforma de la “tradicional estructura burocrática de la administración pública” (*Clarín*, 12/6/1975). Una administración pública ineficaz no podía responder adecuadamente a las exigencias que requería la “delicada responsabilidad” del intervencionismo⁶⁹.

Por otra parte, criticaba las previsiones del Plan Trienal pergeñado por Gelbard y le demandaba al gobierno nacional su “revisión” y “total reestructuración” aduciendo que era una programación “profundamente disociada de la realidad”⁷⁰. Según *Clarín*, había en él errores básicos referidos tanto a los cálculos del crecimiento económico como a los volúmenes de inversión estatales previstos. Pero principalmente demandaba su revisión

⁶⁹ En un editorial del 22 de junio de 1975 llamaba la atención sobre otro de los perjuicios que generaba el “incorrecto” manejo económico del Estado para la “empresa nacional”. El reciente crecimiento de un mercado de valores poblado en su mayoría de títulos públicos -que estaban indexados y eran un refugio especulativo para la inflación-, era un revés para las empresas que no podían procurarse los capitales necesarios para invertir o readecuarse tecnológicamente (ese capital, antes de ir al crédito, iba a la especulación en un contexto inflacionario). Para *Clarín* ese era un “fenómeno indeseable” en un país subdesarrollado como Argentina “que no puede superar su grado de subdesarrollo y sus inherentes conflictos sociales sin un fuerte ritmo de incremento de la inversión productiva”. La cuestión se agravaba al tener en cuenta el alarmante aumento del déficit fiscal estatal que comprimía la presencia de la actividad productiva. Porque el Estado absorbía directamente el crédito bancario, que tendría que volcarse a la producción, para sostener el funcionamiento de las empresas estatales y para compensar el aumento de la emisión monetaria destinada a cubrir las brechas fiscales. En definitiva, según *Clarín* las causas reales de la privación de fuentes financieras para las empresas se vinculaba con la “ausencia de un mercado de capitales capaz de nutrir el desarrollo de la empresa nacional”. Por ello desacreditaba a “toda la literatura” que años atrás había condenado la “desnacionalización” de empresas nacionales limitándose a “enrostrar” la conducta del “comprador extranjero”, sin advertir que las causas últimas de los problemas económicos se relacionaba con la ausencia del mercado de capitales (*Clarín*, 22/6/1975).

⁷⁰ El “*Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. 1974-1977*” condensaba la filosofía económica de Gelbard y contenía diversas estadísticas económicas que se preveían para el periodo invocado, pero que no llegaron a concretarse (Kandel y Monteverde, 1976: 27). Perón anunció su puesta en marcha para el periodo 1974-1977 el 21 de diciembre de 1973 en un discurso pronunciado desde la Casa de Gobierno.

por la incorrecta previsión sobre la aplicación de los recursos requeridos por la inversión productiva (*Clarín*, 22/6/1975). La tarea de revisión “urgía” ya que estaba en juego la posibilidad de inversiones fundamentales para el desarrollo de la economía, con lo que retornaría la auténtica razón de ser de la planificación estatal: “la asignación de recursos escasos en función de las prioridades impuestas por el desarrollo” (*Clarín*, 14/6/1975). Su interpretación abrevaba de la premisa desarrollista por la cual se debía fortalecer al Estado para que comandara con eficiencia el paso del subdesarrollo al desarrollo (Acuña, 1984: 109). De su interpretación parecía desprenderse una noción del Estado donde éste funcionaría como una entidad no permeable a los conflictos sociales, las disputas intersectoriales y políticas, y que debía responder de manera homogénea y sin contradicciones a las demandas del “desarrollo”.

Mientras tanto, la puja sindicatos-gobierno por la distribución del ingreso colmaba el escenario político. Al momento del anuncio del plan Rodrigo, el 4 de junio, las organizaciones sindicales se encontraban en plena negociación de los convenios paritarios con las patronales para definir un nuevo nivel salarial (ya que finalizaban los convenios acordados dos años antes en el marco del Pacto Social). Aunque los acuerdos tendrían que haber sido firmados en mayo, y comenzado a regir en junio, ningún gremio se había arriesgado a hacerlo por la incertidumbre sobre el futuro nivel de los precios. La aplicación de las medidas de Rodrigo obligó a la inmediata suspensión de las negociaciones salariales y se abrió una fragorosa disputa con el gobierno por el porcentaje final de los aumentos salariales. Para Rodrigo, traspasar la franja del 38% significaba el fracaso del plan. Isabel, luego de intentar imponer un aumento unilateral rechazado por la CGT, dio libertad de acción a sindicatos y empresarios para pactar el porcentaje final. En desordenadas negociaciones, se acordaron aumentos que iban del 60 al 200% según la actividad, promediando un 160%. Pero los aumentos debían ser refrendados por el gobierno. De imponerse la demanda salarial del sector sindical, el plan económico de ajuste estaría condenado al fracaso. Isabel buscó imponer su tesis: respondió con la derogación de las paritarias, y anunció un aumento del 50%, más otros escalonados de 15% en tres y seis meses. Los dirigentes sindicales afines al gobierno quedaron en una posición incómoda: debían presionar a un gobierno peronista -al que públicamente apoyaban- para que la puja se definiera de manera tal que su autoridad no se viera desbordada y erosionada por la demanda de las bases (cuya movilidad y protestas superaba la capacidad de dominio de la dirigencia gremial). Finalmente decidieron presionar, aunque sin golpear directamente a Isabel. Con el fin de preservar la figura presidencial, y

haciendo gala de un sutil mecanismo discursivo -utilizado también en otras circunstancias por la “juventud revolucionaria” en relación al propio Perón-, dirigieron sus diatribas contra López Rega y el círculo áulico lopezreguista que influía sobre la presidenta. Hubo movilizaciones de “apoyo” a Isabel para presionarla, huelgas, expresiones públicas de la presidenta reclamando comprensión, solicitadas y finalmente el histórico paro general declarado por la CGT para el 7 y 8 de julio -el primero de la historia nacional contra un gobierno peronista- con el que finalmente los sindicatos torcieron la posición del gobierno. Cumplida con éxito la primera jornada de paro, y luego de casi un mes y medio de puja, la presidenta aprobó la homologación de los convenios que decretaban subas salariales de un promedio del 160%, cifra que excedía con creces el límite exigido por Rodrigo y superaba el reajuste de precios y tarifas que había decretado en junio. El sindicalismo había triunfado. Una vez más, los jefes sindicales, y principalmente los que dirigían las 62 Organizaciones peronistas, desplegaron su capacidad para bloquear las iniciativas globales de otros sectores políticos, y privilegiaron sus intereses sectoriales a corto plazo en desmedro de la estabilidad institucional. Así, repitieron la estrategia defensiva y de oposición que los había caracterizado durante la etapa proscriptiva del peronismo y a través de la cual habían logrado bloquear las iniciativas del propio Perón y las de la izquierda peronista (Cavarozzi, 2006: 52-3).

Rodrigo y López Rega renunciarían tiempo después, y este último será obligado a abandonar el país (situación sobre la que *Clarín* no se expidió editorialmente)⁷¹. La disputa horadó profundamente la legitimidad de la presidenta, quien no se recuperaría jamás del revés. Se cerraba una etapa política y se abría una verdadera “agonía” para el régimen (De Riz, 1986: 184) que puso de relieve su débil legitimidad de gobierno y de apoyo.

Pese al fracaso político, el “Rodrigazo” tuvo a corto plazo efectos nocivos sobre la economía nacional: un salto exponencial del ritmo inflacionario -había desatado la peor experiencia inflacionaria que hasta ese momento recordaba la sociedad argentina-, una cuantiosa especulación (con la conformación de un mercado paralelo de divisas, de títulos públicos indexados y de papeles privados de corto plazo con grandes beneficios) y la

⁷¹ El 11 de julio Isabel aceptó las renuncias de López Rega como ministro de Bienestar Social y secretario privado, del ministro del Interior Alberto Rocamora y del ministro de Defensa Adolfo Savino (ambos vinculados a López Rega). En Interior se designó al peronista histórico Antonio Benítez, que dejaba el ministerio de Justicia, asumiendo esa cartera el peronista Ernesto Corvalán Nanclares. El ministerio de Defensa fue ocupado por el “apolítico” Jorge Garrido. Carlos Villone, perteneciente al lopezreguismo, pasó a ejercer el ministerio de Bienestar Social y otro lopezreguista que se desempeñaba como Secretario Legal y Técnico, Julio González, tomaba la Secretaría Privada. Continuaban el ultraderechista y lopezreguista Ivanissevich en Educación, Cecilio Conditti en Trabajo y Alberto Juan Vignes en Relaciones Exteriores. Rodrigo continuó en Economía hasta el 19 de julio. Ese día, López Rega abandonaría el país hacia España con el misterioso título de “embajador plenipotenciario”.

indefinición de la política cambiaria que generó expectativas de futuras devaluaciones -por lo cual las empresas acumularán en forma especulativa *stock* de artículos importados-⁷².

La expresión editorial sobre la crisis que se había desatado a partir del Rodrigazo fue publicada hacia mediados de julio, días después de su resolución (*Clarín*, 13/7/1975). La gravedad de la situación era por demás elocuente desde la enunciación del título: “Cuanto más dura es la prueba, más necesaria es la unidad” (el editorial ocupó toda la página del diario, remarcando la excepcionalidad de la situación política). El ostensivo fracaso de la política de ajuste de Rodrigo ahondó el panorama de inestabilidad e incertidumbre que ya no concluiría durante la etapa peronista. El *silencio estratégico* que había mantenido *Clarín* durante la resolución del conflicto, le permitía ahora realizar un balance juzgando los acontecimientos en tono explicativo desde una posición que trascendía los intereses sectoriales de los actores involucrados y los aspectos coyunturales de la crisis. El editorial se presentaba como una evaluación integral de la situación nacional desde el periodo abierto en 1973, e intentaba explicar cómo y por qué desde ese momento esperanzador se había llegado tan “rápida e inesperadamente” a una situación de profunda crisis. En un tono lacónico, hierático y *admonitorio* contrastaba el desfase evidente entre las esperanzas del retorno democrático de 1973 y las urgencias de julio de 1975 (y recordaba el apoyo que el propio diario le había brindado al triunfo de la “causa popular” que había significado el retorno peronista de 1973)⁷³.

En la opinión del matutino las causas del “caos” que afectaba a la Argentina se cifraban en términos estrictamente económicos:

No es difícil advertir que el caos que conmueve las estructuras sociales, políticas e institucionales del país y priva de bases materiales a las metas propuestas por el gobierno hunde sus raíces en la economía. Es esta la que defrauda la promesa de mejores condiciones de vida, la que siembra el descontento y crea tensiones sociales, introduciendo una peligrosa cuña entre los argentinos.

⁷² Poco tiempo después, con Rodrigo fuera del gobierno, *Clarín* se explayará sobre los motivos del fracaso de su plan: “Sus penosas consecuencias no derivaron de la ausencia de previa concertación, sino del básico irrealismo de un programa que tradujo su propia y confesada inexperiencia en materia económica. No pudo, en consecuencia, obtener el consenso a posteriori, que era el único al que podía aspirar en aquellas circunstancias. Y no ha de verse en su fracaso sino el producto de la improvisación y de la ingenua confusión entre los buenos preceptos de la teoría económica y la factibilidad de sus aplicaciones” (*Clarín*, 6/8/75, p. 8). No se condenaba la experiencia por su finalidad y espíritu económico, sino por su instrumentalización y por las capacidades de quien pretendió aplicarla.

⁷³ El editorial utilizaba diversas palabras clave, adjetivaciones y metáforas con las que contrastaba la situación política esperanzadora en el inicio del gobierno en 1973 con la situación crítica de julio de 1975: “abiertos horizontes” / “nubes de tormentas”; “anhelo, “voluntad”, “renovada esperanza” / “siniestros presagios”, “profundidad de la ciénaga”, “injusta frustración”; “Comunidad Organizada”, “consustanciación pueblo y gobierno” / “violencia”, “enfrentamiento”, “agresión material o verbal”, “caos”, “crisis que agobia”.

La responsabilidad recaía sobre la política económica inconducente adoptada por el gobierno peronista que no había generado la riqueza necesaria para aumentar el nivel de vida de los trabajadores y había desatado la crisis que en ese momento vivía el país:

La tremenda frustración a que ahora asistimos no es sino consecuencia de la errónea elección de una política económica contrapuesta a los objetivos fijados. El mecanismo de la acción concertada -que consistió, fundamentalmente, en la congelación de precios- derivó todas las energías hacia la consolidación del estancamiento, prontamente seguido por un regresivo y empobrecedor proceso. Lo que debió haber sido el punto de partida en el salto hacia delante, se convirtió en la petrificación de la vieja estructura, reproduciendo errores malamente disimulados por una justicia distributiva que se agotaría en el transcurso de los días ante la creciente escasez de la riqueza disponible. Esa rígida y prolongada política económica fue operando la veloz desarticulación del sistema productivo (...).

Los errores de la política económica habían generado un “empobrecimiento real” agravado por la emisión monetaria -que llevaba a un poder de compra aparente y generaba déficit fiscal-, mercado negro, una acelerada carrera entre precios y salarios que contrariaban el “ingenuo espejismo” de la “inflación cero”⁷⁴, la clausura de fuentes de recursos y el desaliento a la inversión -que también era afectada por las restricciones impuestas por el gobierno a la inversión extranjera-. Haciendo uso de un estilo *predictivo*, *Clarín* recordaba que ya en 1973 había alertado que la democracia por sí misma no aseguraba las “aspiraciones de grandeza” que le correspondían al país “en tanto no se introdujeran los profundos cambios que imponía la hora, puesto que el ‘retorno a la democracia los hace posibles, pero no los asegura’”. Ese cambio, que tendría que haberse operado desde 1973, era la implementación del “camino del desarrollo económico” y “la remoción de las viejas estructuras del estancamiento”: la promoción de la siderurgia y de la industria pesada, la petroquímica y la química, la celulosa y del papel; el “urgente” aprovechamiento de los recursos energéticos, la mayor afluencia de inversiones hacia los sectores productivos, entre otros⁷⁵. El camino del desarrollo era el único que aseguraba “mejores condiciones de vida”, el “bienestar popular”, la “liberación nacional” y la “revolución en paz”. A pesar del crítico diagnóstico, el editorial apelaba con cierta esperanza a la “conciliación y la unidad nacional” para procurar una salida a la “dura prueba” que desafiaba a los argentinos (hasta manifestaba su voluntad de olvidar “las injustas agresiones” que fuera objeto al advertir los errores del

⁷⁴ Uno de los objetivos con los que Perón había auspiciado la política del Pacto social era el de la “inflación cero”, que lejos estaba de cumplirse en julio de 1975.

⁷⁵ Para el matutino el incremento de la inversión productiva era lo único que podía evitar el subdesarrollo, del que se desprendían como consecuencia los conflictos sociales (*Clarín*, 22/6/75). Y una mayor afluencia de inversiones hacia los sectores productivos eliminaría la dependencia del suministro externo que era la causante de las recurrentes crisis de la balanza de pagos (*Clarín*, 11/6/1975).

gobierno en aras de la unidad nacional). Por ello pedía la acción solidaria de la sociedad entera “sin distinción de sectores y de clases”. Solo así, e iniciando la marcha por el “debido camino”, en el futuro aguardaban las metas de “felicidad”, “justicia” y “grandeza nacional”. (*Clarín*, 13/7/1975).

El tono *admonitorio* del editorial se legitimaba en la capacidad que había demostrado el diario para predecir la crisis nacional (“Lo que *Clarín* vino previniendo en el curso de los dos últimos años, con fidelidad a las ideas que le legara su fundador, ha tenido inexorable cumplimiento”, afirmaba -*Clarín*, 13/7/1975-). La eficacia potencial de las medidas que proponía parecía estar asegurada porque había advertido con lucidez sobre las consecuencias de los errores económicos que se presentaban como un dato “objetivo” de la realidad. La capacidad predictiva, a la luz de los errores de la experiencia histórica reciente, le confería un Saber sobre otros actores. Esto se articulaba con el sesgo dogmático de las soluciones propuestas que, en última instancia, se arraigaban en la concepción tecnocrática del desarrollismo sobre las formas de resolución de los problemas nacionales (Yanuzzi, 1996).

Algunas ausencias eran destacables en la evaluación editorial. No hacía ninguna mención directa o detallada sobre el ríspido conflicto entre sindicatos y gobierno, ni una evaluación política de sus consecuencias. De alguna manera, esta exclusión refería a su propia concepción economicista por la cual tales conflictos eran una consecuencia de los errores en política económica del “populismo” (cuya descripción ocupaba la totalidad del editorial). Tampoco se culpabilizaba directamente al gobierno de María Estela Martínez de Perón, ni se evaluaban negativamente las medidas de ajuste que había tomado Rodrigo; sino que se señalaban los errores económicos del proceso político iniciado en 1973. Aunque no postulaba aún la inviabilidad o agotamiento del proceso político, se utilizaba un discurso de alto contenido *admonitorio* para señalar las correcciones que debían imprimírsele al rumbo tomado, una estrategia a la que apelará recurrentemente hasta fines de 1975 (valórese que, pese al distanciamiento que crecía día a día, el MID continuaba siendo el principal socio del Justicialismo en el FREJULI). Tampoco se mencionaba a la “subversión” ni a los “extremismos”, sino a la “violencia” que ponía en peligro la concreción de una “Comunidad Organizada”. Problema que, como se verá, era una consecuencia del subdesarrollo, no una causa. Sus propuestas de resolución de la crisis no estaban dirigidas explícitamente a ninguno de los poderes institucionales, ni a actores políticos o sociales específicos⁷⁶. Ni siquiera al

⁷⁶ La ausencia de referencias al poder legislativo y a los partidos políticos tradicionales como posibles articuladores de una salida política, expresaba, por una parte, la crisis de representatividad en la que estaban inmersas las instituciones de la democracia burguesa y los partidos políticos, como así también la desconfianza que el ideario desarrollista profesaba hacia los poderes formales cuando éstos no aseguraban la implementación del cambio de estructuras desarrollista. También, cabe destacar, en el editorial no se hacía referencia a las

gobierno en particular (aunque por supuesto puede columbrarse que era una llamada de atención dirigida a éste). Su discurso no construía un destinatario particularizado, debido a que recurría a una enunciación taxativa e impersonal de *verdades*. Al plantearse una salida de tipo tecnocrática y en pretendido tono “desideologizado” y “universalista”, no parecía ser de máxima relevancia qué grupo político o actor la implementara. Lo importante era llevar adelante el plan desarrollista, único que aseguraría la viabilidad de la Nación. Este plan se ofrecía a la sociedad civil en su conjunto porque no se presentaba como el plan de un sector particularizado, sino un programa para la unidad nacional y el beneficio de todos los sectores. Justamente, como lo que tenía que prevalecer era la unidad entre sectores superando todo conflicto faccioso, no se ensayaba una culpabilización de un sector en particular. Había sí una crítica solapada a Gelbard y más directa al “populismo” por no haber sabido conducir un proceso de verdadera concertación social, base para la concreción de los “objetivos nacionales”. Pero aún existía la posibilidad de tomar el “debido camino” hacia los grandes destinos del país. No sería sencillo superar la crítica situación, pero se podría con una acción solidaria “sin distinción de sectores y de clases”.

Fuerzas Armadas, ni en forma explícita o implícita.

5.2. En el camino de la agonía (julio-agosto de 1975): “La primera urgencia: gobernar”

A partir de la crisis desatada por el “Rodrigazo” se acentuó la sensación de vacío de poder político y descomposición de la autoridad presidencial y estatal. La presidenta quedó afectada tanto en su salud personal como política. El desenlace de la puja había demostrado una vez más el poder de las corporaciones sobre el aparato estatal, y la imposibilidad del Estado de morigerar la “sobrecarga” a la que estaba expuesto por las demandas corporativas (Sidicaro, 2002: 113)⁷⁷. A su vez, la defenestración de López Rega despertó al “peronismo histórico”, que se había visto relegado por el ascenso del lopezreguismo en el entorno de Isabel⁷⁸. El espacio dejado por la abrupta salida de López Rega intentó ser colmado por el sindicalismo, que pasó a ser el pilar orgánico de un gobierno endeble. Pero el sindicalismo verticalista tendría que lidiar con el encumbramiento de personajes del elenco “lopezreguista” que mantenían su influencia sobre Isabel (principalmente Carlos Villone, nuevo ministro de Bienestar Social en reemplazo de López Rega, y Julio González, secretario privado de Isabel e influyente hombre de consulta de la presidenta). Para ello, los dirigentes sindicales intentaban sus propias alianzas con el *actor político* que había estado esperando el traspie del gobierno: las Fuerzas Armadas. El líder de las 62 Organizaciones y de la UOM, Lorenzo Miguel, apostaba por algún tipo de acercamiento con el sector nacionalista del Ejército. Victorio Calabró, su antagonista dentro de la UOM que venía del vandomismo y ejercía en ese momento la gobernación de la provincia de Buenos Aires, “dialogaba” con Videla y Viola⁷⁹.

⁷⁷ Quiroga (1989: 89-90) destaca en esta época la persistencia de una cultura política “pedigueña” de parte de las corporaciones de la sociedad civil hacia el Estado que había legitimado su intervención y su rol activo como “gestor” del desarrollo nacional, al menos desde la década del ’40. Esta cultura política “demandante” presionaba sobre el Estado que debía hacerse cargo de ese conjunto de demandas sectoriales, lo cual derivaba en la impotencia de la gestión pública para dar cuenta de la multiplicidad de reclamos.

⁷⁸ Por esos ajetreados días los parlamentarios peronistas aprobaron la designación de Italo Lúder como presidente provisional del Senado (asumió el 8 de julio), en una jugada política contra las aspiraciones de poder del lopezreguismo. Con la designación, Lúder se ubicaba como el sucesor legal de la presidenta ante una eventual renuncia. El problema se había suscitado en abril de 1975 cuando López Rega presionó al Partido Justicialista para forzar la renuncia del demócrata cristiano José Allende, en ese entonces presidente del Senado. Al quedar vacante la presidencia del Senado la sucesión legal quedaría en manos de la presidencia de la Cámara de Diputados, que era ejercida por el yerno de López Rega, Raúl Lastiri. Los legisladores peronistas también bloquearon un proyecto de Ley de Acefalía presidencial enviado por el gobierno, por el cual el Ejecutivo podía ser ejercido por un ministro de gobierno si el Poder Ejecutivo quedaba “acéfalo”. López Rega pretendía un aval institucional para ocupar la presidencia si Isabel se retiraba. Alertado de la jugada, finalmente el Congreso aprobó otro proyecto de Acefalía modificado por el Senado que disponía que el sucesor tenía que ser un miembro del Congreso o un gobernador (que abriría otras disputas entre los peronistas “habilitados” a ejercer el cargo). Completando el avance del peronismo histórico sobre el lopezreguismo, a fines de julio Lastiri fue destituido de su cargo de presidente de la Cámara de Diputados y el Partido Justicialista lo removió de su cargo de vicepresidente (De Riz, 1986: 187).

⁷⁹ El gobernador de la provincia de Buenos Aires era el segundo en el sindicato de metalúrgicos que lideraba Miguel y había llegado a la gobernación de la provincia por su influyente posición sindical. Había asumido en 1973 como vicegobernador de Oscar Bidegain, quien por sus vinculaciones con la Tendencia Revolucionaria había sido desplazado por Perón a inicios de 1974 en su embestida contra las posiciones de la izquierda

El gobernador de la principal provincia de la Argentina se erigía como representante antiverticalista que propiciaba el alejamiento de Isabel seducido por una futura candidatura presidencial. La disputa interna en el “sindicalismo burocrático” también se saldaba con acciones violentas y asesinatos que tomaban estado público⁸⁰.

Desde la resolución de la crisis desatada por el Rodrigazo a mediados de julio hasta los primeros días de agosto, *Clarín* se ocupó de describir los diversos problemas macroeconómicos del país y a proponer en forma recurrente como solución la aplicación del programa desarrollista. Abogó por la instalación en el país de industrias de base (*Clarín*, 21/7/1975), se pronunció a favor de la complementariedad entre industria y agro para superar el “panorama de tradicional estancamiento” del campo (*Clarín*, 30/7/1975); sobre la cuestión salarial destacó que el problema no era la distribución del ingreso sino “generar más riqueza mediante la modificación de las condiciones estructurales” del atraso económico (*Clarín*, 1/8/75)⁸¹ y ante la asfixia del sector externo que amenazaba convertirse en cesación de pagos juzgó como inevitable la negociación con el FMI (*Clarín*, 2/8/75)⁸².

peronista. Durante 1975 Calabró intentó posicionarse como una alternativa de poder diferenciándose del gobierno. Con ese fin se distanció de López Rega, tendió lazos con los militares, y quiso aglutinar tras su representación a los sectores disconformes del peronismo (entre ellos, la Juventud Peronista, que había sido expulsada del Justicialismo). Para tener una chance de llegar a ejercer la presidencia estimuló la remoción legal de Isabel. La ley de Acefalía aprobada en julio lo había convertido en “presidenciable”, ya que al detentar el cargo de gobernador estaba en condiciones de asumir el cargo de mediar una remoción legal (Terragno, 2005: 68).

⁸⁰ La guerra entre las facciones era protagonizada por los “guardaespaldas” de los sindicalistas, que contaban con una visible impunidad para saldar cuentas internas. A mediados de 1975 el custodio Jorge Dubchak, “el Polaco”, que venía de una fracción de derecha opuesta a “la patota de Miguel” (por el líder de la UOM) fue una de las víctimas de esta interna. Su caso tuvo especial repercusión por los detalles particularmente aberrantes: al parecer su cuerpo habría sido incinerado en un horno de la sede de la UOM para no dejar pistas (para mayor detalle, véase Sáenz Quesada, 2003: 328). La impunidad con que se manejaban las custodias de los dirigentes públicos, empresarios y otras personalidades políticas o militares fue destacado por un editorial de *Clarín* a fines de agosto de 1975. Allí llamaba la atención sobre las “conductas prepotentes y exhibicionistas”, las “actitudes de ostentación” y los “códigos propios” con los que se manejaban las custodias privadas (que según el diario se habían multiplicado por la violencia política y los secuestros que “castigaban” a la Argentina) (*Clarín*, 30/8/1975)

⁸¹ La distribución de la riqueza nacional, y no la forma en que se producía, había sido la preocupación central en la primera etapa del pensamiento político-económico de Frondizi (1930-1943). Pero durante la segunda etapa (1944-1955) su preocupación había virado hacia la forma en que estaba organizada la producción de la riqueza. Planteaba que primero debía pensarse en la producción de los bienes para luego encarar la forma de distribuirlos. En este periodo se fortaleció su convicción sobre que el país necesitaba el estímulo industrializador para aumentar el nivel de vida de la población. Planteaba que los recursos agropecuarios podían facilitar la industrialización del país y la nacionalización del petróleo y otros recursos energéticos debían realizarse en función de la industrialización (de allí, tal vez, las posiciones “excesivamente” nacionalistas que adoptara durante este periodo) En la tercera etapa de su pensamiento (1956-1962), ya caracterizada por la inclusión del problema del “desarrollo”, esta convicción por la producción de la riqueza nacional se consolidará (Acuña, 1984:106-7).

⁸² Situación a la que según el matutino se había llegado por las recetas económicas que se habían promovido “en nombre de convicciones nacionalistas que prometían la liberación de toda dependencia (...)”. Nacionalismo “superficial y simbólico” que había demostrado su falacia: “Porque el verdadero nacionalismo consiste en impulsar programas concretos para acabar de una vez por todas con el subdesarrollo que es lo que en definitiva nos pone frente a las dramáticas perspectivas actuales” (*Clarín*, 2/8/75). *Clarín* retomaba el estilo *predictivo* expuesto en el editorial del 13 de julio y recordaba que en 1973 había recomendado la renegociación de la deuda

Efectivamente, el rumbo económico era un objeto evasivo para el gobierno. En reemplazo del renunciante Rodrigo, el 22 de julio había asumido la cartera económica Pedro Bonanni. Solo duraría veintiún días. Preso de su propia debilidad llamó a “todos los sectores representativos de la comunidad” para planificar el nuevo programa económico (Rougier y Fiszbein, 2006: 100-1) (el ministro había recordado la frase de Perón, “Al país lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie” -Kandel y Monteverde, 1976: 89-). Intentó concertar con la CGT y la CGE, pero esta última rechazó los términos de la nueva concertación en desacuerdo con la tregua económica con congelamiento de precios que había propuesto la CGT. Para *Clarín* las políticas concertadas que se intentaban “rehabilitar” estaban condenadas al fracaso porque ya habían sido aplicadas “sin pausa” por el primer equipo económico y habían producido los resultados “que hoy aparecen con desnuda crudeza”. El camino de la “armonía social” y la “convivencia política” era imposible sino se removían “los obstáculos que ponen freno a nuestro desarrollo económico” (*Clarín*, 4/8/1975). Reforzando el clima de crisis, durante la primera quincena del mes de agosto se intensificaron los discursos de diversos representantes sectoriales que remarcaban su “gravedad moral”⁸³. El gobierno se mostraba desconcertado ante la imposibilidad de encauzar la situación económica y los recurrentes cambios ministeriales estimulaban aún más la incertidumbre sobre su capacidad de decisión. En la sociedad civil se cristalizaba el descontento, la desesperanza y la desazón ante una crisis que no mostraba signos de atenuación. *Clarín* acompañará estos vaivenes con una serie de emplazamientos al Ejecutivo. “La urgencia de esta hora” (*Clarín*, 6/8/1975), titulaba el editorialista para resaltar que la crisis económica se iba profundizando porque “se está reduciendo la posibilidad de introducir medidas que contrarresten el proceso o suavicen, al menos, sus más indeseables consecuencias”. Rescataba las buenas intenciones de Bonanni al buscar apoyos para su plan y aconsejaba que todos los sectores de la sociedad argentina depositaran una “total confianza” en su autoridad profesional. Pero ante el procedimiento de consulta y debate convocado por su estrategia concertada le reclamaba mayor autoridad para cuando se estaba en “condiciones excepcionales” para negociar (*Clarín*, 9/8/1975) (y que le había costado una reprimenda de Gelbard en agosto de 1973). Pero había sido Gelbard quien había cerrado esa posibilidad y le adjudicaba la responsabilidad al ex ministro de la amenaza de cesación de pagos que se cernía sobre el país. Por esa razón pedía “no cargar las responsabilidades sobre los hombros de quienes deberán asumir esa tratativa sin otra posibilidad de opción, sino sobre los de aquellos que pudiendo haberlo previsto y evitado, se obstinaron en no hacerlo.” (*Clarín*, 9/8/1975). Como bien lo avizoraba el editorial, el gobierno se encontraba ante la disyuntiva de enfrentar una negociación con el FMI debido a que no tenía reservas suficientes para responder a los pagos externos que restaban en el año. La eventualidad de negociar con el organismo financiero internacional era una circunstancia sensible para el discurso nacionalista y antiimperialista tradicional del peronismo.

⁸³ En un documento conocido el 6 de agosto, Monseñor Adolfo Tórtolo, arzobispo de Paraná, vicario castrense y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), mencionaba que la raíz de la grave situación era el quiebre de la ley moral y demandaba “soluciones de fondo” (cit. por Kandel y Monteverde, 1976:103-4). El 12 de agosto, el jefe de la Fuerza Aerea, Héctor Fautario, también se refería a las “causas morales” de la crisis en un discurso por el día de la Fuerza Aerea (*Clarín*, 13/8/1975 p. 21).

hacer frente a la “grave emergencia”: “Cuando el barco amenaza hundirse, es su capitán quien debe tomar toda la responsabilidad y obrar sin dilaciones”, sentenciaba (*Clarín*, 6/8/1975). Un día después se agravaría su tono *admonitorio*. “La primera urgencia: gobernar”, disparaba el título del editorial (*Clarín*, 7/8/1975). Se dirigía lacónicamente al gobierno y le demandaba en forma perentoria que el país necesitaba “ser gobernado”. El tono de la exigencia se debía a los rumores sobre una supuesta medida de la presidenta para delegar en sus ministros la firma de resoluciones de menor nivel. Además de invocar restricciones constitucionales para tal efecto, señalaba que la delegación coincidía con una evidente crisis política que afectaba al Estado y al gobierno luego del recambio ministerial de fines de julio. La sospecha que dejaba traslucir el diario se relacionaba con la posibilidad de que los ministros tomaran más poder del que les correspondía (y aunque no lo mencionaba, elípticamente parecía referirse al elenco “lopezreguista”). De allí que a las objeciones legales que se podían presentar a la medida se sumaban otras de fondo:

(...) no parece ser ésa la vía indicada para solucionar la grave falta de capacidad de decisión que se advierte en las capas más altas del gobierno. El país enfrenta una grave crisis y más que nunca necesita ser gobernado (...) La realidad golpea hoy las puertas del gobierno y de la oportuna y rápida respuesta que éste dé depende la solución de las dificultades actuales. (*Clarín*, 7/8/1975).

Mientras Bonanni renunciaba el 11 de agosto por la falta de apoyo de los “sectores representativos”, la recesión se agudizaba en el país, a la par que la inflación seguía su carrera ascendente. Una nueva variable adicionaba preocupación en la situación de la economía argentina: el desempleo. La renuncia de Bonanni fue acompañada por una nueva reestructuración parcial del elenco ministerial (era la séptima en trece meses)⁸⁴. Pero se tardaría cuatro días en designar un nuevo ministro de Economía (provisoriamente había ocupado el cargo Corvalán Nanclares). La demora llevó a *Clarín* a destacar el “considerable grado de perplejidad” en la cúpula del gobierno en cuanto a la dirección a imprimir a los asuntos relacionados con esa cartera (*Clarín*, 13/8/1975). También remarcaba negativamente

⁸⁴ Asumieron Vicente Damasco en Interior, Angel Robledo en Relaciones Exteriores, Pedro José Arrighi en Educación -que se alineaba ideológicamente con el saliente Ivanissevich-, Carlos Ruckauf en Trabajo -con su designación, el sindicalismo recuperaba la cartera de Trabajo que había perdido luego de la renuncia de Ricardo Otero- y Carlos Emery en Bienestar Social “lopezreguista” que continuaría la política de sus anteriores Villone y Roballos, también vinculados al “Brujo-. Corvalán Nanclares se mantuvo en Justicia y Garrido en Defensa. En Economía asumiría Antonio Cafiero el 15 de agosto. El nuevo ministro del Interior Damasco, un coronel en actividad que desempeñó distintos cargos desde 1973, encararía un nuevo intento para que Isabel “reinase” pero no gobernase. Tenía aspiraciones políticas y su anhelo era convertirse en el nuevo “coronel de los trabajadores” (Sáenz Quesada, 2003: 355). Días después su designación desencadenaría la crisis militar que finalizaría con la asunción de Videla como jefe del Ejército. Por su parte, Ruckauf y Cafiero trabajaron en tándem para desbancar el poder del lopezreguismo dentro del gabinete.

el número de ministros nombrados en tan corto lapso (serían cuatro con el sucesor de Bonanni), las contradicciones en las medidas económicas propuestas, el alza del costo de vida en los últimos dos meses, la disminución de las reservas monetarias y la amenaza de la recesión para las fuentes del trabajo y las empresas. Concluía que se habían agudizado todos los datos de la “grave crisis” económica que padecía el país y que “en los momentos más críticos para la economía argentina, el país se [halla] privado de una firme y responsable conducción económica” (*Clarín*, 13/8/1975).

Un día después refrendará en tono irónico su postura. Al comentar los documentos que circulaban con propuestas económicas de sindicatos y partidos políticos, se preguntaba de “cuál política económica” se hablaba. Volvía a remarcar el grave problema de los pagos internacionales que contribuía a profundizar la mala situación económica y, en tono taxativo y forma reiterativa, expresaba que lo que acontecía se ajustaba a “los dictados de la lógica” debido a las “persistentes políticas económicas que dieron la espalda a las necesidades nacionales (...) [y] consolidaron una estructura subdesarrollada”. Las soluciones a implementar no debían responder a visiones ideológicas, sino a la pura constatación de la realidad económica:

El desarrollo económico no requiere de muletas ideológicas ni se ubica necesariamente en algunos de esos grandes esquemas que son el liberalismo, el intervencionismo o el socialismo. Supone fundamentalmente la determinación de básicas prioridades sobre las que ha de volcarse toda la capacidad inversora (...) a conciencia de que solo a través de ese cometido es posible dar sólido sustento a la independencia nacional y al bienestar popular (*Clarín*, 14/8/1975).

Evidentemente, las “muletas ideológicas” distorsionaban el acceso a un plan que diera resolución final a los crónicos problemas políticos, sociales y económicos del país. Desde este punto de vista, si el proceso económico se encaraba dentro de las previsiones desarrollistas, las diferencias ideológicas y políticas quedarían relegadas a un segundo plano atenuadas por el despliegue exitoso de la economía nacional. No habría conflicto dentro de una economía desarrollada. Por otra parte, cabe destacar que al referirse al “desarrollo económico” como único camino de acceso al bienestar popular -en una asociación causal presentada como incontestablemente positiva-, éste quedaba sustraído del ámbito de las discusiones o interpretaciones que se daban en el campo de las ideologías o de las teorías económicas. El campo de las “visiones ideológicas” no era el de la realidad económica, sino el de su interpretación. Las soluciones desarrollistas no eran parte de ese nivel y no eran una mera “teoría” o interpretación: eran el fruto de la mera constatación objetiva de lo que ocurría en la

economía. Es evidente que el carácter dogmático y universal que contenía la propuesta desarrollista solapaba su jaez sectorial, burgués y funcional a los valores del sistema capitalista⁸⁵.

El 15 de agosto Antonio Cafiero asumió como nuevo ministro de economía. Llegaba apoyado por la CGT, que con su nombramiento pretendía aumentar la influencia sindical sobre los resortes del gobierno. Su designación también recibió el apoyo de la CGE y las 62 Organizaciones. El consenso sobre su designación se asentaba en que era valorado como un técnico capaz, solvente, con cintura política y suficientes contactos dentro y fuera del peronismo como para afrontar la difícil coyuntura. Este panorama le otorgó un margen de acción y generó cierta esperanza en que condujera un proceso exitoso, pese a la incredulidad general sobre la eficacia del gobierno⁸⁶. El propio *Clarín* mencionaba la “nueva expectativa” que había generado su designación, porque Cafiero podía exhibir “títulos de profesionalismo” en materia económica (*Clarín*, 20/8/1975). Según el matutino, de los cuatro ministros que lo habían antecedido, solo Gómez Morales contaba con experiencia y títulos habilitantes, mientras que los restantes habían demostrado su “falta de idoneidad”, lo que a su vez explicaba los errores cometidos hasta el momento. Si bien deseaba que el ministro gozara del “respaldo necesario”, advertía que su política de concertación no debía significar “la reedición de aquella que condujo a la presente crisis o la rehabilitación de sus inspiradores y ejecutores”, ni podía desconocer los “intereses de grupos sectarios” que se movían en el trasfondo de una “inauténtica concertación”. Si el ministro no recreaba las “falacias” que habían conducido a la “caótica” situación, podía abrirse la “expectativa” que los problemas se encarasen “responsablemente” (*Clarín*, 20/8/1975).

Esos problemas eran diversos y acuciantes. Las prioridades de su gestión estarían abocadas a intentar resolver el déficit fiscal, la recesión, el desfasaje en la balanza de pagos y la inflación, en un marco donde la economía nacional, acorde con lo que ocurría a nivel mundial, sufría el nuevo fenómeno de la inflación y la recesión en forma simultánea. A nivel interno, su propuesta concertada y “gradualista” (Rougier y Fiszbein, 2006: 102; De Riz, 1986: 196) incluía la indexación progresiva del salario, los precios y las tasas de cambio (lo que se conoció como las “minidevaluaciones” del peso). El nuevo ministro era conciente de

⁸⁵ Otro ejemplo ilustrativo de esta concepción puede encontrarse en un editorial de mediados de septiembre de 1975. Luego de comentar la transitoriedad de la obtención de créditos del FMI -que había logrado el ministro de Economía Cafiero- si no se aplicaban medidas económicas de fondo, afirmaba: “(...) las exigencias de la economía son indiferentes respecto de las loables aspiraciones de los gobernantes o los atractivos teóricos de las ideologías.” (*Clarín*, 16/9/1975).

⁸⁶ “Fe y esperanza”, titulaba el diario *La Razón* luego de que Cafiero dirigiera su primer mensaje al país como ministro de Economía (cit. por Kandel y Monteverde, 1976: 94).

que el ajuste -que evaluaba inevitable- no podía conducirse por los cauces del “*shock*” al estilo Rodrigo. En consecuencia, uno de sus objetivos al inicio de su gestión fue retomar la política de concertación del Pacto Social y reactivar la actividad económica para aventar la conflictividad social que se preveía por el crecimiento de la recesión y el desempleo. Además, a la disputa entre empresarios y sindicatos, se agregaba que las cúpulas sindicales burocráticas estaban desbordadas por los reclamos de sus bases, que convergían en comités de fábricas nucleados en organizaciones gremiales que no respondían a las 62 Organizaciones. En el plano externo, Cafiero inició contactos con el FMI para renegociar la deuda argentina y acudir al crédito externo. Para Horowicz (1986: 254), la política de Cafiero pretendió ser un “gelbardismo sin Gelbard” que resultó una “quimera” y por ello el intento terminó siendo un “rodriguismo sin Rodrigo”. Es decir, una política de ajuste pero más paulatina. Su gestión se desenvolvería dentro de un contexto de profunda fragmentación política y la nueva oposición deliberada de los sectores empresarios liberales, reunidos en la APEGE desde mediados de agosto⁸⁷.

En línea con las preocupaciones del ministro, *Clarín* alertaba sobre la generalización de la recesión productiva que se acentuaba “por el simple paso del tiempo” y estaba afectando al sector industrial (*Clarín*, 21/8/1975). Según el matutino, esto podía acarrear graves consecuencias porque el sector era el mayor empleador del país y los empresarios se habían visto obligados a suspender y a despedir trabajadores. Ello era producto “de una crisis económica en la que el empresario no asume la autoría, sino el papel de víctima”. La “amenaza” de un proceso de desocupación era consecuencia de la política económica puesta en marcha en 1973, que había desalentado la inversión. La contracción del sector privado derivaba, como una de sus principales causas, del excesivo gasto público y la desmedida expansión monetaria, procesos que aceleraban el espiral inflacionario. En particular, la preocupación por el excesivo “gasto público” y sus nocivas consecuencias se tornará un tópico recurrente en los editoriales económicos del matutino⁸⁸. Pese a su reiterativo

⁸⁷ La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) se conformó en agosto de 1975 como un polo aglutinador de los empresarios liberales opositores al gobierno y al poder sindical. Representaba los intereses de los grandes empresarios y los grandes terratenientes, en contraposición a la CGE que representaba a los pequeños y medianos empresarios y había sido la garante del Pacto Social (para más información, Rougier y Fiszbein, 2006: 104-5; Sidicaro, 2002: 135-6). Como se analizará luego, la APEGE tuvo un rol fundamental en la consolidación de una corriente empresarial favorable al golpe de Estado y formará parte activa de la coalición cívica que ofreció su apoyo al golpe del 24 de marzo de 1976.

⁸⁸ “(...) el fracaso del pretendido ensayo de estabilización que se inició a mediados de 1973 fue en gran parte generado por la incongruencia entre un nivel de precios artificialmente congelado y un creciente gasto público en cuya ayuda debía concurrir una ilimitada emisión monetaria” (*Clarín*, 25/8/1975). En un editorial posterior no dudará en definir a la “expansión de los gastos corrientes de la administración” que estaba en la base del gasto público como un “grave cáncer de la economía nacional” (*Clarín*, 8/11/1975)

diagnóstico negativo en temas económicos, entreveía un pequeño margen de posibilidad para la acción favorable de la nueva conducción económica:

Es lamentable que el país haya sido llevado a la presente situación, pero la crisis (...) impone un alto costo económico, político y social que puede limitarse mediante la puesta en marcha de una política adecuada, pero no dejarse de pagar totalmente. (*Clarín*, 21/8/1975).

Días después, Cafiero declaró que “la estrategia liberadora de la Nación” estaba ligada “al desarrollo de sus exportaciones”. *Clarín* le respondía en tono crítico que la solución no era el desarrollo de exportaciones, sino la sustitución de importaciones de productos básicos y combustibles, como podía observarse en la nueva orientación de la economía brasileña (*Clarín*, 31/8/1975)⁸⁹. En consecuencia “empleando los términos del ministro de Economía, [puede] afirmarse que la estrategia liberadora de la Nación está íntimamente ligada al cambio de las estructuras económicas que representa el desarrollo de las industrias básicas y energéticas.” Si bien destacaba la “condescendencia” que el ministro había demostrado hacia el “cambio de estructuras” (Cafiero había dicho que “algunos [lo] reclaman, nosotros lo rescatamos”), advertía que la realidad nacional no autorizaba a ceñir ese reclamo a un sector o grupo, sino a una “exigencia de la Nación”. Y que un simple enunciado carecía de viabilidad si no estaba respaldado por “firmes prioridades de inversión”, tanto que esos enunciados podían ser interpretados dentro del contexto de políticas económicas de distinto tipo que ya habían demostrado su incompatibilidad con el “integral desarrollo económico”, el cual finalmente daría sustento a las “aspiraciones de bienestar social y de acceso del país a la categoría de potencia, tantas veces frustrada.” (*Clarín*, 31/8/1975).

Esta última apreciación permite vislumbrar una idea fuerza que subyacía a éste y a otros editoriales económicos del matutino: la certeza de que el país reunía las condiciones para transformarse en potencia -su “destino de grandeza”-, y la inviabilidad que habían demostrado las políticas de signo distinto al desarrollismo para lograrlo. Las bases sociales

⁸⁹ La orientación desarrollista y abierta al capital extranjero del régimen militar que gobernaba Brasil desde 1964 era para *Clarín* el ejemplo paradigmático de la implementación eficaz de la “solución desarrollista”. Por lo general, se apelaba al ejemplo brasileño para resaltar la equivocada dirección que se le había impreso a la economía argentina desde el Estado. Esta comparación se volverá más recurrente luego del golpe militar de 1976, más precisamente cuando Martínez de Hoz acelere los pasos de su plan económico y *Clarín* profundice su evaluación negativa sobre la conducción económica (véase, entre otros ejemplos posibles, *Clarín*, 4/5/1976; 15/7/1976; 22/11/1976; 2/12/1976; 12/5/1977; 14/11/1977). Al comparar la experiencia económica brasileña con la Argentina, *Clarín* tendía a realizar una absoluta abstracción de las particularidades de cada uno de los países, de sus composiciones sociales, de sus conflictos, de sus historias políticas y económicas. En ese sentido, la postulación del ejemplo brasileño se realizaba desde una mirada tecnocrática para la cual solo se debía trasladar el tipo de medidas que se implementaban en Brasil al contexto argentino, lo cual parecía por sí sólo asegurar su éxito (sobre la particularidad del régimen militar brasileño que gobernó Brasil en el periodo 1964-1985, véase Ansaldi, 2004).

para pasar del subdesarrollo al desarrollo estaban echadas, pero no se habían puesto en acción los mecanismos conducentes para dar “el gran salto”. Esta suerte de construcción mítica del futuro como progreso funcionaba como un argumento que avalaba en el presente la aplicación del ideario desarrollista. El “tantas veces” frustrado acceso del país a su categoría de potencia se originaba en que aún no se había aplicado a fondo el plan desarrollista (y cuando se había realizado, durante la presidencia de Frondizi, se había frustrado por motivos políticos ajenos al plan). Como el ideario desarrollista no aparecía vinculado con las frustraciones previas, no estaba incluido en el diagnóstico de los problemas⁹⁰. En cambio, el ideario desarrollista era asociado plenamente al “ser nacional”. Este discurso que excluía al propio grupo político de los conflictos políticos nacionales no era exclusivo del desarrollismo. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas lo utilizarán al justificar la toma del poder poco tiempo después, autoexcluyéndose del diagnóstico que describía los problemas que venían a superar (Novaro, 2006). Si pensamos en la pretensión de Verdad y Saber que se autoarrogaba el ideario desarrollista es posible vincularlo con un rasgo característico de la tradición política nacional, más acentuadamente en el peronismo y el radicalismo: la identificación de la propia doctrina con los intereses de la Nación y la exclusión del adversario político de los debates y el escenario político, así como el menosprecio de sus propuestas (Halperín Donghi, 2006; Martuccelli y Svampa, 1997: 79-83; Romero, 2004: 216; Palermo, 1985). En el caso argentino, este “unanimismo” ha nutrido la concepción movimientista de los grandes movimientos democráticos de la historia argentina: el radicalismo y el peronismo. La escasa tradición pluralista del unanimismo movimientista se reflejó en su reivindicación de poseer una Verdad fundamental que rechazaba el conflicto y transformaba al adversario en enemigo (el “antipueblo” o la “antipatria” en el peronismo; “el régimen falaz y descreído” o “la oligarquía” en la tradición radical -Romero, 2004: 216-). La posesión de una única Verdad que concretaría ese “destino de grandeza” transformaba a la oposición política en un grupo que atentaba contra los intereses de la Nación y cuyas propuestas tendían a ser menospreciadas como actos “mezquinos”. Así, el opositor era interpelado como un enemigo que jugaba un rol conspirativo y cuyo accionar era contrario al “destino de grandeza”, en el marco de una sociedad que se suponía intrínsecamente consensual y donde el conflicto era “artificial” o instigado por “enemigos” de la Nación. Las soluciones políticas propias eran las únicas viables y la doctrina propia era la que encarnaba en su totalidad la “identidad nacional”. En esta perspectiva no hay conflictos, sino divisiones. Y los partidos que

⁹⁰ Por esos días, al cumplirse treinta años del nacimiento de *Clarín*, el matutino reflexionaba “Al cabo de esos treinta años, el populismo, como tal, es parte de la crisis; y la crisis (...) involucra también a las dos vertientes populistas más significativas dentro de nuestro quehacer político.” (*Clarín*, 28/8/1975).

representan las identidades políticas por fuera del gran movimiento hegemónico se transforman en ilegítimos, porque su prédica no hace más que ocuparse de “pequeños” conflictos que extravían a la Nación de sus “grandes realizaciones”. Pese a que el discurso de *Clarín* va a realizar explícitamente una crítica negativa del populismo y de la “partidocracia”, pueden señalarse estos puntos de encuentro entre estas diferentes concepciones políticas⁹¹. Su apelación a la “unión nacional” se realizaba dentro de una concepción que excluía a las propuestas políticas ajenas a la esfera desarrollista y esa deslegitimación del otro, sumada a la autoadjudicación de representar exclusivamente la propuesta de unidad nacional, suponía un modo de construir consenso en términos de identidad o subordinación, en lugar de reconocimiento recíproco de legitimidad (Palermo, 1985: 121).

El mes de agosto finalizó con una cuenta absolutamente negativa en el haber político del gobierno. El 14 de ese mes el diario *La Prensa* informó que Isabel había desviado el cobro de un cheque de una sociedad benéfica que presidía y se financiaba con fondos públicos -la Cruzada Justicialista de la Solidaridad- para asuntos personales (fue destinado para saldar la deuda de la sucesión de Perón con las hermanas de Evita). La cuestión tomó rápido estado público y puso bajo sospecha de corrupción a la propia presidenta. A partir de ese momento las portadas de los diarios nacionales seguirán la saga del “cheque”, empujando un poco más al gobierno en su languidecer. Paralelamente, las divisiones internas del partido Justicialista quedaron expuestas con crudeza. El cisma se produjo luego que la presidenta impusiera unilateralmente al nuevo presidente de la Cámara de Diputados -Nicasio Sánchez Toranzo- y a las autoridades del Partido Justicialista en el Congreso constituido para su elección. Una fracción del partido se retiró del congreso y constituyó la Corriente de Afirmación Peronista proclamando “Volver a Juan Perón”. Lo que se removía era el irresuelto conflicto acerca del significado de la identidad peronista, que se había acelerado luego de la muerte de Perón y dominó la escena partidaria hasta el golpe. La división atizó los anhelos presidencialistas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el antiverticalista Calabró, que una semana más tarde señaló “así no llegamos al 77” -refiriéndose a las elecciones nacionales previstas para ese año-⁹². Su declaración fue explosiva para el ámbito político y la interna peronista. El 3 de

⁹¹ Debe aclararse que no se propone una homologación de la tradición unanimista del peronismo y el radicalismo con el ideario desarrollista. Pero sí la relación de aquellas características del unanimismo movimientista que, como se ha descrito, también pueden hallarse dentro de la concepción política del desarrollismo.

⁹² La sentencia de Calabró era en respuesta a la pregunta de los periodistas sobre las palabras que anteriormente había pronunciado Balbín, quien había afirmado que había que llegar a 1977 “aún con muletas”. Calabró había contestado que “si se destruye al peronismo, se destruye al país. Y además, ustedes no lo pueden ignorar, así no llegamos al 77”. Aunque luego trató de aclarar que se refería a que solo se podía llegar con una conducción fuerte y que él no sería candidato en 1977 (por los rumores de su supuesta candidatura presidencial) (*Clarín*, 1/10/1975, p.10).

octubre, las 62 organizaciones directamente lo acusaron de “golpista” y “subversivo” (*Clarín*, 4/10/1975, p.8). Calabró terminaría siendo desafiliado del Partido Justicialista, enfrentado con Lorenzo Miguel e Isabel Perón. A esta disputa interna por la identidad peronista se había sumado el Partido Peronista Auténtico, creado en marzo de 1975 por Montoneros como un polo que aglutinaría a la izquierda peronista para luchar contra la derecha del movimiento dentro del marco institucional⁹³.

El otro suceso que tuvo gran repercusión pública y congregó la atención política fue la crisis militar conocida como “Damasco-Laplane”. La designación de Damasco -un coronel en actividad- como ministro del Interior había sido rechazada por los altos mandos del Ejército. Los comandantes presentaron un “planteo” a la presidenta y luego al jefe del Ejército, Alberto Numa Laplane⁹⁴, presionándolo para que Damasco no formara parte del gobierno porque su inclusión podía entenderse como un apoyo institucional del arma al gobierno nacional⁹⁵. Los altos mandos exigían un *profesionalismo prescindente*, mientras que Numa Laplane abogaba por un *profesionalismo integrado* que comprometía a la institución con la política del gobierno. La resistencia de Numa Laplane llevó a la plana mayor del Ejército a pedir su pase a retiro y el de Damasco. El rechazo de Isabel a ese pedido y la ratificación de Numa Laplane -interviniendo directamente en una crisis que hasta ese momento se cifraba como un problema interno al arma- acrecentó el dramatismo de la crisis y la convirtió en un problema institucional de la Nación. Ante la inevitable caída de Laplane, el gobierno se inclinó para su sucesión por un general nacionalista y respetuoso de la legalidad gubernamental, Alberto Cáceres. Pero éste se negó a tomar el cargo porque su promoción hubiera decretado el pase a retiro de toda la cúpula militar, desestabilizando al Ejército⁹⁶. De haberse concretado la

⁹³ “El Auténtico” reunía a dirigentes peronistas de diferentes extracciones; ex gobernadores cercanos a la “Tendencia”, integrantes de la Juventud Peronista, sindicalistas combativos y montoneros que no estaban clandestinos. Llegó a presentarse en las elecciones para la gobernación de Misiones celebradas en abril de 1975, donde obtuvo el 5% de los votos, aunque su fórmula para la gobernación con el peronismo disidente de la Tercera Posición obtuvo el 9% de los votos. Montoneros estimuló la creación del partido a la par que continuó su lucha armada desde la clandestinidad, lo que se transformó en una contradicción irresoluble para los que formaban el Auténtico, que abogaban por un frente político pero eran presionados para que repudiaran las acciones militares de Montoneros. Hacia fin de 1975, Isabel decretó su proscripción y la prohibición de circulación de “El Auténtico”, su revista de difusión (medida que se efectivizó en los primeros días de enero de 1976). El ataque de Montoneros al Regimiento 29º de Infantería de Monte en Formosa el 5 de octubre de 1975 había afectado decisivamente la existencia del Partido, que quedó muy expuesto a las represalias del gobierno y de la derecha peronista (para consultar el decreto de proscripción, véase *Clarín*, 8/1/1976, p. 6; sobre el Partido Auténtico véase Anguita y Caparrós, 2006, tomo 4; Gillespie, 1987: 252-63; Jozami, 2006: 381).

⁹⁴ La conducción del Ejército que hizo el “planteo” a Numa Laplane estaba conformada por los generales Carlos Delía Larocca (comandante del III Cuerpo de Ejército), Jorge Videla (Estado Mayor Conjunto), Roberto Viola (II Cuerpo), Carlos Suárez Mason (V cuerpo) y Diego Urricariet (Fabricaciones militares).

⁹⁵ Aunque algunos analistas sospecharon en ese momento que la designación era fruto de una alianza gobierno-Fuerzas Armadas, para que los militares contaran con un hombre propio en un ministerio clave en la lucha contra la guerrilla.

⁹⁶ Lorenzo Miguel y el ministro Emery se inclinaban por Cáceres, mientras que Cafiero y el ministro de Bienestar Social Demarco presionaron para que se respetara el escalafón jerárquico “natural” y que se optara por

designación de Cáceres, retornaría el espectro de la división que había caracterizado a los enfrentamientos entre “azules” y “colorados”, pero en estas circunstancias históricas el sector proclive al entendimiento con el peronismo se enfrentaría con sus pares para defender a un gobierno débil y poco representativo que ni siquiera le aseguraba poder de represión para enfrentar a los díscolos. Finalmente, la presidenta aceptó el pase a retiro de Numa Laplane y Damasco, quien poco después renunciaría a su cargo ministerial. El 27 de agosto asumió la jefatura del Ejército el general Jorge Rafael Videla. La crisis dejó varias conclusiones: hizo evidente la debilidad de Isabel frente al Ejército, contribuyó al desgaste de su ya ajada imagen y dio pábulo a los rumores sobre el golpe de Estado. A la debilidad del gobierno para enfrentar a los militares también contribuyeron razones de tipo doctrinarias propias del peronismo, como su fidelidad al principio que consideraba la “unión del pueblo con las Fuerzas Armadas” como parte de la complementación en un mismo proyecto doctrinario (Itzcovitz, 1985: 83). Luego de este desenlace el poder político quedó definitivamente subordinado a la voluntad militar, no solo por la defección de Isabel, sino también por la ausencia del Parlamento en la crisis y la aquiescencia de la Unión Cívica Radical hacia la nueva cúpula del Ejército (que en su óptica mantendría la unidad y no haría pactos con el sindicalismo y el peronismo). Dentro del Ejército, el arribo de Videla a la jefatura torció la disputa en favor del sector golpista y antiperonista y obligó al repliegue de los “legalistas” proclives a estrechar vínculos con la sociedad civil (Sáenz Quesada, 2003: 339-348; Seoane y Muleiro, 2001: 46)⁹⁷.

Clarín recurrió nuevamente al *silencio estratégico* en relación a la crisis en el Ejército. Más allá de este hecho, que concitó una especial atención pública por el contexto político, fue una característica del matutino abstenerse de ofrecer una opinión editorial sobre las cuestiones que afectasen directamente a las Fuerzas Armadas, tanto en sus aspectos internos como en su rol frente a la crisis del gobierno peronista (Díaz y Passaro, 2002). En tanto *actor político* y parte del Estado nacional, las Fuerzas Armadas no fueron objeto de atención específica de los editoriales (como veremos más adelante, a esta “ausencia” se le podrá asignar un significado particular en las semanas previas al golpe de Estado).

Videla. Al parecer, Massera también le sugirió a la presidenta que designara a Videla (Seoane y Muleiro, 2001: 45).

⁹⁷ Seoane y Muleiro (2001: 44-45) afirman que quien encabezó el “*putsch*” interno contra Numa Laplane fue el general Delia Larocca, el más antiguo del Estado Mayor. La remoción encumbró al tándem Videla-Viola como nuevo factor de poder en el Ejército. Contaban con el apoyo de la segunda línea del arma que quería tomar el mando total de la represión, forzar la renuncia de Isabel y concretar el traspaso a Lúder. Era el mismo sector que poco antes había presionado para sacar a López Rega del gobierno.

Entretanto la violencia política recrudecía. Durante el mes de agosto la familia de Mariano Pujadas -uno de los militantes fusilados en Trelew en agosto de 1972- fue cruelmente asesinada en Córdoba en las vísperas del aniversario de Trelew por el Comando “Libertadores de América” (una banda paramilitar de derecha que emulaba en Córdoba a la Triple A y estaba integrada por civiles y oficiales del III Cuerpo del Ejército; González Janzen, 1986; cit. por Novaro y Palermo, 2003: 81). Los familiares de Pujadas fueron llevados a la fuerza desde su casa a un descampado, fusilados y sus cuerpos dinamitados. El 22 de agosto, en el aniversario de Trelew, estallaron en todo el país más de cien bombas. Fruto de un acuerdo táctico entre Montoneros y el ERP, hasta agosto Montoneros había concentrado su acción militar contra la policía, los empresarios monopólicos y la derecha peronista, mientras que el ERP atacaba a los militares (Gillespie, 1987: 240)⁹⁸. En particular, causó gran repercusión el asesinato del mayor del Valle Larrabure, quien había sido secuestrado por el ERP un año atrás y cuyo cadáver apareció en un baldío con signos de haber padecido un duro cautiverio. El hecho encrespó aún más los ánimos de venganza en el Ejército. Entre agosto y septiembre los militares comenzaron a pergeñar y prepararse para un eventual, pero cada vez más posible, golpe de Estado⁹⁹. Su estrategia residiría en dejar que el gobierno peronista se agotara por sus propios errores, que recrudeciera la interna peronista, y que se agudizara aún más la inestabilidad política y económica. Frente a la potencialidad de una nueva toma del poder, sectores de las Fuerzas Armadas entraron en contacto con sectores civiles liberales nucleados en el grupo Perriau, en relación al apellido del influyente empresario anticomunista, antiperonista y liberal Jaime Perriau. En ese grupo se encontraba el futuro ministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz¹⁰⁰.

⁹⁸ Entre otros factores, primaban las concepciones políticas diferentes entre el peronismo y el guevarismo. Montoneros confiaba aún en la posibilidad de concretar un programa de “liberación nacional” que incluyera en un amplio frente a la pequeña burguesía y a los sectores “progresistas” o nacionalistas de las Fuerzas Armadas (Gillespie, 1987: 241).

⁹⁹ Según el general Villarreal, quien durante los primeros años del “Proceso” fue un cercano colaborador político de Videla desde la Secretaría General de la Presidencia, cuando Videla asumió como Comandante todavía no estaba decidido el golpe (cit. por Sáenz Quesada, 2003: 365). Sáenz Quesada, (2003: 366) cita las palabras de un jefe naval quien aseguró que la vuelta al poder de Isabel el 17 de octubre fue el punto de partida para la ejecución del golpe de Estado. Por su parte, Acuña y Smulovitz (1993: 28) citan diversas fuentes, entre ellas declaraciones del general Camps realizadas en 1981, para afirmar que hacia mediados de septiembre se tomó la decisión de derrocar al gobierno de Isabel y del empleo del método represivo clandestino, base posterior del terrorismo de Estado. A la perspectiva política, Sáenz Quesada agrega otra de tipo operativo (2003: 65) al afirmar que aún en el segundo semestre de 1975 los comandantes del Ejército y la Marina consideraban necesaria la permanencia del gobierno porque requerían más tiempo para reunir información de inteligencia que les permitiera organizar el vasto plan represivo. La dictadura de Onganía le había prohibido a la SIDE intervenir en conflictos internos y ello había derivado en un déficit para la obtención de información de inteligencia. Pero hacia fines de 1975 las Fuerzas Armadas ya habían coordinado la información entre sus respectivos servicios de inteligencia y la Policía Federal.

¹⁰⁰ Desde 1974 los principales jefes militares, el grupo Perriau, los integrantes del Consejo Empresario Argentino (CEA) y los grupos empresarios que más tarde confluyeron en la APEGE discutían el plan liberal que finalmente se aplicaría cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder estatal. El general retirado Hugo Miatello

A fines de agosto *Clarín* cumplió treinta años desde su fundación el 28 de agosto de 1945. El aniversario fue aprovechado para dejar sus impresiones sobre el país y su propio rol como medio de prensa. Con las metáforas bélicas afines al desarrollismo, destacaba su continua prédica para la concreción de los ideales del desarrollo:

En estos treinta años *Clarín* libró reiteradas batallas por el cambio de estructura. Fue precursor en materia de petróleo, aplaudió la iniciativa de Savio y reclamó por el retardo en que se incurre en el cumplimiento de sus objetivos; fue especialmente didáctico reclamando las batallas del riel y hasta sumó su esfuerzo empresario en la lucha por la celulosa y el papel diario. Estamos en verdad satisfechos de no habernos dado ni cedido cuartel en lo que han sido combates básicos para el cambio, para evitar los supuestos materiales de la disgregación. (*Clarín*, 28/8/1975).

Sobre su función como medio destacaba ser “objetivamente informativo” y no rehuir a la opinión editorial para que el lector encontrara una opinión “orientadora”. Sobre la situación nacional, alertaba que si no se ponía remedio a la “dramática situación, para la cual la palabra crisis resulta insuficiente” el país se precipitaría al grupo de los países acosados por el atraso (del cual se había salido treinta años antes, pero todavía no se había accedido al de las naciones “más adelantadas”). Según el editorial, las dos vertientes del “populismo” del escenario político argentino eran parte de la crisis. En especial, para el Justicialismo, la conciencia del límite del populismo estaba dada por la búsqueda de cambios estructurales. Lo había demostrado Perón en su primera etapa, por ejemplo negociando con la California por el abastecimiento petrolero. Pese a que en la coyuntura de 1975 se volvía difícil un cambio de estructura, *Clarín* destacaba positivamente recientes palabras de Cafiero donde mencionaba la necesidad del cambio estructural a través de las producciones básicas. Pero a pesar de todo concluía que en esos treinta años “hemos crecido”. Se cifraba tal situación en tener los mejores índices sociales de América Latina, en mayores aparatos de confort, en más calorías y en más servicios por habitantes. Claro que el atraso relativo hacía peligrar esta realidad. Era prioridad definir la crisis “honda” que amenazaba con “disgregar” la nacionalidad. El único camino era “el que asegure el esfuerzo de todos, sin admitir deserción de ninguna clase” (*Clarín*, 28/8/1975).

fue el principal nexo entre Videla y Perriau, como también una importante pieza para llevar adelante la estrategia represiva clandestina (para mayores detalles véase, Canelo, 2004; Dearriba, 2006; Jozami, 2006; Seoane y Muleiro, 2001 y Turolo, 1996).

5.3. El fallido intento de Lúder (septiembre-octubre de 1975): ¿adónde se está llevando al país?”

La crisis militar había erosionado la figura de Isabel. Hacia inicios de septiembre de 1975 aumentaban los rumores sobre su renuncia, la inhabilitación o un pedido de licencia presidencial. En las tapas de *Clarín* crecía la presencia militar, que representaba su presencia ya más desembozada en el escenario político¹⁰¹. Y su sección “Política” brindaba espacio a notas que informaban sobre el “pensamiento militar” ante la coyuntura (primero con cierta intermitencia, y luego hacia fin de año e inicios de 1976 con mayor recurrencia). Finalmente, el 13 de septiembre Isabel pidió una licencia por salud al Congreso, que le fue otorgada. La presidencia fue asumida provisionalmente por el presidente del Senado, Italo Lúder, iniciando lo que aparentaba ser un periodo de distensión política. Lúder pretendía frenar la influencia del lopezreguismo, sumar el apoyo del sector antiverticalista y a los mejores hombres del peronismo histórico para así salvar el proceso político¹⁰². Inmediatamente dio signos en ese sentido: limitó el poder de Julio González y cesanteó al interventor federal en Córdoba, el ultraderechista Lacabanne. Para reorganizar el poder gubernamental y el peronismo se nutrió de dirigentes peronistas que tenían buenos contactos con la oposición y las Fuerzas Armadas. Como él mismo, que tenía una fluida relación con los sindicatos -por ser asesor de la CGT, abogado de la UOM y amigo de Miguel-, con el arzobispado de Buenos Aires y con algunos políticos radicales y del Partido Intransigente. La asunción de Lúder abría dos variantes posibles en el escenario político argentino. Que Lúder se mantuviera en el poder mientras Isabel retomaba el mando formal de la presidencia, pero delegando el poder real sobre el peronismo histórico representado por el presidente interino (que Isabel “reinará pero no gobernará”). En esa hipótesis, Lúder procuraría acercarse a empresarios, sindicatos y la oposición política para concertar nuevos acuerdos que asegurasen la gobernabilidad. La otra

¹⁰¹ Es interesante comentar la tapa de la edición del 4 de septiembre de 1975. En la parte superior se hacía referencia a noticias vinculadas con el gobierno y el sindicalismo que mostraba a ambos hundidos en la incertidumbre (se informaba sobre que la presidenta no tomaría una licencia, se mencionaba la posible reestructuración de la “cúpula sindical” de las 62 Organizaciones, que Lorenzo Miguel se tomaría 30 días de vacaciones e informaba que Cafiero encontraría “difícil” su gestión con la banca privada). En la segunda mitad de la tapa, se informaba sobre la asunción de Viola a la jefatura del Estado Mayor del Ejército que se ilustraba con una foto que dominaba la tapa. Allí se veía en primer plano a Videla y a Viola por delante de una formación militar. En la imagen se destacaba la uniformidad, ya que todos los militares -además de estar con sus uniformes- aparecían en postura similar, parados y mirando hacia delante (que podía comprenderse como una alusión al futuro). En el copete se mencionaba que Viola había ratificado la cohesión total en las Fuerzas Armadas.

¹⁰² En el gabinete designó a Angel Robledo como ministro del Interior en reemplazo del controvertido Damasco, cuya imagen había quedado desgastada luego de la crisis militar y había generado recelos en el peronismo por el crecimiento de su figura como asesor político de Isabel. Robledo cumplirá un rol importante en los eventos políticos posteriores, al convertirse en uno de los peronistas que más trabajó para relegar definitivamente a Isabel del poder. Tomás Vottero fue designado como ministro de Defensa por Garrido, que también había quedado afectado por la crisis militar. Manuel Arauz Castex fue designado titular de Relaciones Exteriores.

opción era transformar el itinerario en una salida política perdurable, relegando definitivamente la figura de Isabel (Maceyra, 1983: 142-3). La oposición y las Fuerzas Armadas apoyaban esta variante. Pero no sería sencillo para el peronismo histórico presentar el golpe interno como un paso al costado voluntario de la viuda de Perón.

Ante el reemplazo presidencial, *Clarín* juzgó como “inconsistentes” y “contradictorias” las decisiones que había tomado el gobierno de Isabel en el último periodo (*Clarín*, 15/9/1975). Señalaba que el centro de la crisis era “el deterioro de la economía argentina”, donde el accionar guerrillero era un “telón de fondo” que se había incrementado en forma considerable. Cuatro ministros no habían podido detener la “tendencia declinante” y la gestión de Cafiero no mostraba “claridad” sobre las orientaciones que dieran corte definitivo a las dificultades. A Lúder -sin mencionarlo- lo emplazaba a que ejercitara el liderazgo y la autoridad reservadas por la Constitución al cargo presidencial. En tono lacónico exigía que el “gobierno gobierne” (*Clarín*, 15/9/1975). Pese a la celeridad de las demandas y su recurrente objeción al rumbo económico, mantenía una actitud expectante sobre el futuro del gobierno.

La gestión de Cafiero ante el FMI y la banca privada tuvo éxito a corto plazo. Obtuvo del organismo financiero un crédito automático por compensación de caída de exportaciones y por compensación en el aumento del precio del petróleo importado¹⁰³. Así, las obligaciones externas del país estarían cubiertas al menos hasta fin de año. Pero el problema de los pagos externos reaparecería con fuerza en febrero de 1976, ya en una coyuntura política de absoluta debilidad para el gobierno. Frente a la inminencia del otorgamiento crediticio *Clarín* destacaba que era “injusto” desmerecer la gestión ministerial, pero en forma cautelosa elegía no adelantar “un juicio optimista o pesimista” (*Clarín*, 16/9/1976). Los créditos ayudarían al corto plazo, pero advertía que no aportaban “confiables esperanzas” para el verano y menos para el otoño de 1976. No había que “ilusionarse” por lo logrado en las gestiones, porque si en ese lapso no se abordaba el “ordenamiento” de la economía para en el futuro renegociar una

¹⁰³ El FMI contaba con una línea de “crédito automático” para los países que tuvieran problemas con sus exportaciones. Argentina estaba dentro de la categoría de países afectados por la baja de sus exportaciones debido al cierre del mercado europeo para la venta de sus carnes. El criterio de “automático” se refería a que el organismo no imponía condiciones para el otorgamiento como sí lo hacía con los créditos “stand-by”, la línea crediticia más importante del FMI que Cafiero no solicitó, aunque firmó una carta de intención con ese fin que se mantuvo en secreto. El crédito por el aumento del precio del petróleo no era automático, sino que requería el cumplimiento de ciertos condicionamientos vinculados a la política impositiva (Kandel y Monteverde, 1976: 97). *Clarín* manifestó cierta ironía sobre este crédito, en tanto los negociadores argentinos tendrían que “ingeniársela” para explicar las razones de la declinación de la producción del petróleo en momentos en que todos los países realizaban un esfuerzo por autoabastecerse y cuando se trataba de un país que estaba en condiciones de lograrlo “sin excesivo esfuerzo” (*Clarín*, 9/9/1975). El autoabastecimiento petrolero era una de las demandas recurrentes del desarrollismo y de *Clarín*.

“racional reestructuración” de la deuda, no se habría hecho más que postergar por unos meses “el estallido de la crisis” (*Clarín*, 16/9/1976).

La transitoriedad de estos logros era puesta en evidencia a los pocos días por las “fuerzas vivas” del campo. El 19 de septiembre los empresarios ganaderos reunidos en Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina decretaron un paro ganadero que duró una semana. La Sociedad Rural Argentina y las agrupaciones más importantes de los empresarios agropecuarios apoyaron la convocatoria alegando la falta de respuesta del gobierno a sus demandas¹⁰⁴. Para *Clarín* el paro era legítimo en tanto el sector sufría la crisis de rentabilidad que afectaba a los sectores empresarios de la economía argentina, y el campo constituía “una porción vital de la economía” que no estaba sustraída a los inconvenientes económicos (*Clarín*, 24/9/1975). La medida era “un serio llamado de atención” que tenía que ser aprovechado como una oportunidad para formular “una política agropecuaria permanente que abandone las improvisaciones y las soluciones de coyuntura y que se defina como una parte de la política nacional de desarrollo” (*Clarín*, 24/9/1975)¹⁰⁵.

Poco después formularía nuevas y severas críticas sobre la política económica a raíz de la aprobación de un proyecto en la Cámara de Diputados que autorizaba un reajuste en el presupuesto nacional. El reajuste se originaba en la elocuente brecha del déficit fiscal. *Clarín* volvía sobre los recientes cambios ministeriales en Economía como ejemplo de fragilidad y culpaba a los ministros de haber “transitado por senderos errados” (*Clarín*, 27/9/1975). Denunciaba el “fantástico tamaño del déficit fiscal” cuya falta de recursos genuinos para financiar era la fuente de la “inflación más galopante de nuestra historia económica”. Había que “aumentar la dimensión de la economía o reducir la del Estado”. Su enunciación perentoria finalizaba advirtiéndolo:

Es tiempo que se intente la necesaria rectificación. Porque si no se pone término al despilfarro y no se encaran de inmediato las medidas que conduzcan al desarrollo de las fuerzas productivas, no habrá aquí ni justicia social, ni independencia económica sino un país lamentablemente malogrado en sus aspiraciones de grandeza. (*Clarín*, 27/9/1975).

Las reivindicaciones tradicionales del peronismo, como la justicia social y la independencia económica, eran objetivos legítimos. El problema no eran los objetivos, sino la

¹⁰⁴ En una solicitada publicada en los diarios nacionales, la Sociedad Rural Argentina informaba que ante la “desastrosa situación” del sector agropecuario y ganadero se solidarizaba con el paro y exhortaba a sus asociados a cumplirlo (*Clarín*, 19/9/1975, p.9)

¹⁰⁵ Casi un mes después, frente al segundo paro agropecuario convocado por los productores ganaderos, el matutino reafirmará su posición (*Clarín*, 22/10/1975)

instrumentalización económica para llegar a esas metas. Para ello todavía había tiempo de aplicar la “necesaria rectificación”.

Hacia fines de septiembre la Iglesia, a través del provicario castrense Victorio Bonamín, agregó un elemento más de desestabilización a la frágil situación política. En una homilía realizada el 23 de septiembre, al cumplirse un mes de la aparición del cuerpo de del Valle Larrabure, Bonamín dio un poco sutil aval para que las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno e intervinieran en la “guerra contra la subversión”. Allí, el provicario aseguró que el Ejército Argentino estaba “expiando por todos” y “velando con las armas en la mano los festines de los corruptos”. Y definió a los militares como una “falange de gente honesta, pura, que hasta ha llegado a purificarse en el Jordán de la sangre para poder ponerse al frente de todo el país, hacia grandes destinos futuros”. Sin miramientos, le pedía a las Fuerzas Armadas “algo más” de lo que estaba “más allá de su función de cada día”. Como menciona Terragno (2005: 64), no se trataba de un mero llamado “golpista”. El provicario castrense bendecía la “cruzada” y la “guerra” de los militares contra la guerrilla. Más allá de si tomaran o no el poder, sus acciones estarían justificadas por lo que significaría ganar esa “guerra”¹⁰⁶. Su provocador discurso tuvo amplia repercusión en los medios políticos y en la prensa, causando el rechazo de sectores peronistas, el sindicalismo y la oposición. El provicario castrense tuvo que dar explicaciones al Congreso, donde negó que sus expresiones tuvieran connotación “golpista”. Sus definiciones fueron defendidas por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y vicario castrense, monseñor Adolfo Tórtolo, quien aseguró que la homilía estaba “dentro de lo que debe ser el magisterio de un obispo” (cit. por Terragno, 2005: 64). Lo cierto es que las declaraciones ayudaron aún más a “enrarecer” el clima político, lo que obligó a Lúder a declarar, el 26 de septiembre, que una ruptura del orden institucional abriría “la brecha al caos social y a la subversión apátrida” (*Clarín*, 27/9/1975, pp. 6-7). *Clarín* reprodujo en su superficie redaccional las palabras de Bonamín y las posteriores repercusiones¹⁰⁷, pero no se pronunció editorialmente sobre sus graves palabras. Un *silencio*

¹⁰⁶ Las expresiones más controvertidas de Bonamín, fueron: “Cuántas veces Dios se ha servido de personas morales como si fueran personas físicas, individualidades, para sus fines. ¿Y no querrá algo más de las Fuerzas Armadas, que esté más allá de su función de cada día, en relación a una ejemplaridad sobre toda la Nación?”

“Por una parte debe alzarse los que está tan caído, y qué bueno es que sean los primeros en alzarse los militares. Que se pueda decir de ellos que una falange de gente honesta, pura, hasta ha llegado a purificarse en el Jordán de la sangre para poder ponerse al frente de todo el país hacia grandes destinos futuros. Les toca sufrir por lo que los demás gozan. Les toca velar con las armas en la mano los festines de los corruptos, que gozan de la vida gracias a otros que les defienden las fronteras físicas, geográficas, morales, para que no se los moleste en sus convites” (cit. por Kandel y Monteverde; 1976: 121). Tal fue la influencia de estas palabras, que en la asonada de la Fuerza Area encabezada por Capellini, en diciembre de 1975, sus proclamas retomarán frases literales de la homilía.

¹⁰⁷ *Clarín* (24/9/1975, p.8) y *Clarín* (25/9/1975, pp. 14 y 40).

estratégico que, en esa crítica coyuntura, no expresaba un consenso explícito pero daba crédito a sus formulaciones.

Sí, en cambio, se pronunció sobre otras de las alternativas institucionales que se barajaban para solucionar la crisis política: el adelantamiento de las elecciones. A fines de septiembre el líder radical Balbín le había propuesto a Lúder adelantar las elecciones de marzo de 1977 a noviembre de 1976, y que durante ese lapso retuviera el gobierno interino con el apoyo de los partidos políticos que dominaban el Congreso y el supuesto aval de las Fuerzas Armadas (Kandel y Monteverde, 1976: 110; Terragno, 2005: 63). De hecho, Balbín había declarado públicamente que a 1977 había que llegar “aún con muletas”. Entre otros factores, la UCR suponía que no habría golpe de Estado en medio de una campaña electoral. Pero estos planes necesitaban que Isabel no retomara el poder, o que “reinara pero no gobernara” y el poder real fuera ejercido por Lúder y Cafiero¹⁰⁸. El proyecto de adelantamiento recibió un categórico rechazo por parte de *Clarín* (4/10/1975). Según su punto de vista las elecciones tendrían un mero “efecto analgésico” porque:

(...) a nadie se le había ocurrido atribuir al solo hecho de votar, una virtud terapéutica de alcance tan extendido como para hacer desaparecer las consecuencias de la aguda crisis económica o detener la notoria escalada del terrorismo o, también, tonificar las fuerzas desfallecientes de la moralidad pública.

Según el matutino, el mal estado de la economía, que comprometía “las bases materiales de la nación” era lo que alimentaba las tensiones sociales y el “terrorismo”. Este marco de “discordia” y “desunión” sería el “telón de fondo” de las elecciones futuras. Y la “agitación adicional” que derivaría de los comicios no podía ser considerada un calmante. En definitiva:

No se trata, pues, de una cuestión de términos o plazos, sino de cómo llenarlos. Suponer que la práctica cuidadosa de las formas institucionales tiene de por sí el carácter de recurso salvador significa ignorar la naturaleza de los problemas nacionales, ubicando sus causas en la simple inobservancia de las normas legales. (*Clarín*, 4/10/1975).

Como se ha visto, para el matutino la institucionalidad democrática no era concebida como un sistema que *per se* asegurara los valores y objetivos que el desarrollo debía

¹⁰⁸ Por esos días, el tradicional *cartoon* de Landrú en *Clarín* reflejaba el clima político atravesado por la incertidumbre sobre el futuro. Se titulaba “Año” y mostraba a tres hombres visiblemente transpirados caminando por un desierto en dirección a un cartel que se encontraba ubicado a una gran distancia con la inscripción “77”. Uno de los hombres se preguntaba retóricamente, “¿No será un espejismo?” y se contestaba, “Cada vez lo veo más lejos” (*Clarín*, 9/10/1975, p. 14). El título de la nota que dominaba la página donde estaba incluido el *cartoon*, informaba “Clima de incertidumbre”, en relación al futuro político de Isabel.

proveer¹⁰⁹. Es más, la democracia mal ejercida podía ser un obstáculo para la implementación programática del desarrollo. En este sentido, el desarrollo era un fin en sí mismo, mientras que las formas republicanas y la democracia eran instrumentos para su consecución que podían ser desechados de no ser eficaces. Esta posición, que subyacía en el pensamiento de *Clarín*, no solo se ligaba con la perspectiva particular del desarrollismo, sino que ponía de relieve la ausencia de “fe democrática” dentro de la cultura política argentina de la época (Ollier, 2005; Romero, 2004). “Fe democrática” que, luego de la experiencia fraudulenta de la década del '30, fue debilitándose con las experiencias dictatoriales de 1955 y 1966 y la proscripción del peronismo, que en la “Revolución Argentina” alcanzó a todos los partidos políticos. La proscripción quitó definitiva credibilidad a la restauración democrática, mientras el parlamento funcionaba sobre el vacío político, los dirigentes políticos carecían de representatividad y los presidentes “elegidos” tenían un margen acotado de acción. En este marco, los conflictos sociales se tramitaban en otros espacios donde prevalecía el peso de las corporaciones (Cavarozzi, 2006). Las experiencias democráticas de Yrigoyen y de Perón también propiciaron la ausencia de un republicanismo “fuerte” por el ilimitado ejercicio de la autoridad presidencial y la descalificación y poco respeto de las normas jurídicas republicanas (Romero, 2004: 216-217)¹¹⁰. En definitiva, la tradición política argentina legitimaba que las normas jurídicas o formales de la institucionalidad pudieran ser incumplidas si éstas no aseguraban el bienestar popular o ciertos objetivos políticos presentados como una mejora del bien común. La democracia “formal” no debía obstaculizar el ejercicio de la democracia “real” (Romero, 2004: 216). El sistema democrático era un instrumento cuya legitimidad residía en la posibilidad de concretar objetivos precisos, no un fin en sí mismo al cual se debía arribar. En tanto esos objetivos se concretaran, la prolongación democrática tenía un sentido preciso. Pero si estos objetivos no podían asegurarse en o por la democracia, entonces podía ser pasible de relevo transitorio por otra forma de dominación política hasta conseguir una democracia “real”, madura y sólida. En el caso del argumento esbozado por *Clarín*, las elecciones eran un componente necesario pero no suficiente dentro del sistema democrático. Y en la coyuntura había problemas más profundos y estructurales que con el mero cumplimiento del acto eleccionario no podrían resolverse. De concretarse, funcionaría como un “analgésico” que amengua transitoriamente un dolor o molestia pero no resuelve la raíz del problema, las causas reales de la “enfermedad” argentina. Es interesante que si, como

¹⁰⁹ Cabe destacar que la palabra “democracia” no era mencionada en el editorial.

¹¹⁰ Además, en la década del '70, había sectores políticos que no creían en el sistema democrático liberal por otros motivos de tipo ideológicos, como los grupos revolucionarios ligados al pensamiento marxista o los grupos de derecha con inclinaciones fascistas.

menciona el editorial en su párrafo final, las causas profundas de los problemas nacionales no se relacionaban con la inobservancia de las normas legales y su resolución no estaba dada por la mera práctica formal de las instituciones, entonces la inobservancia de la legalidad para emprender la solución estructural de esos problemas estaba potencialmente legitimada o podía ser excusada provisoriamente. Más aún, podía ser estratégicamente necesaria. Implícitamente, un golpe de Estado -que ni era legal ni respetaba la institucionalidad- podría llegar a ser legítimo si en sus objetivos cumpliera los horizontes refundacionales que pregonaba el diario. De aquí se desprende una concepción de las instituciones republicanas donde éstas aparecen más como objeto de pujas corporativas o instrumento para la imposición de intereses sectoriales que como herramientas para consolidar un régimen de convivencia.

Por otra parte, el rechazo a la salida electoral acentuaba el profundo descrédito hacia las soluciones partidarias y la crisis de representatividad en la que estaban inmersos los partidos políticos. De la misma manera que el MID (Yanuzzi, 1996), *Clarín* enarbolaba un discurso antipoliticista -o al menos antipartidario-, ya que su argumentación tendía a aceptar que, de fracasar el gobierno constitucional, las soluciones estructurales que necesitaba el país eran pasibles de ser aplicadas por un gobierno *de facto*.

Pese a ello, y como queda claro en el análisis hasta aquí realizado, el posicionamiento de *Clarín* no implicaba un consenso explícito y activo del diario hacia el golpe de Estado. En efecto, un día después en un editorial dominical, *Clarín* mencionaba públicamente que la crisis podía resolverse dentro de los marcos institucionales (*Clarín*, 5/10/1975). Pero lo hacía resaltando, con cierta ambigüedad y gran dramatismo, el agravamiento de todos los datos de “la crisis” y la ineficacia de las instituciones y los dirigentes para estructurar una política viable en ese contexto. El editorial, al igual que aquel del 13 de julio de 1975, abarcaba la totalidad de la página 10 de la edición dominical y se preguntaba con un tono apocalíptico “¿A dónde se está llevando al país?¹¹¹. Por primera vez desde la agudización de la crisis política luego del “Rodrigazo”, *Clarín* mencionaba la palabra “golpe” en su página editorial. Lo hacía vinculado a “las suspicacias de todo orden” que corrían sobre “el grado de fidelidad o de adhesión que los diversos grupos se adjudican con respecto a las vigencia de las instituciones” y a partir de que muchas veces la crítica era entendida o se “hacía aparecer” como un ataque solapado contra el orden legal “o como estímulo al imaginario golpe que habrá de suprimir el funcionamiento de los poderes constitucionales”. Ante los tiempos difíciles, indicaba que había quienes solo se preocupaban por las cuestiones formales de la

¹¹¹ Un interrogante amplio que presuponía distancia y cierta impersonalización en relación al alocutario que se construía; y además con un tono teñido de dramatismo.

institucionalidad, creyendo que con su mera observancia se produciría por sí mismo “las curaciones que reclama el cuerpo enfermo de la Nación”. En cambio, sí eran más plausibles las posiciones de quienes sostenían que las instituciones eran el marco que fijaba las reglas dentro de las cuales tenían que dirimirse los grandes problemas nacionales. Su resolución constituía la cuestión de fondo. Y agregaba:

No parece justo ni correcto inferir de este razonamiento alguna suerte de falta de respeto hacia la vigencia del orden institucional. Por el contrario, las formas de organización política que rigen la vida de los argentinos, logradas a través de luchas y sacrificios, saldrán prestigiadas en cuanto se consiga demostrar que dentro de ellas es posible dar solución a los problemas cruciales que hoy enfrenta la República.

Pensar que es cierto lo contrario no tiene hoy base alguna de sustentación. El país entero se manifestó hace casi cuatro años por la vigencia plena del orden constitucional. Ella fue conseguida y no obstante que todos los poderes funcionan de acuerdo con las prescripciones legales, los problemas nacionales, lejos de encontrar solución, se han venido agravando hasta llegar a situaciones críticas.

La descripción de esas “situaciones críticas” conformaba el núcleo argumentativo del editorial. Se repetía, en principio, el alerta por el estado de la economía. La inflación “sin precedentes en nuestra historia” era causa de la “falta de confianza” en la moneda, el gasto “especulativo”, el “premio a las maniobras parasitarias”, el castigo para el que invertía y la “corrupción” estimulada por un Estado que imprimía papeles que en poco tiempo se desvalorizaban. Las devaluaciones convertían al peso en un “objeto microscópico” (téngase en cuenta la política de “minidevaluaciones” de Cafiero) para sostener el “desfalleciente esfuerzo exportador” que “malvendía” los productos que solo resultaban competitivos porque eran elaborados con bajos salarios. Mientras, se “deterioraban” los “términos del intercambio” con la “pesada hipoteca” de importaciones provenientes en su mayoría de las naciones industriales. Para colmo la Nación malgastaba “irresponsablemente” sus divisas adquiriendo fuera productos que “encierra celosamente en su subsuelo”, manifestando su incapacidad para explotar lo que tenía. En este marco, no era extraño recurrir a los préstamos externos para “salir del paso”, en vez de utilizarlos para encarar las obras básicas que empujaban a la economía. Es así que en los hechos surgía la “realidad de la dependencia económica que con tanto ahínco se dice combatir”. En este “triste panorama” no era extraño observar a una sociedad desorientada y dividida que buscaba en el extranjero a los culpables. El reflejo de ello era observable en la actitud de los dirigentes de las “distintas corrientes de opinión”. Principalmente, el ejemplo más pernicioso lo ofrecía el “partido gobernante”, cuyas

“rencillas” y “desarmonía” era sumamente “gravosa” para la Nación¹¹². Estas “disidencias” y el “clima de desesperanza” estimulaban la “desafección” del ciudadano de los intereses de la comunidad y lo aislaban en una “cómoda abstención”:

Así, por descreimiento o por miedo, la vida política pierde a los más valiosos protagonistas y la clase dirigente queda sin la indispensable sustentación de sus bases.

Ese divorcio de las cúpulas de las masas, que son su razón de ser, lleva a que éstas interpreten cada vez menos a quienes suponen dirigir.

Los dirigentes desconectados de sus bases caían en “falsas apreciaciones”, que derivaban en los planes económicos que ignoraban los problemas económicos y habían llevado a la crisis. Y desde allí se tomaban decisiones prontamente rectificadas, pero que mientras tanto ponían en suspenso las actividades del país y llevaban “incertidumbre” y “zozobra” a los habitantes. A esto debía sumársele la “pincelada sombría” de la muerte y la violencia que se habían transformado en un hecho habitual. La política estaba “de luto” y había dejado de ser una actividad de ideas y sufragios. Pese a la lúgubre descripción, *Clarín* aún avizoraba un margen de acción posible:

Todo lo dicho no alienta el optimismo. Pero no debe olvidarse que todas las naciones tienen sus horas críticas (...). La Argentina está llegando a la hora en que necesita de la virilidad, la lucidez y el trabajo de sus habitantes. Y, por sobre todas las cosas, de la inteligencia y determinación de sus gobernantes.

Es tiempo, pues, de corregir el rumbo y de sacar a la República del camino que la lleva a su decadencia, cuando no a su desintegración (...).

Solamente un gobierno que tenga un plan orgánico y coraje podrá llevar dichos objetivos [*los de la vocación ascendente del país*] a la meta ansiada por todos los argentinos para superar el descalabro progresivo que amenaza a la patria en el momento más crítico de toda su historia. **De lo contrario; ¿adónde se está llevando al país?**¹¹³ (*Clarín*, 5/10/1975).

Tal vez pueda interpretarse el editorial como un guiño preciso al gobierno de Lúder, advirtiéndole que tenía la última posibilidad de corrección del rumbo dentro de la institucionalidad (cabe destacar su referencia a la “virilidad”, teniendo en cuenta el género de quien ejercía la presidencia). Isabel aún se encontraba de descanso y los rumores sobre su futuro eran diversos. De la lectura atenta del editorial se desprende que *Clarín* se incluía formalmente entre aquellos que optaban por una salida institucional y no por el golpe de Estado. Pero sus argumentos en recurrente tono de advertencia perentoria no parecían olvidar

¹¹² Una crítica similar se repetirá casi una semana después al editorializar sobre “Los partidos y la función pública”. El editorial mencionaba la perturbación que la vida del país había tenido en muchas ocasiones por los problemas del partido oficialista en el ejercicio del gobierno, lo que había llevado a confundir los límites entre la actividad partidaria y el ejercicio de la tarea de gobierno (*Clarín*, 10/10/75).

¹¹³ El remarcado es de *Clarín*.

ni deslindar que, de no cumplirse ciertas condiciones, el golpe se erigía en el horizonte político como la casi “*inevitable*” resolución de la crisis (el tono dramático del párrafo final antes citado, que caracterizaba también otros discursos de la época, permite avizorar su consenso sobre la necesidad eventual de soluciones drásticas). Había cierta ambigüedad en sus reflexiones, porque aunque el matutino apostaba por la institucionalidad, también dejaba un resquicio argumental que legitimaba una salida no institucional y salvaguardaba su propia posición editorial. Al mismo tiempo que se postulaba que no tenía “sustentación” una salida por fuera del orden institucional, se mencionaba que pese a que todos los poderes funcionaban legalmente los problemas nacionales se habían agravado. Implícitamente se validaba la hipótesis contraria a una resolución “institucional”. De todas formas, un punto era claro: si no se escuchaban las advertencias que el matutino lanzaba públicamente y se cambiaba el rumbo de la economía, entonces la posibilidad de que se efectivizara una salida no institucional sería responsabilidad directa de quienes no ejecutaban las medidas específicas para evitarlo. No sería responsabilidad de quien lo estaba advirtiendo. El argumento se alineaba con la desafección que el desarrollismo iba mostrando sobre la suerte del gobierno, y que quedaría palmariamente registrada en una solicitada de difusión masiva que hiciera pública el MID el 19 de octubre de 1975, titulada “*Ya no queda ningún margen para el error*”, que se analizará más adelante¹¹⁴.

El mismo día que *Clarín* se preguntaba adónde se estaba llevando el país, la situación política nacional se inclinaba un poco más hacia su total militarización y la consecuente reducción de la arena política. El 5 de octubre Montoneros realizó un fallido intento de copamiento del Regimiento 29º de Infantería de Monte en Formosa que concitó el rechazo de la clase política y otros sectores de la dirigencia nacional (empresarial, sindical, eclesiástica, entre otras). Era el primer ataque de tal envergadura que Montoneros dirigía contra un objetivo del Ejército (hasta ese momento había concentrado sus acciones guerrilleras en el espacio urbano, pero desde fines de agosto de 1975 había comenzado a atacar a las Fuerzas Armadas). El conato de copamiento exponía el viraje en la estrategia de la organización guerrillera peronista, que al embestir contra el Ejército descartaba definitivamente la posibilidad de concretar los tradicionales planteos del peronismo que integraban a las Fuerzas

¹¹⁴ La ambivalencia que registraba el discurso editorial de *Clarín* frente a las posibles “soluciones” a la crisis nacional, en tanto rechazaba la posibilidad de una salida por fuera del marco institucional, pero a su vez levantaba el tono admonitorio y apocalíptico de sus críticas y dejaba resquicios argumentales para convalidar una eventual ruptura, puede vincularse de alguna manera a la posición ambigua en la que había quedado el MID frente al FREJULI. El MID pertenecía a un frente político gobernante al que criticaba en términos cada vez más duros y globales, y cuyo distanciamiento se consolidaba a medida que el gobierno no aplicaba las rectificaciones que planteaba. Pero aún en octubre de 1975 pertenecía formalmente al frente. Esta situación paradójica desde el punto de vista político puede haber tenido influencia en la política editorial de *Clarín*.

Armadas en el “movimiento de liberación” (Anguita y Caparros, 2006: 384). Por su parte, el ataque terminó de cohesionar internamente al Ejército para reprimir a Montoneros, legitimó a la fracción antiperonista y partidaria de la represión ilegal del arma y relegó definitivamente a los sectores más nacionalistas (Andersen, 2000: 195). Y fue una excusa política ideal para convalidar legalmente la extensión de la represión encabezada por las Fuerzas Armadas a todo el país (la acción represiva del Ejército estaba acotada a Tucumán desde febrero de 1975).

El 6 de octubre el gobierno creó por decreto 2770 el Consejo de Seguridad Interna que dependería de la presidenta y estaría integrado por los ocho ministros del gabinete y los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Tendría como objetivo conducir políticamente la “lucha contra la subversión” y, en los hechos, ampliaba a todo el país la intervención represiva de las Fuerzas Armadas. También se creaba el Consejo de Defensa Nacional, integrado por el ministro de Defensa y los tres comandantes con la asesoría del Estado Mayor Conjunto para “conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión”. El andamiaje legal reforzaba la subordinación del poder político al militar en el orden represivo y también político. Luego, el 8 de octubre, Lúder firmaría el lúgubre decreto de “aniquilamiento” 2772 por el cual “las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país” (*Clarín*, 9/10/1975, p. 17)¹¹⁵. El manto de legalidad que ofrecían los decretos y la autonomía en la represión que otorgaba el poder político a las Fuerzas Armadas fue una exigencia de los comandantes. A cambio se comprometían a no derrocar al gobierno. En los hechos, los decretos implicaron el predominio en la represión de las fuerzas militares y policiales desplazando a la Triple A, que prácticamente desaparecerá en el primer trimestre de 1976 (García, 1995: 437-42) y cuyos cuadros más tarde serán integrados en los Grupos de Tareas que operaran clandestinamente durante la dictadura militar.

La legalización del accionar represivo militar contra la “subversión” contó con la aprobación de la dirigencia política, empresarial y sindical y de amplios sectores de la población civil. Los últimos meses de exacerbación de la violencia política habían sido acompañados por el distanciamiento de la sociedad civil de las acciones violentas que

¹¹⁵ También se determinaba que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia, la Secretaría de Informaciones del Estado, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedaban afectados al Consejo de Defensa a los fines de la “lucha contra la subversión” y que los gobiernos provinciales debían proveer todos los medios policiales y penitenciarios requeridos por el Consejo. La totalidad de la estructura represiva estatal quedaba bajo el mando real de las Fuerzas Armadas, que se amparaba en un marco legal para ampliar la militarización de la política (Seoane y Muleiro, 2001: 51).

aparecían, cada vez más, como rendición de cuentas entre grupos facciosos desconectados de base popular alguna (esto era aún más problemático en aquellas organizaciones armadas como Montoneros o el ERP que se decían representantes del “pueblo”). Además, los crímenes de las bandas paramilitares de derecha como la Triple A contra el “extremismo” de izquierda aparecían como actos “irracionales” e “incontrolados” que desbordaban el poder de policía del Estado -cuando no contaban con su aval-. Desde diferentes sectores de la opinión pública se legitimaba la idea de que existían dos “extremismos”, uno de signo de izquierda y otro de derecha, que actuaban “irracionalmente” y los cuales debían combatirse (el mismo *Clarín* se expresaba en ese sentido, véase *Clarín*, 27/10/1975)¹¹⁶. En contraste a esa violencia “irracional”, las Fuerzas Armadas se presentaban como el actor estatal que trascendería las disputas facciosas y ejercería el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado, amparado por una estructura legal concedida por el poder político (cuando, como es sabido, ellas mismas ya eran protagonistas de la represión ilegal a través de la aplicación de torturas, los fusilamientos clandestinos y el secuestro y la desaparición forzada de militantes políticos, entre otros métodos espurios empleados, aunque sin la sistematización posterior al golpe de Estado¹¹⁷). De esta manera, la represión de los “extremismos” ejercida por las Fuerzas Armadas se presentaba como “racional”, “legítima” y “controlada”. Si tanto el “extremismo” de izquierda como el de derecha eran asociados con el “caos” y el “descontrol”, las Fuerzas Armadas pretendían ser asociadas al orden y el control estatal. Lo que debe tenerse en cuenta es el peso que esta percepción tuvo durante la antesala del golpe y durante los primeros años del “Proceso”, cuando vastos sectores de la ciudadanía aprobaron la conveniencia de que la represión contra la “subversión” fuera ejercida de manera “ordenada” por las Fuerzas Armadas, a diferencia del “descontrol” de las bandas ilegales como la Triple A que habían operado años antes.¹¹⁸

¹¹⁶ En las crónicas del diario *Clarín* que referían a asesinatos, secuestros u otras acciones violentas con motivaciones políticas, se definía como “extremistas” tanto a quienes ejecutaban las acciones en nombre de la Triple A u otras bandas paramilitares de derecha, como a quienes pertenecían a las organizaciones armadas de la guerrilla, montonera o del ERP. En el caso de las organizaciones político-armadas de izquierda, a medida que sus acciones armadas fueron recrudeciendo en el segundo semestre de 1975, las crónicas destacaron su carácter “criminal” e “inhumano” (véase, por ejemplo, el comentario sobre los detalles del cautiverio del coronel asesinado por el ERP, del Valle Larrabure; *Clarín*, 26/9/1975). Las crónicas tendían a despolitizar las acciones -sin explicación de sus causas políticas o de una mayor contextualización de los hechos- y a describirlas como hechos delincuenciales comunes. Lo único que las restituía a un ámbito político era que aparecían publicadas en la sección “Política” (para un análisis de las crónicas del diario *La Nación* y *La Opinión* sobre las acciones armadas y la violencia política, véase Schindel, 2003).

¹¹⁷ Andersen, 2001; Anguita y Caparrós, 2006; García, 1995; Novaro y Palermo, 2003; Sáenz Quesada, 2003; Seoane y Muleiro, 2001.

¹¹⁸ Novaro (2006: 57) destaca cómo la sociedad civil combinó una sensación de terror ante la represión con la autoinculpación por la frustración y el “engaño” de las promesas de cambio social, y por ser parte de esa sociedad “desviada”. Por lo tanto, había que dejar en manos de fuerzas “superiores” la rectificación del rumbo y el consecuente castigo por los “delirios” de antaño. A su vez, esos mismos sectores civiles se fueron distanciando

El ataque en Formosa despertó la agria condena del matutino, que lo calificó como una “agresión insensata y alevosa” que reflejaba la negación “terminante y final” de cualquier tentativa de “convivencia” y “conciliación” (*Clarín*, 9/10/1975). La intervención militar decretada por Lúder era aprobada en forma contundente. El tono de cruzada palingenésica recorría todo el editorial. No era solo la violencia que con su “nihilismo paralizante” atentaba contra la paz, sino también que en otros aspectos de la vida nacional se verificaban conductas y hechos que destruían la “entereza moral de nuestro pueblo”. En esta línea, recurría a la “voz rectora” de la Iglesia para ofrecer su visión sobre la situación nacional en relación a la “violencia”. Citaba las palabras del arzobispo de Rosario que el 7 de octubre, en un discurso realizado también en clave de cruzada, había afirmado que en la Argentina se había acabado el orden, la paz y la tranquilidad y había llegado

el momento de alertar sobre otro peligro de consecuencias igualmente funestas: si en nuestra patria no se detiene la ola de inmoralidad creciente, el país no solo no saldrá de las crisis que lo aqueja sino que entrará muy pronto en una decadencia que lo llevará al derrumbe como nación (*Clarín*, 9/10/1975)¹¹⁹.

Clarín compartía la advertencia del obispo sobre el “relajamiento de los escrúpulos morales” que se observaba en el pueblo. En consonancia, el editorial estaba cargado de referencias de fuerte contenido ético y moral (la palabra *moral* era mencionada en cinco oportunidades y se utilizaban otras definiciones vinculadas como decaimiento moral” o “quiebra de la ética”). El Estado llevaba una parte sustancial de la responsabilidad y los que ocupaban los poderes públicos, lejos de dar el ejemplo, renovaban el “espectáculo del fraude, del negociado o de las prácticas, que sin ser delictivas, se acercan peligrosamente a lo que no puede ser admitido como ético”. Eso no era lo más “censurable”, sino que más allá de la actitud de los funcionarios que podía ser imperfecta por la condición humana, era el mismo sistema el que fomentaba la corrupción y estimulaba el incumplimiento de las leyes. La prueba era que mientras desde la esfera oficial se alzaban continuas advertencias contra “los especuladores”, “los cultores del contrabando”, “los llamados terroristas económicos” y “los agiotistas”, a la vez el mismo sistema fomentaba todas esas conductas. Según el editorialista no podía esperarse algo diferente de un sistema que “adjudicaba a las cosas precios que no

de los que aparecían como principales responsables de la debacle: partidos políticos, sindicatos, y fundamentalmente los “activistas” de izquierda”. Para un profundo análisis de las condiciones sociales en las que se asentó el golpe, la dictadura y la práctica del terrorismo de Estado, véase Vezzetti (2002). También en Feierstein (2007), puede consultarse una interpretación más amplia del terrorismo de Estado como una práctica social genocida.

¹¹⁹ El arzobispo adjudicó al Estado “una parte sustancial de culpabilidad” por la situación. También habló de la infiltración marxista en la iglesia y las universidades (Terragno, 2005: 66).

correspondían a su valor”, fomentaba la “holgazanería” o penalizaba el “esfuerzo inversor” y estimulaba la circulación de fondos por senderos clandestinos. Ética y economía se entrelazaban en el diagnóstico (recordando las premisas de la “ética protestante” analizada por Weber). Para *Clarín*, cualquiera fuera el intento de explicar la violencia, que era parte integrante de la quiebra ética, no podía obviarse que su causa “más profunda” consistía en “el grave desquicio de nuestro orden económico”. De allí que la extensión de la represión, aunque necesaria y justificada, por sí sola no resolvería la cuestión:

No caben ya dudas de que nuestro país se encuentra hoy en guerra. Tampoco deben existir vacilaciones en cuanto a que la empresa armada y violenta de la subversión debe ser combatida con las armas que la República ha depositado en sus fuerzas militares. Pero en este conflicto global, que abarca todos los sectores de la vida nacional, existen otros teatros de operaciones donde el combate debe ser llevado sin tregua.

La regeneración moral de los diversos aspectos de la vida argentina no puede demorarse. La nobleza de la causa que se defiende no admite que los mandamientos éticos sean simples recitados (...)

Pero también es imperativo reconstruir los cimientos materiales de la Nación y sobre ellos edificar el orden económico que dé satisfacción a las apetencias de sus habitantes. Resulta así vital recuperar el lamentable tiempo perdido, rectificar el rumbo equivocado y reunir al país en torno del objetivo de todas las generaciones argentinas: hacerlo grande y próspero.

(...) No reconocerlo llevará a agotar los esfuerzos en una interminable represión que se añadirá como una más a la lista de las frustraciones argentinas. Porque como lo decía el papa Paulo VI en la encíclica antes citada “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”.

Apelando nuevamente a la palabra de la Iglesia, en este caso en la cita de la encíclica “*Populorum Progressio*” del Papa Paulo VI, realizaba una interpretación que abrevaba de su visión economicista y que tendía a simplificar las causas de la violencia política de las organizaciones de izquierda¹²⁰. La represión dentro de una “guerra” estaba justificada, pero al estar desconectada de una política global que atacara las causas económicas del fenómeno “subversivo” terminaría condenada al fracaso. Su interpretación, además de sobrevalorar el potencial de las soluciones económicas para resolver los conflictos sociales y políticos, legitimaba la preeminencia del aspecto militar sobre el político para encarar desde el Estado los desafíos de la lucha armada. Por otra parte, el editorial, cargado de referencias “éticas” y “morales”, no mencionaba tales condicionamientos a la hora de avalar la represión de las

¹²⁰ La encíclica, del 26 de marzo de 1967, rechazaba las estructuras económicas que promovían la injusticia y hacía hincapié en el desarrollo como forma para superar las injusticias sociales dentro y entre los países (puede consultarse su versión en español en http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html). En un editorial de septiembre de 1976, *Clarín* volvía sobre la encíclica para destacar que el “desarrollo” abarcaba una dimensión moral, y no meramente material. Fundamentalmente, esgrimía el argumento contra aquellas críticas que señalaban que el desarrollo solo tenía fines materialistas disociados de todo fin espiritual (*Clarín*, 25/9/76).

Fuerzas Armadas. Su moderada objeción, o la expresión de ciertas reservas sobre la “solución” represiva, se vinculaban con criterios pragmáticos, por los cuales no tendría finalidad alguna reprimir sino se encaraba como parte de un plan integral que eliminara las causas que daban pábulo a la “subversión”. Estas, en su visión, desaparecerían por la propia fuerza del progreso al hacer grande y próspero al país a través del desarrollo¹²¹. Para *Clarín*, “las verdaderas armas de la paz” -así se titulaba el editorial- eran las del desarrollo¹²².

A propósito de cómo debía encararse la “lucha antsubversiva”, es interesante analizar la proposición del matutino expresada hacia fines de noviembre de 1975. En ese momento, las Fuerzas Armadas ya se encontraban operando en todo el país en cumplimiento de los decretos de octubre, y la Cámara de Diputados acababa de aprobar un proyecto de Ley de Defensa Nacional enviado por el Ejecutivo que se había “adecuado” para complementar la cobertura legal en la lucha contra la guerrilla. El proyecto de Ley era una concesión más del gobierno nacional a las Fuerzas Armadas: entre sus aspectos más importantes ubicaba a los “delitos subversivos” bajo juzgamiento de tribunales militares que quedaban facultados para aplicar la pena de muerte prevista en el Código de Justicia militar¹²³. *Clarín* (22/11/1975) aprobó la modificación del marco legal frente a la “necesidad de erradicar las actividades subversivas”, porque las previsiones del sistema legal en tiempos “normales” se habían visto desbordadas por la acción guerrillera. Declaraba que era imposible: “desconocer que la naturaleza de esta actividad (...) hace que la amenaza se asimile a una virtual declaración de guerra y que frente a ello no quede otra alternativa que el combate en cada uno de los frentes en que quede planteada la agresión”. En efecto, la hipótesis de una “guerra sucia” que años después argumentarían las Fuerzas Armadas como justificación para su plan represivo, no era exclusiva de los militares. Como señala Vezzetti (2002: 58), hacia mediados de los años ’70 “*el fantasma de la guerra fundaba la política*” y el marco de sentido que proveía la noción de “guerra” era atizado tanto por la derecha como por la izquierda política (y quienes estaban involucrados en la lucha armada sin duda se sentían parte de una “guerra”). De la misma

¹²¹ Sin embargo, es interesante destacar que la movilización política de amplios sectores de la civilidad y la posterior confluencia en las organizaciones políticas-armadas se dieron en el marco de relativa expansión y bienestar económico de la segunda parte de la década del ’60 y los primeros años de la década del ’70. Y sus integrantes más activos pertenecían en muchos casos a las clases medias y también altas de los centros urbanos (más allá que la militancia política reconocía que una de sus causas era la injusticia social que perjudicaba a los sectores carenciados o más desprotegidos de la sociedad argentina).

¹²² Como se analizará más adelante, en un editorial de fines de enero de 1976, *Clarín* elogiaba las palabras de Videla porque el entonces jefe del Ejército había afirmado que la “subversión” era un problema social “global” y no solo militar (*Clarín*, 25/1/1976).

¹²³ La Cámara de Diputados introdujo enmiendas al proyecto y fue remitido a la Cámara de Senadores para su reconsideración. Pero luego se interrumpieron las sesiones, se retiraron todos los proyectos y se clausuraron las sesiones extraordinarias con lo cual no pudo ser tratado. A inicios de 1976 el nuevo ministro de Defensa, Deheza, envió un nuevo proyecto que el Congreso no trataría porque sobrevino el golpe de Estado (González, 2007: 388-9).

manera que *Clarín* lo expresaba, otros sectores -principalmente las Fuerzas Armadas, y también los partidos políticos, la Iglesia, la guerrilla, el propio gobierno¹²⁴ y diversos sectores civiles- definían la situación de violencia política con el concepto de “guerra”, al que utilizaban según sus propios intereses sectoriales¹²⁵. De todas formas, el matutino aclaraba que estar en guerra no justificaba implementar metodologías represivas fuera de la ley:

La necesidad de dar a la lucha antsubversiva un respaldo legal es indispensable además para que no se incurra en la tentación de ejercitar la represión fuera de las leyes. Los implementos de combate no deben salir nunca de manos del Estado, al que le corresponde el monopolio de la fuerza, único modo en que ésta puede aplicarse de manera responsable, es decir, con titulares concretos y pasibles de rendir cuentas (*Clarín*, 22/11/1975).

Clarín refrendaba su participación en el bloque civil que pedía una represión “ordenada” y “legal”, pero dura y efectiva. Como ha sido señalado, esta visión se alineaba con la opinión de sectores civiles que planteaban que la única forma de terminar tanto con la violencia guerrillera como con la represión paramilitar de bandas de ultraderecha era poniéndola en las manos “legales” de las Fuerzas Armadas (Jozami, 2006; Mochkofsky, 2004). Así se terminaría con la “anarquía” y se pondría fin a la deriva violenta a través de una fuerza perteneciente al propio Estado. De todas maneras, no puede dejar de remarcarse, en el caso de *Clarín*, la contradicción -o al menos la convivencia no armoniosa- entre esta advertencia “legalista” y sus llamados a soluciones drásticas utilizando metáforas bélicas. Y además debe advertirse sobre los posibles efectos legitimadores que estas demandas pueden haber tenido para los planes represivos dentro de un contexto donde ya las Fuerzas Armadas – a quienes que se les encomendaba la represión “legal”- llevaban adelante procedimientos ilegales, aunque sin la extensión posterior del terrorismo de Estado.

¹²⁴ Para ofrecer un ejemplo que partía del propio gobierno peronista, el 20 de noviembre de 1975 el ministro de Cultura y Educación, Arrighi, afirmaba que el país se encontraba en un “guerra total” frente a un enemigo “sutil”, “peligroso” y “temible”. Era “la guerra revolucionaria instrumentada por el marxismo apátrida (...) es la guerra subversiva que asesina a mansalva en campos y ciudades, y (...) tiene a todo el país y a todos los estamentos como campo de experimentación, de adoctrinamiento y de reserva.” (*Clarín*, 21/11/1975, p.22)

¹²⁵ Esa percepción, que ponía al Estado en pie de igualdad con las organizaciones político armadas, sería duradera en la sociedad argentina de los años posteriores y luego del fin del “Proceso”. Tal vez la “teoría de los dos demonios” instaurada como relato oficial en la democracia postdictadura -que igualó la acción terrorista del Estado con las acciones armadas de la guerrilla- fue la mayor deudora del relato que hacía eje en la “guerra” de dos bandos, que la teoría resignificó como actores “externos” a una sociedad “rehén” e “inocente”. Los militares, y sus apoyos civiles, atizaron esta versión de los hechos aupados sobre el registro colectivo que se había consolidado durante la lucha armada de fines de los años '60 y mitad de la década del '70.

5.4. El retorno de la dama (octubre-noviembre de 1975): “Ya no queda ningún margen para el error”¹²⁶

Desde que Isabel tomó su licencia de descanso en Ascochinga, a mediados de septiembre, las versiones sobre su futuro político estimularon el clima de inestabilidad. Pese a las presiones de diversos sectores para que dé un paso al costado, retomó la presidencia el 17 de octubre en un acto convocado en Plaza de Mayo que congregó una multitud. La puesta en escena de la liturgia peronista en el Día de la Lealtad reafirmaba el férreo propósito presidencial de mantener el poder, aunque su discurso en la víspera fue en tono conciliador. Lúder se retiraba sin haber conseguido el apoyo dentro del peronismo fracturado, ni haber tenido la voluntad política suficiente para aventurarse a concretar un golpe palaciego contra la viuda de Perón. *Clarín* no se expidió editorialmente sobre la presidencia provisional de Lúder, pero en una nota sin firma dentro de la sección “Política” destacaba que su gestión había tenido que desempeñarse “dentro de marcos muy estrictos” y que pese a ello había alcanzado “importantes logros” como “la unificación de la lucha antiguerrillera” (*Clarín*, 18/10/1975, p.10).

Los rumores de golpe estaban a la orden del día¹²⁷. Pero los militares habían decidido esperar que el gobierno cayera por su propia inacción, y que la irrupción de las Fuerzas Armadas se tornara una opción “*inevitable*” para la opinión pública. Los militares “*salvarían*” a la Nación antes de su último estertor. Las primeras medidas de la presidenta al retomar el gobierno demostraron que nuevamente se recostaba sobre el lopezreguismo y que gobernaría a su arbitrio. Julio González retornó a la Secretaría Privada y Carlos Emery, que había impulsado una investigación en su área que comprometía a allegados directos de Isabel, renunció al ministerio de Bienestar Social y fue reemplazado por Aníbal Demarco, cercano a Lopez Rega (Demarco, en una frase muy comentada y ridiculizada por esos días, se autodefinió como “un león africano sin domar” en su afán de defensa de la investidura presidencial). Robledo, el ministro del Interior que trabajaba para llegar a una salida política encabezada por el peronismo histórico, mantuvo su cargo pero no fue recibido más por Isabel. El poder gubernamental se agotaba insistiendo con su estrategia de ejercer el poder en forma privada y distanciado de las bases populares que le habían dado sustento. Una de las principales preocupaciones de la presidenta en esta nueva etapa fue frenar las causas por corrupción que la complicaban a ella y a sus colaboradores más cercanos. La situación se

¹²⁶ El subtítulo del apartado remite al titular de la solicitada del MID publicada en los diarios nacionales el 19 de octubre de 1975.

¹²⁷ De tal manera que el 11 de octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos le alertaba al presidente Gerald Ford sobre la posible “*intervención*” de las Fuerzas Armadas (Andersen, 2001: 195).

había complicado porque la Cámara de Diputados estaba debatiendo la posibilidad de crear una comisión que investigaría el manejo de fondos en el Ministerio de Bienestar Social y la cuestión del cheque de la Cruzada Justicialista de Solidaridad¹²⁸. Esta opción era inadmisibles para Isabel, quien buscaba afanosamente que las investigaciones quedaran restringidas a la esfera judicial.

En este marco, y tres días antes de la reasunción presidencial, el MID decidió tensar aún más la cuerda con el gobierno. El 14 de octubre emitía un comunicado -publicado en forma de solicitada el domingo 19 de octubre en los diarios nacionales- que, con tono admonitorio y de dramática advertencia, sentenciaba desde su título: “*Ya no queda ningún margen para el error*”¹²⁹. La solicitada resumía las principales críticas y “advertencias” que el partido de Frondizi y Frigerio le había realizado al gobierno prácticamente desde la puesta en marcha del Pacto Social, y que se habían profundizado durante 1975¹³⁰. E incluía en un apartado sus “propuestas”, vinculadas con lo que hemos denominado como la “solución desarrollista”. Según el MID, su nuevo pronunciamiento se justificaba por los datos preocupantes de la realidad que conformaban una “situación nueva” donde ya no quedaba “ningún margen” para el error (en su pronunciamiento del 11 de marzo había manifestado que “había poco margen para el error”). Demandaba a su aliado en el FREJULI una “efectiva rectificación” que no significase un “arreglo de superficie” y decía estar dispuesto a impulsar “un contenido político nuevo” que superara la crisis de dirigencia y respondiera a las necesidades de “transformación revolucionaria”. Según el MID, los “culpables” de la crítica situación no eran los obreros, los empresarios, los intelectuales, los sacerdotes, los militares y, por supuesto, tampoco “quienes [*desde el campo político*] nunca pedimos nada, formulamos advertencias claras y oportunas y adoptamos un comportamiento solidario que abría las puertas a la rectificación anteponiéndola a toda soberbia doctrinaria”. En cambio, los “responsables”, eran los que habían proclamado la “inflación cero” iniciando el “actual desastre económico”, los que luego habían conducido la política económica desde mayo de 1973 y aplicaban la misma política sin soluciones, los que negaban toda participación a las Fuerzas Armadas y “ahora” las convocaban para defender el “statu quo”, quienes desde el “oficialismo” y la “oposición” urdían tramas “de palacio” que no resolvían los verdaderos

¹²⁸ *Clarín* expresaría su aprobación a la investigación parlamentaria argumentando que la función “moderna” del parlamento era “controlar” y “supervisar”. Por lo tanto era legítima la facultad de examinar el comportamiento de las áreas del gobierno (en contra de aquellos que argumentaban que era inconstitucional) (*Clarín*, 5/11/1975).

¹²⁹ El título fue publicado en mayúscula y tipografía catástrofe. En el caso de *Clarín*, la solicitada ocupó la totalidad de las páginas 12 y 13 de su edición dominical.

¹³⁰ El propio Frigerio ya había adelantado las objeciones del MID hacia el gobierno un día antes de publicarse la solicitada (*Clarín*, 19/10/1975, p. 8)

problemas del país en aras de un “institucionalismo erigido a la categoría de fin en sí”, los que alegaban un “verticalismo anacrónico” desconectados de las “bases”, el “crimen de la subversión” que promovía una “dialéctica de terror con la derecha” y disgregaba a la “comunidad nacional”, y quienes confiaban en que la crisis derivaría en el ciclo clásico del “liberalismo-populismo-liberalismo” y se ofrecían como “alternativa”, entre otros puntos. El pronunciamiento del desarrollismo causó revuelo en el mundillo político y congregó la ecléctica oposición del diario *La Prensa*, el liberal Alvaro Alsogaray -quien tenía una rivalidad personal además de ideológica con las figuras desarrollistas- y la furibunda contestación del sindicalismo verticalista a través de una solicitada de las 62 Organizaciones¹³¹. El diagnóstico de situación y la propuesta del MID para resolver la crisis nacional eran a grandes rasgos similares a los que desplegaba *Clarín* en sus editoriales (aunque sin el cariz de “denuncia” que contenía la solicitada)¹³².

Hacia fines de octubre, Cafiero intentó retomar la conducción del proceso económico que había dado ciertos indicios de tenue morigeración luego de la crisis del “Rodrigazo” (la inflación había menguado, aunque por causa del declive de la actividad económica). Con el fin de desactivar la recesión y la desocupación que amenazaban intensificar la creciente conflictividad social, decretó una “tregua social” de 180 días que prohibía huelgas y despidos. Y el 25 de octubre firmó con la CGT y la CGE el “Acta de Concertación Social Dinámica”, un intento de reeditar las bases del Pacto Social que, entre otros instrumentos, preveía una indexación salarial trimestral a partir de enero de 1976. Fue la última vez que los tres garantes del Pacto Social de 1973 -CGE, CGT y Estado- estuvieron reunidos en torno a una mesa de

¹³¹ La solicitada fue publicada en los diarios nacionales el 22 de octubre, con el título “*La verdad peronista frente al desarrollismo de la infamia*”. En muy duros términos, acusaba al MID de sumar su “subversión política a la de los terroristas y delincuentes económicos; enrolados como ellos en la búsqueda de una quiebra en el orden institucional.” (*Clarín*, 22/10/1975, p. 14).

¹³² A raíz de las repercusiones del pronunciamiento del MID, el 24 de octubre varios de sus diputados denunciaron haber sido amenazados y se reunieron con el ministro del interior, Robledo. Para moderar los ánimos, el legislador del MID, Isidro Odena, declaró que las críticas al FREJULI eran “dentro y no fuera de ese instrumento” y que “afuera” estaban “los Alsogaray y también la oposición”. Odena recordaba que la polémica no era nueva “en virtud que el propio general Perón fue siempre enterado de nuestros pronunciamientos y de nuestras críticas a Gelbard, transmitidas también de manera personal por nuestro jefe, el doctor Arturo Frondizi”. También manifestó que el MID no había suscripto las coincidencias programáticas del Pacto Social, pero sí la plataforma electoral del 11 de marzo de 1973 que era la doctrina del Frente. Por su parte, el legislador del MID, Antonio Pereyra, aseguraba que “El gobierno no cumplió los objetivos que le dieron nacimiento al FREJULI”. En torno a las críticas de Alsogaray y el diario *La Prensa*, un representante de la juventud del MID, Hugo Castellano, afirmaba que el objetivo de los “sectores reaccionarios” que tenían su “vocero” en un “diario metropolitano”, era “borrar del mapa político argentino toda posibilidad de gobierno auténtico de las mayorías, o sea crear las condiciones para una experiencia elitista y reaccionaria que nos devuelva a un pasado imposible. Alsogaray también ha atacado el documento, lo cual no es sorprendente, ya que aparte de ser columnista del diario de los Paz es un campeón del ‘pinochetazo liberal’. Esto es lo contrario a lo que propone nuestro partido (...)”. En relación a la crítica de las 62 Organizaciones, Castellano señaló que el mensaje era “un muestrario de agravios, de falta de autocrítica y no contesta una sola de las afirmaciones que hacemos” (*Clarín*, 25/10/1975, p. 6).

negociación. Una semana después, el ministro se vio obligado a otorgar un aumento de salarios del 27% fruto de la presión sindical y sin consultar a la CGE, lo cual puso en evidencia los límites de la estrategia concertada. Mientras, la CGE perdía paulatinamente el poder aglutinador en manos de la APEGE, que exhortaba a los empresarios disconformes a no cumplir con los aumentos salariales. Si la política salarial era manejada *de facto* por los sindicatos, el manejo de la política monetaria estaba fuera del control del ministerio: el atraso en los ingresos fiscales incrementaba mensualmente el déficit público que debía ser cubierto con emisión monetaria (Rougier y Fiszbein, 2006: 104). Finalmente, el intento de concertación de Cafiero se estrellaría con las pujas corporativas desatadas entre los principales actores económicos fruto de la descomposición que estaba sufriendo el poder estatal como árbitro intersectorial. El fracaso de la concertación definiría su declive en el ministerio. En los meses posteriores la inflación seguiría su carrera ascendente y ya se preveía que el salario real de diciembre sería el menor de los últimos quince años.

Pese a que *Clarín* no comulgaba con la estrategia de la concertación, reconocía que Cafiero se había manejado con “pragmatismo y sentido de la responsabilidad” en torno a la cuestión salarial, ya que no había aceptado reclamos “desmedidos” que hubieran “reimpulsado” la inflación como había sucedido “en reciente experiencia”, y que no era más que un “administrador” de una crisis que no había generado (*Clarín*, 8/11/75) (Cafiero había utilizado ese calificativo para referir a su propio rol frente a la crisis; Horowicz, 1986: 254)

El 3 de noviembre la presidenta volvió a internarse, esta vez en una clínica de Capital Federal. Ese mismo día Balbín declaró por televisión que si el gobierno y la presidenta no comprendían el país “no pueden gobernarlo” (*Clarín*, 4/11/75, p. 10). La figura de Isabel estaba absolutamente desprestigiada frente a la opinión pública, que la observaba como un personaje enfermizo, misterioso, contradictorio e ineficaz. La internación impulsó una nueva ola de rumores, que incluían un posible autogolpe que tendría como protagonistas a parte de su entorno (Kandel y Monteverde, 1976: 113). Durante la internación casi no recibió a sus ministros, no pidió licencia ni nombró a ningún ministro coordinador. Su imagen de aislamiento se acentuaba mientras dejaba que aumentara la influencia de su secretario privado, Julio González, que pujaba por frenar la investigación de la Cámara de Diputados por los manejos espurios en el ministerio de Bienestar Social (sobre éste y otros acontecimientos del gobierno peronista pueden consultarse sus memorias; González, 2007).

El misterio y el rumor que envolvían al gobierno, sumado a la ciclotimia y al endeble carácter presidencial, daban lugar a diversas especulaciones sobre el futuro del país. Ninguna suponía la continuidad de Isabel. Las variantes más verosímiles que recorrían el espacio

político eran cuatro: renuncia presidencial (que era negada rotundamente por Isabel), juicio político, declaración de insania presidencial y golpe de Estado. También corría la versión sobre la posible “bordaberrización” de Isabel, que había sido sugerida por Julio González a las Fuerzas Armadas (Kandel y Monteverde, 1976: 110-11)¹³³. O sobre una presunta modificación de la ley de Acefalía para permitir que un oficial superior de las Fuerzas Armadas ejerciera la presidencia (el MID contemplaba positivamente esta variante; Sáenz Quesada, 2003: 375). Los militares, frente a la resistencia de Isabel a ceder poder y la negativa del Ejército a brindar hombres al gobierno, iniciaban secretamente la planificación del “Operativo Aries”: el golpe de Estado (Seoane y Muleiro, 2001: 57).

Mientras se iniciaban los conciliábulos golpistas, las Fuerzas Armadas expresaban en público su “preocupación” por la gravedad de la crisis y se mostraban “prescidentes” de los avatares políticos. Desde la firma de los decretos de “aniquilamiento” lideraban abiertamente la lucha contra la guerrilla con total autonomía del poder político y los poderes Ejecutivo, Parlamentario y Judicial (la extensión de la “lucha antisubversiva” a todo el país se efectivizó en los hechos hacia mediados de noviembre). Y el 23 de octubre, en la Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo, Videla adelantaba sin miramientos la filosofía de la política de exterminio que se implementaría poco tiempo después: “En la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”, sentenciaba. La militarización de la política continuaba sigilosa, pero constante.

Para calmar los rumores, Isabel ofreció un discurso televisivo minutos después de la medianoche del 5 de noviembre desde la clínica donde se había internado. Confirmaba que no renunciaría ni pediría licencia, hacía un fuerte llamado a las corporaciones para defender su gobierno y denunciaba la agresión del “terrorismo periodístico”. Ese mismo día el INDEC publicó los índices de la inflación: 12,6% en octubre, 137,6% en los últimos cinco meses, 292% en lo que había transcurrido del año. Medido en dólar libre, el salario mínimo apenas superaba los 60 dólares. Luego de la internación, su primera salida -no oficial- fue visitar a Lorenzo Miguel en su casa particular. Una retribución por el apoyo que le estaba brindando el sector sindical “miguelista”. La CGT, las 62 Organizaciones y los peronistas “verticalistas” eran los únicos sectores que públicamente apoyaban a la presidenta.

¹³³ En referencia al presidente uruguayo José María Bordaberry, que en 1973 decretó la disolución del Congreso bicameral, que fue reemplazado por un Consejo de Estado, ilegalizó a los partidos políticos y suprimió las libertades civiles. Bordaberry permaneció en el ejercicio de la presidencia hasta 1976, periodo durante el cual las Fuerzas Armadas fueron incorporando hombres al gobierno y manejaron el poder real de la administración. Finalmente, las Fuerzas Armadas decretaron su salida del poder en 1976 (para mayor información, véase Ansaldi, 2004).

El 17 de noviembre retomó su cargo -recién volvería a la casa rosada el 26 de noviembre- y con el fin de distender la crisis política anunció la intención oficial de adelantar las elecciones previstas para 1977 al último trimestre de 1976. La noticia fue recibida con escepticismo por los partidos políticos opositores. Más aún cuando en diciembre se anunció que las elecciones serían el 17 de octubre de 1976, lo que causó un profundo malestar en la oposición (más tarde se postergarían para diciembre de 1976). Lejos de aceptar el convite, la UCR advertía que “toda la Nación” presentía que se aproximaba la “definición de un proceso”, responsabilizaba por la crisis a la presidenta de la Nación y, luego de apreciar que la solución no era que la presidenta afirmara su voluntad de no renunciar ni pedir licencia y que no se podía “dilatarse” más una respuesta dentro de los mecanismos institucionales, demandaba: “Lo importante es lograr un gobierno -porque el país advierte que no lo tiene- (...) con firme voluntad de gobernar integrado con los hombres más capaces de sus propias filas (...)”. Finalmente, le exigía a Isabel que tomara “las actitudes” acordes con la “gravedad de la hora” (*Clarín*, 18/11/1975, p. 14). En términos concretos: que diera un paso al costado.

En medio de la incertidumbre por el futuro institucional, una versión sobre una posible “salida electoral” fue aprovechada por *Clarín* (15/11/1975) para renovar su oposición a las “propuestas electorales” (como lo había precisado en el editorial del 4 de octubre de 1975). Ante el planteo de un grupo de gobernadores que proponía una elección a vicepresidente para aliviar las tensiones políticas, afirmaba:

El proceso electoral es parte del mecanismo de la democracia y no debe ser utilizado para enmascarar o disimular los procesos de fondo que generan los grandes problemas que enfrenta el país. Lo contrario sería dar por supuesto que la actual crisis (...) tiene remedios por el mero transcurso del tiempo. No es así.

Como no se estaban llevando a adelante las medidas para conjurar la crisis y “el mal” era “generalizado” resultaba “vano demorarse en aspectos parciales”. La solución debía ser estructural, iniciando un radical cambio en la economía porque:

la restauración del orden, tarea urgente en la que corresponde al Estado un papel monopólico (...) tiene que tener el respaldo de una estructura económica que permita dar respuesta a las legítimas expectativas de nuestra sociedad. Y, así también, las instituciones para asegurar su vigencia no solo deberán sustentarse en la ley sino en bases morales y materiales cuya solidez las haga inatacables (*Clarín*, 15/11/1975).

Las demandas refundacionales de *Clarín* iban mucho más allá de los cambios formales previstos por los mecanismos republicanos de unas instituciones sustentadas en frágiles bases morales y materiales.

5.5. Escribiendo el epitafio (diciembre de 1975-febrero de 1976): “El país está urgido de soluciones de fondo”

El último mes del agitado año 1975 se iniciará -y finalizará- con el recrudescimiento de la violencia política. Durante los primeros seis días al menos 34 personas fueron asesinadas por motivos políticos (Andersen, 2000: 197). En un operativo comando, Montoneros asesinó al general Cáceres Monié y a su esposa, acción que intensificó las declaraciones militares en tono de cruzada que, cada vez con mayores bríos y menos circunloquios, enfatizaban la necesidad de un cambio drástico. Ante la espectacularidad de los recientes atentados, las Fuerzas Armadas se presentaban como víctimas pasivas de las “subversión apátrida” y presentaban como “lógica” su respuesta a la agresión. Los diarios daban cuenta diariamente de las “severas” advertencias militares. Las Fuerzas Armadas enunciaban un discurso de guerra, donde no faltaban las referencias a la “crisis moral”, ubicándose implícitamente como el único actor con soluciones definitivas.

Clarín se pronunció gravemente en repudio del asesinato de Cáceres Monié, y también sobre el de 9 jóvenes militantes que aparecieron asesinados en Córdoba (*Clarín*, 6/12/1975). Ante el recrudescimiento de la violencia, el matutino hizo principal hincapié en su aspecto “irracional”, en el “decaimiento” de la moral y en la necesidad del “cultivo de las virtudes éticas”. En esta orientación, afirmaba que era difícil imaginar qué clase de sociedad “perfeccionada” podía ser fruto del “insensato baño de sangre que enluta al país casi diariamente”:

Frente a este estado de cosas se hace necesaria hoy más que nunca una **saludable reacción**. Un masivo empleo de las reservas de talento y de honestidad presentes en la sociedad argentina que permita reestablecer los niveles morales perdidos y que marque el rumbo hacia la prosperidad material de la Nación. (...)

Y es el mismo estado el que debe encabezar el **proceso regenerador** que se impone. A él le corresponde asumir efectivamente el monopolio de la fuerza, para emplearla en forma serena y responsable, que es la única manera de suscitar respeto y estimular acatamiento. A él le toca dirigir y gobernar, acertar con las medidas esperadas por la gran mayoría, hoy desconcertada porque no percibe un propósito orientador (...)

De las horas más difíciles de su historia, las naciones suelen sacar las fuerzas que en definitiva las redimen. La Argentina ha llegado ahora a esa dramática encrucijada. Los hechos terribles que hoy vivimos (...) son también causa eficiente para la **reacción viril** de un pueblo que no puede consentir la decadencia. El gobierno, protagonista principal de esta **imprescindible reacción**, debería actuar en la seguridad de que en tal tarea contaría con el apoyo de la inmensa mayoría de los argentinos. (*Clarín*, 6/12/1975)¹³⁴.

¹³⁴ Remarcados de este autor.

Más allá de su aval implícito a la militarización de la política, *Clarín* apoyaba las llamadas al orden y al disciplinamiento social. Y al autoritarismo que “desde arriba” debía generar acatamiento. Este discurso que avalaba la represión legal se arraigaba en una concepción refundacional. Para refundar las bases materiales y económicas de la sociedad era necesario desterrar a través de la represión legal a aquellos que impedían la estabilización política. Vale preguntarse, ¿con qué vigor estos llamamientos a la disciplina social, que no fueron exclusividad de *Clarín*, ofrecieron a las Fuerzas Armadas algún grado de certeza sobre que no tendrían una sistemática oposición civil en su cruzada refundacional?; ¿cuánto de esta certeza los cobijó u alentó para poner en marcha su supuesta cruzada patriótica? (para un análisis detallado, véase Vezzetti, 2002). Aunque el destinatario de las demandas de *Clarín* aparentaba ser el gobierno, los términos empleados -“saludable reacción”, “proceso regenerador”, “reacción viril”- anclados sobre el nivel moral y ético, junto al tono *admonitorio* del editorial, la mención al Estado -y no exclusivamente al gobierno como sujeto activo de esos cambios- permite observar tanto el jaez refundacional de los cambios drásticos demandados como la sutil referencia a que la crisis no se resolvería con transformaciones superficiales. Además, ¿quién podía protagonizar esa “saludable reacción” si como lo había mencionado en otros editoriales tanto la sociedad civil como su dirigencia política se habían “relajado moralmente”? Volveremos más adelante sobre esta característica “refundacional” de las demandas editoriales de *Clarín*.

El último mes del año encontrará a un gobierno aún más aislado. No solo debía lidiar con la oposición extrapartidaria y los grupos de poder antiperonistas, sino también con la creciente división interna en el peronismo. Calabró procuraba aglutinar a los sectores disconformes blandiendo la doctrina de Perón (Terragno, 2005: 68). En medio de la internación de Isabel, el 12 de noviembre, había realizado un acto multitudinario en La Plata poniendo en escena toda la liturgia peronista. El gremialista se quería posicionar frente a un futuro desbarranco del gobierno y propiciaba la remoción legal de la presidenta. Los partidarios del gobierno, encabezados por Lorenzo Miguel, presionaban a Isabel para que interviniera la provincia de Buenos Aires (Videla apoyaba a Calabró para dividir al peronismo, lo que Calabró le retribuirá con creces al colaborar con la represión al ataque del ERP en Monte Chingolo, el 24 de diciembre de 1975) (Anguita y Caparrós, 2006: 477).

Hacia mediados de diciembre el peronismo sufrió otra escisión: 27 parlamentarios antiverticalistas se separaron del bloque oficial y formaron el “Grupo de Trabajo”, disconformes con la conducción de Isabel y por la demora en las investigaciones de corrupción que pesaban sobre el gobierno. El oficialismo perdía su quórum propio en la

Cámara de Diputados, con lo cual ya no se pudieron tratar las leyes de presupuesto y la reforma impositiva que necesitaba Cafiero para su gestión. La repercusión por el cisma en el oficialismo obligó al pronunciamiento de *Clarín*. El conflicto era un ejemplo más de que el país atravesaba “una profunda y aguda crisis (...) Crisis política, crisis económica, crisis moral” (*Clarín*, 15/12/1975). Convicción generalizada que para el diario compartían “todos”, hasta el propio gobierno. Las “dificultades intestinas” del peronismo eran uno de los datos políticos principales de la crisis política. Lo que insistía en remarcar el editorial eran los “paralizantes efectos” que sobre la vida nacional estaba teniendo la disputa interna. Aunque hubiera un “acostumbramiento” a la ya prolongada disputa, no podía “disiparse” la sensación de que se postergaban las “soluciones finales” y que era el país el que soportaba las indefiniciones “por encima de las rencillas partidarias”. Esta era una comprobación “objetiva” y “verificable”. La crisis del partido se estaba extendiendo “a todas las actividades del país” (*Clarín*, 15/12/1975).

Si para *Clarín* la crisis política se cifraba en los términos de la disputa interna del peronismo y el distanciamiento entre masas y dirigentes políticos, la crisis económica se reflejaba en el deterioro de todas las variables y el retraso de la puesta en marcha del “cambio de estructuras”, mientras que la “vertiente moral” de la crisis se desplegaba en las sospechas de corrupción que recaían sobre funcionarios del gobierno. En este aspecto, a mediados de diciembre el presidente de la Cruzada de la Solidaridad, general (RE) Ernesto Fatigatti, había declarado que se habían utilizado a sabiendas los fondos de la Cruzada con fines particulares, aunque se iban a reponer posteriormente. Revelaba que el ex ministro Antonio Benítez era quien le había aconsejado a Isabel librar el cheque para la familia de Eva Perón y reconocía ciertas “irregularidades” en el manejo de los fondos de la Cruzada de la Solidaridad¹³⁵. Su confesión causó gran repercusión en los medios periodísticos y políticos. *Clarín* comentó el “estupor” que había generado y afirmaba que la “grave preocupación” que causaban los hechos comentados tenían que ser disipados “aclarando por completo el clima de sospecha que se ha formado a su alrededor” (*Clarín*, 17/12/1975). Para el matutino no contribuían a este objetivo las “actitudes” que tenían como fin “impedir o demorar” las investigaciones. Le convenía al país terminar definitivamente con un “malestar” que lo desviaba de sus problemas de fondo y le convenía al propio gobierno que, al aventar las dudas sobre su accionar, podría emprender “con las manos libres” el “cometido que el país reclama” (*Clarín*, 17/12/1975). Finalmente, el 30 de diciembre de 1975, Isabel Perón fue sobresaída por la Justicia en las

¹³⁵ La declaración fue reproducida por el diario *Crónica* de Comodoro Rivadavia. Luego Fatigatti desmintió haberla realizado, pero el diario aseguró tener la versión grabada de la declaración (*Clarín*, 16/12/1975).

investigaciones sobre la Cruzada. Pero las especulaciones que se vertieron en torno al caso le causaron al gobierno un gran perjuicio político del que nunca pudo recuperarse.

Un día después, la “crisis política” entraba en una nueva etapa. El jueves 18 de diciembre un sector de la Aeronáutica encabezado por el brigadier Jesús Orlando Capellini se sublevó contra el gobierno en una base aérea de Morón, provincia de Buenos Aires. Exigían la destitución de la presidenta, la asunción de Videla y la renuncia del jefe de la Fuerza Aérea, Héctor Luis Fautario, quien fue detenido transitoriamente en el Aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, otro de los focos de la insurrección. No se trataba de un mero golpe interno, como había ocurrido con la crisis “Damasco-Laplane” en el Ejército. Era un desafío directo a la autoridad constitucional del gobierno. De este modo, las Fuerzas Armadas ponían a prueba el plan golpista y aceleraban los tiempos políticos. Los sublevados realizaron vuelos rasantes sobre la Casa Rosada, arrojaron panfletos providelistas y durante el tiempo que duró la rebelión se temió que se reeditaran los bombardeos sobre la casa de gobierno, como en la trágica jornada de junio de 1955. El intento golpista tenía objetivos a corto plazo: forjar la renuncia del jefe de la Fuerza Aérea para que sea reemplazado por el brigadier Orlando Agosti, quien estaba consustanciado con el plan golpista de los altos mandos del Ejército y la Marina¹³⁶, ganar posiciones para la Fuerza Aérea entre los conspiradores y frenar la eventual salida electoral que había anunciado el gobierno (Andersen, 2000: 198; véase también el interesante análisis de Horowicz sobre la rebelión en relación con los sucesos posteriores de Monte Chingolo, 1986: 257). Y a largo plazo: funcionaría como una suerte de “ensayo” golpista que pondría a prueba la reacción de la sociedad frente a un potencial golpe de Estado. El punto de inflexión que significaba la asonada fue reflejado por el editorialista del diario *The Buenos Aires Herald*: “Estamos ahora enfrentados al hecho de que un golpe militar no es tan sólo ya una posibilidad. Está delineándose como una realidad.” (*The Buenos Aires Herald*, 19/12/1975; cit. por Kandel y Monteverde, 1976: 144-5). La asonada no contó con el apoyo público de las Fuerzas Armadas, pero tampoco fue condenada. La veleidad militar para reprimir a los sublevados, y las declaraciones de ciertos militares, daban cuenta de la simpatía con los insurrectos. Videla y Massera se mostraron estratégicamente “prescindentes”. Escondían sus planes y su voluntad golpista tras un manto de supuesto “respeto institucional”. Finalmente disuelta el 23 de diciembre, la rebelión fue aprovechada por Videla para presentarse como defensor de las instituciones a la vez que, en forma solapada, se terminaba

¹³⁶ Con el fin de resolver la sublevación rápidamente, el gobierno designó a Agosti como nuevo jefe de la fuerza el mismo día de la asonada, en otro elocuente gesto de debilidad frente al actor militar.

de preparar el escenario para el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas pasaban a ser protagonistas definitivas y árbitros del escenario político.

En los diferentes niveles de la sociedad argentina la aceleración de los tiempos políticos parecía imposibilitar una reflexión serena sobre la salida autoritaria que se estaba gestando en el seno de los sectores dominantes. Todo lo contrario. Ante las agobiantes palabras como “crisis”, “desorden” e “inmoralidad” que se repetían una y otra vez desde la sociedad civil, la prensa y los sectores políticos, el autoritarismo parecía un reaseguro para recobrar la senda de la “normalidad” perdida.

En este marco, *Clarín* no solo no condenó la sublevación abiertamente golpista, sino que el peso propio de la acción militar y su voluntad desestabilizadora quedaron disueltos al señalar que sus causas se vinculaban con la agudización de “la crisis nacional” y la inoperancia del gobierno (*Clarín*, 20/12/1975). Y ante la prolongación de la rebelión, el foco de su preocupación estuvo orientado a alertar sobre los eventuales enfrentamientos internos que podía atizar la rebelión dentro de las Fuerzas Armadas, no sobre el peligro que suponía para la institucionalidad republicana (*Clarín*, 21/12/1975). El editorial del 20 de diciembre, aunque se refería en términos generales a la situación generada por la sublevación, no la mencionaba explícitamente y, en cambio, se presentaba como un análisis de “la crisis nacional” -ése era su título-. La única referencia concreta a la rebelión de Capellini, por demás eufemística, era la “crisis total que aparece ahora abruptamente en el primer plano de la realidad argentina”. El editorial combinaba un estilo *expositivo* -ya que enlazaba hechos en forma de causas y efectos-, *explicativo* -al acentuar el carácter “objetivo” de su “descripción”- y *admonitorio* -en tanto se enfatizaban las características dramáticas de la “crisis”-. Afirmaba que en los últimos tiempos la “crisis” había tenido una “rápida agudización” que afectaba a los “cimientos de la Nación”, se manifestaba en “casi todos los aspectos de la vida del país” y mostraba sus “vertientes” económica, moral y política. Un nuevo dato era que la “crisis” no se alternaba con periodos de “normalidad”, sino que era de una “intensidad que trastornaba sin descanso la vida del país”. Esta realidad había sido desconocida por los “sectores que tienen precisamente a su cargo la aplicación del necesario correctivo”, en elíptica referencia al oficialismo. Según *Clarín*, se había preferido “vivir una ficción” que demostraba la incapacidad de “actuar sobre los hechos, encauzarlos y encadenarlos” de la que participaban “diferentes sectores del quehacer argentino” y “los responsables de los asuntos del Estado”. En consecuencia, la realidad había transcurrido en forma paralela e ingobernable obedeciendo a “inexorables leyes” que llevaban hacia “la desintegración y el caos”. Todo ello se verificaba con “la claridad de la evidencia” y la realidad llamaba a las “puertas del gobierno” para

exhibir la “cruda divergencia” entre “anhelos y realizaciones”. Aunque pedía nuevamente la “imprescindible rectificación” para dotar de “racionalidad y eficacia” al Estado, acotaba la posibilidad de acción transformadora del gobierno al sentenciar que el país tenía “reducido margen para persistir en el error” (parafraseando el título de la solicitada del MID del 19 de octubre de 1975 “*Ya no queda ningún margen para el error*”). Para el diario, si bien era tiempo de “reflexionar y construir” las bases materiales de la Argentina, también ya era “hora de grandeza”. De no deponerse “las concepciones exclusivistas” y no buscarse las “verdaderas coincidencias nacionales” continuarían los “enfrentamientos” y las “frustraciones”. Al final, concluía: “Todas estas reflexiones resultan oportunas en momentos en que la crisis argentina va llegando a *la etapa de su inevitable desenlace*¹³⁷” (*Clarín*, 20/12/1975). El editorial explicitaba sin ambigüedades el cambio de rumbo que *Clarín* le estaba imprimiendo a su opinión editorial sobre el gobierno y el futuro del país.

Los términos catastróficos en que se expresaba el editorial -estilo que venía *in crescendo* en la página editorial- y su distanciamiento del oficialismo se comprenden por un dato político de suma importancia: el jueves 18 por la noche el MID concretaba su alejamiento oficial del FREJULI. En un documento escrito en muy duros términos bajo la consigna “*No al falso frente y no al revanchismo antipopular*”, denunciaba el “vaciamiento” del Frente porque había dejado de responder a las expectativas populares y señalaba que el FREJULI se había convertido “en un engaño más” (*Clarín*, 19/12/1975). Al diferenciar la existencia de un “frente real” y de otro “formal”, mencionaba que no se retiraba del primero, sino que meramente constataba la inexistencia del segundo y que el FREJULI se había convertido en un “obstáculo para el desenvolvimiento del frente real”. El MID continuaba considerándose “frentista” y mantenía su prédica por una política de alianza de clases, pero que ya no podía plantearse dentro del frente que compartía con el Justicialismo. Sobre el Poder Ejecutivo, directamente afirmaba que estaba “vacante”. El desarrollismo concluía que era preciso un “cambio urgente” y que ese cambio no debía ser “superficial”, sino que suponía la superación del ciclo liberalismo-populismo y la sustitución de la estructura productiva. En sintonía con su propuesta refundacional, manifestaba que hacía falta una “revolución”: “ese gran torrente de la historia que barre lo obsoleto y lo gastado y abre perspectivas nuevas” (*Clarín*, 19/12/1975). El documento se había elaborado al menos desde el mes de diciembre, y los referentes del MID ya habían dejado entrever que el pronunciamiento representaba en la

¹³⁷ Remarcado de este autor.

práctica el retiro del MID del FREJULI. En efecto, los diputados del MID dejaron el FREJULI el 22 de diciembre y formaron su propio bloque en la Cámara de Diputados¹³⁸.

La ruptura del MID y la aceleración de los tiempos políticos que implicó la rebelión de Capellini, nos permite afirmar que desde mediados de diciembre *Clarín* realizó un giro en su posición editorial que se expresará en los meses posteriores hasta la concreción del golpe de Estado. Giro que implicó un distanciamiento definitivo del proceso político conducido por el peronismo y de la creencia en la capacidad institucional del Estado de derecho para hacer frente a la crisis nacional. El distanciamiento, que se profundizó desde el “Rodrigazo” y que tuvo puntos álgidos en virtud de los acontecimientos políticos que despertaron la evaluación crítica del matutino, se acentuó a medida que los datos de la “crisis nacional” empeoraron. Como veremos, en los meses siguientes *Clarín* casi no interpelará al gobierno y se limitará a objetar cada una de sus propuestas para aventar la “crisis”, como también la de otros actores políticos tradicionales considerados responsables (los sindicatos, la “partidocracia”, el parlamento, entre otros). Al unísono, la perspectiva de que la salida política de la “crisis” tendría que ser a través de cambios refundacionales se consolidará. Si desde el ideario desarrollista las transformaciones de este tipo ligadas al “cambio de estructuras” eran insoslayables para encaminar al país al desarrollo, a partir de este momento será aún más evidente que ni las propuestas del oficialismo, ni las de otro partido político, previstas dentro de los marcos institucionales de la democracia serían eficaces para implementarlas. En términos más generales, las soluciones emanadas de los actores tradicionales del sistema institucional democrático y de la sociedad civil “enferma” no parecían ser capaces de semejante refundación. Por ello, la reivindicación refundacional con que las Fuerzas Armadas se hicieron con el poder, y con la que se presentaron ante la opinión pública, tenderá a coincidir, en principio, con el diagnóstico del matutino que hacía hincapié en la imperiosa necesidad de un nuevo proyecto de Nación. En el contexto de la situación política narrada y la licuación del poder peronista, desde mediados de diciembre se acallarán los llamados a “corregir el rumbo” y *Clarín* se desentenderá de la suerte del gobierno para ir reacomodándose al “inevitable desenlace”: el golpe de Estado.

¹³⁸ Poco tiempo antes Frondizi, en un libro publicado en julio de 1975 y reeditado en los primeros días de octubre de ese año, se preguntaba retóricamente por qué el MID continuaba formando parte del Frente si el disenso era tan profundo con el gobierno. Allí planteaba “*una cosa es el frente, eje permanente de la acción revolucionaria, y otra el gobierno que apareció inicialmente como llamado a llevar adelante el programa de aquél. Hasta este momento, ese gobierno ha frenado y decapitado las posibilidades transformadoras del proceso frentista. Si esto no se modifica, y es traicionado el mandato popular, el Frente deberá, en cualquier caso, llevar adelante sus objetivos revolucionarios y las fuerzas que lo integran tienen ante sí la tarea de consolidarlo y ampliar su base política.*” (Frondizi, 1983: 170-1).

Luego de la asonada de Capellini, la escena política se vio rápidamente conmovida por otra acción vinculada a la violencia política. El 23 de diciembre alrededor de 150 guerrilleros del ERP intentaron copar el Batallón Depósito de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires. Era la operación guerrillera de mayor envergadura que comandaba una organización de izquierda en la historia política nacional. El intento falló porque el ERP había sido infiltrado por los servicios de inteligencia del Ejército, que estaba alertado y esperando a los guerrilleros (para un relato detallado, véase Anguita y Caparrós, 2006: 461-476; Plis-Sterenber, 2006). El saldo fue terrible para el ERP. Tuvo un altísimo costo en vidas humanas y un alto costo político. Luego del fracaso, la organización entraría en un desesperante languidecer hasta el asesinato de su cúpula en julio de 1976 por las Fuerzas Armadas, punto de inflexión que iniciará su disolución final. Llamativamente, el intento de copamiento no mereció la editorialización del matutino.

Un día después del ataque frustrado en Monte Chingolo, Videla se dirigió a Tucumán para pasar la Nochebuena con los soldados en la Escuelita de Famaillá, donde funcionaba el comando táctico del Ejército en la represión contra los guerrilleros del ERP asentados en los montes tucumanos -y también un centro clandestino de detención y torturas-. Videla se presentó vestido con uniforme de combate y casco. El discurso que allí dirigió a los soldados fue considerado como el primer *ultimátum* público destinado al gobierno nacional. En sus trazos más relevantes, afirmaba:

El Ejército Argentino (...) reclama con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas. La especulación política, económica e ideológica deben dejar de ser medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y la inseguridad. (...) Civilidad y Fuerzas Armadas debemos por fin unir los corazones y los brazos potentes alzando nuestra súplica al señor, para que a través de sus Hijos, pero también a través de nuestros esfuerzos mancomunados, logremos prontamente hacer realidad el sueño de una Nación pujante (...) (*Clarín*, 26/12/1975, p. 14).

El fin de año auguraba los peores presagios para el año 1976.

Clarín evitó expedirse sobre la declaración, pero publicó una nota donde su corresponsal en Tucumán, Joaquín Morales Solá, describía a Videla como un militar austero y preocupado por sus subordinados (*Clarín*, 26/12/1975, p. 14). Una caracterización que será común en los primeros tiempos del “Proceso”, cuando amplios sectores de la sociedad civil asocien la figura de Videla a la de un general “moderado”, “honesto” y “republicano”

propenso a conciliar una salida política para la dictadura y a frenar a los sectores más “duros” del Ejército¹³⁹.

Pese al silencio sobre el ultimátum de Videla, hacia fines de enero *Clarín* lo elogió en forma abierta (aunque no se lo mencionaba por su apellido, sino por su función como jefe del Ejército) (*Clarín*, 25/1/1976). Era la primera vez, desde el “Rodrigazo”, que realizaba una apreciación de este tipo sobre un jefe militar. Videla había mencionado que la “subversión” no era solo un problema militar, sino “global” en tanto abarcaba otros órdenes como el económico, el social y el político y además tenía un “matiz” militar. Había confirmado que la lucha militar estaba controlada, pero que la cuestión no se agotaba allí ya que había que seguir luchando en esos otros campos de la vida nacional (era parte del andamiaje argumentativo que meses después justificaría el golpe: la “subversión” era una hidra de muchas cabezas a cortar). El matutino calificaba su respuesta como “una clara definición”, “didáctica”, “depurada” y en “ascético estilo”. Al comentarla se mostraba particularmente satisfecho porque señalaba que no era suficiente la “victoria militar” y que la violencia se realimentaría si no se daban soluciones a los problemas nacionales que “exceden naturalmente al orden castrense”. La declaración indicaba la obligación de “erradicar las causas que le proporcionan [*a la “subversión”*] un medio propicio para desenvolverse más allá de cuanto hay de delictivo en su accionar”. Porque sin la concurrencia de esos factores, la “subversión” carecería del “efecto multiplicador” que había demostrado en los últimos años y se extinguiría o quedaría aislada “por las defensas naturales de un cuerpo social, política, moral y económicamente sano”¹⁴⁰. Evidentemente, para *Clarín* en esa coyuntura la sociedad no ostentaba tales defensas, fruto de su anquilosamiento económico y derrumbe ético. Como ya lo había mencionado, recordaba que “una sociedad injusta es caldo propicio para la acción disolvente” (por eso las

¹³⁹ Ya en los meses previos al golpe de Estado, la imagen “moderada” de Videla era reflejada por el embajador estadounidense Hill. Al informar a su gobierno sobre la realidad nacional caracterizaba a Videla como un “soldado profesional”, “moderado” y “constitucionalista”. Mencionaba que frente a la pronta destitución de Isabel, Videla sería proclive a dejar el gobierno en manos civiles, o a lo sumo que recayera en él mismo para que los “duros” -Carlos Guillermo Suárez Mason, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone - no tomaran el poder (Seoane y Muleiro, 2001: 62-3). Efectivamente, el gobierno estadounidense de Gerarld Ford, bajo la influencia de su secretario de Estado Henry Kissinger, apoyaban una salida política pivoteada por los “moderados” (para un análisis sobre la fragmentación del poder militar durante la dictadura, véase Canelo 2004; Novaro y Palermo, 2003).

¹⁴⁰ En otro ejemplo de esta concepción, hacia fines de julio de 1976, el matutino elogiaba abiertamente al general Domingo Bussi, en ese momento gobernador de Tucumán y jefe de las fuerzas represivas en esa provincia, porque había citado a un empresario en cuya empresa se habían constatado que los trabajadores desempeñaban tareas en “condiciones infrahumanas”, para determinar “su responsabilidad” en las causas que promovían “la subversión”. *Clarín* lo señalaba como una “actitud positiva” porque partía de un diagnóstico acertado sobre las causas de implantación del “fenómeno guerrillero”. Para el diario, la decisión del ERP de situar el combate armado en esa zona era porque las condiciones de atraso social y económico conformaban un “caldo de cultivo propicio para ganar la adhesión de sus habitantes”. En ese contexto, las condiciones locales de “frustración y estancamiento económico” facilitaban el accionar guerrillero (*Clarín*, 30/7/1976).

“organizaciones ilegales” habían ido a luchar a Tucumán, donde se daba el índice más alto de desocupación en el país). Destacaba que en la población se había tendido un “punte de creciente” solidaridad con las fuerzas regulares que luchaban contra la “subversión”. Pero también había clara conciencia que con “la represión no basta”. Había que sacar al país del “clima de frustración”, sino la “acción subversiva” brotaría nuevamente. Luego de elogiar la “reflexión en voz alta” de Videla por la “exactitud del orden causal indicado” el editorial finalizaba:

*El país está urgido de soluciones de fondo*¹⁴¹. El mal que lo afecta se ha agravado, como que está amenazado de desintegración. Para salir de este riesgo, que se genera en el estancamiento económico, en un mundo que avanza, es necesario consolidar al Estado nacional, proceder con energía a remover las causas del atraso. La vieja estructura y los intereses que luchan por mantenerla traban el crecimiento armónico de la economía, base cierta de la armonía social y de la paz interior (*Clarín*, 25/1/1976).

La complementación entre el elogio al jefe del Ejército, en un tono abiertamente apologético, y la necesidad de las “soluciones de fondo” aparecen planteadas en una sugerente línea de causalidad implícita. En el mismo sentido, se destaca la contraposición entre el elogio a Videla y los términos cada vez más drásticos con los que *Clarín* hacía referencia a la situación nacional y al oficialismo en particular.

El inicio del año 1976 puso de relieve las descarnadas disputas internas en el gobierno y en el peronismo (quienes estaban cercanos al poder lo definían como un “todos contra todos”; Kandel y Monteverde, 1976: 154). El ministro del Interior, Robledo, se enfrentó a Julio González por el significado que debía imprimírsele al Proyecto Nacional, dejado inconcluso por Perón. Isabel eligió la versión de González y Robledo renunció. El ministro del Interior, que se oponía a la influencia del entorno lopezreguista, había fracasado en su intento de desplazar a González y al sindicalismo miguelista para conciliar una salida política con el peronismo histórico. Por su parte, el 15 de enero la presidenta realizó un nuevo cambio ministerial que encumbró a hombres del lopezreguismo y desplazó al sindicalismo verticalista y al peronismo histórico¹⁴². González y Lastiri habían triunfado en su intención de alejar a

¹⁴¹ Remarcado de este autor

¹⁴² El cambio de gabinete se completó de la siguiente manera: en Defensa fue designado Ricardo Guardo, Roberto Ares en Interior, Raúl Quijano en Relaciones Exteriores. Renunciaron Robledo en Interior, Arauz Castex en Relaciones Exteriores, Vottero en Defensa y Corvalán Nanclares en Justicia. Continuaban Cafiero en Economía, Ruckauf en Trabajo, Demarco en Bienestar Social y Arrighi en Educación. Los “lopezregistas” eran el nuevo ministro de Bienestar Social, Aníbal Demarco, y el ministro de Justicia, José Deheza. A inicios de febrero caerían el ministro de trabajo, Ruckauf, y el de economía, Cafiero, a quienes la purga les dejó jirones de poder. El yerno de López Rega, Raúl Lastiri, resurgió por poco tiempo como un nuevo asesor *de facto* de la presidenta. Su efímera reaparición se truncaría por la repercusión que causó una nota en la revista *Gente*, del 29 de enero de 1976, que lo mostraba recostado en su cama mostrando sus “trescientas” corbatas.

Robledo y al miguelismo de la presidenta, en un golpe interno que algunos dirigentes denominaron el “lastirazo” (*Clarín*, 19/1/1976, p.11). El sindicalismo verticalista quedó desconcertado. El 20 de enero el titular de la CGT, Casildo Herreras, aceptaba la gravedad de la situación nacional y advertía que cualquiera podía ocupar “el centro del ring” si se lo dejaba vacío. Al día siguiente se entrevistó con la presidenta, y al salir declaró la inquietud del movimiento obrero “ante el entorno que pretende alejarnos del contacto directo que veníamos manteniendo con la presidente”. La palabra “entorno” se haría célebre. Resumía la influencia que en ese momento tenían sobre Isabel Julio Gonzalez y Raúl Lastiri, lo más encumbrado del “lopezreguismo”. Luego el gobierno intentará un “diálogo” con un sector del peronismo no verticalista, pero la iniciativa fracasará rápidamente. Por su parte, los sectores moderados encabezados por Lúder no lograban reunir la voluntad política suficiente como para desplazar a Isabel del escenario político. Los militares ya no ocultaban sus planes golpistas. A inicios de 1976, la presidenta fue informada que los mandos militares querían su renuncia, lo que obligó a una reunión donde los jefes militares argumentaron que respetaban la legalidad, pero estaban presionados por sus subordinados (Sáenz Quesada, 2003: 398). Isabel pidió que les enviaran sus “solicitudes” por escrito. La misma Isabel sugirió a los militares que aceptaría la “bordaberrización” del gobierno, permitiendo la intervención militar directa en la designación de los cargos más importantes, mientras se mantendría una fachada de legalidad civil (Di Tella, 1985: 146). El desprestigio del gobierno y los planes militares en curso para la toma del poder dejaron sin chances la propuesta. Es probable que la negativa haya acelerado el cambio de gabinete de mitad de enero, porque Isabel quería demostrar que podía encabezar cambios radicales desde dentro del seno gubernamental.

Durante enero, el Ejército completó los cambios en la estructura de mando en vistas del futuro golpe de Estado. La escalada militar para derrocar al gobierno marchaba con pleno ímpetu. A fin de enero los empresarios nucleados en la APEGE emplazaban al oficialismo para que adoptara medidas a favor del empresariado, amenazando con realizar un *lock-out*. La violencia política colocaba en las crónicas de los diarios la referencia a “sujetos desconocidos” que “perpetraban secuestros” sobre personas que luego “desaparecían” (durante enero, *Clarín* publicó denuncias de desapariciones en Córdoba -*Clarín*, 12/1/1976-; a esta altura las denuncias por desapariciones eran diarias). A fines de diciembre ya había desaparecido el jefe montonero Roberto Quieto, hecho que tuvo repercusión mundial y fue repudiado en una solicitada por intelectuales de diferentes países. A principios de 1976 las Fuerzas Armadas se manejaban con total autonomía del poder político en la represión y

estaban poniendo en práctica la operatoria represiva que sistematizarán luego del golpe de Estado¹⁴³.

El gobierno estaba paralizado frente a esta realidad política desbordante. Las peleas internas no hacían más que justificar los peores augurios. Ante el desconcierto del gobierno nacional, *Clarín* descalificaba abiertamente sus últimas iniciativas, como la decisión de adelantar las elecciones para el 17 de octubre de 1976 (a mediados de enero se anunciaría su postergación para diciembre de 1976), el cambio de gabinete del 15 de enero y el anuncio de la creación de un consejo para la discusión del Proyecto Nacional (*Clarín*, 18/01/1976). Según el editorialista, estas últimas medidas indicaban por parte del gobierno nacional una “notable inclinación a evadir la realidad”. El reciente cambio ministerial, del que se destacaba su recurrencia, era descalificado por “instrumental”, porque solo rozaba “la superficie de la problemática argentina”. La discusión del Proyecto Nacional era “poco menos que inexplicable”. En cambio, lo que había que hacer en ese momento era “resolver los problemas que hoy, ahora, amenazan con destruir no ya un proyecto futuro sino las bases mismas de lo que hasta la fecha existe”. Irónicamente afirmaba que, a pesar de estas medidas, para el ciudadano común seguirían subsistiendo la inflación “galopante”, el deterioro del salario, la escasez de la vivienda, la caída “notable” en calidad y cantidad de los servicios que recibía y una “inquietante” indefensión a nivel de la seguridad. Esta era la realidad “a la que no se podrá escapar con sustitutos, por ingeniosos que sean” (*Clarín*, 18/01/1976). En el mismo sentido se expresará el matutino hacia mediados de febrero, ante la convocatoria del gobierno a una elección para conformar una Asamblea Constituyente que tendría como fin modificar la Constitución Nacional. Una medida carente de sentido político y condenada al fracaso desde su origen. De constituirse, la Asamblea tendría que realizarse antes de las elecciones que habían sido pautadas para fines de 1976, con lo cual en realidad se hacía imposible concretar la elección para ese año. El proyecto era un poco sutil intento de prolongar la estadía en el poder de la presidenta, a partir de las necesarias discusiones que convocaría la reforma. La medida sumó mayor desconfianza en los sectores políticos por la intención del sector verticalista de perpetuarse en el poder. Para *Clarín*, el proyecto era una respuesta inadecuada

¹⁴³ Según datos de organismos defensores de derechos humanos, las víctimas mortales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad al amparo de los decretos de febrero y octubre de 1975 oscilaron entre un mínimo de 408 y un máximo de 473, entre desaparecidos y muertos cuyos cuerpos fueron encontrados (García, 1995: 437-42). Las víctimas de los grupos paramilitares y parapoliciales de derecha en la represión general contra la izquierda durante 1975 habían sumado 923 víctimas, entre secuestrados desaparecidos y muertos cuyos cuerpos fueron encontrados. Según García (1995: 441), a las organizaciones de izquierda durante 1975 le correspondieron 179 víctimas fatales.

frente a los problemas de fondo del país y evidenciaba, como ya lo había mencionado un mes antes, la inclinación gubernamental a “evadirse de la realidad” (*Clarín*, 16/2/1976).

Durante la primera quincena de enero *Clarín* renovó su juicio crítico sobre la realidad económica. Basándose en estimaciones estadísticas, denunció el “empobrecimiento nacional”, el “deterioro del nivel de vida popular” y el “estancamiento económico”. Ante la “decepcionante” situación de la economía nacional señalaba el contraste “notable” con las “ambiciosas” previsiones del Plan Trienal, al que consideraba un rotundo fracaso. El “estrepitoso derrumbe” de sus predicciones era causa de “la política económica introducida en mayo de 1973” que había desalentado la inversión creando las condiciones del estancamiento económico. Según *Clarín* ya se estaba “frente a hechos consumados que constituyen un sombrío punto de partida para cualquier política que (...) intente revertir el proceso de empobrecimiento y de caos social que viene afligiendo al país” (*Clarín*, 2/1/1976). A la exposición de las causas de los problemas económicos, no le seguía un pedido de rectificación o “cambio de rumbo”, como solía realizar el matutino hasta mediados de diciembre. Solamente se sentenciaba que se estaba ante hechos consumados, y que en todo caso serían la “herencia” para una nueva política económica que evidentemente tendría que ser llevada adelante una vez concluido el gobierno peronista.

Para fines de enero Cafiero quiso reeditar la tan manipulada política de “concertación”, en unos de sus últimos intentos desde el poder. También ofreció a la presidenta cambiar su gabinete y modificar su política económica. Isabel le dio un tenue aval que pronto le sacaría totalmente y Cafiero se vio obligado a renunciar a principios de febrero. Los intentos de concertación fueron duramente criticados por *Clarín* (14/1/1976; 31/1/1976), que denunciaba el “confusionismo nocivo” de esta política insuflado por “los grandes responsables de la bancarrota nacional que son, asimismo, los grandes responsables de la gran frustración de las expectativas populares generadas por el restablecimiento democrático”. La denuncia tenía como objeto principal a la cúpula de la CGE encabezada por Julio Broner, propensa a retomar los canales de la “concertación”. Afirmaba que los que auspiciaban la “política concertada” eran quienes “especulaban” con la “amnesia popular” y querían reeditar el conjunto de “errores, simplismos y dogmatismos que conformaron la raíz del descalabro nacional”, así como se habían servido de esa política para “convertir el aparato estatal en feudo de un reducido grupo privado”. Para el matutino, querían reeditar las “coincidencias programáticas” quienes simulaban olvidar que ya habían sido plasmadas en leyes que estaban

vigentes¹⁴⁴, y reclamaban un retorno al Plan Trienal quienes suponían que sus “imaginarias metas” podían cumplirse por la simple adhesión formal al plan (Plan que pasaría a la historia como “prueba de la frivolidad con que la burocracia transita por los ámbitos de la planificación”) (*Clarín*, 31/1/1976). En ese marco, el matutino saludaba la “sana y enérgica” reacción de nueve confederaciones pertenecientes a la CGE que acababan de “repudiar” esa política y a sus “inspiradores y ejecutores”. *Clarín* aprovechaba los problemas internos de la CGE, que distanciaba a sus cúpulas de sus representados, para renovar su invectiva hacia la conducción de la confederación empresaria¹⁴⁵.

Las expresiones editoriales de enero confirmaban el giro que ya había iniciado *Clarín* desde la fractura del MID. Además de no demandar más “cambios de rumbos”, remarcaba la ineficacia e inutilidad de las medidas políticas y económicas del oficialismo, y renovaba su ácida mirada sobre los que habían colaborado con las “políticas concertadas”. Era evidente que para *Clarín* el gobierno nacional dejaba de ser su alocutario principal. Pero no dirigía sus demandas hacia otro *actor político* en particular -al menos explícitamente-, sino que las demandas repetidas por el diario impersonalizaban su destinatario, forjando una suerte de “alocutario vacante”. Al igual que en su diagnóstico de julio de 1975, luego del fracaso del plan Rodrigo, sus demandas admonitorias no se dirigían a un *actor político* en particular para que implementara la “solución desarrollista” (en todo caso, los lectores atentos podían hacer sus propias conjeturas al sopesar la ponderación del matutino a las palabras de Videla). Pero a inicios de 1976 la situación política difería sustancialmente de la de mediados de 1975. Y *Clarín* comenzaba a escribir el epitafio del gobierno, al poner en evidencia los errores flagrantes que desde su interpretación ya no tenían solución dentro del proceso político vigente. La “Verdad” desarrollista no podía aplicarse en esa realidad política.

La renuncia de Cafiero a principios de febrero fue el final de una posible resolución “concertada” de los problemas económicos¹⁴⁶. Su política de concertación social había sido

¹⁴⁴ Las “Coincidencias programáticas para la reconstrucción y liberación nacional” fueron acordadas en diciembre de 1972 por el peronismo y la mayoría de las fuerzas políticas con incidencia nacional en la reunión realizada en el Restaurante Nino de Vicente López que se denominó “Asamblea de la Unidad Nacional”. Las “Coincidencias” fueron aprobadas por un conjunto de organizaciones sociales -como la CGE y la CGT- y posteriormente serían las bases del Pacto Social.

¹⁴⁵ A inicios de 1976 la CGE estaba dividida entre quienes se oponían al gobierno de Isabel y quienes abogaban por la conciliación (para ese momento la CGE había incorporado a sectores del empresariado como la UIA y la CGI -Confederación General de la Industria- que eran refractarios al peronismo).

¹⁴⁶ Junto con Cafiero renunció Ruckauf al ministerio de Trabajo y fue designado Miguel Unamuno, con acuerdo de la CGT y las 62 Organizaciones. Desde que había asumido el poder en julio de 1974, Isabel había tenido seis ministros del Interior, cuatro de Relaciones Exteriores, cinco de Defensa, seis de Economía, tres de Cultura y Educación, tres de Justicia, cuatro de Trabajo y cinco de Bienestar Social. Los últimos recambios ministeriales se registrarán el 12 de marzo. Guardo renunciará a su cargo en Defensa y será reemplazado por Deheza, cuyo ministerio de Justicia será cubierto por Pedro Saffores. En 21 meses de gobierno completó treinta y ocho ministros en total.

insuficiente para concretar un programa económico sustentable, y entre otros obstáculos había carecido de presupuesto y leyes impositivas porque el Congreso se negó a tratarlas. De su intento de “gradualismo” fue pasando paulatinamente a una política de *shock*, presionado por el espiral inflacionario que se transformaría en hiperinflación y el precio del dólar que seguía su tendencia alcista (Rougier y Fiszbein, 2006: 105). La incidencia de las disputas internas en el gobierno, la debilidad del oficialismo y las pujas corporativas fueron determinantes para sellar su suerte política. Cafiero había demostrado cierta aquiescencia hacia el plan que intentaba urdir Robledo desde el peronismo histórico para desplazar a Isabel, y ese factor jugó en su contra¹⁴⁷. La presidenta finalmente le retiró su apoyo dispuesta a encarar un nuevo ajuste ortodoxo. Este le fue encargado al flamante sexto ministro de economía desde que el peronismo había asumido en 1973, Eugenio Mondelli, un técnico y financiero que se desempeñaba como titular del Banco Central. Los sindicalistas verticalistas, no consultados en la decisión, titubearon en recurrir al enfrentamiento directo como en julio de 1975. Pero luego moderaron su reacción debido a las circunstancias políticas y la fragilidad del gobierno.

La dificultad de la tarea que tenía en ciernes el nuevo titular de Economía fue expuesta el mismo día de su asunción, el 4 de febrero, cuando la APEGE anunciaba un *lock-out* de 24 horas (que se efectivizó el 16 de febrero). Aunque las medidas que anunciaría y el ideario de Mondelli eran acordes a los intereses de los empresarios liberales, éstos ya estaban decididos a oponerse y desestabilizar al gobierno para desgastar aún más su estrecha legitimidad.

El 10 de febrero Mondelli declaró frente a una comisión parlamentaria que en el sector externo “No nos creen más”. *Clarín* saludó la sinceridad del nuevo ministro, cuya “autocrítica” no constituía más que un “franco punto de partida”, pero un punto de partida “inexcusable” que pedía se extendiera a todos los sectores. El matutino también elogiaba la declaración de Mondelli que criticaba la legislación restrictiva sobre las inversiones extranjeras y aprobaba su señalamiento sobre que recurrir al Fondo Monetario no implicaba enajenación de la soberanía (uno de sus primeros actos fue el intento de negociación con el FMI para obtener créditos). Pese a la aprobación del “sinceramiento” y el “espíritu autocrítico”, el matutino era cauteloso y aseguraba que había que esperar qué política seguiría el ministro. Concluía que si bien su palabra había tenido el efecto de “aventar los fantasmas del estatismo”, hacían falta “las realizaciones que encaren los problemas de fondo que el país soporta” (*Clarín*, 12/2/1976).

¹⁴⁷ Para forzar la renuncia de Cafiero, el lopezreguismo publicitó una noticia que implicaba a Cafiero en un escándalo con la bodega estatal mendocina Giol, de su época de interventor en la provincia de Mendoza. Y Julio González bloqueó los proyectos de Economía para que no llegaran al despacho presidencial, lo que generó un enfrentamiento con el segundo en el ministerio, Guido Di Tella (Kandel y Monteverde, 1976: 136-7).

El avance de los sectores empresarios en la desestabilización de la situación política se concretó el lunes 16 de febrero, cuando se cumplió el *lock-out* de la APEGE con un alto acatamiento. El paro empresario tuvo un rotundo aval por parte de *Clarín*, que señalaba el amplio consenso de la medida (“la medida tuvo carácter universal”, afirmaba)¹⁴⁸. La presentaba como legítima porque se originaba en un sector de la sociedad que se consideraba

agraviado por una política económica que impide el desarrollo normal de sus negocios, lo priva de las ganancias que estima legítimas y no le permite ensanchar sus bases haciendo imposible toda inversión útil, mientras se deteriora toda la infraestructura a cargo del Estado. (*Clarín*, 17/2/1976)¹⁴⁹.

En el editorial, *Clarín* retomaba el argumento empresarial que había justificado el *lock-out* aduciendo que la crisis afectaba “a todos”, para recordar que cuando los trabajadores habían protestado por la amenaza de pérdida del salario real también habían recibido el apoyo de diferentes grupos de la comunidad (en referencia a las protestas que se extendieron luego del “Rodrigazo”). En efecto, la APEGE se había preocupado particularmente de que el *lock-out* no fuera interpretado como una maniobra contra los trabajadores y así lo hizo saber en un comunicado donde mencionaba que los trabajadores también eran “víctimas” de la “gravísima situación económica” por la reducción de su poder adquisitivo (de hecho, el salario de ese día fue abonado en su totalidad por los empresarios)¹⁵⁰. *Clarín* aprovechó la circunstancia para criticar la actitud de la conducción de la CGE que había objetado el paro; “la misma que inauguró bajo el actual gobierno la política económica que condujo a esta situación”. La CGE había dejado en “libertad de acción” a sus entidades afiliadas -para evitar con una prohibición la desobediencia masiva de sus asociados díscolos-, pero había decretado la “movilización” del empresariado¹⁵¹. Por último, el tono perentorio de *Clarín* se extremaba al mencionar:

¹⁴⁸ La cobertura noticiosa fue particularmente amplia. Mereció gran parte de la tapa del martes 17 de febrero y su titular, en tipografía catástrofe, informaba: “Amplia adhesión tuvo el paro de los empresarios”. Iba acompañado de dos fotografías -lo cual era bastante inusual- que mostraban el paisaje desolador de los centros comerciales de la Capital Federal y del Interior. La noticia contó con amplia cobertura en la sección “Economía”, con diversas crónicas que ocuparon las páginas 12 y 13.

¹⁴⁹ Meses después, ya durante la dictadura militar, el diario recalca la “tan loable actuación” que había tenido la APEGE “en la última y deplorable etapa del gobierno clausurado en el mes de marzo” (*Clarín*, 3/11/1976). Y días antes de cumplirse un año del *lock-out*, el matutino recordó la medida como un “momento cumbre” para la conciencia nacional porque, pese a la resistencia de la CGE y la CGT, había reunido solidariamente a los empresarios de los sectores industrial, comercial, al agro y a los obreros que, frente a la gravedad de la crisis, habían encontrado un denominador común superando sus reivindicaciones sectoriales (*Clarín*, 14/2/1977).

¹⁵⁰ La CGT y las 62 Organizaciones criticaron y repudiaron la actitud de los empresarios que pertenecían a la “reacción” (*Clarín*, 17/2/1976, p. 13)

¹⁵¹ La CINA (Confederación Industrial Argentina), que nucleaba a los capitales industriales más grandes del país, disintió con la cúpula conducida por Broner, pero no adhirió al paro empresario por no estar de acuerdo con la metodología. De todas maneras, hacia fines de febrero expresó públicamente su disidencia con la conducción de la CGE, lo que obligará a Broner a renunciar en los primeros días de marzo, también flanqueado por la debilidad interna de su posición, la crisis del gobierno al que había apoyado durante el Pacto Social y el ascenso que había

La vasta problemática nacional no se agota en el tema económico, pero la obsolescencia de su vieja estructura genera insatisfacciones que, si bien resultan más perniciosas por la presencia de otros males, deben ser atendidas con prioridad sobre aquéllas, porque en su falta de solución está la simiente de una posible disgregación nacional. ***La decisión de obrar adecuadamente para que ello no ocurra es un acto de política, de alta política, que no admite más demoras***¹⁵².

Evidentemente, el destinatario de tal emplazamiento no era el gobierno nacional.

El apoyo del matutino a las medidas liberales ortodoxas como el “Rodrigazo”, a la concepción económica de Mondelli o al paro de los sectores empresarios liberales de la APEGE, permite observar que el ideario desarrollista no era un obstáculo para acercarse a las posturas liberales más intransigentes¹⁵³. Por el contrario, entre ambas orientaciones económicas había puntos en común. En primera medida, la concepción eficientista y el sesgo contrario al estatismo de tipo populista señalaba tendencias convergentes en las dos interpretaciones¹⁵⁴. Los puntos de acuerdo eran varios: concordaban en la ineficacia del Estado manejado por el peronismo “populista” y en particular en la crítica negativa sobre la política del Pacto Social (aunque con fundamentos contrarios entre una y otra visión). Había un acuerdo tácito en que las fuerzas del mercado debían operar libremente, aunque para el desarrollismo las grandes líneas del sistema capitalista debían estar impulsadas por el Estado. Según Acuña (1984: 87), el pensamiento de Frondizi se había acercado a las posiciones liberales ortodoxas luego de su encuentro con Frigerio en 1956 y la consolidación del frigerismo como grupo interno de oposición dentro de la UCRI. Justamente, el frigerismo criticaba la orientación “socializante” del Programa de Avellaneda, su vocación “estatista” y “populista” (aunque en ese Programa ya aparecía la aprobación de los mecanismos del libremercado)¹⁵⁵. Críticas que fueron plasmadas en el nuevo Programa de Chascomús de

tenido la APEGE como aglutinador del empresariado opositor.

¹⁵² Remarcado de este autor.

¹⁵³ Coincidencia que se renovará en el inicio de la administración Martínez de Hoz, por ejemplo en el acuerdo del desarrollismo con el criterio de subsidiariedad del Estado y su necesario “redimensionamiento” pregonados discursivamente por la conducción económica de la dictadura. Luego, el desarrollismo se transformará en uno de los principales críticos de la política económica del superministro.

¹⁵⁴ Y ello a pesar de que públicamente el MID mantenía una abierta disputa con sectores liberales ortodoxos (por ejemplo, un “clásico” era el debate económico entre Frigerio y Alsogaray). Al respecto, puede consultarse el debate publicado en el suplemento económico de *Clarín* entre Frigerio y Alsogaray a finales del año 1975 e inicios de 1976. El planteo de Frigerio, comentando qué distanciaba al desarrollismo del ciclo “populista-liberal”, puede consultarse en *Clarín económico* (28/12/1975). La respuesta de Alsogaray, también en *Clarín económico*, (4/1/1976).

¹⁵⁵ La Declaración de Avellaneda de abril de 1945 fue el momento fundante del Movimiento de Intransigencia y Renovación (M.I.R) dentro del partido Radical. El M.I.R expresaba la renovación que la juventud radical bonaerense estaba imponiendo desde dentro del radicalismo, disconforme con la práctica de la vieja dirigencia que, en su perspectiva, había conducido al aislamiento del partido. Las críticas de la juventud pusieron de relieve la escisión en dos tendencias dentro del radicalismo: la oficial, conservadora y “alvearista” que controlaba el partido (también llamados “unionistas” por su tendencia a unirse con otros partidos), y el sector de la juventud

1961 “superador” del Programa Avellaneda, donde el pensamiento de Frondizi y el del desarrollismo pregonarán una subordinación a la racionalidad económica y a la lógica de reproducción del capital.

Al anochecer del 16 de febrero, día del *lock-out*, el gobierno decretó el cierre del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados con la intención de bloquear una posible sanción de inhabilidad presidencial (la decisión generó airoas protestas de la oposición y más tarde se rectificaría). La actitud ahondaba la privatización del poder por parte del gobierno, el encierro en las preocupaciones “palaciegas” y el jaez autoritario de su práctica política. A esto se sumaba la repercusión pública por los hechos de corrupción que salpicaban al gobierno (el pedido de extradición de Lopez Rega, la prisión preventiva de otros funcionarios de Bienestar Social, o las declaraciones de ex funcionarios que probaban la vinculación del ex ministro con la Triple A). Por esos días de verano el embajador estadounidense, Robert Hill, le anticipaba a su gobierno cuáles serían los pasos del próximo gobierno militar y le advertía que las Fuerzas Armadas solo estaban esperando “el momento apropiado para intervenir” (cit. por Seoane y Muleiro, 2001: 69). El gobierno estadounidense de Ford, a través de su secretario de Estado Henry Kissinger, estaba informado al menos con un mes de antelación del futuro golpe y también del tipo de represión que le seguiría (Seoane y Muleiro, 2001: 70).

El 18 de febrero Isabel confirmó a todo su gabinete y anunció ante el Consejo de Seguridad interna, y luego al país por radio y TV, que no iba a renunciar, pero que tampoco se propondría para ser reelecta ni para ningún otro cargo legislativo. Aseguraba que las elecciones serían en 1976, según los mecanismos que pautara el Congreso, con lo cual virtualmente anulaba su anterior llamado a la Constituyente¹⁵⁶. Un día después se anunciaban

que comenzaba a afirmarse con sus llamados revisionistas de corte irigoyenista (el Movimiento Revisionista de la provincia de Buenos Aires). También en Córdoba se afirmaba la Intransigencia representada por Sabattini, que se oponía a los “unionistas”. El Programa de Avellaneda consolidó la orientación “izquierdista” de la franja del radicalismo juvenil revisionista encabezada por Moisés Lebensohn y Arturo Frondizi, redactor del Programa. La Declaración se constituyó en un programa político que refería a diversas esferas. En sus aspectos más esenciales, recuperaba la orientación del radicalismo como representante de la lucha de los sectores populares contra la “oligarquía”. En lo económico, si bien apoyaba la nacionalización de las fuentes de energía natural, los servicios públicos y los monopolios económicos y extranjeros, sostenía que las actividades económicas no comprendidas en el proceso de nacionalización debían poseer libertad económica sin trabas artificiales creadas por los poderes públicos. Según la Declaración, la iniciativa privada o individual tenían una función creadora (Acuña, 1984: 52-3; Del Mazo, 1955: 302).

¹⁵⁶ Luego del anuncio presidencial, *Clarín* publicó una crónica en su sección “Política” titulada “Los militares ante el mensaje”, donde comentaba la prescindencia militar pero aclaraba “Prescindencia política no significa, todo lo contrario, despreocupación del problema político institucional del país; hay preocupación, pero también serenidad ante el desarrollo del actual proceso nacional. Y el sentimiento de que constituyen la última reserva del país en caso de un fracaso generalizado que pusiera en peligro la integridad nacional.” (*Clarín*, 19/2/1976, p. 7). Este tipo de notas eran redactadas a partir de la información que recogía el periodista Luis Garasino, especializado en los temas militares y de fluidos contactos con las Fuerzas Armadas.

las elecciones para el 12 de diciembre de 1976. La interna peronista se recalentaba rozando el cisma entre los “moderados” -liderados por Robledo, que estaba de licencia por enfermedad, y por el vicepresidente segundo del Justicialismo, José Báez- y los “verticalistas”. El nuevo roce había surgido porque Báez había desautorizado una declaración de apoyo a la presidenta por parte de consejeros del Consejo Nacional del Justicialismo. Luego le demandó al gobierno la “erradicación” del entorno y una serie de rectificaciones políticas. Ante el avance, los “verticalistas” reclamaron la destitución de Báez por “traidor” y defendieron la investidura presidencial. La CGT y las 62 Organizaciones apoyaron a los “moderados”, denunciaron que la crisis se debía a la influencia del “entorno” y emplazaron a Isabel a que les restara poder. Pero días después expresaron públicamente que la apoyaban “incondicionalmente”. Isabel se reunió con los peronistas díscolos que le demandaron “rectificaciones”, a lo que la presidenta respondió que tantos planteos “no la dejaban gobernar”. Finalmente, a inicios de marzo Báez y Robledo renunciarían al Consejo partidario.

En medio de las disputas oficialistas, el líder radical Balbín declaró que “no sabía” si el gobierno estaba buscando el golpe, pero que estaba “haciendo todo lo posible para que se lo den” (*Clarín*, 21/2/1976, p. 5). Alrededor de un mes antes, Balbín se había reunido con un emisario de Videla para anunciarle que, aunque no lo aplaudiría, podía contar con su apoyo si había que tomar una “salida extrema” (Seoane y Muleiro, 2001: 68; Sáenz Quesada, 2003: 431). Paulatinamente, el grueso de la dirigencia sindical y política aceptaba con resignación -o directamente propiciaba- la “salida extrema” que se avecinaba. La incertidumbre general estimulaba los rumores de un golpe inminente, del cual se hablaba a viva voz. Ante el avance militar, un sector del partido peronista no verticalista intentó pergeñar un tipo de salida institucional decorosa para la presidenta, conciente que Isabel no podía permanecer en el poder. Pero la concepción carismática y verticalista, tradicional del peronismo, era uno de los principales obstáculos para concretar el desplazamiento desde el seno del partido de quien había sido puesta en ese lugar por el propio Perón. El juicio político o la declaración de inhabilidad presidencial eran variantes que se manejaban en la oposición, el peronismo antiverticalista y los propios parlamentarios del FREJULI. Pero no prosperó por las resistencias que generaba en el peronismo. Por un momento se barajó que Lúder, como presidente del Senado, convocara a una Asamblea Legislativa. De hecho, llegó a anunciarlo públicamente, pero la convocatoria finalmente no se concretó¹⁵⁷.

¹⁵⁷ En 1977 Lúder explicaría por qué no había convocado a una Asamblea Legislativa para declarar inhábil a la presidenta: “En verdad, a esa altura de los acontecimientos yo estaba convencido de que la decisión de las Fuerzas Armadas de tomar el gobierno era irreversible. Atento a ello y a la falta de viabilidad constitucional de la convocatoria solicitada, procuré evitar el enfrentamiento del mundo político y la fractura del justicialismo (...)” (cit. por De Riz, 1981: 201-2). En ese mismo sentido se expresa Di Tella (1983: 147) en relación a por qué

Luego de los últimos anuncios y virajes repentinos del gobierno, *Clarín* juzgó en muy duros términos su “estilo del gobierno”, señalando sus incongruencias internas como las declaraciones contradictorias de funcionarios y las marchas y contramarchas de las diversas medidas gubernamentales (*Clarín*, 21/2/1976). En ese orden manifestaba que:

Este estilo de gobernar (...) ha determinado que la formalidad de la actual crisis argentina se refiera a la necesidad de un cambio en la conducción del país. Así parece haberlo interpretado también la misma jefa de Estado al anunciar que de ninguna manera aspira a la reelección (...) Esta actitud, encomiable por cierto, recibida con beneplácito en distintos sectores de la opinión, contribuye a aliviar las tensiones actuales. Pocos, en cambio, se ocupan de destacar el real significado del problema nacional que hace al fondo de las cosas y que se centra en la urgente necesidad de revertir una política económica social que bajo distintos signos, pero con el mismo resultado, se viene prolongando en el país *desde hace casi tres lustros*¹⁵⁸ (*Clarín*, 21/2/1976).

Junto a la ya explícita condena a Isabel, que daba por sentado la necesidad de su desplazamiento del poder, *Clarín* confirmaba su enunciación refundacional al aseverar que un mero cambio formal no era suficiente para asegurar las transformaciones económicas que necesitaba el país. La refundación vendría a transformar toda la experiencia económica posterior al ensayo desarrollista trunco en 1962 (los “casi tres lustros”)¹⁵⁹. No se objetaba solo un gobierno, sino un proceso político y económico. La situación a la que se había llevado al país, según el diario, reclamaba soluciones drásticas, no meramente cosméticas o formales. De allí la extendida incredulidad con un gobierno que se juzgaba ya perimido. La agudización de la crisis ponía de relieve la postergación de la refundación desde hacia casi “tres lustros”. El imperativo refundacional no era consecuencia de la ubicua crisis, sino que ésta ponía aún más de relieve su postergación. Evidentemente, el discurso refundacional que ya era propio del ideario desarrollista, se potenciaba dentro del clima de inestabilidad y crisis integral de principios de 1976. Con este mismo tenor el MID repetía, en un comunicado público del 25 de febrero, su crítica lacónica hacia el gobierno y al sistema de partidos, aceptando el retroceso de las fuerzas políticas y reconociendo la legitimidad del avance de las Fuerzas Armadas en la conducción del proceso político¹⁶⁰.

no se inició un juicio político sobre la presidenta.

¹⁵⁸ Remarcado de este autor.

¹⁵⁹ En un editorial de mediados de marzo de 1976, al criticar por “superficial” la posible intervención de la provincia de Buenos Aires, repetiría que, en cambio, “ir al fondo de las cosas” suponía revertir una política económico-social que “bajo distintos signos, se viene prolongando en el país desde hace casi tres lustros” (*Clarín*, 16/3/1976).

¹⁶⁰ Algunos de los fragmentos más elocuentes de su declaración fueron: “Una crisis total, sin precedentes, ha desquiciado la sociedad Argentina hasta sus últimos resortes. (...) En estas condiciones lo peor que puede ocurrir a un pueblo es el estancamiento, la inmovilidad. Las sociedades, como las aguas sin movimiento, se corrompen. Las fuerzas que en ellas se mantienen vivas deben buscar entonces una salida, la apertura de cauces nuevos que restablezcan la salud perdida. Desdichadamente, los grupos que hoy representan no solo la conducción del

5.6. El fracaso del plan Mondelli y el inicio de la “cuenta regresiva”¹⁶¹ (febrero y marzo de 1976): “Es hora pues de detener la caída”

El carácter refundacional de los cambios que demandaba *Clarín* y la convicción de que ya no podrían ser puestos en marcha por el gobierno peronista, quedó palmariamente expuesto luego del anuncio del plan económico de Mondelli. Hacia fines de febrero, antes de anunciar su plan, Mondelli había pedido una “tregua” de 90 días para “aquietar” la carrera entre precios y salarios. Los sindicalistas desconfiaban del pedido, que suponían regiría más para los salarios que para los precios. Alvaro Alsogaray lo calificó directamente de “disparate” y adujo que ningún ministro peronista podía resolver la crisis económica. Para *Clarín* la propuesta no solo no era “novedosa” -se había intentado con Bonanni sin dar resultado- y había demostrado con creces su ineficacia, sino que se realizaba en un clima político distinto y frente a una situación que mostraba un “creciente deterioro”. Para encarar la crisis, que en su interpretación sobrepasaba el plano económico y se extendía al político, le exigía al Estado que recuperara “autoridad y congruencia” para actuar en la emergencia y en dirección de la “integración de las estructuras económicas” (*Clarín*, 29/2/1976). El plan liberal ortodoxo de Mondelli fue anunciado el 5 de marzo por el ministro y su gabinete utilizando la cadena nacional de radio y televisión. Declaraba la “emergencia nacional económica” y proponía una serie de medidas liberales combinadas con prácticas intervencionistas: devaluación, tregua social por 180 días, congelamiento de precios de unos pocos productos, aumento discreto de salarios (12% a partir del 1 de marzo), aumentos de servicios públicos y tarifas en alrededor del 80%, privatización de empresas públicas y reducción del gasto público, entre las medidas más importantes (Kandel y Monteverde, 1976: 192; Rougier y Fiszbein, 2006: 106-8).

El matutino recibió el nuevo plan con escepticismo e incredulidad (*Clarín*, 7/3/1976). Según el editorial posterior al anuncio, no había ninguna sorpresa en las soluciones propuestas. Hasta la pretensión de Mondelli de modificar la ley de inversiones extranjeras,

partido gobernante sino la práctica totalidad del sistema político formal, no han conseguido proponer ninguna iniciativa adecuada para enfrentar la crisis. Se han limitado, tan solo, a la defensa de la legalidad vacía de contenido, y con ello a proponer al pueblo argentino, como única solución, su propia continuidad como cuadros políticos supuestamente representativos”. Luego de recordar las recurrentes advertencias lanzadas por el MID hacía poco tiempo, afirmaba: “Pero ha quedado fuera de discusión (...) que los gobiernos y la legalidad son instrumentos al servicio de la compleja gama de problemas que suscita la urgencia de cambios y que es imposible postergar la solución de esos problemas porque lo impidan los prejuicios y la incompetencia de quienes encarnan al gobierno y la legalidad.” (*Clarín*, 26/2/1976, p 7). Seguramente, las Fuerzas Armadas habrán recibido con beneplácito el documento.

¹⁶¹ Remedamos el título del libro de Díaz (2002)

que había sido solicitada en forma insistente por el diario, era rechazada por “tardía”. Sobre la exposición del ministro, que asignaba las causas de la crisis a factores coyunturales de la economía internacional y a errores de las conducciones económicas que lo habían precedido, *Clarín* sentenciaba:

Todo ello demuestra que no se ha comprendido o no se ha querido ver el carácter estructural y subyacente de los males económicos argentinos. Y que no se ha advertido, tampoco, que el ataque a las manifestaciones superficiales de la crisis, aunque resulte momentáneamente exitoso, no impedirá su *inexorable recurrencia*¹⁶².

Evidentemente, para *Clarín*, todo lo que Mondelli pudiera hacer en la orientación anunciada estaba condenado al fracaso. Poco después renovará su crítica directa al ministro al advertir la filosofía “intervencionista y estatizante” que trasuntaba su plan (“Viejas y gastadas palabras”, titulaba el editorial que comentaba los propósitos de Mondelli; *Clarín*, 9/3/1976). Después de publicitar su plan, el ministro había prometido que se implementaría un férreo control de precios, el castigo a especuladores, si fuera necesario la intervención burocrática en el comercio interno y externo, y la “extirpación” de la corrupción. *Clarín* criticaba sin miramientos las contradicciones de la nueva administración económica, que en su opinión proclamaba los mismos fines que sus predecesores y quería erradicarlos con las mismas recetas erróneas sin darse cuenta que la administración pública estaba sumergida en la impotencia. No se estaba frente a cuestiones “doctrinarias”, sino frente a hechos “demasiado evidentes”. Y Mondelli lejos estaba de ser un “alquimista capaz de transmutar en algo distinto una realidad que está a la vista de todos”. Ante su promesa de terminar con la especulación, el contrabando y “otras modalidades de corrupción”, *Clarín* se preguntaba “¿acaso sus antecesores no proclamaron los mismos objetivos? ¿O es que la especulación, el contrabando y la corrupción han sido hasta ahora alentados o consentidos?”. En tono *admonitorio* y pedagógico afirmaba que la corrupción estaba vinculada con el “dirigismo burocrático” y un “torpe” congelamiento de precios; con la arbitrariedad de los funcionarios, las irregularidades en la concepción de permisos de importación y las denuncias sobre “transacciones públicas” aún no investigadas. Con cierta soberbia e ironía, agregaba:

Apoyando ambos pies sobre la realidad, el ministro de Economía puede vislumbrar desde ya el fracaso de propósitos que repetidamente han sido ridiculizados por el curso de los hechos. No tiene razón alguna para suponer que a partir de sus palabras el genio de la lámpara de Aladino, condolido de nuestras desgracias, procederá a prodigar sus milagros. (*Clarín*, 9/3/1976).

¹⁶² Remarcado de este autor.

En definitiva, para el editorial las promesas formuladas al país no tenían la menor viabilidad. Su crítica fulminante, irónica y despectiva daba cuenta del profundo desprecio hacia el gobierno y, también, del nivel de extrema polarización en las opiniones políticas que convocaba la crisis final del gobierno constitucional. Como es evidente, el tono y los argumentos del matutino parecían referir a un gobierno que, en realidad, ya no ejercía su autoridad. A partir de decretar el fracaso del plan Mondelli, *Clarín* terminaba de escribir el epitafio del gobierno peronista¹⁶³.

La CGE y la APEGE se opusieron al plan Mondelli, al igual que los metalúrgicos de Calabro. El plan había sido discutido previamente con el sindicalismo verticalista de Miguel y Herreras, que de todas formas entró en deliberación luego del anuncio. Los dirigentes sindicales se enfrentaron a una disyuntiva similar a la de junio de 1975, cuando se anunció el plan Rodrigo. Pero ahora se trataba de consentir un plan ortodoxo para apoyar a un gobierno débil, o ir al enfrentamiento y empujarlo hacia su derrocamiento. La diferencia con junio de 1975 era que en ese nuevo contexto el sindicalismo se encontraban más desgastado, había perdido la iniciativa política y estaba dividido en torno a cómo posicionarse frente al plan Mondelli. Las 62 Organizaciones eran proclives a apoyarlo como un gesto favorable a la presidenta; la cúpula de la CGT, que retaceaba el apoyo, se veía a su vez desbordada por las protestas de sus bases, sindicatos y regionales que se oponían firmemente (por ejemplo, la regional cordobesa tuvo un importante rol opositor). Casildo Herreras, titular de la CGT, se encontraba fuera del país, ya que había viajado a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra. No se sabía con exactitud si estaba en Ginebra o en Montevideo y su ausencia generaba inquietud. Ante las diferencias internas y la incertidumbre generalizada, el Consejo Directivo de la CGT emitió un comunicado donde llamaba a mantener la “disciplina” y pedía esperar a las resoluciones de los cuerpos orgánicos de la central. Finalmente decidieron negociar con el gobierno, pese a que la entidad de los

¹⁶³ En esta línea de razonamiento, una nota sin firma en la sección “Política” el 15 de marzo, titulada “Se agotan todas las instancias”, presentaba un *racconto* de los últimos eventos políticos. La nota objetaba las soluciones políticas que pudieran convocar los actores políticos tradicionales y afirmaba que el plan Mondelli marcaba el fracaso político en el diálogo entre gobierno y oposición (ya que había sido anunciado en forma inconulta con la oposición y cuando éstos aguardaban la posibilidad de un diálogo con el gobierno). En sus palabras: “Un gobierno que cometió serios errores, ciertamente, pero también una oposición que, salvo excepciones, no estuvo a la altura de su rol, perdiéndose en críticas de hombres o hechos no fundamentales, olvidando los problemas básicos del país y su necesidad de impostergables transformaciones ante la crisis que soporta el país.” Ninguno había “planteado los problemas de fondo”, por ello resultaba “difícil imaginar qué salida política puede intentarse todavía, entre un gobierno que ha realizado una jugada de la cual depende su suerte y una oposición que en gran parte no tuvo imaginación ni profundidad para plantear soluciones”. En contraste, la nota presentaba a los militares como “serenos” frente a la resolución de la crisis planteada en la rebelión de Capellini (*Clarín*, 15/3/1976 p. 8).

trabajadores contaba con la fuerza suficiente para oponerse a un plan con el que no comulgaba. En última instancia, la aceptación del diálogo se fundaba en que se trataba de un gobierno peronista que se encontraba en una situación de extrema debilidad, con las Fuerzas Armadas acechando para derrocarlo (Kandel y Monteverde, 1976: 202). Herreras retornó al país y el 10 de marzo se firmó un acuerdo por el cual el gobierno les concedió un 20% de aumento salarial desde el 1 de marzo -8 puntos más que los 12 previstos por Mondelli, que igual no cubrían la ascendente escalada de los precios- y se comprometía a la creación de una Comisión Especial de las Remuneraciones, la Productividad y la Participación, paso previo a la creación de un Instituto Nacional de las Remuneraciones, instrumento largamente anhelado por la CGT que le permitiría tener mayor control sobre la cuestión de los salarios y la estructura de costos de las empresas, entre otros aspectos¹⁶⁴. El acuerdo se firmó en la sede de la CGT con la presencia de Isabel, Mondelli, Herreras y Miguel. Para el movimiento obrero era beneficioso a largo plazo, pero en el corto plazo significaba la reducción del salario real (el golpe del 24 de marzo, obviamente, truncó los acuerdos). Luego de concertar la “paz” las bases y las regionales del interior mantuvieron un tiempo su posición de lucha, pero las huelgas se fueron extinguiendo con el correr de los días. Los dirigentes sindicales eran concientes que habría un futuro gobierno de las Fuerzas Armadas y en ese marco no convenía extralimitarse con los planes de lucha.

Mientras tanto, la especulación hacía que muchos comerciantes no abrieran las puertas de sus negocios porque les perjudicaba vender sus productos ante la incertidumbre de cuál sería el nivel “real” de los precios. El plan Mondelli solo estipulaba precios máximos para unos pocos productos, mientras que el resto quedaba sujeto al mercado. La práctica de los mayoristas de retener productos era generalizada y el gobierno ordenó que la Policía reprimiera la especulación. Los almaceneros fueron amenazados con las máximas penas si recurrían a la especulación y fueron secuestradas grandes cantidades de productos que eran inhallables en los comercios minoristas y estaban acaparados por los mayoristas, en una de las pocas medidas que revistieron al gobierno de cierto manto de autoridad. Por otra parte, las negociaciones con el FMI estaban obstaculizadas porque el organismo no accedía a dar créditos en tanto no se normalizara la situación política. Mondelli, como sus predecesores, sufría la dilación del Congreso que no votaba las leyes impositivas y de Presupuesto, paralizado por las pujas políticas. En este marco, advirtió públicamente que no tenía planes para ofrecer, sino solo medidas “adoptadas al borde del abismo”. El único espaldarazo que

¹⁶⁴ La creación del Instituto había logrado media sanción de la Cámara de Diputados en diciembre de 1975, pero el proyecto se encontraba demorado en Senadores. La Sociedad Rural Argentina directamente lo había calificado de “sovietizante”.

había recibido fue desde el seno del Justicialismo, que al renovar la conducción partidaria en su Congreso Nacional a inicios de marzo había consagrado a una conducción totalmente verticalista.

La última semana previa al golpe de Estado fue particularmente vertiginosa. Todas las variables desestabilizadoras se aceleraron: el recrudecimiento de la violencia política, la atonía gubernamental y el deterioro económico. El plan Mondelli se extinguirá en un rotundo fracaso y las pujas internas del peronismo presentaban a un oficialismo carcomido por sus disputas. La inflación de marzo estaría cercana a la hiperinflación al superar el 50% (Canitrot, 1983: 21). Entre marzo de 1975 y marzo de 1976 había sido de 566,3 % (INDEC, cit. por Rougier y Fiszbein, 2006: 228). En medio de rumores y declaraciones cruzadas, el gobierno intentaba salvar el proceso político en miríadas de reuniones. Los conciliábulos políticos entre funcionarios, opositores y gremialistas se multiplicaban. Avisados de la proximidad del golpe, algunos funcionarios de gobierno y gremialistas se distanciaron del escenario político o directamente se fueron del país¹⁶⁵. El martes 16 de marzo, en un esperado discurso, el líder radical Balbín había confesado por cadena nacional de radiodifusión que “no tenía soluciones” para la crisis y, además, exaltaba la lucha de las Fuerzas Armadas contra la “subversión”¹⁶⁶. Videla respondía a los sondeos del gobierno confirmando una y otra vez su respeto por la Constitución, mientras en las reuniones programáticas de lo que sería el “Proceso” le aseguraba a Martínez de Hoz cinco años de apoyo total de las Fuerzas Armadas para aplicar su plan económico (Seoane y Muleiro, 2001: 71-2). A partir del 20 de marzo los sucesos se aceleraron¹⁶⁷. Los grandes diarios dieron cuenta de esta “inminencia” de cambios acelerando la carrera desestabilizadora. Desde sus titulares, en tono apocalíptico y catastrofista, y sus editoriales promoviendo u aceptando el golpe de Estado, se reencauzaron sus líneas editoriales en función de los cambios que se avecinaban (Blaustein y Zubieta, 1999; Díaz, 2002; Malharro y López Gijsberts, 2003)¹⁶⁸.

¹⁶⁵ El caso más tristemente recordado fue el de Casildo Herreras, quien desde Montevideo declaró que “estaba borrado”.

¹⁶⁶ En sus palabras: “Algunos suponen que yo he venido a dar soluciones. No las tengo, pero las hay. Es ésta: la unión de los argentinos para el esfuerzo común de todos los argentinos”. Luego exaltaba a las Fuerzas Armadas por su rol en la “lucha antisubversiva”. Las designaba como “Las más meritorias que yo he visto en mi vida. Las que soportan todo. Las que enterraban a sus muertos y hablaban de las instituciones del país”. El radicalismo se había pronunciado indubitablemente.

¹⁶⁷ Para un análisis detallado de los días inmediatamente previos al golpe de Estado, véase Dearriba, 2006; Kandel y Monte Verde, 1976; Sáenz Quesada, 2003; Túrolo, 1996.

¹⁶⁸ Además de la evidente utilización de un discurso desestabilizador en torno a los eventos nacionales, una característica adicional en la diagramación de tapas y titulares en esos días fue la comparación -no azarosa, por cierto- de la situación nacional con las noticias de lucha civil que llegaban desde el Líbano. Luego del golpe de Estado del ejército libanés, el 11 de marzo, los combates en el país de Medio Oriente fueron presentados en la prensa nacional como la omnipresente amenaza de desintegración civil que sería el desenlace de la situación política argentina si no se daba fin a la crisis que afectaba al país. Sobre la Argentina pendía la amenaza de

A partir de la segunda quincena de marzo el tono de los editoriales de *Clarín* se tornó aún más dramático, destacándose su tono catastrofista, pero también *predictivo* en relación a los sucesos cuya inminencia se predecía¹⁶⁹. Remarcó los errores del gobierno y de los sectores políticos partidarios tradicionales, a la vez que profundizó su perspectiva sobre el jaez refundacional que debería tener la “solución” a la crisis. La editorialización pareció fundarse sobre un diagnóstico que daba por concluido al gobierno y al proceso político iniciado en 1973.

El 17 de marzo, ante un atentado guerrillero cerca del Comando General del Ejército, que había afectado circunstancialmente a civiles ajenos a la acción, *Clarín* remarcaba que nadie estaba exento de las consecuencias del “terrorismo” y que no cabían dudas sobre que la Argentina estaba “en guerra”. De allí que no debían existir vacilaciones para combatir a la “subversión” “con las armas que la República ha depositado en sus Fuerzas Armadas”. La “extinción” de la violencia era el prerrequisito para superar la crisis nacional. Frente a lo que avizoraba como el deslizamiento de la Argentina “sin pausa hacia abismos más profundos”, concluía en tono catastrofista y perentorio: “*Es hora pues de detener la caída*”¹⁷⁰ (*Clarín*, 17/3/1976).

Sus objeciones al gobierno y a la dirigencia política opositora, dejaban en claro que para el diario estos sectores no estaban capacitados para llevar adelante esa acción. En efecto, un día después menospreciaba la propuesta que Balbín había lanzado en su discurso por cadena nacional, donde además de afirmar que no tenía soluciones y elogiar a las Fuerzas Armadas, había hecho un tímido llamado a la concertación. Para el matutino, las palabras del líder radical no habían satisfecho la esperanza que había convocado su mensaje (*Clarín*, 18/3/1976; “La hora de la seriedad”, se titulaba el editorial). En cambio, su posición era un ejemplo claro de la “desorientación” de los dirigentes oficialistas y opositores. No se trataba de forjar pequeñas reformas a través de inviables concertaciones, sino de grandes cambios:

“libanización” (Malharro y López Gijsberts, 2003: 29)

¹⁶⁹ Ello fue acompañado por titulares que remarcaban la crisis del sistema político y se alineaban con un tono claramente desestabilizador. Por ejemplo, desde el 15 de marzo, una serie de notas de análisis político publicadas en la sección “Política”, sentenciaban desde sus titulares: “Se agotan todas las instancias” (15/3/1976, p.8), “La ausencia del Parlamento” (16/3/1976, p. 10), “El agotamiento del proceso” (19/3/1976, p.8), “Una semana decisiva” (22/3/1976, p. 9), “Hasta los ‘mangueros’ han desaparecido del Congreso” (23/3/1976, p. 8). Los titulares principales publicados en tapa por *Clarín* desde el 21 de marzo, que fueron “anunciado” con eufemismos el golpe de Estado, fueron: “Se esperan definiciones a la crisis” (domingo, 21/3/1976); “Semana decisiva en el desenlace de la crisis” (lunes, 22/3/1976); “Inminencia de cambios en el país” (martes, 23/3/1976); “Nuevo gobierno” (miércoles, 24/3/1976). Todos se publicaron en una posición jerárquicamente privilegiada, en tipografía catástrofe.

¹⁷⁰ Remarcado de este autor.

Los graves momentos que vivimos hacen que sea ésta *la hora de las decisiones*. Pero hacen también que hayamos llegado a *la hora de la seriedad*. Esta impone un lúcido análisis de los factores que determinaron ésta y todas las crisis anteriores. Se advertirá entonces que la Nación ha sido llevada hasta el límite de la disgregación por el agotamiento de todas sus estructuras tradicionales. Reemplazar estas estructuras obsoletas configura la gran responsabilidad de nuestro tiempo y, para hacerlo, hay que impulsar la actividad creadora de todos los sectores nacionales. Dicho de otro modo, abandonar el esquema paralizante seguido hasta hoy, y alentar el esfuerzo productivo de la comunidad en su conjunto (*Clarín*, 18/3/1976)¹⁷¹.

Con una referencia implícita a la célebre y premonitora convocatoria golpista de Lugones en la década del '20, con su "hora de la espada", *Clarín* invocaba la necesidad de cambios para refundar materialmente la República. Cambios que evidentemente no podían realizarse dentro de su "estructura tradicional". En el mismo sentido, el 20 de marzo ampliaba el diagnóstico negativo sobre la dirigencia política tradicional y apelaba a una elocuente metáfora para graficar la atonía del sector político: la del burro que intenta comer una zanahoria que cuelga delante suyo y que al desplazarse hacia adelante se mueve al unísono, quedando siempre fuera de su alcance (*Clarín*, 20/3/1976). Según el matutino, lo que ocurría en el país se asemejaba a la situación que afrontaba el burro. Sin embargo, mientras que el burro adelantaba camino, en cambio el país "perdía tiempo". En esa imagen de esfuerzos sin frutos a la vista resumía todas las iniciativas recientes del gobierno y de otros sectores políticos por conciliar soluciones a la situación del país¹⁷². Soluciones que suscitaban expectativas hasta que eran superadas por los hechos. Según su apreciación, tales iniciativas estaban desvinculadas de los problemas reales del país, observación que daba cuenta del innegable desprestigio de las fuerzas políticas, pero también era consecuencia del desapego del diario hacia los mecanismos previstos dentro del sistema institucional republicano para una resolución política de la situación nacional. Para *Clarín* esas iniciativas solo rozaban la

¹⁷¹ Remarcado de este autor.

¹⁷² Las iniciativas del gobierno que enumeraba eran el anuncio de elecciones, la reforma constitucional, la discusión del Proyecto Nacional y los "varios" paquetes de medidas económicas (sumado a que Mondelli había declarado que las medidas anunciadas en realidad no eran ni el "esbozo" de un plan, que se conocería en menos de 30 días). Las "instancias salvadoras" propuestas por "otros sectores" que menospreciaba eran el juicio político, la Asamblea Legislativa, la convocatoria a una reunión multipartidaria y la aparición de "un encumbrado líder opositor" por la cadena oficial de difusión (Balbín, quien no era mencionado). El editorial afirmaba que las iniciativas tenían una íntima vinculación con lo que consideraba la "célebre tesis ortopédica del presidente del Comité Nacional de la U.C.R." (en relación a la frase que meses atrás había formulado Balbín sobre que había que llegar como sea, hasta "con muletas", a las próximas elecciones). Y renovaba su desestimación sobre que el mero acto eleccionario pudiera resolver la crisis planteada. Para *Clarín* se le estaba asignando a las elecciones y al cumplimiento formal del ejercicio del poder el carácter de "fin en sí mismos", suponiendo que "El país quedaría así automáticamente curado cuando se ejerciten en forma sistemática los comicios. El llamado a la defensa de las instituciones, que se oye hoy con tanta insistencia, resulta de ese modo desprovisto de substancia al estar referido simplemente a su epidermis formal." (*Clarín*, 20/3/1976).

“epidermis” de los problemas nacionales al vincular la defensa de las instituciones con el mero cumplimiento de elecciones o actos formales del ejercicio del poder.

Como ya se ha analizado, para el matutino las instituciones estaban amenazadas principalmente porque lo que se había agotado era un sistema económico. Su discurso monocausal (Díaz y Passaro, 2002: 182) se expresaría en los editoriales del domingo 21 y el lunes 22 de marzo al ocuparse de la realidad económica. El domingo se refirió en duros términos a uno de sus objetos predilectos de denostación, el Plan Trienal, del cual concluía que era una “enunciación de metas sin contenido realista alguno, [que] pertenece ya al pasado” (*Clarín*, 21/3/1976). Un día después, y evidentemente en vista del panorama económico que se abriría una vez derrocado el gobierno, señalaba que ante el fracaso de la “experiencia populista” era “inconducente” una alternativa liberal (*Clarín*, 22/3/1976). Para el diario “los excesos del populismo distributivo” eran los que habían obligado al gobierno a llevar a cabo las experiencias ortodoxas (no las mencionaba, pero refería a la administración de Rodrigo y Mondelli). Frente al fracaso de la experiencia populista, condenaba a quienes “desde el Gobierno o fuera de él” estaban alentando la “alternativa liberal”. Era una referencia implícita a Alsogaray, que en una declaración pública con el título “*Hay que saber esperar*” analizaba la crisis nacional y llamaba a las Fuerzas Armadas a “esperar” antes de dar el golpe, para que el gobierno se hundiera aún más en su ilegitimidad¹⁷³. Según el diario, la repetición del ciclo populista-liberal ya había demostrado ser nociva para el país, porque ambas experiencias proponían solamente generar mayores beneficios, pero no trastocaban las estructuras del subdesarrollo que los limitaban. Los populistas distribuían riquezas, pero desatendían o penalizaban el aparato productivo que las creaba. Los liberales planteaban erróneamente que al poner en orden a la economía espontáneamente se darían las condiciones para superar los obstáculos que trababan su expansión. Esta era sin duda la opción más “falaz” por las expectativas que creaba. En cambio, no se trataba de una ni otra opción. Debía comprenderse que el país era estructuralmente subdesarrollado y que para transformar esa realidad había que tomar “acciones deliberadas”, que no estaban subordinadas a un ordenamiento previo de la economía o a cualquier “esfuerzo disciplinador, por duro que sea”, porque justamente el desorden era un “subproducto” del subdesarrollo. El “proceso

¹⁷³ Alsogaray reflexionaba que un golpe facilitaría las cosas de quienes eran los “responsables del caos” que vivía el país, y que había que “saber esperar” hasta que el país entero estuviese clamando para que se vayan (*Clarín*, 21/3/1976). *Clarín* recordaría este hecho en editoriales posteriores. A fines de 1976, ante la publicación del primer documento sindical crítico del gobierno, realizaba una apreciación negativa de la posición de la dirigencia sindical argumentando en forma comparativa: “Resulta lo mismo que si las FF.A.A. agotada la vía institucional, a punto de disgregarse la Nación, vencidos todos los plazos, hubieran dejado pasar el 24 de marzo del año anterior a la espera de que el poder se descompusiera aún más, como alguien aconsejara entonces.” (*Clarín*, 9/1/1977)

ordenador” tenía que ser simultáneo a las medidas de fondo que atacarían el subdesarrollo. La tardanza en tomar esas medidas era lo que había conducido a la República a la crisis (*Clarín*, 22/3/1976).

Lejos de estas disquisiciones, los militares se aprestaban a derrocar a Isabel Perón. Todos los titulares de los grandes diarios del 23 de marzo mencionaban la “inminencia” de cambios en el país. La combinación de la violencia política, la crisis institucional y partidaria, y la debacle económica habían sido demasiado para un gobierno incapaz como el que presidía la viuda de Perón. Desde el “Rodrigazo”, de junio de 1975, hasta marzo de 1976 se fue desarticulando el frente de fuerzas que componía el FREJULI y el compromiso de los partidos opositores como la UCR y Alianza Popular Revolucionaria de ejercer una oposición leal. La retracción de la dirigencia política y los canales institucionales de negociación de los conflictos fue ocupado por una violencia cotidiana que acentuó la sensación de “caos” y “desgobierno” (Cavarozzi, 2006). Las cúpulas eclesásticas otorgaron su consenso para que las Fuerzas Armadas reintrodujeran la “disciplina” perdida en la sociedad, mientras que los medios de comunicación apoyaron el restablecimiento del “orden”. Sectores amplios de la sociedad, cada vez más distanciados de la arena política, y de forma determinante las clases medias urbanas, estuvieron finalmente dispuestos a aceptar, o directamente demandaron, un nuevo quiebre del orden institucional. En este contexto de descomposición institucional, los comportamientos económicos de los representantes de los trabajadores y los empresarios clausuraron los mecanismos de negociación y de acuerdo para privilegiar actitudes de ganancias a corto plazo en el día a día. Particularmente la cúpula empresarial liberal fomentó la imagen de caos y desgobierno, situándose como censora externa del gobierno y la sociedad (Cavarozzi, 2006). Un rol similar le cupo a las Fuerzas Armadas, que trabajaron en sordina para erosionar la legitimidad gubernamental, aparecer ante la opinión pública como las restauradoras del “orden” social perdido, y así esconder su voluntad de poder por detrás del carácter “inevitable” de los cambios que debían realizarse. Muy pocos conocían las verdaderas intenciones palingenésicas de las Fuerzas Armadas y los métodos a los que apelaría para asegurarlos.

Finalmente, el 24 de marzo volvieron. Y esta vez no iba a ser fácil olvidarlos.

5.7. Golpe y consenso expectante: “Un final inevitable” que augura “un buen punto de partida” (marzo de 1976)

Luego de meses de planificación, el miércoles 24 de marzo a la una de la madrugada las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón y asumieron el control de la República. Más tarde fueron encarcelados “legalmente” tanto la presidenta como todos los integrantes de su gobierno, y dirigentes políticos y sindicales de toda procedencia considerados “enemigos potenciales”. Otros dirigentes considerados “sospechosos” o “enemigos activos” no correrán esa suerte y serán apresados por los Grupos de Tareas pasando a estar “desaparecidos”¹⁷⁴. Las fuerzas militares tomaron inmediata posesión de los edificios públicos y de gobierno. Lo mismo ocurrió con sindicatos, estaciones de radio y televisión de Buenos Aires y otras ciudades del interior. Posteriormente se comunicó por los medios masivos que una Junta de Comandantes había asumido el poder político de la Nación bajo el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional”, una denominación que trasuntaba el ideario mesiánico de los militares al intentar asemejar el nuevo régimen al surgido en 1862, cuando se asentaron las bases jurídicas de la organización del Estado Nacional bajo la égida de las clases terratenientes agroexportadoras.

La Junta estaba integrada por los tres jefes de las Fuerzas Armadas -el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti- bajo la repartición de un poder por partes iguales (el “33 por ciento” de poder para cada fuerza propuesto por Massera en los conciliábulos previos al derrocamiento en su interés por fogonear su germinal proyecto político; Uriarte, 1992: 95-6; Seoane y Muleiro, 2001: 66). Era un golpe apoyado por toda la institución militar. La organización tripartita tenía como finalidad garantizar el compromiso institucional de las tres fuerzas en el nuevo gobierno y en la feraz represión que se había pergeñado, el impedimento para cualquier escaqueo personalista de alguno de los jefes militares y la intención de mantener bajo control el poder presidencial¹⁷⁵. Según el “*Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional*” la Junta sería el órgano supremo de la Nación y contaría con un “cuarto hombre” en el rol de presidente que ejecutaría sus resoluciones¹⁷⁶. El cargo del cuarto hombre por fuera de la Junta

¹⁷⁴ Según describen Novaro y Palermo (2003: 21), la distinción entre enemigos “activos” y “potenciales” fue establecida en una orden secreta emitida por el Comando del Ejército en febrero de 1976. A diferencia de los enemigos “activos”, que eran devorados por la maquinaria represiva clandestina, los enemigos “potenciales” -como jefes sindicales, funcionarios de gobierno y la propia presidenta- fueron detenidos “a disposición del Poder Ejecutivo”.

¹⁷⁵ La actitud personalista que había tenido Onganía durante la “Revolución Argentina” era el ejemplo paradigmático de lo que tenía que evitarse en esta nueva experiencia dictatorial. Otro ejemplo reciente de personalización dictatorial era el caso del general Augusto Pinochet, en Chile (Quiroga, 2004: 15).

¹⁷⁶ La Junta designaría al presidente y a los miembros de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) (una suerte de “parlamento” *ad hoc* integrado por representantes de las tres fuerzas cuya función era recibir proyectos del Ejecutivo y elaborar dictámenes favorables o desfavorables; durante la dictadura militar funcionaría con escaso éxito). También se arrogaba funciones que la Constitución Nacional delegaba para la figura presidencial, como la declaración de guerra y el estado de sitio, o la designación de miembros de la Corte Suprema, entre

quedó pospuesto para el futuro por la “situación de excepcionalidad” que suponía la “lucha antissubversiva” (aunque luego con la asunción de Galtieri en 1981 se repetiría la “irregularidad”). Videla, como jefe del Ejército -arma que detentaba el mayor número de integrantes en 1976-desarrollaría transitoriamente la tarea de presidente de la Nación e integrante de la Junta¹⁷⁷. El Ejército obtenía para sí el rol Ejecutivo, dando cuenta de su posición privilegiada en el juego de las tres armas¹⁷⁸.

Los objetivos del autodenominado “Proceso” se expresaron en un “Acta de objetivos” donde las Fuerzas Armadas declararon que se proponían restaurar el orden basado en la “relación armónica entre el Estado, el capital y el trabajo” y promover las condiciones para una “auténtica democracia”, entre otros señalamientos. El “Acta...” hacía referencia a los valores de la moral cristiana y la tradición nacional dentro de los cuales estaría enmarcada la “reorganización nacional”. Su propósito era terminar con “el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo”, y aclaraba que sólo estaría dirigida hacia quienes hubieran “delinquido o cometido abusos de poder” y no suponía “discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno”. De allí que rechazaba la acción “disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia” (*Clarín*, 25/3/1976). En sus primeros pasos con el poder entre manos los militares trataron de presentarse en sociedad como ordenados, civilizados, comprometidos con el respeto de la ley y la moral, pero inflexibles en relación a los cambios a implementarse (Novaro y Palermo, 2003: 20). Sus anhelos refundacionales se resumían en que el gobierno no tendría plazos, sino objetivos.

Además de destituir a las autoridades constitucionales, el gobierno militar dispuso la disolución del Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los Concejos deliberantes, mientras que otorgó facultades legislativas al Poder ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia fue declarada “en comisión” y los nuevos jueces debieron jurar fidelidad a las “Actas y

otras.

¹⁷⁷ Los integrantes del Ejército eran 80.000, mientras la Marina tenía 30.000 y la Fuerza Aérea 18.000 (Uriarte, 1992: 95).

¹⁷⁸ La Junta de Comandantes, el Poder Ejecutivo y la CAL eran en los planes preliminares los tres órganos centrales que ejercitarían el poder. El resto de los cargos ministeriales se repartieron proporcionalmente entre las tres fuerzas (menos Economía y Educación, ocupada por civiles, aunque el ministro de educación, Ricardo Bruera, era un hombre vinculado a Massera). Cada fuerza tenía un representante en los ministerios, lo que crearía una pléyade de burócratas civiles y militares. La mitad de las gobernaciones fue para el Ejército, y el resto se dividió entre las dos fuerzas restantes (los municipios, en su mayoría, quedaron en manos de civiles adherentes al “Proceso”). Como nunca antes la militarización del Estado fue casi total, con una masiva presencia de oficiales en actividad en la función pública. Se debía tanto al fracaso de las coaliciones de gobiernos cívico-militares anteriores, como al tipo de represión clandestina que se implementaría y cuya responsabilidad tenía que ser compartida por igual entre las fuerzas para eliminar disidencias y potenciales acusaciones. También en 1976, a diferencia de las anteriores intervenciones castrenses, los militares no emprenderían una rápida salida electoral sino que pretendían organizar institucionalmente una sucesión presidencial militar.

Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional”, disolviendo en los hechos la independencia de la Justicia, entre otros instrumentos legales que se sumaron a aquellos que restringieron derechos civiles (Acuña y Smulovitz, 1993). Se suspendió la actividad gremial y el derecho de huelga, se ilegalizó a la CGT y a las 62 Organizaciones, se intervinieron un gran número de sindicatos, se suspendió la actividad de los partidos políticos tradicionales a nivel nacional, provincial y municipal, y en junio de 1976 se prohibió la actividad de algunos partidos políticos catalogados como “extremos” -tanto ubicados a la derecha como a la izquierda del espectro ideológico- (Yannuzzi, 1996: 66-7). Sin embargo, la despolitización forzada por el régimen no supuso el fin de la política. La política se transformó. Se trasladó a la oscuridad de las bambalinas del poder, un espacio vedado para la mayoría y accesible para pequeños grupos con intereses particulares -los “amigos del Proceso”, según la elocuente expresión de Oszlak (1984: 39)- que buscaban prebendas de algún sector militar o de los grupos burocráticos que traccionaban intereses desde el Estado. Según Yannuzzi (1996: 49), la suspensión -y no prohibición- de la actividad política mantuvo en el inicio de la dictadura un espacio político reducido y manejado por las Fuerzas Armadas que le permitió a los militares granjearse cierto consenso en los dirigentes políticos partidarios más encumbrados.

El golpe fue recibido con pasividad por parte de los actores políticos tradicionales y gran parte de la sociedad civil, pese a la convocatoria desesperada al paro y movilización de la GGT y las 62 Organizaciones en la madrugada del 24 de marzo. La redacción de *Clarín*, como la de otros diarios nacionales, estaba esperando el golpe de Estado alertada por sus fuentes en el Ejército¹⁷⁹. La edición del 24 de marzo reflejaba el profundo distanciamiento del diario con el proceso político abierto en 1973 que culminaba en su derrocamiento. “Nuevo gobierno”, rezaba el titular principal en tapa, haciendo uso de un tipo de letra inusualmente grande, aún para el hecho en cuestión. La tapa eludía abiertamente el carácter activo de las Fuerzas Armadas en la destitución. Para un lector desprevenido, el “nuevo gobierno” parecía haber sido fruto de una elección popular legítima y legal (Blaustein y Zubieta, 1999)¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Luis Garasino, la fuente de *Clarín* en las Fuerzas Armadas, le había confirmado al jefe de redacción, Marcos Cytrynblum, que el golpe sería el 23 de marzo. Los periodistas se aprestaron a redactar las notas pertinentes que repasaban la “culminación del proceso”. Sin embargo, ese día el golpe se retrasaba y los dirigentes sindicales y peronistas negaban las versiones golpistas. Luego de una comunicación telefónica, Garasino le confirmó que sería en la madrugada del miércoles 24. El cierre de la edición de ese día se retrasó hasta promediando la madrugada. En la redacción no faltaron los comentarios irónicos sobre el momento “inoportuno” en que los militares dieron el golpe, teniendo en cuenta el horario vespertino de trabajo de las redacciones y el cierre nocturno de la edición diaria (Llonto; 2003: 131).

¹⁸⁰ El titular de tapa del 24 de marzo, “Nuevo gobierno”, y el de las páginas siguientes (2 y 3) “Las FFAA asumen hoy el gobierno”, expresaban la “naturalidad” con que fue recibido y presentado el golpe de Estado. Solo en el copete de una crónica publicada en la página 3 se observaba una referencia al rol activo de las Fuerzas Armadas: “La decisión de tomar el poder por las FF.AA no toma de sorpresa a los observadores políticos y desde hace 48 horas tampoco a vastos sectores de la opinión pública. Fue la culminación de un largo proceso, durante el cual los mandos castrenses decidieron prepararse para dar este trascendental paso, en caso de que el

En esta misma dirección se expresó el editorial del día, titulado “El gobierno ha cesado” (*Clarín*, 24/3/1976). El propio título del editorial, con un tinte de pretendida objetividad, repetía el distanciamiento que se verificaba en el titular de tapa. Debido a la hora en que fue emprendida la acción golpista, el editorial todavía refería en presente al gobierno y al proceso político peronista, mientras que a su vez mencionaba que el gobierno en los hechos había “cesado”. El editorial describía en estilo *expositivo* las circunstancias que justificaban el “cese”, presentando al gobierno como responsable de la situación en tanto agente “*pasivo-negativo*” (Díaz y Passaro, 2002: 184). Lo calificaba como “abrumado” por la circunstancias, “desconcertado” por el fracaso de sus medidas para resolver la crisis y “paralizado” ante el derrumbe final de las esperanzas que se habían puesto en él tres años antes. Era así como se asistía a “un descalabro económico sin precedentes”; la Argentina en ese terreno marchaba “a la deriva”. A tono con los últimos editoriales, se mencionaba la responsabilidad de los agentes “*activos-negativos*” para explicar el derrumbe (Díaz y Passaro, 2002: 184). Según *Clarín*, el Congreso Nacional había sido “incapaz” de corregir la “errática” y “desfalleciente” actividad del Poder Ejecutivo, los dirigentes sindicales eran “corresponsables” de lo que sucedía “contagiados por el desconcierto” y la clase política intentaba “componendas inoperantes”, ostentaba “dirigentes perimidos” y “partidos obsoletos” que solo buscaban alargarse su propia vida (lo que el MID y *Clarín* definían peyorativamente como la “partidocracia tradicional”)¹⁸¹. Era todo un sistema y sus actores, no solo un gobierno, el que estaba agotado.

Frente a esta descomposición el gobierno asistía “resignado a este espectáculo. Y:

Ya no es más una fuente de poder sino una estructura formal, un organigrama sin vida ni contenido. Nadie espera de él la redención o la rectificación salvadora. Y por eso, en cuanto a los efectos prácticos de su función institucional, puede afirmarse sin mayor margen de error que el gobierno ha cesado. (*Clarín*, 24/3/1976).

El tono distante e indiferente se refrendaba con la utilización del recurso persuasivo de la verdad taxativa. Como han señalado Díaz y Passaro (2002: 185), la culminación del gobierno parecía ser responsabilidad de su autodeterminación y la de toda una dirigencia política y sindical (ni siquiera se mencionaba directamente a Isabel Perón como responsable). Tal es así que el editorial no hacía ninguna mención explícita a las Fuerzas Armadas,

proceso tomase un rumbo que pusiera en peligro la integridad nacional.” (*Clarín*, 24/3/1976, p. 3).

¹⁸¹ El 31 de marzo de 1976, en su “Memorandum N° 1” luego del golpe de Estado, el MID declaraba sobre la partidocracia: “Los mecanismos políticos de la partidocracia tradicional no ofrecían ninguna alternativa de solución a los problemas más fundamentales de la Argentina; las cúpulas corrompidas y caducas tenían al inmovilismo como base de la supervivencia, conducían hacia una polarización excluyente entre el populismo peronista y el populismo radical.” (Movimiento de Integración y Desarrollo, 1981: 97).

principal protagonista de las circunstancias. Más adelante analizaremos esta “ausencia”¹⁸². Vale destacar que en la evaluación sobre la causas del golpe de Estado, el diario ubicaba a la “violencia subversiva” como un factor más de desestabilización dentro del conjunto más amplio de la crisis nacional, pero no era el elemento excluyente que explicaba la intervención militar. Por otra parte, el sector empresario era otro de los actores que aparecía representado como agente “positivo-pasivo”, en tanto según *Clarín* era víctima de una errónea política económica que premiaba la especulación por sobre la producción. Referencia sintomática en torno al tipo de intereses que defendía el diario.

Un día después, con la Junta ya habiendo asumido el gobierno nacional, el matutino ampliaba los fundamentos de su posición (*Clarín*, 25/3/1976)¹⁸³. El recordado editorial anunciaba desde su título “Un final inevitable”, resumiendo en pocas palabras la concepción

¹⁸² Las referencias elípticas al golpe de Estado que en los editoriales del 24, 25 y 26 de marzo evitaban mencionar el rol activo de las Fuerzas Armadas fueron: “el gobierno ha cesado”, “un final inevitable”, “cambio registrado”, “se abre ahora una nueva etapa”, “se dispusiera su relevo”, “régimen ahora desaparecido”, “la sustitución de sus gobernantes”, “la caída inevitable”, “la necesidad del cambio”, “el cambio resultaba necesario”, “el reemplazo del elenco gubernativo”, “la sustitución de un régimen agotado”, “el cambio de autoridades producido”.

¹⁸³ En perspectiva histórica, no puede dejar de señalarse la paradoja que presentaba la tapa del jueves 25 de marzo y sus notas interiores al ponerse en vinculación la supuesta “total normalidad” a la que aludía *Clarín* en la superficie redaccional del día con el propio acontecimiento del golpe de Estado y las medidas de corte autoritario que le siguieron. Por ejemplo, en la tapa predominaba el titular “Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno” (mayúscula, en negro, tipo catástrofe), mientras que en la parte superior la volanta aclaraba “Total normalidad”. Completaban la tapa, entre otros, los titulares “Fueron suspendidas las actividades políticas y gremiales” y “Intervinieron la C.G.T y la C.G.E y la Cruzada Justicialista”, medidas que en otra situación distarían de ser “normales”. También en la página 8 de esa edición, un titular en letras tipo catástrofe informaba “Hay total normalidad” y la nota correspondiente comentaba el “clima de absoluta normalidad” en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Las marcas de este retorno a la “normalidad” se repetían en la tapa del 26 de marzo. Junto a una fotografía con gente caminando por la calle Florida, se informaba “Reabrieron teatros y cines”. El copete ampliaba sobre la reanudación de las actividades del teatro y cine luego de la “corta pausa” impuesta por el asueto que había decretado la Junta. Se destacaba la “absoluta tranquilidad” con que los porteños habían retornado a la calle Lavalle, uno de los lugares donde se ubicaban las principales salas. A su derecha, la bajada de un nuevo titular informaba “Normalización”. “Se reanudan las clases primarias y funcionarán los bancos”. En la sección política de ese día, *Clarín* destinaba una página entera a destacar la vuelta a la “normalidad”. En este caso, la nota se titulaba “La ciudad volvió a su ritmo” y depositaba su atención en las actividades cotidianas de la ciudad de Buenos Aires (*Clarín*, 26/3/1976, p. 11). Según el copete, la ciudad rápidamente había vuelto a mostrar “una imagen de normalidad”, entre otras cuestiones porque la rapidez con que la Junta había designado los cargos “esenciales” determinaba que “no hubiera interrupciones en la labor cotidiana”. Más sugestivas aún eran las fotografías que ilustraban la nota (cuatro en una misma página). En la parte superior y a la izquierda aparecía una imagen de la calle Florida con gente caminando; su epígrafe rezaba “La tradicional calle Florida ofrecía ayer su habitual fisonomía. Centenares de turistas efectúan compras en los negocios.” Contiguo a la derecha de esa imagen, otra fotografía mostraba a chicos en una plaza; su epígrafe informaba “Las plazas y parques se vieron ayer concurridas por numerosos jóvenes y niños, que gozaban del asueto escolar”. Debajo, una foto mostraba soldados frente a la casa de Gobierno, algunos sonrientes, y el epígrafe ampliaba: “Los soldados que montaban guardia frente a la Casa de Gobierno ayer emprendieron el retorno a sus respectivas unidades”. La última imagen de la secuencia mostraba a un soldado con su mano extendida hacia un grupo de palomas en una desolada Plaza de Mayo, su epígrafe rezaba: “La zona bancaria permaneció inactiva debido al feriado dispuesto por el gobierno. En la Plaza de Mayo, uno de los soldados que retornaba a su asiento se entretuvo dando de comer a las palomas”. Tal vez esta última fotografía resumía de forma elocuente la yuxtaposición de significados con que el diario ponderó al golpe militar: la toma “pacífica” del poder, la carencia de apoyos del gobierno peronista, la “normalidad” de los cambios y la “sobriedad” con que habían sido producidos por las Fuerzas Armadas, la restauración de la “paz” y el “orden” perdidos que traerían las Fuerzas Armadas, entre otros.

fatalista con que se había aceptado el golpe (que no fue exclusiva de *Clarín*). El matutino reforzaba la responsabilidad del gobierno por su caída, en este caso recordando que frente al rumbo incierto que había tomado no atendió las “justas críticas, persistiendo en el curso suicida que terminó por llevarlo a su desaparición”. Justamente, *Clarín* se incluía entre aquellos que habían realizado una “constructiva advertencia”, recordando -sin mencionarlo literalmente- el editorial en el que interpelaba “¿A dónde se está llevando al país?” (*Clarín*, 5/10/1975). La ilegitimidad e ineficacia en el ejercicio del gobierno, causa que implícitamente justificaba el derrocamiento, se asentaba en un criterio instrumental por el cual “su inexplicable adhesión a políticas que demostraron reiteradamente su inoperancia para resolver los problemas nacionales, lo fue despojando de la imprescindible utilidad institucional que justifica su existencia”. De allí que para el matutino se hubiera reducido a un mera apariencia formal de poder. Este argumento de raigambre utilitaria se entroncaba con aquel que desvalorizaba las propuestas que para resolver la crisis política del gobierno peronista habían sugerido cambios en los aspectos formales o legales del ejercicio del poder (véase, por ejemplo, *Clarín*, 4/10/1975 o *Clarín*, 16/2/1976). En este caso, el diario recordaba la ineficacia de los intentos de acuerdos electorales o diálogos con otras fuerzas políticas que pretendían resolver las cuestiones institucionales con un “simple cumplimiento de los plazos y la observancia estricta de una legalidad sin contenido”. Para el diario el basamento de la institucionalidad residía en un criterio pragmático. La inoperancia y persistencia en políticas equivocadas del gobierno para afrontar la “enfermedad que carcomía progresivamente” a la Nación -una economía que demostraba haber entrado en “colapso total”, la violencia “subversiva” que se había incrementado de forma “intolerable”, la corrupción instalada en el gobierno “hasta los más altos cargos”-, lo habían llevado a perder “toda utilidad práctica a su función institucional” y se había convertido en “una simple abstracción legal” (*Clarín*, 25/3/1976)¹⁸⁴.

En nuestro punto de vista, la ausencia de una objeción hacia un suceso intrínsecamente ilegal como el golpe de Estado quedaba subsanada en la lógica argumentativa del matutino porque *Clarín* apuntaba a señalar que lo que había fracasado era -y apelamos aquí a conceptos

¹⁸⁴ Menos de un mes después, al comentar la función de la CAL en el “Proceso”, *Clarín* ofrecía otro ejemplo de su criterio utilitario y la desaprensión sobre las normas institucionales del funcionamiento republicano. En relación a que la Comisión había previsto un procedimiento expeditivo para dar curso a las cuestiones urgentes, afirmaba “Ello garantiza un pronto despacho de los asuntos y ahorra las interminables demoras a que nos tenía acostumbrados el último Congreso en sus tramos finales” (*Clarín*, 23/4/1976) (el editorial hacía referencia a las dilaciones que había caracterizado a la práctica parlamentaria en la última etapa peronista empantanada en las luchas políticas partidarias, principalmente en la interna del partido gobernante). Vale reparar en el tipo de visión sobre la política y las formas republicanas que subyace en esta analogía, donde el Congreso y la CAL eran puestas a un mismo nivel de legitimidad.

clásicos en la literatura de Ciencias Políticas (Quiroga, 2004: 22)- la *legitimidad del gobierno o de apoyo*, resultante del reconocimiento de los resultados de la actuación del gobierno o su eficacia, mientras que la *legitimidad del sistema*, basada en el reconocimiento de la legalidad y la aceptación de las reglas pacíficas de sucesión del poder, se tornaba secundaria o irrelevante frente a la recurrente impericia gubernamental, que pasaba a ser motivo suficiente para menospreciar la *legitimidad del sistema*. Debemos comprender esta interpretación y desafección al menos a través de dos aspectos: por un lado, y como ya se ha mencionado, dentro de la tradición de un sistema político y una cultura política para los cuales la legitimidad del sistema democrático estaba supeditada a su utilidad práctica para conseguir beneficios sectoriales o corporativos, la posibilidad de obstaculizar proyectos de sectores sociales antagónicos, o la concreción de ciertos objetivos específicos (por diversos factores que exceden a este análisis). Es decir, un sistema que para la mayoría de los actores políticos y sociales no tenía un valor en sí mismo, sino en función de los objetivos que se lograran a través suyo¹⁸⁵. En este sentido, para el matutino el fracaso del Estado populista y del sistema democrático desarrollado bajo su égida se había vuelto un *corset* para los cambios que necesitaba el país¹⁸⁶. Por otro lado, la desafección estaba íntimamente ligada al pensamiento pragmático del desarrollismo, para el cual el tipo de cambio estructural que proponía no estaba supeditado al tipo de gobierno y la dominación política que los implementara. El “cambio de estructuras” podía realizarse tanto de la mano de un gobierno electo por la voluntad popular como de un gobierno dictatorial. Más aún, un gobierno dictatorial fortalecido que adoptara la “solución desarrollista” tendría mayores posibilidades de concretarla porque, desde un punto de vista pragmático, dependería de su propia capacidad política para implementarla y no tendría que lidiar con una oposición consistente (más aún en un contexto político donde existían actores políticos radicalizados).

En efecto, el MID recibió con amplio optimismo la llegada al poder de los militares. En su primer documento oficial luego del golpe de Estado, el 31 de marzo de 1976, el partido manifestó públicamente el apoyo de los desarrollistas al nuevo gobierno (Movimiento de

¹⁸⁵ Esta apreciación no supone que la democracia como sistema, o los “valores democráticos”, deban ser el punto de referencia excluyente para medir las actitudes de los actores sociales y políticos de la época, ni que sea visto como un “déficit” que ciertos actores no reivindicasen la legitimidad del sistema democrático o sus valores (sin entrar en la discusión sobre qué significado llevaría adherido cada uno de estos conceptos). La problemática, que excede este trabajo, es más compleja. Pero evidentemente no puede constreñirse el análisis de la cultura política de la época en virtud de su alejamiento o acercamiento a la cuestión “democrática”.

¹⁸⁶ El editorial del 1 de abril de 1976, que comentaba el primer discurso presidencial de Videla, revalidará la apreciación sobre esta suerte de “agotamiento” del sistema institucional, al comentar que las explicaciones presidenciales ratificaban “el hecho conocido de que las Fuerzas Armadas no han interrumpido el proceso que se venía desarrollando sino cuando tuvieron el convencimiento de que se hallaban agotados todos los recursos susceptibles de operar la indispensable rectificación.” (*Clarín*, 1/4/1976).

Integración y Desarrollo, 1981: 10-2). Según el documento, la intervención de las Fuerzas Armadas no solo era “previsible” sino “indispensable”, y el “proceso abierto el 24 de marzo” era una “manifestación de la revolución nacional” que estaría abierto para recibir la aspiración de “transformación” de todas las clases y sectores sociales. Por eso ordenaba a sus partidarios: “los desarrollistas debemos apoyar al gobierno militar”. Según el MID, los jefes militares garantizaban que no hubieran “desbordes revanchistas” porque se opondrían a las intenciones de “los grupos reaccionarios” que querían aprovechar la “justa sanción” que merecía “la camarilla que gobernó en nombre del peronismo” para extenderla hacia las bases. El gobierno debía ser apoyado por el “sinceramiento político” que había puesto en marcha y porque si se debilitaba facilitaría “un asalto al poder de los grupos gorilas”¹⁸⁷. La opción no ofrecía dudas: “de día debemos apoyar al gobierno y de noche debemos rezar para que tenga éxito”, afirmaba el comunicado. El MID era precavido al señalar que debía ofrecerse el apoyo pese a que en la conducción económica se hubieran designados “hombres del grupo liberal” y a que el programa económico fuera de “inspiración monetaria”. Pero las “imperfecciones” o los “errores” en este sentido -que juzgaba eran motivados por la necesidad de corregir los errores del anterior gobierno- no invalidaban las razones del aval desarrollista. En este sentido, el comunicado era contundente:

(...) para que se marche por buen camino, los desarrollistas debemos dejar de lado los preciosismos doctrinarios, que no tienen sentido en un proceso que por definición tiene que ser “impuro”. El apoyo tiene que ser, como dijimos, franco y total, desprovisto de especulaciones secundarias. Si se nos pide que ocupemos cargos debemos hacerlo, sin suponer que nos conviene hacerlo más adelante. Lo que le conviene al país, lo que le conviene a la revolución nacional le conviene a todos y a cada uno de los desarrollistas (Movimiento de Integración y Desarrollo, 1981: 11)¹⁸⁸.

Como señala Yannuzzi (1996: 112-3), las Fuerzas Armadas eran concebidas por el partido como los únicos actores capaces de “depurar” al peronismo de sus “infiltrados” de derecha e izquierda. Frente a la imposibilidad interna del peronismo de ejercer una “autodepuración”, ésta tendría que ser realizada por el gobierno militar discriminando entre “verdaderos” y “falsos” peronistas. Aunque Yannuzzi no lo menciona, esta concepción remedaba la percepción de las Fuerzas Armadas y otros actores civiles sobre la existencia de una sociedad “enferma” cuyo “tumor” había que extirpar. Ello implicaba un “trabajo sucio” asumido por el organismo represivo del Estado, las Fuerzas Armadas, que el MID parecía

¹⁸⁷ Según el MID, los “grupos reaccionarios” se manifestaban en los diarios *La Nación* y *La Prensa*, en aquellos que pretendían que el país estabilizara su moneda “a costa de un ejército de desocupados” y en los que querían hacer viable esa “política de los monopolios mediante un baño de sangre”.

¹⁸⁸ Uno de los más destacados desarrollistas, Oscar Camilión, ocupará la embajada argentina en Brasil como parte de los planes de los asesores políticos de Videla para ganar consenso en los sectores civiles influyentes.

dispuesto a tolerar. De allí puede partir una fuente explicativa para comprender el silencio que se autoimpuso el partido en tanto estructura frente a las detenciones ilegales, incluso de sus propios partidarios, y las desapariciones forzadas en los primeros años del terrorismo de Estado (Yannuzzi, 1996: 113). Por supuesto, el pensamiento expresado literalmente por el MID no fue ajeno al que mantuvieron otros representantes partidarios, demostrando la concepción que tenían de la política y de los partidos políticos¹⁸⁹.

En una similar línea argumentativa, el 26 de marzo *Clarín* catalogaba como “un buen punto de partida” el inicio del nuevo gobierno (*Clarín*, 26/3/1976). Resaltaba que las Fuerzas Armadas se habían manejado con “sobriedad” y mostraban la imagen de un “ejercicio sereno del poder”. A su vez, no habían existido reacciones que defendieran a un gobierno que se “titulaba a sí mismo popular”. *Clarín* destacaba que la acción de las Fuerzas Armadas se había “caracterizado por una ponderada precisión de la que había estado ausente la prepotencia revanchista o la innecesaria utilización de la fuerza”, evitando la posibilidad de un “inútil enfrentamiento” (preocupación que, como se ha visto, ya había sido expresada durante la rebelión de Capellini). Las tareas normales de la población habían sido apenas interrumpidas y solo se mantenían restricciones que juzgaba como indudablemente necesarias: “El pueblo en su conjunto parece haber comprendido y acatado la necesidad del cambio”, sentenciaba. Aunque la situación seguía siendo “grave” se abrían perspectivas “en las que es dable depositar la hasta ahora defraudada confianza de los argentinos” y por ello auguraba que se abría “una nueva etapa con renacidas esperanzas” (*Clarín*, 26/3/1976).

En este mismo sentido, dos días después destacaba positivamente que las Fuerzas Armadas habían actuado en “el momento preciso” y sin especulaciones cuando estaba cerca la posibilidad de la “pobreza” y la “desintegración” (*Clarín*, 28/3/1976) -y habían desoído a quienes sugerían “demorar la intervención” para que la situación se deteriorara aún más, en una nueva implícita referencia a Alvaro Alsogaray-. Díaz y Passaro (2002: 186) mencionan que el tono del diario se tornó apologético al evaluar los primeros pasos del nuevo gobierno militar. Evidentemente, una vez concretado el golpe, *Clarín* exhibió una ostensiva descompresión en su discurso editorial en relación al tono admonitorio que había utilizado

¹⁸⁹ Con el discurrir de la dictadura, el apoyo desarrollista se daría de bruces con el diagnóstico liberal de los militares y su implementación económica. Para este diagnóstico, el populismo y el desarrollismo eran parte de una misma ideología que había demostrado, no solo su fracaso, sino su responsabilidad en la situación caótica de marzo de 1976. Al fin y al cabo, el desarrollismo comulgaba con la premisa básica del populismo sobre que el crecimiento industrial era la precondition del crecimiento de la economía nacional. Pero además, si los “excesos” del populismo habían atizado la conflictividad social, el crecimiento del sindicalismo y la “subversión” revolucionaria, el desarrollismo había demostrado en sus experiencias gubernamentales con Frondizi y con Onganía que era proclive a pactar con el sindicalismo peronista, y esos pactos habían permitido que creciera en forma desmedida la influencia del sindicalismo en la política argentina (Cavarozzi, 2006: 57).

para referir a la “crisis” y al gobierno de Isabel. Pero aunque coincidimos en términos generales con esta evaluación, creemos necesario adicionar que esta nueva posición apologética fue morigerada porque debe inscribirse dentro del *consenso expectante* que despertó el régimen en amplios sectores sociales, y que fue una característica propia del discurso editorial del diario. Si bien el matutino avaló explícitamente la acción militar, señaló la perspectiva de un futuro promisorio y vertió opiniones más que complacientes con la forma en que se había operado el “cambio”, no expresó apoyos fervorosos ni efusivos. En cambio, la adhesión total pareció estar condicionada al cumplimiento de las demandas desarrollistas. Por eso, en el mismo editorial del 26 de marzo advertía que se estaba frente a “la hora del acierto” y, como los márgenes de error habían quedado reducidos por la agudización de la crisis, se hacía indispensable “no equivocarse esta vez el diagnóstico y proceder a erradicar, de una vez por todas, las trabas que afectan nuestro crecimiento y los vicios que minan la voluntad de avance de la Nación” (*Clarín*, 26/3/1976). En esta misma línea, dos días después -con antelación al primer discurso presidencial de Videla, del 30 de marzo, y el anuncio del plan Martínez de Hoz, el 2 de abril- recordaba que “la construcción de un sólido aparato productivo constituye un requisito indispensable para la necesaria (...) recuperación del país” (*Clarín*, 28/3/1976). Se desprende entonces que el apoyo irrestricto y a largo plazo estaría condicionado al cumplimiento de este objetivo. El cambio de gobierno era una condición necesaria, pero no suficiente, para la implementación de las transformaciones refundacionales que estaban en el centro de las preocupaciones del diario.

Un breve balance sobre los editoriales en la coyuntura del golpe de Estado obliga a detenernos en los editoriales que evaluaron las circunstancias del derrocamiento, los días 24 y 25 de marzo, por la flagrante ausencia del actor militar como agente activo (recién el 26 de marzo el rol de las Fuerzas Armadas fue abordado como agente *activo-positivo*, al reconocer la “precisión” con la que se había encarado el “cambio registrado”). Nuestro análisis le otorga un sentido particular a la “ausencia” de las Fuerzas Armadas en la evaluación editorial inicial, porque entendemos que fue parte necesaria de la estrategia argumentativa por la cual *Clarín* manifestó que la intervención castrense era “inevitable”. Para sostener el argumento de la “inevitabilidad” del golpe de Estado, la interpretación de *Clarín* se compuso de dos variables confluyentes: por una parte, señaló la incapacidad de los actores políticos tradicionales por su función “negativa” -pasiva o activa- para resolver la crisis y, por otra, excluyó deliberada y literalmente a las Fuerzas Armadas en los análisis previos al golpe como agente *activo-positivo* que podría encabezar una salida política a la crisis (*Clarín* no realizó un llamado literal o explícito para que intervinieran, lo cual no

implicó que sus editoriales desconocieran la responsabilidad política que le cabía en las circunstancias que atravesaba el país, ya que como se ha analizado existieron evidentes referencias elípticas que sugerían la posibilidad de una intervención militar¹⁹⁰). Esta estrategia contrastiva permitió, con la forma elíptica que caracterizó el discurso editorial de *Clarín*, que la presencia del actor militar como agente activo de cambios fuera implícitamente supuesta y sugerida por contraste a la valorización negativa de los actores políticos tradicionales como “gobierno”, “dirigentes opositores”, “parlamento” y “dirigentes sindicales”. Al negativizar las acciones de todos los actores con influencia en las cuestiones políticas y estatales, menos el de las Fuerzas Armadas, la argumentación editorial construyó así una suerte de lugar “vacante” que por consecuencia “lógica” e “inevitable” tenía que ser ocupado por el único actor excluido de la negativización: las Fuerzas Armadas (el único “inmune” que podía evitar la disolución nacional)¹⁹¹.

Pero *Clarín* no pidió explícitamente la intervención de las Fuerzas Armadas, ni tremoló un apoyo abierto al golpe, ni se expuso a una abierta campaña en ese sentido. Logró de esta manera resguardar su línea editorial a posibles objeciones -presentes o futuras- bajo la idea de que no hacía más que “presentar los hechos”, que en este caso mostraban a todo un sistema en crisis y a un único actor con capacidad de transformar la realidad¹⁹². *Clarín* mostraba como un hecho “objetivo” e incontrastable de la realidad la incapacidad de todos los actores tradicionales del sistema político para ofrecer soluciones concretas, sólidas y perdurables a la crisis nacional. Pero no solo por su incapacidad, sus errores previos, sus prácticas corruptas u otros factores, sino también porque el tipo de cambio refundacional

¹⁹⁰ Debe mencionarse que durante los últimos meses previos al golpe de Estado las referencias a las Fuerzas Armadas fueron elípticas o limitadas a la cuestión de la represión “legal”. Además, desde 1974 no habían sido objeto destacado de la editorialización del diario (Díaz y Passaro, 2002: 185).

¹⁹¹ La representación del actor militar en los editoriales de *Clarín* fue similar a la forma en que las Fuerzas Armadas presentaron su “intervención” y la forma en que sectores civiles la concibieron. Dentro de esa perspectiva, y solo dentro de ella, resultaba lógica esa “ausencia” del actor militar en los editoriales del matutino. Su presencia no era enunciada porque las propias Fuerzas Armadas erigían un discurso público en el que declaraban su “prescindencia” en torno a las cuestiones políticas, ya que formalmente no les correspondía ocupar ese rol. Pero en los hechos se destacaban como verdaderos árbitros de la contienda política nacional. Su inclusión como agentes activos en el escenario político nacional solía estar implícita, a *sotto voce*, solapada y no enunciada abiertamente, sino presentada como una posibilidad potencial. Se establecía así una suerte de juego de “ausencia-presencia” del actor militar en el escenario político, donde su presencia se corporizaba por su potencialidad para intervenir. Esa potencialidad estaba implícita en las enunciaciones catastrofistas y dramáticas que se agudizaron desde la segunda parte del año 1975 y agitaban la peligrosidad de la “desintegración” y la “disolución nacional”. La intervención potencial del actor militar se justificaba por su capacidad de ser la *ultima ratio* para evitar la supuesta “disgregación” y amalgamar los fragmentos de la nacionalidad extraviada. El único que, retomando la referencia elíptica de *Clarín* en un editorial de mediados de marzo de 1976, podía “detener la caída” (*Clarín*, 17/3/1976).

¹⁹² La función que Ducrot le adjudica a la presencia de lo “implícito” en el discurso se vincula con el sentido que tuvo la argumentación del matutino. Según la interpretación que Maingueneau hace de Ducrot, “*Lo implícito tiene una doble utilidad: expresar algo sin arriesgarse a ser considerado como responsable de haberlo dicho, pero también enunciar una idea sustrayéndola a las eventuales objeciones*” (Maingueneau, 1980: 152)

demandado por el diario no podía ser, ya en esa coyuntura, implementado por los actores políticos protagonistas de ese proceso¹⁹³. En este marco, para *Clarín* el golpe era “inevitable” principalmente porque ninguno de los actores políticos aseguraba las soluciones acordadas con las propuestas refundacionales propugnadas por el matutino. Y aquí es preciso volver a señalar la convergencia de las veleidades refundacionales con las que se presentó el gobierno militar y las que eran características del discurso desarrollista del diario. Seguramente, los términos amplios con los que en los primeros momentos la dictadura militar presentó sus objetivos refundacionales, permitió que la demanda refundacional de *Clarín* tendiera a coincidir con el gobierno y valorara positivamente su propuesta palingenésica (pese a los signos que podían poner en duda esa convergencia, como la conformación ideológica de la conducción económica). Más aún, si se valoran ciertos escarceos “desarrollistas” del discurso presidencial y el pensamiento neodesarrollista de algunos sectores de las Fuerzas Armadas que permitían avalar una hipótesis de eventual apoyo (que irá languideciendo con el correr del “Proceso”, y más claramente a partir de 1977-1978, cuando Martínez de Hoz desemboce sus verdaderas intenciones económicas contrarias al ideario desarrollista).

Por último, la idea de “inevitabilidad” en la argumentación editorial puso de relieve el acendrado dogmatismo del diario, al dar por sentado que el golpe hubiera sido evitable si se hubiesen ejecutado a tiempo las propuestas que el desarrollismo había hecho públicas. En cambio, al persistirse por un rumbo equivocado, el final no había podido evitarse. El diario había alertado sobre el peligro de los errores cometidos, y por eso no podía ser acusado de apoyar activamente el derrocamiento. Había responsables políticos precisos -los “agentes negativos”- y otros a quienes se les excusaba de tal responsabilidad, pero que se habían visto obligados a interceder -las Fuerzas Armadas- salvando a la Nación. Y si bien es cierto que esta argumentación “reificaba” el golpe como un hecho casi natural (cuestión que señala Duhalde -1999- como una característica interpretativa general de la coyuntura previa al golpe, particularmente atizada por la prensa), es interesante remarcar que, paradójicamente y seguramente más allá de sus intenciones, la interpretación de *Clarín* que adjudicaba la responsabilidad del golpe a errores políticos concretos de diversos

¹⁹³ Un mes después del golpe, el 25 de abril, confirmaba que no era solo el gobierno el que había fallado sino todo un sistema que lo hacía posible. Desde su punto de vista, si se hubiera tratado solo de los problemas de una administración, los mecanismos institucionales normales habrían bastado para poner en orden el proceso político. Pero no era así: “Por falencia de los cuadros políticos dirigentes, la alternativa al populismo demagógico en vigencia, estaba dada por otro populismo demagógico, surgido como desprendimiento del oficialismo o desde la oposición. En este punto, el sistema mostraba su total insuficiencia circunstancial. Se encontraba inerte para solucionar adecuadamente el problema nacional” (*Clarín*, 25/4/1976). Como se ha mencionado, a este sistema *Clarín* y el MID lo denominaban la “partidocracia”.

sectores, devolvía sus causas al redil de la política y a la existencia de una voluntad ejercida por actores políticos precisos para que ocurriera.

Por último, en las conclusiones de nuestro trabajo realizaremos una serie de reflexiones finales a partir del análisis presentado.

Capítulo 6

Conclusiones

Como se ha analizado en profundidad en el capítulo 5, desde el “Rodrigazo”, en junio de 1975, hasta el golpe de Estado de 1976, la línea editorial del diario *Clarín* fue, en términos generales, una caja de resonancia de las posiciones adoptadas por el MID en relación al deterioro del gobierno peronista y a la crítica situación política nacional. A medida que el proceso político se fue deteriorando, los editoriales de *Clarín* advirtieron en tono crecientemente admonitorio sobre el “incorrecto” rumbo que había tomado el proceso abierto en 1973, el cada vez más perentorio “cambio de estructuras” a nivel económico para superar el estancamiento nacional, y la necesidad de instrumentar cambios “drásticos” para llevar adelante tal trastocamiento.

Si tuviéramos que realizar una periodización de las posturas editoriales del diario en los meses analizados, puede plantearse que hasta el intinerato de Lúder, inclusive, el diario pareció albergar alguna posibilidad de resolución de la “crisis” dentro de los términos institucionales de la República, aunque en ese lapso rechazó de plano propuestas de cambios institucionales por “formales” que no enfrentarían los “verdaderos” problemas de la Nación. En ese sentido, previamente a la fractura del MID con el peronismo, *Clarín* registró una ambivalencia en su posición editorial, en tanto señaló que la crisis debía resolverse dentro del marco institucional, pero a su vez levantó el tono *admonitorio* y catastrofista de sus críticas, apoyó la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de la guerrilla, descalificó las propuestas de los actores políticos “negativos” y dejó resquicios argumentales para convalidar una eventual ruptura a través de un golpe de Estado. Fundamentalmente, al plantear que el quiebre institucional sería “inevitable” si no se adoptaban las medidas de fondo para encarar la “crisis integral” que “desintegraba” a la Nación, y que estaban en relación con el ideario desarrollista del matutino. El retorno de Isabel al poder, a mediados de octubre de 1975, pareció alejar definitivamente la posibilidad de una continuidad institucional en el marco republicano, y así lo dejó entrever de manera contundente el MID en su solicitada del 19 de octubre de 1975.

La fractura clave del MID con el FREJULI, a mediados de diciembre de 1975, y la rebelión de Capellini, que aceleró los tiempos políticos y reacomodó a los actores sociales en torno al cada vez más inminente golpe de Estado, funcionaron como un punto de inflexión para la política editorial de *Clarín*, que desde ese momento se orientó hacia posiciones de

apoyo a un cada vez más probable quiebre institucional por la fuerza militar. Pese a ostentar un discurso que, formalmente, rechazaba el conflicto social, el matutino demostró una inclinación a apoyar “soluciones” drásticas y excluyentes en torno a los principales conflictos de la época. En particular, luego de los vertiginosos días de finales de diciembre, *Clarín* describió como en una letanía los errores gubernamentales y el de los actores tradicionales ligados al “populismo”, a los que consideraba incapaces de brindar una salida política perdurable a la crisis. Si anteriormente había solicitado un “cambio de rumbo” económico y político, con el despuntar del flamante año 1976, el matutino objetó todas las propuestas del gobierno y de los partidos tradicionales tendientes a “salvar” el proceso político (amén de la probabilidad que esas propuestas tenían para ser puestas en práctica de forma eficaz). Su crítica no era meramente hacia un gobierno. En todo caso, a los errores del gobierno peronista en la aplicación de la política económica, a las riñas partidarias dentro del oficialismo, a la ineficacia de Isabel Perón para afrontar la difícil coyuntura y a la corrupción que ensombrecía los actos de gobierno, *Clarín* sumó, en el haber negativo de la situación nacional, la ilegitimidad de lo que denominaba la “partidocracia”, lo que consideraba la “ausencia” del Parlamento, la escasa representación de las dirigencias sindicales y empresariales vinculadas al Pacto Social y la deriva “amoral” de una sociedad que consideraba “enferma”, surcada por una violencia “irracional” (ejemplo paroxístico de su desquicio ético) o por actitudes económicas reprochables éticamente (como la especulación), que enajenaban el patrimonio nacional. Era un sistema el que estaba fomentando las “conductas licenciosas” reñidas con la ética. Frente a ello, y para plasmar la “solución desarrollista”, se necesitaba una verdadera “refundación” de la sociedad argentina en todos sus ámbitos. Como se ha dicho, para el diario la agudización de la crisis en 1976 no hizo más que hacer visible la postergación de la refundación desde los “casi tres lustros” que habían transcurrido luego de la experiencia frondicista. Y el discurso de tinte refundacional, propio del ideario desarrollista, se potenció aún más dentro del clima de inestabilidad y crisis integral de principios de 1975-1976. De allí que la posición editorial del matutino, en un primer momento, convergiera con el hábito refundacional con el que las Fuerzas Armadas tomaron por la fuerza el poder estatal, el 24 de marzo de 1976, y se presentaron ante la sociedad. Prontamente quedaría en evidencia que esta convergencia del ideario desarrollista con el discurso de las Fuerzas Armadas se fundamentó más en el diagnóstico sobre la situación nacional que en una confluencia sobre el tipo de medidas a aplicar en el largo plazo, en particular al ir despuntando las medidas del gobierno militar en el campo económico.

En este marco, para *Clarín*, el golpe fue “inevitable” porque ninguno de los actores políticos tradicionales aseguraba las soluciones acordes con las propuestas refundacionales propugnadas por el matutino, y que a su entender eran las únicas que podían dar una solución de raíz a una sociedad “extraviada”. Al bloquear desde sus editoriales las salidas institucionales que el sistema preveía por “formales”, insuficientes o meramente epidérmicas, la “única” posible que se desprendía de sus planteos era la que protagonizarían las fuerzas castrenses. Pero el matutino no lo enunció abiertamente. A través de frases alusivas, lo dejó al buen entender de sus lectores. Haciendo uso de un estilo similar a la diplomacia política, plagado de eufemismos y referencias elípticas, el diario resguardó su posición institucional y no se expuso realizando lo que sería una burda campaña “golpista” (como realizó, por ejemplo, el diario *La Razón*). En cambio, la presentación “objetiva” de los hechos le permitió diluir su responsabilidad editorial sobre la posición adoptada, ya que en esta tesitura no hizo más que “describir” una situación corporizada a la vista de todos, que había sido acabadamente alertada por el diario y que tenía como responsables a los actores “negativos”. Aunque ha quedado explicitado que, en el marco de la descomposición institucional que prologó al golpe de Estado, el diario *Clarín* formó parte del bloque civil que legitimó la intervención militar y alineó su punto de vista editorial con aquellos sectores que reclamaron o convalidaron una solución “definitiva” para lo que consideraban problemas crónicos de la sociedad argentina.

Hemos señalado que este posicionamiento era una expresión de la ausencia de “fe democrática” y la débil legitimidad que tenían las instituciones republicanas como instrumentos de resolución de los conflictos sociales para diversos sectores durante la época. Para el caso del ideario desarrollista de *Clarín*, el desarrollo era un fin en sí mismo, mientras que la institucionalidad republicana y la democracia eran herramientas para su consecución que podían ser suplantados transitoriamente por un gobierno *de facto* que asegurara el esencial “cambio de estructuras” -como ocurría en Brasil- a través del cual se accedería a la resolución de los conflictos sociales y políticos. Más aún en un contexto de radicalización política, donde el sistema capitalista aparecía “amenazado” y un gobierno constitucional “ineficaz” era representado como “débil” en la defensa de tales intereses.

Por otra parte, con respecto al rol de las Fuerzas Armadas en la “lucha antisubversiva”, el matutino dio un rotundo aval a la institucionalización del accionar represivo, de allí su aprobación a los decretos de “aniquilamiento” firmados por Lúder o a la modificación de la Ley de Defensa Nacional, entre otros posicionamientos en esta línea. Como dijimos, el discurso que avaló la represión se arraigaba en la concepción refundacional antes mencionada.

En este caso, para la reconversión de las bases materiales y espirituales de la sociedad era necesario desterrar, a través de la represión legal, la acción de los sectores radicalizados que impedían la estabilización política. Aunque el matutino explicitó que la represión debía ser instrumentada por medios legales desde el Estado, no puede dejar de señalarse el tipo de señal que implicó el apoyo de uno de los diarios de mayor influencia y circulación en la opinión pública nacional a la represión que encabezaron las fuerzas militares, cuando hacia fines de 1975 y principios de 1976 ya eran extendidos los procedimientos represivos ilegales que protagonizaban las fuerzas de seguridad estatales (fusilamientos, torturas, desapariciones forzadas, entre otros), y cuando todos los sectores “informados” y con llegada a los ámbitos de decisión, conocían que, al cada vez más probable golpe de Estado, le seguiría una represión feroz. Asimismo, no hacía más que convalidar la “militarización” del conflicto político, y a legitimar el avance de las Fuerzas Armadas sobre las posiciones del gobierno constitucional. Además de este aval, a medida que se fue deteriorando la situación política, el diario profundizó su evaluación de las diferentes acciones violentas de la guerrilla con términos que atizaban el clima de “guerra”, y sus referencias con respecto a la violencia política se caracterizaron por el tinte dramático y el uso de términos extremos -que tiñó el periodo-, lo que tendía a convalidar la toma de medidas “drásticas” del poder político para terminar con el “problema”. De todas formas, *Clarín* advirtió en forma recurrente que la represión era sólo una faceta de un problema más “global”, porque para terminar con el “problema subversivo” había que llevar al país hacia el desarrollo, donde se disolverían las condiciones sociales precarias que habían permitido el crecimiento de las organizaciones revolucionarias.

En torno al ideario político del matutino, hemos observado su íntima cercanía con el desarrollismo, cuyos preceptos ideológicos y propuestas políticas estudiamos en el capítulo 4. La apelación recurrente a la “solución desarrollista” se hilvanó con un profundo dogmatismo, característica destacable de este pensamiento político. Durante el periodo estudiado, los evidentes errores políticos del gobierno, más la situación de crisis generalizada, parecieron confirmar al matutino aún más la verosimilitud de su diagnóstico, y la necesidad de no perder más tiempo para poner en marcha esta “solución”. Ello se tradujo en una serie de certidumbres: si no se plasmaban las propuestas desarrollistas, se iría por el camino de la desintegración nacional y el caos social. Las “muletas ideológicas” que dificultaban el acceso a la “Verdad” desarrollista debían ser desechadas; debía encauzarse la economía dentro de sus previsiones para así relegar las diferencias ideológicas y políticas, que quedarían en un segundo plano por el despliegue exitoso de la economía nacional. No habría conflicto dentro

de una economía desarrollada, que sería reparadora material y espiritual del vínculo social, a la vez que garante de la paz social. En este último aspecto, el desarrollo económico no era pensado como mera reconversión material o pecuniaria, sino que implicaba una reconversión espiritual para la futura sociedad desarrollada (de allí la apelación a la encíclica del papa Paulo VI).

Otro aspecto destacable es que la sección editorial del matutino se transformó en un espacio de *influencia* a favor de los intereses del empresariado nacional que estaba en oposición abierta, o en disconformidad, con la política económica “intervencionista” del peronismo. Por ejemplo, los únicos actores sociales que se mencionaron en forma positiva en el periodo estudiado fueron los empresarios, tanto los liberales nucleados en la APEGE, como los empresarios industriales y los ruralistas -más allá de la ponderación positiva implícita que se hizo de las Fuerzas Armadas, debido a que fue en contraste con la “negativización” de otros actores, como se ha mencionado en el apartado 5.7-. Más aún, el diario hizo público su apoyo a medidas desestabilizadoras que partieron de los sectores patronales, como fueron los paros agropecuarios de 1975 y el *lock out* de febrero de 1976. Como lo mencionó en un editorial de agosto de 1975, para el matutino el empresariado no tenía la “autoría” de la crisis económica, sino que asumía el “papel de víctima” (*Clarín*, 21/8/1975). En ciertas ocasiones, esta defensa sectorial apareció matizada detrás de la apelación al “ser nacional” y a la confluencia armónica de los sectores sociales, que de todas formas era subordinada a la capacidad productiva de los empresarios nacionales.

Por otra parte, y en términos generales, hemos distinguido en el espacio editorial de *Clarín* una intención explícita de intervención en la realidad política nacional (característica que, según las circunstancias y los periódicos, tiende a ser un aspecto distintivo de la sección “Editorial”). Aunque luego del atentado de septiembre de 1973 el diario se resguardó particularmente para no sufrir nuevos ataques, no renunció a expresar su oposición a ciertas políticas del gobierno peronista y su opinión crítica de la realidad nacional, con la consecuente exposición a las represalias que ello suponía en un contexto político radicalizado y polarizado, y además en el marco de la beligerancia entre prensa y gobierno (analizada en el capítulo 3). Si recordamos que, para Borrat, comprender al periódico como *actor político* significa, entre otros aspectos, que debe situárselo como *narrador*, *comentarista* o *participante* del conflicto político, entendemos que *Clarín* fue un activo *participante* dentro de los conflictos políticos que surcaron los vertiginosos meses analizados. Aunque, por supuesto, también cumplió las funciones de *narrador* y *comentarista* de conflictos que no lo involucraban directamente y utilizó formas retóricas que tendieron a “resguardar” su posición

dentro de la opinión pública, es posible plantear que tanto su cercanía con el MID, la politización de la época -que consagraba positivamente el involucramiento de los actores en las temáticas políticas-, como su propio interés como empresa periodística, fueron decisivos para que ejerciera un rol activo para *influir* en la toma de decisiones políticas. Aunque haya utilizado el *silencio estratégico* frente a diversos acontecimientos de relevancia, ello no fue obstáculo para que se involucrara en las luchas políticas, particularmente en las que planteaba el desarrollismo. Hasta, en ciertas coyunturas, tomar un rol similar al del “puesto de combate” (metáfora bélica cara al desarrollismo).

¿Desde que posición enunciativa realizó esta tarea? Sus editoriales no parecieron estar destinados, en última instancia, a los lectores habituales de otras secciones del diario. En todo caso, a través de la relación tendida con este lector, estuvieron dirigidos a los factores de poder y a los grupos civiles de interés. A estos interlocutores les propuso un intercambio de “igual a igual”, en función de que se consideraba actor legítimo para proponer y discutir; aunque a la vez asimétrico, en tanto el diario se autoarrogó un saber que lo diferenciaba y lo hacía “trascender” del resto de los actores; concepción elitista alineada con la posición del desarrollismo. En vinculación con esta posición enunciativa, *Clarín* exhibió un discurso argumental que descalificó a sus adversarios ideológicos o a los actores políticos a los que criticaba, y deslegitimó la capacidad de éstos para articular soluciones perdurables a la crisis que atravesaba el país. Ante el evidente desprestigio que cubrió a varios de estos actores, a medida que se profundizó la crisis en 1975-1976, *Clarín* tendió a exasperar el punto de vista descalificador. Y hacia fines de 1975, e inicios de 1976, el dramatismo de sus referencias críticas y las aseveraciones extremas -rayanas a lo apocalíptico- simplificaron la interpretación de la crisis política bajo una visión polarizada y sin matices. Sin duda, el estilo confrontativo que por momentos exhibió *Clarín*, pese a que rechazaba la radicalización política, debe incluirse dentro de una cultura política caracterizada por la confrontación y el antagonismo.

Por último, el trabajo presentado nos ha permitido reflexionar, a través del análisis particularizado de un diario de gran circulación e influencia, sobre el consenso que tuvo el golpe de Estado en amplias franjas de la sociedad civil. En especial, esta investigación observó cómo se fue construyendo ese consenso a medida que se deterioraba la situación nacional. Y cuáles fueron los argumentos que convalidaron la toma del poder por la coalición cívico-militar, que iban mucho más allá de una demanda “ordenadora” ante la violencia política de las organizaciones político-armadas. En ese sentido, es importante remarcar la influencia que estos meses previos al golpe de Estado tuvieron en el imaginario colectivo de

la sociedad argentina para legitimar la práctica política de la dictadura, que durante sus primeros años utilizará políticamente el recuerdo estigmatizado del “caos”, la “corrupción” y la “ineficacia” del “populismo” del periodo 1973-1976. Este consenso germinal con la cruzada reorganizadora y disciplinadora de las Fuerzas Armadas, puede ser una clave explicativa para comprender históricamente ciertas actitudes frente al posterior despliegue de políticas como el terrorismo de Estado, las prácticas autoritarias en diversos campos de la realidad nacional y la cruzada disciplinadora en general; componentes que formaron parte del periodo más trágico de la historia nacional moderna, que aún necesitan ser estudiados y explicados en profundidad desde las Ciencias Sociales.

Fuente primaria

Clarín (varias ediciones)

Referencias bibliográficas

AA.VV. (2006). 24 de Marzo 1976-2006. A 30 años de la noche más larga. *Clarín*, suplemento especial, 24 de marzo.

Acevedo, M.; Basualdo, E. y Khavisse, M. (1990). *¿Quién es quién? Los dueños del poder económico (Argentina 1973-1987)*. Buenos Aires: Editora/12 y Pensamiento Jurídico.

Acuña, M. L. (1984). *De Frondizi a Alfonsín: la tradición política del radicalismo/1*. Buenos Aires: CEAL.

Acuña, M. y Smulovitz, C. (1993). Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional. En AA.VV, *Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Andersen, M. (2000). *Dossier secreto. El mito de la guerra sucia en la Argentina*. Buenos Aires: Sudamericana (edición actualizada y definitiva).

Anguita, E. y Caparrós, M. (2006). *La voluntad*, tomo 4. Buenos Aires: Planeta [Primera edición, 1997].

Anzorena, O. (1998). *Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía (1966) al golpe de Videla (1976)*. Buenos Aires: Ediciones del pensamiento nacional.

Aroskind, R. (2007). El país del desarrollo posible. En D. James (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)* (pp. 63-114). [Primera edición, 2003].

Asociación de Periodistas de Buenos Aires (1986). *Periodistas desaparecidos; con vida los queremos*. Buenos Aires: UTPBA.

Asís, J. (2000). *Diario de la Argentina*. Buenos Aires: Oberdán Rocamora editor [Primera edición., 1984].

Austin, J. (1982). *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós.

Avellaneda, A. (1986). *Censura, autoritarismo y cultura: Argentina 1960-1983/1*. Buenos Aires: CEAL.

Babini, N. (2006). *Arturo Frondizi y la Argentina Moderna*. La forja de una ilusión. Buenos Aires: Gedisa.

Baczko, B. (1999) *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*. Buenos Aires: Nueva Visión [Primera edición en español, 1991].

- Bajtin, M. (1982). *Estética de la creación verbal*. México: Siglo XXI.
- Barbieri, M. y Ferreiro, C. (2002). *Prensa, dictadura y Derechos Humanos. Un análisis comparativo de los discursos de la prensa gráfica sobre la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 1979*. Tesina de licenciatura en Comunicación Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (mimeo).
- Basualdo, E. (2006). *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Benveniste, E. (1986). *Problemas de lingüística general*. México: Siglo XXI.
- Blaustein, E. (1999). Decíamos ayer. En E. Blaustein M. Zubieta, *Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso*. Buenos Aires: Colihue.
- Blaustein, E. y Zubieta, M. (1999). *Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso*. Buenos Aires: Colihue.
- Bonasso, M. (1997). *Cámpora. El presidente que no fue*. Buenos Aires: Planeta.
- Borrat, H. (1989). *El periódico, actor político*. Barcelona: Gili
- (2006). Narradores públicos. En M. de Fontcuberta y H. Borrat, *Periódicos: sistemas complejos, narradores en interacción* (pp. 159-186). Buenos Aires: La Crujía.
- Borrelli, Marcelo (2003). *Prensa y política durante el Proceso de Reorganización Nacional: el diario Convicción*. Tesina de licenciatura en Comunicación Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (mimeo).
- (2007). El diario *Clarín* frente al golpe de Estado de 1976: ‘un final inevitable’ que augura ‘un buen punto de partida’. *IV Jornadas de investigación en comunicación*. Los Polvorines: Licenciatura en Comunicación del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 5 y 6 de diciembre.
- (2008a). “El diario de Massera”. *Historia y política editorial de Convicción: la prensa del “Proceso”*. Buenos Aires: Koyatun.
- (2008b). “Una batalla ganada”: el diario *Clarín* frente a la compra de Papel Prensa por parte de los diarios *La Nación*, *Clarín* y *La Razón* (1976-1978). *Papeles de Trabajo*, nº 3, Buenos Aires, IDAES, junio.
- (2008c). El diario *Clarín* y el “Proyecto Nacional” de Díaz Bessone (1976-1977): ¿la anhelada refundación nacional?. *IV Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente*. Rosario: Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. 14 al 16 de mayo.

Bozza, J. A. (1999). Las artes del asedio y de la negociación. Perón y el lanzamiento del Frente Cívico de Liberación Nacional. En A. Pucciarelli (ed.), *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN* (pp. 117-166). Buenos Aires: Eudeba.

Calveiro, P. (2005). *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años '70*. Buenos Aires: Norma.

Canelo, Paula (2004). La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional. En Alfredo Pucciarelli (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura* (pp. 219-312). Buenos Aires: Siglo XXI.

Canitrot, A. (1983). *Orden social y monetarismo*. Buenos Aires: Cedes.

Carazo, A. y Audi, R. (1984). *Siete años de lucha contra la dictadura*. Buenos Aires: Nuevo Horizonte.

Carnevale, S. (1999). *La patria periodística*. Buenos Aires: Colihue.

Castellani, A. (2004). Gestión económica liberal-corporativa y transformaciones en el interior de los grandes agentes económicos de la Argentina durante la última dictadura militar. En A. Pucciarelli (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura* (pp. 173-218). Buenos Aires: Siglo XXI.

Castelli, E. (1991). *Manual de periodismo*. Buenos Aires: Plus Ultra.

Cavarozzi, M. (2006). *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*. Buenos Aires: CEAL. [Primera Edición, 1983].

Círculo Militar (1998). *In Memoriam*. Tomo I. Buenos Aires: Centro de Estudios del Círculo Militar.

Círculo Militar (1999). *In Memoriam*. Tomo II. Buenos Aires: Centro de Estudios del Círculo Militar.

CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) (1997). *Nunca Más*. Buenos Aires: EUDEBA [Primera Edición, 1984].

Cox, D. (2002). *En honor a la verdad. Memorias desde el exilio de Robert Cox*. Buenos Aires: Colihue.

Dearriba, A. (2006). *El Golpe. Crónica del último asalto militar al poder*. Buenos Aires: Altamira.

Delich, F. (1983). La metáfora de la sociedad enferma. *Crítica y Utopía*, nº 10/11, Buenos Aires.

De Ipola, E. (1982). *Ideología y discurso populista*. México: Folios.

----- (2002). Discurso social. En C. Altamirano (dir.), *Términos críticos de sociología de la cultura* (pp. 68-72). Buenos Aires: Paidós.

De Riz, L. (1984). Argentina: ni democracia estable ni régimen militar (conjeturas sobre las perspectivas para la democracia). En O. Oszlak (comp.), *“Proceso”, crisis y transición democrática* (pp. 7-28). Buenos Aires: CEAL.

----- (1986). *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista*. Buenos Aires: Hyspamerica [Primera edición., 1981].

----- (2000). *La política en suspenso: 1966-1976*. Buenos Aires: Paidós.

Del Mazo, G. (1955). *El Radicalismo. Notas sobre su historia y doctrina (1922-1952)*. Buenos Aires: Raigal.

Di Stefano, R. y Zanatta, L. (2000). *Historia de la Iglesia Argentina: desde la conquista hasta fines del siglo XX*. Buenos Aires: Grijalbo.

Díaz, C. L. (2002). *La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de 1976*. Buenos Aires: La Crujía.

Díaz, C. L. y Passaro, M. M. (2002). Los mensajes del silencio: *El Día, Clarín* y el golpe de Estado de 1976. En C. L., Díaz, *La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de 1976* (pp. 169-188). Buenos Aires: La Crujía.

Díaz Bessone, R. (1987). *La guerra revolucionaria en Argentina*. Buenos Aires: Fraternal.

Di Tella, G. (1985). *Perón-Perón. 1973-1976*. Buenos Aires: Hyspamérica [Primera edición., 1983].

Ducrot, O. (1994). *El decir y lo dicho*. Buenos Aires: Edicial. [Primera edición, 1972].

Duhalde, E. (1999). *El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica*, Buenos Aires: Eudeba.

Feierstein, D. (2007). *El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina*. Buenos Aires: FCE.

Ferreira, F. (2000). *Una historia de la censura. Violencia y proscripción en la Argentina del siglo XX*. Buenos Aires: Norma.

Ford, A. y Rivera, J. (1987). Los medios masivos de comunicación en la Argentina. En A. Ford, J. Rivera y E. Romano, *Medios de comunicación y cultura popular* (pp. 24-45). Buenos Aires: Legasa. [Primera edición, 1985].

Foucault, M. (1970). *La arqueología del saber*. México: Siglo XXI.

Frigerio, R. (1969). *Desarrollo y Desarrollismo*. Buenos Aires: Galerna.

- (1981). *Economía política y política económica nacional*. Buenos Aires: Hachette.
- Fronidzi, A. (1964). *Estrategia y táctica del Movimiento Nacional*. Buenos Aires: Desarrollo.
- (1983). *El movimiento nacional. Fundamentos de su estrategia*. Buenos Aires: Losada [Primera edición, 1975].
- García, P. (1995). *El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las dictaduras militares*. Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Gasparini, J. (2005). *Montoneros: final de cuentas*. La plata: de la campana. [Primera edición, 1988].
- Gasparini, J. (2007), *David Graiver. El banquero de los Montoneros*. Buenos Aires: Norma [Primera edición, *El caso Graiver*, Buenos Aires, ediciones B, 1990]
- Getino, O. (1995). *Las industrias culturales en la Argentina*. Buenos Aires: Colihue.
- Gillespie, R. (1987). *Montoneros: Soldados de Perón*. Buenos Aires: Grijalbo.
- Giussani, P. (1984). *Montoneros: La soberbia armada*. Buenos Aires: Sudamericana.
- González, J. (2007). *Isabel Perón. Intimidades de un gobierno*. Buenos Aires: El Ateneo.
- González Calleja, E. (2002). *La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder*. Madrid: CSIC.
- Gomis, L. (1991). *Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente*. Barcelona: Paidós.
- Graham-Yooll, A. (1984). *The Press in Argentina 1973-1978*. Londres: Writers and Scholars Educational Trusts, 1984.
- (1985). *Retrato de un exilio*. Buenos Aires: Sudamericana.
- (1999). *Memoria del miedo*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- Gregorich, L. (1987), “La prensa durante el Proceso: un testimonio”. En J. Rivera y E. Romano (comps.), *Claves del periodismo argentino actual* (pp. 67-83). Buenos Aires: Ediciones Tarso.
- Halperín, J. (2007). *Noticias del poder. Buenas y malas artes del periodismo político*. Buenos Aires: Aguilar.
- Halperín Donghi, T. (2006). *La larga agonía de la Argentina peronista*. Buenos Aires: Ariel. [Primera edición, 1994].
- Hilb, C. y Lutzky, D. (1984). *La nueva izquierda argentina: 1960-1980 (política y violencia)*. Buenos Aires: CEAL.

- Hobsbawn, E. (1998). *Historia del Siglo XX*. Buenos Aires: Crítica.
- Horowicz, A. (1986). *Los cuatro peronismos*. Buenos Aires: Hyspamérica. [Primera edición, 1985].
- Invernizzi, H. y Gociol, J. (2002). *Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última dictadura militar*. Buenos Aires: Eudeba.
- Itzcovitz, V. (1985). *Estilo de gobierno y crisis política (1973-1976)*. Buenos Aires: CEAL.
- Jozami, E. (2006). *Rodolfo Walsh. La palabra y la acción*. Buenos Aires: Norma.
- Kandel, P. y Monteverde, M. (1976). *Entorno y caída*. Buenos Aires: Planeta.
- Kornblit, A. (2004). "Introducción". En A. Kornblit (coord.). *Metodologías cualitativas en ciencias sociales* (pp. 9-14). Buenos Aires: Biblos.
- Laclau, E. (1985). Tesis acerca de la forma hegemónica de la política. Anexo. En J. Del Campo, M. Labastida (comp.). *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Laclau, E. (1990). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Lakoff, G. y Jonson, M. (1998). *Metáforas de la vida cotidiana*. Madrid: Cátedra.
- Lanusse, L. (2005). *Montoneros. El mito de sus 12 fundadores*. Buenos Aires: Ediciones B.
- Llonto, P. (2003). *La noble Ernestina. El misterio de la mujer más rica del país*. Buenos Aires: Astralib.
- López, J.I. (2008). *El hombre de Clarín. Vida privada y pública de Héctor Magnetto*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Maceyra, H. (1983). *Las presidencias peronistas. Cámpora/Perón/Isabel*. Buenos Aires: CEAL.
- Malharro, M. y López Gijsberts, D. (2003). *La tipografía de plomo. Los grandes medios gráficos en la Argentina y su política editorial durante 1976-1983*. La Plata: Ediciones de Periodismo y Comunicación.
- Maingueneau, D. (1980). *Introducción a los métodos de análisis del discurso*. Buenos Aires: Hachette [Primera edición, 1976].
- Martuccelli, D. y Svampa, M. (1997). *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*. Buenos Aires: Losada.

Mendelevich, P. (1986). Las revistas. En P. Mendelevich, R. M. B. de Rússovich y M. L. Lacroix-J. Rivera, *Crónicas del periodismo*. Buenos Aires: Cuadernos de historia popular argentina.

Merchensky, M. (1979). *Las corrientes ideológicas en la Historia Argentina*. Buenos Aires: Crisol.

Mestman, M. (1992). Estado y sistema de medios en Argentina 1966-1976. Buenos Aires: Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, mimeo.

Movimiento de Integración y Desarrollo (1981). *La crisis argentina (periodo 1976-1981). Planteos y proposiciones del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) frente al postergado desafío de la reconstrucción nacional*. Buenos Aires.

Mignone, E. (1986). *Iglesia y Dictadura. El papel de la iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar*. Buenos Aires: Ediciones del pensamiento nacional.

Mochkofsky, G. (2004). *Timerman. El periodista que quiso se parte del poder (1923-1999)*. Buenos Aires: Debolsillo. [Primera edición., 2003].

Molinas, R. y Molinas, F. (1993). *Detrás del espejo. Quince años de despojo al patrimonio nacional*. Buenos Aires: Beas.

Muraro, H., (1987). La comunicación masiva durante la dictadura militar y la transición democrática en la Argentina 1973-1986. En O. Landi (comp.), *Medios, transformación cultural y política* (pp. 15-45). Buenos Aires: Legasa.

Nosiglia, J. (1983). *El desarrollismo*. Buenos Aires: CEAL.

Novaro, M. (2006). *Historia de la Argentina contemporánea. De Perón a Kirchner*. Buenos Aires: Edhasa.

Novaro M. y Palermo, V. (2003). *La Dictadura Militar 1976/1983*. Buenos Aires: Paidós.

O'Donnell, G. (1982). *El Estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

Obregón, M. (2005). *Entre la cruz y la espada. La Iglesia católica durante los primeros años del "Proceso"*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmas.

Ollier, M. M. (1998). *La creencia y la pasión. Privado, público y político en la izquierda revolucionaria argentina*. Buenos Aires: Ariel.

Ollier, M. M. (2005). *Golpe o Revolución. La violencia legitimada, Argentina 1966-1973*. Caseros: Eduntref.

Oszlak, O. (1984). Privatización autoritaria y recreación de la escena pública. En O. Oszlak (comp.), *“Proceso”, crisis y transición democrática/I* (pp. 31-48). Buenos Aires: CEAL.

Palermo, V. (1985). Cultura política, conflicto y democracia. En A. H. Colombo y V. Palermo, *Participación política y pluralismo en la Argentina contemporánea* (pp. 117-137). Buenos Aires: CEAL.

Pêcheux, M. (1978). *Hacia el análisis automático del discurso*. Madrid: Gredos.

Pérez, G. (2004). Entre el poder del discurso y el discurso del poder: aproximaciones teóricas y metodológicas al estudio del discurso político. En A. Kornblit (coord.). *Metodologías cualitativas en ciencias sociales* (pp. 173-195). Buenos Aires: Biblos.

Plis-Sterenber, G. (2006). *Monte Chingolo. La mayor batalla de la guerrilla argentina*. Buenos Aires: Planeta. [Primera edición, 2003]

Postolski, G. y Marino, S. (2005). Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios. En G. Mastrini (ed.), *Mucho ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2004)*. (pp. 155-184). Buenos Aires: La crujía.

Price, V. (1994). *La opinión pública*. Buenos Aires: Paidós.

Quiroga, H. (1985). *Estado, crisis económica y poder militar (1880-1981)*. Buenos Aires: CEAL.

Quiroga, H. (1989). *Autoritarismo y reforma del Estado*. Buenos Aires: CEAL.

Quiroga, H. (2004). *El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares: 1976-1983*. Rosario: Homo Sapiens.

Raiter, A. (1999). *Lingüística y política*. Buenos Aires: Biblos.

----- (2002). Representaciones sociales. En A. Raiter, *Representaciones sociales* (pp. 9-30). Buenos Aires: Eudeba.

Ramos, J. (1993). *Los cerrojos a la prensa*. Buenos Aires: Amfin.

Restivo, N. y Dellatorre, R. (2005). *El Rodrigazo, 30 años después. Un ajuste que cambió al país*. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Romero, L., A. (1998). *Breve historia contemporánea de la Argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [Primera edición, 1994].

Romero, L., A. (2004). *Sociedad democrática y política democrática en la Argentina del siglo XX*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmas.

Rotenberg, A. (2000). *La Opinión amordazada. La lucha de un periódico bajo la dictadura militar*. Madrid: del Taller de Mario Muchnik.

Rougier, M. y Fiszbein, M. (2006). *La frustración de un proyecto económico. El gobierno peronista de 1973-1976*. Buenos Aires: Manantial.

Rouquié, A. (1983). El poder militar en la Argentina de hoy: cambio y continuidad. En P. Waldman y E. Garzón Valdés (comps.), *El poder militar en la Argentina (1976-81)* (pp. 65-76). Buenos Aires: Galerna.

Rouquié, A. (1990). *Extremo occidente. Introducción a América Latina*. Buenos Aires: Emecé.

Ruiz, F. J. (2002). *Las palabras son acciones. Historia política y profesional del diario La Opinión de Jacobo Timerman, 1971-77*. Buenos Aires: Perfil Libros.

Ruiz Nuñez, H. (1987). El negocio millonario de "Papel Prensa". *Humor*, n° 229, mayo.

Rússovich, R. M. y Lacroix, M. L. (1986). Los grandes diarios. En P. Mendelevich, R. M. B. de Rússovich y M. L. Lacroix-J. Rivera, *Crónicas del periodismo*. Buenos Aires: Cuadernos de historia popular argentina.

Saborido, J. y de Privitellio, L. (2006). *Breve historia de la Argentina*. Madrid: Alianza.

Sáenz Quesada, M. (2003). *Isabel Perón. La Argentina en los años de María Estela Martínez*. Buenos Aires: Planeta.

Sani, G. (1987). Cultura política. En N. Bobbio y N. Matteucci (dir.), *Diccionario de política A-J* (pp. 469-472). Buenos Aires: Siglo XXI [Primera edición, 1981].

Schindel, E. (2003). *Desaparición y sociedad. Una lectura de la prensa gráfica argentina (1975-1978)*. Tesis de doctorado, Universidad de Berlín, mimeo.

Seoane, M. (1993). *Todo o nada*. Buenos Aires: Planeta.

Seoane M. y Muleiro, V. (2001). *El Dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla*. Buenos Aires: Sudamericana.

Sidicaro, R. (1993). *La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación, 1909-1989*. Buenos Aires: Sudamericana.

Sidicaro, R. (1996). El régimen autoritario de 1976: refundación frustrada y contrarrevolución exitosa. En H. Quiroga y C. Tcach (comps.), *A veinte años del golpe. Con memoria democrática* (pp. 9-25). Rosario: Homo Sapiens.

Sidicaro, R. (2002). *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55 / 1973-76 / 1989-99*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Sidicaro, R., (2004). Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el “proceso” en perspectiva comparada. En A. Pucciarelli (Coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura* (pp. 53-96). Buenos Aires: Siglo XXI.

Sigal, S. y Verón, E. (1985). *Perón o Muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*. Buenos Aires: Hyspamérica.

Sosnowsky, S. (comp.) (1988). *Represión y reconstrucción de una cultura: el caso argentino*. Buenos Aires: Eudeba.

Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente: la Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.

Svampa, M. (2007). El populismo posible y sus actores, 1973-1976. En D. James (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)* (pp. 381-438). [Primera edición, 2003]

Terragno, R. (2005). *El peronismo de los 70 (II)*. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Túrolo, C. (1996). *De Isabel a Videla. Los pliegues del poder*. Buenos Aires: Sudamericana.

Ulanovsky, C. (2005). *Paren las rotativas. Diarios, revistas y periodistas*. Buenos Aires: Emecé. [Primera edición, 1996]

Uriarte, C. (1992). *Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera*. Buenos Aires: Planeta.

van Dijk, T., (1990). *La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información*. Buenos Aires: Paidós [Primera edición, 1980].

Varela, M. (2001). Silencio, mordaza y “optimismo”. *Todo es Historia*, nº 404, Buenos Aires.

Vázquez, E. (1985). *La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*. Buenos Aires: Eudeba.

Verbitsky, H. (1987). *Rodolfo Walsh y la prensa clandestina*. Buenos Aires: Ediciones de la Urraca.

Verbitsky, H. (1998). *Ezeiza*. Buenos Aires: Planeta. [Primera edición, 1986].

Verbitsky, H. (2006a). *La última batalla de la Tercera Guerra Mundial*. Buenos Aires: Sudamericana. [Primera edición, 2002].

Vercesi, A. (1999) *La doctrina y la política económica del desarrollismo en argentina*, Dto. de Economía Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, mimeo.

Verón, E. (1985). El análisis del contrato de lectura, un nuevo método para los estudios del posicionamiento de los soportes de los media. En IREP, *Les medias: Experiences, recherches, applications*. París.

Verón, E. (1987). *La semiosis social: fragmentos para una teoría de la discursividad*. Buenos Aires: Gedisa.

Vezzetti, H. (2002). *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Voloshinov V., (1976). *El signo ideológico y la filosofía del lenguaje*. Buenos Aires: Nueva Vision.

Yannuzzi, M. (1996). *Política y dictadura*. Rosario: Fundación Ross.

Zecchetto, V. (2006). *La danza de los signos. Nociones de semiótica general*. Buenos Aires: La Crujía.

Zullo, J. (2002). Estrategias de la prensa actual: información, publicidad y metadiscurso. En A. Raiter, *Representaciones sociales* (pp. 47-62). Buenos Aires: Eudeba.

Entrevistas

Daniel Muchnik, septiembre de 2007

Alejandro Horowicz, noviembre de 2007

Y quienes pidieron no ser mencionados